

ÍCONOS|15

Revista de FLACSO-Ecuador

No 15, diciembre, 2002

ISSN 13901249

Los artículos que se publican en la revista son de exclusiva responsabilidad de sus autores, no reflejan necesariamente el pensamiento de **ÍCONOS**

Director de Flacso-Ecuador

Fernando Carrión

Consejo editorial

Felipe Burbano de Lara (Editor)

Edison Hurtado (Co-editor)

Cecilia Ortiz

Franklin Ramírez

Alicia Torres

Mauro Cerbino

Eduardo Kingman

Producción

FLACSO-Ecuador

Traducción

Claudia Arcanjo Otaviano

Diseño

Antonio Mena

Ilustraciones

Gonzalo Vargas

Margarita Escribano

Antonio Mena

Impresión:

Rispergraf

FLACSO-Ecuador

Ulpiano Páez N 19-26 y Av. Patria

Teléfonos: 2232-029/ 030 /031

Fax: 2566-139

E-mail: fburbano@flacso.org.ec

ehurtado@flacso.org.ec

Índice

Coyuntura

6

El nacimiento de un nuevo sujeto político

Felipe Burbano de Lara

11

**Lucio Gutiérrez:
un proyecto en disputa**

Napolón Saltos Galarza

15

**¿Ganarán la tercera vuelta los
partidarios de un nuevo régimen?**

Máximo Ponce Jaramillo

Dossier

20

Clavar gelatina contra la pared

La 'cultura política':
entre sondeo y excusa mayor

Ton Salman

31

Aprendizajes y espacios de la ciudadanía

María Luz Morán

44

**Repertorios insurgentes en
Argentina contemporánea**

Apuntes para una reflexión

Javier Auyero

62

**Movimientos étnicos y cultura
política en Ecuador**

Carlos de la Torre

75

Conflicto, democracia y culturas políticas

Franklin Ramírez Gallegos



Debate

86

La migración vista desde el lugar de origen

Gioconda Herrera

Díálogo

96

Pobreza y desigualdad en América Latina

Diálogo con Rob Vos

Fander Falconí y Mauricio León G.



Temas

104

Historia social y menatlidades

Los higienistas, el ornato de la ciudad y las clasificaciones sociales

Eduardo Kingman Garcés

114

Una mirada al nuevo enemigo social

Pandillas juveniles

Francisco Cevallos Tejada

123

Los pasivos ambientales

Daniela Russi y Joan Martínez-Allier

Frontera

134

Lula y Brasil:

miedo, esperanza y los más diversos intereses

Carlos Ranulfo Melo y Fátima Anastasia

145

Uruguay 2002:

contagio, crisis bancaria y perspectivas

Fernando Antía

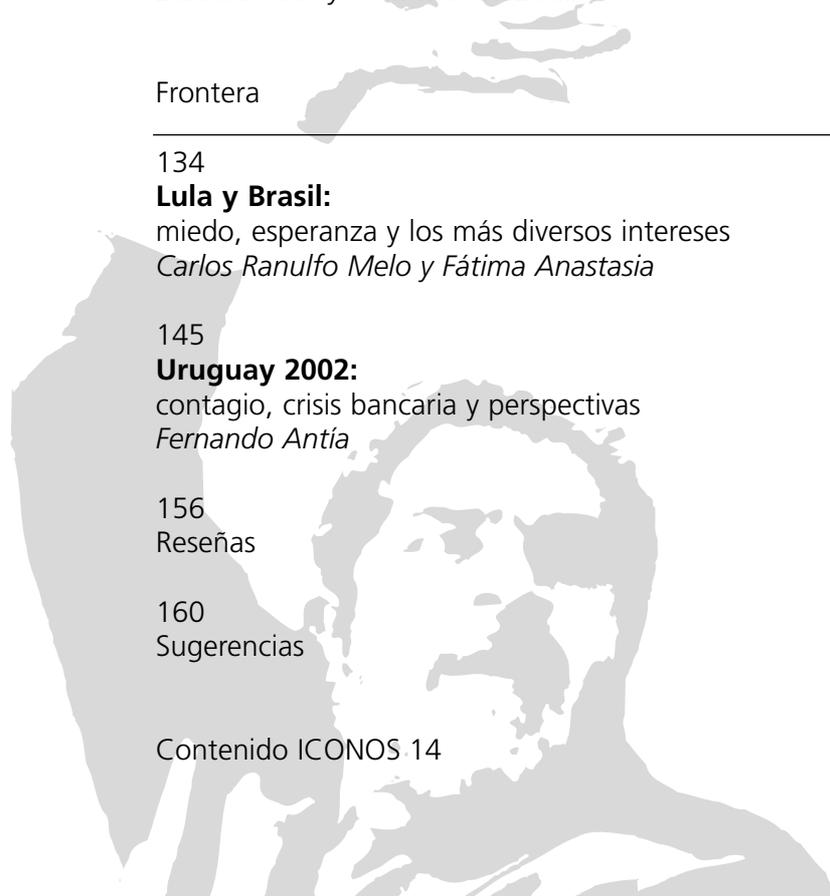
156

Reseñas

160

Sugerencias

Contenido ICONOS 14



EDIFICIO DE LA NUEVA SEDE DE FLACSO EN QUITO

**CHRISTIAN
WIESE**
arquitectos

Constructora:
Sevilla y Martínez Ings. C.A. SEMAICA
Asesor permanente:
Arq. Gonzalo Estupiñán
Gerencia de proyecto:
Ing. Edwin Ripalda
Fiscalización:
Arq. Carlos Burneo
Diseño Estructural:
Ing. Fernando Romo
Diseño Eléctrico:
Ing. Juan Aviles
Ejecución obra eléctrica:
MICROCIRCUITS Cia. Ltda.
Diseño Sanitario:
Ing. Homero Hidrobo
Diseño mecánico:
IMECANIC



COYUNTURA

C

El nacimiento de un nuevo sujeto político

Felipe Burbano de Lara*

El triunfo de Lucio Gutiérrez en las últimas elecciones presidenciales marca el apareamiento de un nuevo sujeto político en la escena ecuatoriana. Se trata, a no dudarlo, de un sujeto político con características inéditas; por lo tanto, nada tiene de aventurado decir que su apareamiento inaugura un nuevo momento político para el país.

¿Dónde radica lo inédito de Lucio Gutiérrez? En los elementos que ha logrado articular alrededor de su liderazgo. Destacan tres: en primera instancia, la lucha de los pueblos indígenas durante los años 90. Gutiérrez expresa los cambios provocados por toda la lucha indígena en contra de una sociedad en la que el poder siempre perteneció a la elite blanca. Las constantes movilizaciones de una década y las denuncias de unas estructuras de poder que discriminan y excluyen lo indígena, han trastocado los juegos alrededor del color étnico del poder. No sería en absoluto aventurado sostener que la constante presencia indígena en el espacio político -no sólo a través de las movilizaciones y los levantamientos, sino también en el parlamento, en los gobiernos locales y en los debates públicos- han generado posibilidades de identificación con nuevos rostros electorales. Ya no es necesario ser blanco para convertirse en presidente del Ecuador.

Una segunda presencia detrás de Gutiérrez podría ser descrita como la de un “movimiento popular” descontento con los resultados de la democracia y 15 años de políticas de ajuste y apertura. En realidad, se ha producido una redefinición de “lo popular” como forma antagonica hacia aquello que se identifica como el poder institucionalizado: lo popular se reconoce y se descubre también en las luchas indígenas. La frontera que siempre separó al pueblo como un sujeto esencialmente urbano y pobre del indígena rural y excluido, parece haberse roto o al menos franqueado. El impacto de lo étnico sobre lo popular marca un cambio cultural de dimensiones desconocidas en la política ecuatoriana. Si pensamos por un momento en la demanda de una sociedad multicultural y multiétnica levantada por el movimiento indígena a lo largo de los últimos 10 años, podríamos concluir que estamos ante la constitución de un *sujeto pueblo* con un rostro multicultural. El pueblo ya no sólo articula una heterogeneidad social, como lo ha hecho históricamente en la política nacional, sino también a una heterogeneidad cultural, donde lo indígena encuentra un espacio poderoso.

Y el tercer elemento, sin el cual no podría explicarse la fuerza alcanzada por Gutiérrez, es lo que podríamos llamar, de un modo genérico e impreciso, “lo militar”. Lo militar aparece desde varias perspectivas. En primer lugar, como identificación de las Fuerzas Armadas con ciertas causas populares y con una

* Profesor-investigador de FLACSO-Ecuador

cierta vocación antioligárquica, tal como se expresó el 21 de enero de 2000. Los coroneles que participaron en el golpe lo hicieron en nombre del interés nacional amenazado por la corrupción de los grupos de poder económico. En segundo lugar, se presenta desde la perspectiva de una lucha heroica en contra del poder. El mismo Gutiérrez presentó durante la campaña electoral, la imagen de un militar que sacrificó su carrera por la defensa de los intereses nacionales; se retrató como una suerte de héroe popular.

Y en tercer lugar, se expresa -y aquí su lado más problemático- como una profunda desconfianza hacia la democracia. El triunfo de un coronel en la elección presidencial señala una continuidad con las últimas -y decisivas- intervenciones de las FF.AA. en la política nacional (tanto en la caída de Bucaram como en la de Mahuad). Aquellas intervenciones borraron la línea que separaba al poder civil del poder militar en la democracia. Con ello, se ha reactivado el papel tutelar de las FF.AA. sobre la democracia ecuatoriana.

Si hemos definido a Gutiérrez como un sujeto político inédito en la escena ecuatoriana es por la articulación que logró de estos tres elementos -lo étnico, lo popular y lo militar- para convertirse, ante la sorpresa y el desconcierto de las miradas dominantes, en el eje de un nuevo proceso político.

Habría que añadir, como elemento de contexto político general, que las luchas indígenas han sido simultáneamente luchas en contra de la política neoliberal de los últimos 15 años. Los indígenas han cuestionado al Estado y a la cultura nacional por sus herencias coloniales, pero también por una política eco-

nómica depredadora de los recursos nacionales y estatales, concentradora de la riqueza y entregada a los intereses de los Estados Unidos, el FMI y el capital extranjero. En este punto, los indígenas han coincidido con la Coordinadora de Movimientos Sociales, una instancia de unión de los sindicatos públicos, que también se movilizó con Gutiérrez.

El malestar con los partidos

El triunfo de Gutiérrez se inscribe dentro de un profundo malestar de la mayoría de ecuatorianos hacia los partidos políticos y hacia la política en general. El hecho evidente de este malestar es que los tres candidatos que se impusieron en la primera vuelta electoral provenían de movimientos gestados desde fuera de los partidos. Lucio Gutiérrez, Álvaro Noboa y León Roldós se presentaron como candidatos contrarios a los partidos y al modo cómo éstos han conducido la política. La última elección se produjo, por tanto, en una sociedad lanzada a la búsqueda de liderazgos por fuera de los partidos. Y ocurrió que, finalmente, el cuestionamiento a los partidos y a

sus liderazgos se tradujo en un rechazo electoral en la elección presidencial. Es el fin de una paradoja mantenida durante mucho tiempo.



po: a pesar de la crítica a los partidos, los ecuatorianos seguían votando por los partidos. En la elección de octubre, la paradoja llegó a su fin, y eso significa dejar abierta la posibilidad de un cambio dramático en el sistema político. En realidad, el cambio ya se ha producido; ahora está por verse la viabilidad de las nuevas condiciones políticas y las nuevas formas de conflicto y antagonismo, como también de concertación, que traerá el nuevo sujeto de la política.

El debilitamiento de los partidos se expresa sobre todo, en un repliegue de su fuerza hacia lo local y regional. Se podría plantear el problema también desde una perspectiva distinta: la presencia local y regional de los partidos define al mismo tiempo su fuerza y su debilidad. Fuerza en la medida en que encuentran en lo local y regional un espacio de reproducción más o menos consolidado. Debilidad, puesto que describe su imposibilidad para proyectarse nacionalmente.

La debilidad de los partidos tiene especial importancia para entender los problemas de gobernabilidad del Ecuador. La proyección de los partidos hacia el espacio nacional, su inevitable confluencia en ese espacio, ha convertido a lo nacional en el terreno de los desencuentros y las disputas, en el lugar donde se genera la ingobernabilidad. Las distancias simbólicas que separan a los partidos -expresadas en sus lenguajes, sus concepciones de la política, de la autoridad, de la legitimidad- ponen de manifiesto algunas de las fracturas del Estado ecuatoriano: de clase, de región y étnicas. Los problemas de gobernabilidad habría que entenderlos como la limitación de los partidos para administrar y conducir el espacio nacional de la política, es decir, al mismo Estado. En el centro de esa problemática se encuentra el bloqueo institucional entre el Ejecutivo y el Congreso.

La crisis de representación de los partidos en el espacio nacional, que expresa a la vez su imposibilidad para representarse el país por encima de lo local y regional, se ha visto agravada por la debilidad del Estado como aparato, como estructura de integración nacional y

como referente simbólico de la política. La capacidad de administración y gestión política de los partidos, en toda su precariedad, se pudo sostener cuando el Estado mostraba alguna consistencia institucional, por un lado, y una cierta capacidad para negociar equilibrios sociales y regionales mediante la repartición de sus recursos, por otro. Pero un Estado con crecientes restricciones fiscales, quebrado por el saqueo provocado por los grupos de poder -como en el caso de la crisis bancaria que le ha costado más de 5.000 millones de dólares- se muestra muy debilitado como espacio de integración.

Podríamos preguntarnos, sobre la reflexión anterior, si el sistema de partidos ha entrado en un proceso inevitable hacia su colapso. Difícil respuesta. Las interpretaciones de las últimas elecciones han discrepado justamente sobre el alcance de la crisis de los partidos, para muchos analistas más aparente que real. Nos guste o no -sostienen estos analistas- los partidos seguirán estableciendo las reglas del juego político, al tiempo que conservan espacios y recursos de poder que se movilizarán con fuerza frente al nuevo gobierno. Si bien no se puede asegurar con certeza que el sistema de partidos hubiese entrado en un proceso irreversible hacia su propio colapso, sí se puede sostener que los partidos se encuentran severamente limitados en su capacidad de proyección y articulación del espacio nacional por una debilidad de sus liderazgos. Estamos frente a estructuras y maquinarias sin liderazgo. Lo que presenciamos en las últimas elecciones fue un conjunto de candidatos de los principales partidos que pudieron avanzar hasta donde les permitieron las estructuras de sus partidos. Esos liderazgos aportaron con muy poco a las estructuras partidarias existentes. Y cuando no hubo estructuras ni organización, como en el caso de Osvaldo Hurtado, la votación obtenida apenas superó el 1%. No hay que desconocer, en todo caso, la capacidad de esas estructuras para reproducirse desde el poder local y regional gracias al funcionamiento de redes clientelares. Pero sin liderazgos renovados difícilmen-

te podrán proyectarse nacionalmente, con lo cual el espacio del liderazgo nacional -que se dilucida normalmente en las elecciones presidenciales- queda abierto para cualquier aventura bajo el signo de la antipolítica.

Y una consideración adicional a propósito de los partidos. Como han mostrado los casos de Perú y Venezuela, los sistemas de partidos colapsan como sistemas; se sostienen en conjunto o se debilitan en conjunto. Las fisuras del sistema debilitan a todos los partidos que lo conforman, y no solo a un grupo de ellos. Lo que no sabemos, por su puesto, es cuántos partidos fuertes del sistema tienen que colapsar para que suceda lo mismo con el sistema en su conjunto. Por lo pronto, hay un partido ya colapsado: la DP; y los otros se encuentran golpeados por su derrota en la elección presidencial.

Lucio Gutiérrez encarna la contradicción

El mayor desafío que tiene Lucio Gutiérrez es definir cómo integrará a los empresarios en un proyecto político con fuerte presencia indígena, con demandas de los sectores populares y con una vocación nacionalista. Gutiérrez tuvo dos momentos en el proceso electoral: el Lucio de la primera vuelta, y el Lucio de la segunda vuelta. Entre esos dos momentos media su apertura hacia los grupos de poder: empresarios, banqueros, Fuerzas Armadas, FMI, la Iglesia y el gobierno de los EE.UU. Si en la primera vuelta el país lo vio íntimamente conectado con el movimiento indígena, Pachakutik, el MPD y sectores populares urbanos y rurales, en la segunda vio a un Gutiérrez en abierta seducción al poder, mostrándole su rostro bueno, exhibiéndose menos peligroso de lo que se imaginaba. Menos izquierdista de lo pensado, y menos chavista de lo temido.

Mucho se especuló sobre el giro de Gutiérrez en la segunda vuelta electoral. Para muchos, entre los cuales me incluyo, pareció demasiado brusco e inmediato (se produjo al

día siguiente de su triunfo en la primera vuelta); tan brusco fue el giro que levantó la pregunta obvia: ¿Quién es Gutiérrez? ¿Dónde mismo se ubica? Surgieron además, enormes especulaciones sobre los compromisos con cada uno de sus nuevos interlocutores; tantas concesiones -se decía- que alrededor de su candidatura se arremolinaban intereses sin consistencia y coherencia alguna.

Interpreto ahora el proceso de apertura de Gutiérrez -el Lucio de la segunda vuelta- como el intento por crear un espacio de convergencia entre empresarios, indígenas y movimiento popular. El nuevo presidente intenta ser un punto de convergencia entre Miguel Llucó y Mario Canessa (para graficarlo de algún modo). El mensaje fue más o menos claro: si no hay un entendimiento entre estas dos grandes tendencias, el país seguirá azotado por la sombra de la desestabilización social. Se trata de la búsqueda de una concertación social que pueda dar alguna viabilidad a un proyecto político o, al menos, que fortalezca socialmente un proyecto político frente a los juegos de poder del Congreso (dominado por los partidos) en contra del Ejecutivo.

El momento tiene un cierto dramatismo, sin duda. Gutiérrez está atrapado entre dos fuerzas, pero al mismo tiempo ha lanzado el mensaje de que el Ecuador no es viable si falta una de las dos; o hay un entendimiento entre indios, sectores populares, sindicatos públicos y empresarios gracias a su mediación, o

Las distancias simbólicas que separan a los partidos -expresadas en sus lenguajes, sus concepciones de la política, de la autoridad, de la legitimidad- ponen de manifiesto algunas de las fracturas del Estado ecuatoriano: de clase, de región y étnicas. El centro de la problemática:

el bloqueo institucional Ejecutivo – Congreso.



su gobierno expresará de modo mucho más dramático y claro que los anteriores, las contradicciones entre las dos tendencias (me gustaría incluso decir las contradicciones de clase). En lugar de mediar, separar; en lugar de generar un proyecto nacional, polarizar el proceso (Venezuela es, de todos modos, una

sombra que se cierne sobre el Ecuador). Lo interesante de Gutiérrez es que ha dado expresión tanto a los intereses de los indios y del movimiento popular (de los excluidos y empobrecidos), como a los intereses de los empresarios e inversionistas. Sólo en la medida en que los intereses de esos dos grupos tengan igual reconocimiento político, se podrá mediar democráticamente entre ellos. Llucó y Canessa son las imágenes de las dos tendencias que deben articularse. Pero, insisto, al dar igual reconocimiento a esas dos

fuerzas en pugna, Gutiérrez lleva la contradicción a su propio liderazgo y a su propio gobierno. Y las opciones son claras: o se provoca una gran confrontación o se da una concertación. El gran desafío de Gutiérrez, Llucó

y Canessa (para ponerlo en imágenes) radica en descubrir los puntos de convergencia en este escenario que aparece tan distante, tan dividido y tan fragmentado, pero donde empresarios, indígenas y movimiento popular pueden descubrir y compartir un horizonte común. La mediación será posible sólo si la agenda del nuevo gobierno logra diseñar un programa de modernización alejado tanto de las fórmulas neoliberales como de las nostalgias desarrollistas del pasado.

Pero en este posible escenario de concertación social vuelve con fuerza la pregunta sobre el poder de los partidos. ¿Qué harán frente al nuevo Presidente? ¿Cómo actuarán desde el Congreso? ¿Cómo plantearán las negociaciones con el Ejecutivo? ¿Someterán al Presidente a sus reglas de juego, pacto y negociación? ¿Será viable el pacto de gobernabilidad propuesto por Rodrigo Borja y aceptado en principio por León Febres Cordero? Estas preguntas no tienen respuesta clara todavía. Lo único cierto es que Gutiérrez marca un nuevo momento en la política ecuatoriana, una distancia respecto del pasado. Tan es así que hoy los analistas, casi sin excepción, se refieren a los partidos políticos como partidos "tradicionales". Hemos añadido el adjetivo tradicionales para marcar una distancia con el pasado. De este modo, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo adquieren una nueva dimensión: no serán sólo entre dos poderes del Estado como habitualmente han sido, sino que escenificarán, al mismo tiempo, la tensión entre lo nuevo desconocido y lo viejo desprestigiado.

Diciembre de 2002

Gutiérrez marca un nuevo momento en la política ecuatoriana, una distancia respecto del pasado. Las relaciones Ejecutivo-Legislativo adquieren una nueva dimensión: no serán sólo entre dos poderes del Estado sino que escenificarán, al mismo tiempo, la tensión entre lo nuevo desconocido y lo viejo desprestigiado



Lucio Gutiérrez: un proyecto en disputa

Napoleón Saltos Galarza*

El triunfo

El coronel Lucio Gutiérrez fue electo presidente del Ecuador: triunfó en la segunda vuelta electoral realizada el 24 de noviembre con el 9% sobre su competidor, el multimillonario Álvaro Noboa.

En este triunfo convergen tres procesos: a) el impacto del imaginario de la rebelión del 21 de enero de 2000, con el aporte de los pueblos indígenas, los militares y los movimientos sociales; b) el rechazo al peligro que representaba Álvaro Noboa con su propuesta de radicalización del programa neoliberal, hasta convertir al país en una zona franca y en un “paraíso financiero”, lo que generó una decisión por el “mal menor” entre gran cantidad de electores, y c) la ampliación de la base política del coronel mediante compromisos con sectores económicos, empresariales y bancarios y con sectores políticos: el Partido Roldosista de Abadalá Bucaram, en particular.

Este triunfo se inscribe en la corriente de renovación democrática que gira hacia posiciones alternativas, no sólo en nuestro país, sino en América Latina. El triunfo de Lula en Brasil, la permanencia de Chávez en Venezuela, el avance de Evo Morales en Bolivia y la victoria de Lucio en Ecuador, muestran que



no se trata de un hecho parcial: la crisis del poder tradicional no es sólo de representación, sino de presentación; la crisis no sólo afecta al sistema político y a los partidos tradicionales, sino también al proyecto y al poder que los sustentan.

El 24 de noviembre de 2002 triunfa Lucio Gutiérrez para la representación presidencial. La rebelión del 21 de enero de 2000 fue el momento de la presentación, el momento de la semilla, aunque en realidad la presentación venía desde atrás, desde el Levantamiento Indígena-popular de junio de 1990, desde el triunfo militar del Cenepa en 1995, desde la victoria de los movimientos sociales en el plebiscito contra las privatizaciones de noviembre de 1995, desde la movilización ciudadana en contra de Bucaram en febrero de 1997, desde la construcción de la unidad de un nue-

* Coordinadora de Movimientos Sociales

vo bloque histórico con la participación de los pueblos indios, los movimientos sociales, los militares patriotas, los cristianos comprometidos, los ciudadanos y ciudadanas que aspiran a un nuevo país.

Empero, el imaginario de rebelión y cambio del 21 de enero cuaja con el triunfo de

Gutiérrez por el lado militar, y no por el lado indígena y social; lo que proyecta a este proceso más en la perspectiva nacionalista que en una perspectiva étnica o de transformación social.

La diferencia entre los dos finalistas se redujo en el último tramo de la campaña. Al inicio de la segunda vuelta, el margen estaba en torno al 30%. Dos factores incidieron en esta reducción. Primero, el desplazamiento de Gutiérrez hacia compromisos con sectores empresariales y bancarios

locales y con los organismos financieros internacionales, lo que provocó el descontento en las filas de los movimientos sociales. Éstos adoptaron una posición de apoyo crítico, aunque el alejamiento no llegó a la ruptura ni al voto nulo (el cual no tuvo una variación sustancial, como se preveía, pues pasó únicamente del 8 o 9% histórico al 12%).

Un segundo factor lo constituye la reconcentración de la derecha en torno a Álvaro Noboa, ante el fantasma del “comunismo” y del terror frente al peligro de un “nuevo Chávez”. Álvaro Noboa puso en juego las viejas estrategias de la polarización regionalista y de la contrapropaganda de descrédito al adversario.

Los partidos políticos tradicionales, el derechista Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática, estuvieron más bien ausentes en la segunda vuelta, y prefirieron preparar sus alianzas para el control del Congreso, en donde tienen una representación aún predominante. Uno de los escollos principales del próximo gobierno será su relación con el Congreso para las reformas políticas y económicas planteadas en la campaña.

La tendencia regional del voto se mantuvo parcialmente. Álvaro Noboa triunfó en 4 de las 5 provincias de la costa, pero el margen no fue suficiente para compensar la alta votación obtenida por Gutiérrez en la sierra y la amazonía. El triunfo de Gutiérrez se asienta en el alto margen frente a su contrincante en la sierra (2,5 a 1) y en la amazonía (4 a 1), y en una votación significativa en la costa, con el triunfo en la provincia de El Oro.

Esta confluencia compleja convierte a Lucio Gutiérrez en un terreno en disputa entre el imaginario de cambio que sustenta el respaldo popular y los compromisos asumidos con sectores del bloque dominante y los organismos internacionales.

El programa de gobierno

En la segunda vuelta, Lucio Gutiérrez giró a posiciones de centro, para tranquilizar al capital local y transnacional. Colocó en primer lugar el tema de la lucha contra la corrupción; retomó así un elemento central de la rebelión del 21 de enero de 2000. Esto le permitió recoger el descontento de la población contra el poder económico y político tradicional, aunque evitó concretar los casos de corrupción y más bien mantuvo un discurso genérico.

El segundo caballo de batalla fue el tema de la reforma política del Congreso, los organismos de control y la Función Judicial. Después del triunfo ha insistido en la reforma de la Función Judicial y en la despolitización de los organismos de control. Mientras tanto, hay un silencio sobre la reducción del número de diputados y la reforma del Congreso.



De acuerdo a las normas legales, puede plantear la reforma constitucional sólo después de seis meses de haberse posesionado y necesita el apoyo de las tres cuartas partes del Legislativo, lo cual es sumamente difícil de conseguir si no acude al apoyo de la movilización ciudadana. El bloque de gobierno en alianza con el Partido Roldosista contaría con 40 votos sobre un total de 100.

La mayor ambigüedad durante la campaña se presentó en cuanto al tema económico. Las propuestas expresan el resultado de las presiones bajo el lema de la unidad nacional: Gutiérrez es el político del promedio.

El lenguaje empleado en torno a los temas críticos busca contentar a los movimientos sociales que fueron su soporte original y a sus nuevos aliados de poderosos sectores empresariales y bancarios. Sobre la dolarización declara que va a fortalecerla, pero que habrá que analizar los peligros. Sobre el ALCA señala que actualmente es un peligro, pues “no estamos preparados; pero podemos convertirla en una oportunidad en el futuro”. Sobre las áreas estratégicas, particularmente en lo que tiene que ver con el tema petrolero y el de la electricidad, señala que habrá concesiones, pero sólo en nuevos proyectos. Proclama que no habrá un “paquetazo” económico en contra del pueblo, es decir, que no se elevarán los precios de los combustibles ni de las tarifas de servicios públicos, sobre todo de la electricidad; pero afirma al mismo tiempo, que va a focalizar el subsidio del gas.

El problema radica en que la crisis no le dejará mucho espacio de maniobra; no cuenta con suficientes recursos para contentar a los movimientos sociales ni a los grupos económicos. El país que recibe el nuevo gobierno terminará este año con un déficit de la balanza de pagos del 7.5% aproximadamente, y de la balanza comercial en torno al 5.5% (el PIB de Ecuador está en 20 mil millones de dólares). Si bien la inflación está en el 10% anual, los precios se mantienen entre los más altos de América Latina, y el país ha perdido competitividad hasta con sus vecinos. La recesión se ha profundizado y la tasa de interés

se mantiene por encima del 22%, en dólares; aunque por la incertidumbre no se otorgan préstamos a mediano plazo, sino que todo el crédito se orienta al consumo. La pobreza afecta al 80% de la población, con un 10% de desempleados y un 65% de subempleados. Aunque las cifras no están claras, el nuevo gobierno arrancararía con un déficit fiscal que bordea el 3% del PIB (alrededor de 500 millones de dólares).

Mientras la deuda externa pública se ha mantenido en el mismo nivel durante el gobierno saliente (11.250 millones de USD), la deuda externa privada ha crecido de 380 millones de USD a 4.560 millones.

El respiro viene por el lado del precio internacional del crudo ecuatoriano, que actualmente se ubica en 25 dólares el barril, pues los ingresos petroleros representan el 38% del presupuesto fiscal. Viene también por el lado de las remesas de los migrantes que sumarían 1.400 millones de dólares este año (el 7% del PIB). Sin embargo, las previsiones sobre el precio del petróleo no son estables como efecto de la amenaza contra Irak, país que ocupa el segundo lugar en lo que tiene que ver con las reservas de crudo en el mundo. Las previsiones sobre las remesas apuntan a una reducción del 10% para el próximo año. Por ello, será urgente un viraje que permita recuperar y crear fuentes de financiamiento del presupuesto fiscal, reactivar la producción y enfrentar la pobreza. Pero estos cambios, en tiempos de crisis, no pueden ser indoloros. En el momento de las decisiones, el nuevo gobierno tendrá que optar por afectar los intereses de los de arriba o de los de abajo.

En el campo internacional, el tema más delicado es el tratamiento del conflicto colombiano. Hasta ahora, los gobiernos de Mahuad y Noboa han impulsado una posición reactiva de involucramiento en el Plan Colombia y en la estrategia de guerra del gobierno de Bush, empezando por la entrega de la Base de Manta y el fortalecimiento militar de la frontera norte, aunque han evitado participar en las formas intervencionistas abiertas, como sería la conformación de fuerzas milita-

res internacionales. La presión de los movimientos sociales busca lograr una política de paz, que no se involucre en el conflicto y en la guerra, y propiciar salidas políticas negociadas. El coronel Lucio Gutiérrez ha declarado que respetará los acuerdos internacionales, en particular el Convenio de la entrega de la Base de Manta, mientras se cumplan los objetivos acordados en torno a la vigilancia en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, hay pruebas suficientes para saber que Manta se ha convertido en un centro operativo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para enfrentar a la guerrilla y la subversión colombianas, y no sólo en una base de observación contra el narcotráfico.

El equipo de gobierno

El nuevo mandatario presentará su gabinete el 15 de diciembre, por lo cual su equipo de gobierno es todavía un misterio. En todo caso, ha confirmado su equipo de transición. Se halla integrado por un grupo de militares retirados, que son el armazón del Partido Sociedad Patriótica del coronel y estarán encargados de las áreas política y energética; un grupo de empresarios y banqueros, encargados del área económica; mientras las organizaciones indígenas y sociales se encargarán del área social.

Esta conformación muestra una separación entre lo económico y lo social, y el peso que se entregaría a los sectores empresariales y bancarios “no corruptos” en las decisiones principales.

El poder internacional

Wall Street ha reaccionado con tranquilidad ante la elección de Lucio Gutiérrez. En las últimas tres semanas, ante la previsión del triunfo del coronel, los bonos de la deuda subieron en 8%. El índice de riesgo-país, aunque se mantiene alto (1.788 puntos), se ha reducido en 85 puntos, después del triunfo de Gutiérrez.

En lugar de una actitud de confrontación y condena, el gobierno de Bush ha impulsado una política de acercamiento, que ha sido aceptada por el mandatario electo, quien también busca acelerar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, antes de su posesión el próximo 15 de enero.

Los indios y los movimientos sociales

Desde el punto de vista formal, el nuevo gobierno expresa la alianza entre la Sociedad Patriótica 21 de Enero, Partido del coronel, y Pachakutik del movimiento indígena organizado en torno a la CONAIE. Hasta el momento, el viraje de Gutiérrez hacia posiciones de centro ha sido respaldado por Pachakutik, agrupación política que se encuentra interesada en compartir el gobierno, incluso en temas delicados como el ALCA, la dolarización, la Base de Manta. El reto radica en saber hasta dónde pueden conciliar las demandas sociales de cambio con los compromisos adquiridos con los sectores empresariales y bancarios y los organismos internacionales.

Los movimientos sociales han tendido a una posición más crítica ante las propuestas de Gutiérrez y han expresado un apoyo condicionado al cumplimiento del mandato del 21 de enero y de los acuerdos firmados con el coronel en la campaña. El reto radica en poder acompañar y organizar la expectativa que se ha abierto en amplios sectores ciudadanos para el cambio y la refundación de la República.

Lucio Gutiérrez está ante una disyuntiva histórica: continuar el proyecto neoliberal, con algunos adornos sociales y regulaciones contra la corrupción o ponerse a la cabeza de un largo camino de cambios que empiece por garantizar una perspectiva nacionalista y democrática a nuestro país. Todavía se cruzan en el camino la esperanza con el beneficio de la duda.

Diciembre de 2002

¿Ganarán la tercera vuelta los partidarios de un nuevo régimen?



Máximo Ponce Jaramillo*

Los ecuatorianos votaron en primera y segunda vueltas. Eligieron para gobernar a los candidatos de la alianza Partido Sociedad Patriótica - Pachakutik. Ese resultado, inesperado para ganadores y perdedores, alteró el escenario político nacional en un sentido que puede desencadenar nuevas tendencias de largo plazo.

- En las vidas de los ecuatorianos, considerados como colectividad nacional, las campañas electorales son tal vez, los procesos de interacción social que más involucran. La diversidad de actores sociales - étnicos, de género, clasistas, generacionales, regionales- que componen la colectividad nacional participan cada uno a su ma-

nera, con mayor o menor autonomía, entusiasmo y convicción. Eso se puede constatar no sólo consultando a los medios de (in)comunicación masiva, sino también conversando con taxistas, tenderos, compañeros de trabajo y vecinos (verdaderos receptores-transmisores de radio “bemba”, el más comunitario de todos los medios de comunicación) o en las reuniones de familiares y amigos (verdaderos espacios de interacción y decisión social en los que es posible una gran confianza entre sus miembros). No hay relación social que no se vea, en alguna medida, afectada por las campañas electorales.

- Que las campañas electorales nos involucren cotidianamente, no hace de la democracia ecuatoriana un campo en el que se realicen la libertad, igualdad y fraternidad de los ecuatorianos. Muchos han señalado, más bien, que la democracia realmente existente en el Ecuador funciona como un sistema clientelar de participación y de organización presidencialista del gobierno, y ha constituido ciudadanías electorales hegemónicas y representadas por partidos y líderes hechos a la medida de los requerimientos de ese sistema. Esto es, partidos que patrimonializan la administración de los recursos públicos y líderes con vocación presidencial que se comportan como que siempre estuvieran preparándose para la próxima campaña, o como si estuvieran siempre en campaña.

* Sociólogo. Profesor de la Universidad Casa Grande y de la Universidad de Guayaquil. Correo electrónico: poncecor@accessinter.net

La democracia ecuatoriana es real y efectiva. No es una formalidad intrascendente o un mero ritual laico. Los actores se incorporan y sujetan. Se obligan a intervenir en un juego político con reglas que se establecen y árbitros que se designan según la correlación de fuerzas. Se juega en serio. Se gana y se pierde de verdad. Hay quienes arriesgan la hegemonía que laboriosamente han ganado antes. Hay quienes cuestionan esa hegemonía y pretenden imponer la suya propia. Es, por tanto, mucho lo que se arriesga. Así que cada actor se esfuerza hasta el límite de sus posibilidades. No hay, sin embargo, credulidad democrática, ni en los electores ni entre los elegidos.

La gente común, la mayoría de los electores, no cree que ese juego político sea lo que pregonan quienes han puesto las reglas y designado a los árbitros, pero juega, porque algo puede sacar de todo eso y no se les ocurre nada mejor para reemplazarlo en ese momento. Hay, sin embargo, momentos fuera del período de campaña en que sí se les ocurre algo, por ejemplo, el 21 enero de 2000.

Los elegidos, por su parte, suelen manejar las reglas todo lo que las circunstancias les permiten. Suelen comportarse como si creyeran que las reglas se hicieron para ser violadas y como que las leyes siempre fueran insuficientes para gobernar.

- Históricamente, la democracia realmente existente en el Ecuador parece haber pasado de una larga fase de desarrollo extensivo hacia una nueva fase de desarrollo intensivo. Gradual pero firmemente, a lo largo de todo el período republicano, las luchas sociales han logrado que las constituciones incorporen los derechos de cada vez más grupos y que el sistema electoral incorpore una cada vez mayor cantidad de votantes de toda condición social. Así, el ejercicio del voto pasó de ser un privilegio reservado a unos pocos propietarios o doctores, a un derecho reconocido a los varones alfabetizados, luego extendido a las

mujeres alfabetizadas y, finalmente, a todos los ecuatorianos mayores de dieciocho años. En la actualidad sólo queda por ampliar ese ejercicio a los emigrantes. Es, pues, poco lo que queda por extender pero mucho por intensificar.

Precisamente, en las dos últimas décadas parece haberse procesado una intensificación de la democracia con la incorporación del movimiento indígena. Si bien no puede decirse que el clientelismo haya sido superado, en este proceso se han cuestionado las reglas establecidas, se ha buscado replantear las relaciones políticas y construir nuevas formas de ciudadanía. Algo de lo conseguido, aunque sea de manera distorsionada, se nota en la Constitución de 1998 y en la organización de Pachakutik, en su movilización social y en su participación electoral en los ámbitos local y nacional. Se trata, en todo caso, de un proceso abierto que no ha llegado, ni de lejos, a un punto de culminación.

- En la perspectiva de la intensificación de la democracia, los resultados de la última campaña electoral han producido un giro interesante en el desarrollo político del país. Ahora es posible contar con el movimiento indígena no sólo como protagonista de levantamientos y luchas reivindicativas, sino también como protagonista del gobierno. Si como dice Miguel Llucó “son gobierno”, esta afirmación marca el nacimiento de una época y trae aparejado un problema de nuevo tipo para Pachakutik y, en general, para los grupos y movimientos que lo han apoyado o acompañado en sus luchas.

Las reivindicaciones hasta ahora planteadas por los indígenas y otros sectores populares en sus luchas, no pueden ni deben ser dejadas de lado, pero en la nueva situación creada, las propuestas indígenas y populares de gobierno no se pueden reducir a esas reivindicaciones. Es hora de nuevas definiciones que den continuidad a las luchas en las nuevas condiciones creadas y es hora, también, de nuevas luchas.

Se ha iniciado la tercera vuelta, que puede ser la vencida.

Lo que no había sido, ahora es: luego de derrotar a otras fuerzas, Pachakutik y el movimiento indígena coparticipan del gobierno elegido por mayoría de votos, en alianza con la Sociedad Patriótica y además, con el apoyo expreso del MPD y los llamados movimientos sociales.

Las fuerzas derrotadas son disímiles. Unas son las partidarias: PSC, PRE, ID, orgánicamente más consolidadas pero socialmente desfasadas y políticamente desgastadas. Encarnan, junto a la DP y otros grupos, la forma tradicional de hacer política, y a ellas se les puede atribuir la responsabilidad política de la crisis del país. Otras son movimientos electorales: el PRIAN, movimiento originalmente dependiente de uno de esos partidos (PRE) aunque ahora autonomizado; el movimiento electoral que propuso a León Roldós, que se presentó como ciudadano pero que no pudo evitar su asociación con grupos y partidos de corte tradicional.

Los que al comenzar la campaña se percibían a sí mismos, y hacían que se los percibiera, como ganadores o con probabilidades de ganar, se encontraron con la sorpresa de que perdieron en la primera vuelta y volvieron a perder en la segunda.

Que la sorpresa fue real y no fingida se pudo notar en la reacción de incredulidad y estupor de los voceros del PSC, fuerza política hegemónica en Guayaquil. Dicha ciudad en la que los estragos psicológicos de los resultados de la primera vuelta fueron, por eso mismo, mayores que en el resto del país. Su llamado a no votar por ninguno de los dos finalistas sonó a un intento desesperado de deslegitimación preventiva del nuevo gobierno y al anuncio de un conflicto de poderes que no oculta-

ba, incluso, deseos de derrocarlo por la vía parlamentaria.

Puede ser, entonces, que estemos ante el inicio de un nuevo período político nacional en el que el viejo y maltrecho régimen de gobierno clientelar, presidencialista y autoritario con su respectiva ciudadanía electoral sean sometidos a presiones que no podrá procesar, y que un nuevo bloque histórico construya un nuevo régimen con características no predeterminadas, pero que de seguro implicarán una mayor intensificación de la democracia en el Ecuador, que la cambiarán en su fondo y en su forma.

Pero, por lo mismo que el nuevo régimen no está predeterminado, las fuerzas del viejo régimen pueden intentar y conseguir una transformación de sus imágenes y una restauración que incorpore algo de lo nuevo para que todo siga igual. Ahí estaría el riesgo. Queda, pues, por jugar la tercera vuelta, la que decidirá el destino del viejo régimen. ¿Serán capaces los nuevos actores incorporados de convertirse en sus sepultureros o, por el contrario, serán incapaces de hacerlo y se convertirán en sus remodeladores?

Quizá sea el inicio de un nuevo período político en el que el viejo y maltrecho régimen de gobierno clientelar, presidencialista y autoritario sea sometido a presiones que no podrá procesar, y que un nuevo bloque histórico construya un nuevo régimen con características no predeterminadas



Ediciones de FLACSO - Ecuador



Serie FORO

Orfeo en el infierno

Adrián Bonilla, editor

FLACSO- Ecuador - CAP

ACADEMIA DIPLOMATICA - 2002

La política exterior ecuatoriana ha transitado, como Orfeo en el infierno, por los más difíciles y tortuosos senderos, en su calidad de expresión de un estado pequeño con capacidades limitadas por las constricciones del orden internacional, y por la fragilidad institucional que caracteriza su vida política. La armadura del derecho internacional y la hegemonía de visiones teleológicas no le han servido más a sus intereses que la habilidad poética a Orfeo, quien finalmente no pudo escapar a su propia debilidad y a la tentación de mirar atrás y perderlo todo en ese instante.

Es por ello que se justifica una agenda de política exterior ecuatoriana. La propuesta de agenda que este libro presenta se construyó sobre la base de una identificación de los temas centrales de la política exterior ecuatoriana y su posterior jerarquización. Los textos se organizan alrededor de tres ejes: relaciones bilaterales de Ecuador con Colombia, Perú, Estados Unidos y Unión Europea; relaciones multilaterales: ONU, OEA, OMC; y dos ejes transversales: seguridad y comercio exterior.

O

DOSSIER

Clavar gelatina contra la pared **La ‘cultura política’ entre sondeo y excusa mayor***

Ton Salman**

En una entrevista publicada en un periódico holandés (*De Volkskrant* 3-10-2002), el economista y filósofo serbio Miroslaw Prokopijevic vincula con la cultura balcánica el hecho de que Serbia y otros países de esa zona continúen viviendo procesos de pauperización, aún varios años después de las guerras. Utiliza el concepto de capital social, para referirse a “las reglas informales que predominan en una sociedad, [...] costumbres, convicciones religiosas y morales, en otras palabras: cómo funciona la vida cotidiana”. Aquello que los antropólogos denominan cultura.

Prokopijevic sugiere que en los Balcanes predominan reglas informales que inhiben el funcionamiento de las reglas formales. Lo que rige concretamente es un patrón de clanes y elites en mutua competencia e inseguridad crónica en torno a cuánto tiempo permanecerá en el poder un clan específico. No existen partidos políticos con claros perfiles ideológi-

cos ni raíces societales; existen solamente estrategias a corto plazo tendientes a aprovechar la situación al momento de detentar el poder. La oposición es reprimida o redimida, y las reglas se adaptan a los intereses de las nuevas autoridades.

Prokopijevic compara esta situación con la de América Latina. Allí, en muchos países tampoco existen reglas cuyo cumplimiento pueda ser infundido por una autoridad imparcial.

Copiando la Constitución estadounidense, [los países latinoamericanos] olvidaron implementar las ‘provisiones negativas’, que son las reglas que les cortan las alas a las autoridades. Son las reglas más difíciles de introducir, ya que deben aplicarse independientemente de quién ocupe el poder [...] Sin reglas de esta índole, y sin un poder judicial verdaderamente independiente y soberano, no se obtendrá un desarrollo económico estable. (Prokopijevic. Ibid.).

Es uno de los muchos ejemplos que hoy por hoy se encuentran en la literatura ‘transitológica’ (Schmitter 1995), en la que se recurre a la noción de cultura política para explicar acontecimientos específicos. Es un ejemplo que no está entre los peores, aquellos que sin muchos rodeos declaran que tal o cual proceso se debe “a la cultura de la gente”, como si se tratara de un atributo fijo. Al analizar el caso de los Balcanes, Prokopijevic apunta, por ejemplo, a las diferencias históricas existentes entre países como la República Checa, Eslo-

* El título de este ensayo proviene de un artículo de Kaase (1983), quien utilizó la expresión para referirse al esfuerzo de medición de la cultura política. Este texto se basa en parte, en el material consultado y citado de la compilación que me encuentro preparando con Willem Assies y Marco Calderón. Este material se publicará hacia fines del 2002 o inicios de 2003 con el título, “Ciudadanía, cultura política y reforma del Estado en América Latina”, y contará con el sello editorial del Colegio de Michoacán/IFE, México.

** Departamento de Antropología Social y Cultural, Vrije Universiteit Ámsterdam. Correo Electrónico: AJ.Salman@scw.vu.nl.

venia y Hungría en comparación con lo que ocurre en Serbia y Bulgaria, y percibe posibilidades de cambio. Además, se niega a atribuir un complejo cultural a una sola causa, como por ejemplo, 'el genio de tal pueblo'.

Al parecer, gana aceptación la idea de que los análisis institucionalista o estructuralista, o aquel que se concentra en el cálculo de costos y beneficios por parte del electorado, llevan a explicaciones que desatienden una dimensión importante en la comprensión de las transformaciones y transiciones políticas y sociales. Sin embargo, la estrategia de recurrir a la cultura política para rendir cuentas sobre lo que queda sin explicación y aplicar solamente un enfoque institucionalista o estructuralista, conlleva riesgos.

Según parece, existen dos trampas cuando se trata de incluir a la cultura y, *mutatis mutandis*, a la cultura política en los esfuerzos por explicar los cambios históricos y societales -o su tardanza. La primera consiste en sobrestimar su poder explicativo igualándola con el *ethos* o 'alma' de un pueblo; una vez identificado el *ethos*, éste se convierte en la causa de *todo* lo que pueda suceder. La segunda trampa radica en la reducción de su naturaleza a 'actitudes y convicciones medibles' y cae en un empirismo incapaz de explicar lo que no halla correspondencia con el resultado de las encuestas y sondeos en que se basan tales enfoques.

En el primer caso, predomina el concepto de cultura como 'hiper referencia' (Kuper 1999: x), un cuerpo omnipresente de creencias, prácticas, nociones éticas y estéticas, patrimonios artísticos y mucho más, que imprime decisivamente la vida social de un grupo o sociedad, y que por lo tanto, es una explicación imprescindible y cuasi exhaustiva en cualquier intento por entender procesos históricos y contemporáneos. Aquí se corre el riesgo de caer en una casuística cultural. Se recurre a la cultura para explicar el éxito o el fracaso de proyectos nacionales y políticos tanto como de intentos por democratizar o promover la participación política (Kuper Ibid.): se explica la historia a través de la cultura.



Genzalo Vargas

En el otro caso, se reduce a la cultura a tal punto, que lo que queda en realidad es una ceguera cultural. La medición de actitudes y opiniones no es un acercamiento a la cultura, sino un retrato unidimensional y estático de una realidad 'multi capa', diferenciada y dinámica. El porcentaje de encuestados que afirman que la confianza en 'los políticos' es exigua dice posiblemente sobre la cultura política lo que un afiche dice sobre la película que publicita. Hemos aprendido que no todas las decisiones y acciones son racionales, calculadas, estratégicas, discursivas. No todos los cambios son producidos (o explicables) por modificaciones en las preferencias políticas o por intervenciones desde fuera. Los actores son más que un conjunto de capacidades, intenciones o productores de resultados (incluso los no contemplados); son también actores que encarnan incapacidades, irracionalidades, creencias sin sustento, y se hallan informados por lo no-conciente -todo eso en lo *diacrónico* y lo *heterogéneo*.

En un esfuerzo por 'navegar' entre Skylla y Charibdis, revisaré brevemente en primera instancia, una selección de la literatura sobre el tema, trataré de contrastar las aproximaciones 'genérica' y 'sondeal'. Después abordaré rápidamente la cuestión metodológica; para finalmente, hablar de 'la cultu-



La atención hacia la cultura política no es reciente. Casi siempre se recurrió a esta noción ante la insatisfacción con un enfoque exclusivamente político-estratégico e institucional, o con uno de tipo estructural. El interés actual es más sistemático e incluye esfuerzos por delimitar y definir el concepto

ra política latinoamericana', como componente necesario de reflexiones sobre desarrollos democráticos, y presentaré unas conclusiones que considero inacabadas.

La cultura política en la literatura actual: propuestas y aplicaciones

En los últimos años se observa un crecimiento del interés por incorporar a la cultura política en distintos análisis de caso y por reflexionar sobre las referencias conceptuales del término. Este interés se vio estimulado por los temas de investigación en boga como las (nuevas) reflexiones sobre las 'transiciones democráticas' o la noción de ciudadanía y el estudio de las consecuencias múltiples de las reformas estatales que acaecieron a América Latina en las últimas décadas.

Sin embargo, el interés por la cultura política no es nuevo. Sobre todo en el marco de las investigaciones sobre los movimientos sociales y su rol en las transiciones democráticas, a partir de los años 70, cuando ya se hicieron muchas referencias a la noción de que la cultura política se interponía a una transición, que ya no podría ser pensada como un simple pasaje hacia una nueva situación de 'democracia plena'. Mainwaring (1987) ya habló sobre la necesidad de incluir las "creencias políticas" e "identidades políticas" en el análisis de la transición brasileña, por ejemplo.

Gerrit Burgwal, en sus trabajos sobre Ecuador (1992, 1995), siempre ha sido muy sensible hacia la dimensión de la cultura política para entender las estrategias 'desde la base' y la interacción entre los distintos acto-

res en la arena de encuentros y enfrentamientos políticos, sobre todo en el ámbito local. Orin Starn, en un precioso artículo escrito en 1992, se concentra en las dimensiones culturales cuando analiza la emergencia y formación de las rondas campesinas en el norte de Perú, establecidas originalmente para combatir el robo de ganado.

Estos ejemplos, que pueden complementarse con muchos otros, demuestran que la atención hacia la cultura política no emergió recientemente. Casi siempre, el motivo para recurrir a esta noción se originó ante la insatisfacción con un enfoque exclusivamente político-estratégico e institucional, o con uno de tipo estructural.

La diferencia entre el interés anterior y el que se verifica actualmente radica en que el último es más sistemático e incluye esfuerzos por delimitar y definir el concepto (Pansters 1997, y 2002 en prensa). Para empezar, esto quiere decir que no se reifica a este concepto como una 'dimensión dada' en todas las circunstancias, sino que se desarrolla una reflexión sobre su conformación de modo desagregado, a lo largo de la historia de los distintos países latinoamericanos. En sus diferentes modalidades, muchas veces fue una historia de nacional-desarrollismo, populismo y autoritarismo modernizador, pero con matices significativos en cuanto a los espectros de los partidos políticos, de la estabilidad institucional y constitucional, de la configuración étnico-cultural de la población y la posibilidad de ascenso social, entre muchos otros factores.

Parece prácticamente imposible que bajo las condiciones arriba señaladas, se cristalice en América Latina una cultura cívica entendi-

da como “una cultura pluralista basada en la comunicación y la persuasión, una cultura del consenso y la diversidad” (Almond y Verba 1963: 8).

Lo señalado resulta un argumento en contra del ‘gran concepto’ en torno a cultura política. Este ‘gran concepto’ está presente en un trabajo de Glen Dealy del año 1992, en el que argumenta que la cultura latinoamericana es “caudillista”, o sea que prevalece el código ‘relacionista’ siempre sobre el código de la representación y lo impersonal. La confianza no es depositada en ‘otro’ cualquiera, o en una ‘función’, sino en ‘otro’ específico. Se trata de relaciones personales: la confianza no se deposita en las instituciones, sino en el apoyo de una persona específica al interior de ellas, en quien se pueda confiar. Por ello, la relación con lo político, es “una relación con alguien, no con algo” (Bustamante 1997: 63).

Según el pensamiento de Dealy, es este “código cultural” que por sí solo resulta capaz de explicar muchos desarrollos y ausencias de desarrollo en América Latina. Explica la injusticia generalizada, la impunidad, la falta de conciencia en torno a los derechos y el clientelismo. Pero el problema es justamente que explica demasiado. El componente que explica este ‘todo’ es una generalización, una abstracción y un ‘atributo’ estático que queda exento de toda explicación, contextualización y ‘aterrizaje’ en motivaciones, aspiraciones y estrategias de la gente. Se convierte en un ‘espíritu latino’ – y este ‘espíritu’ se puede contrastar con el espíritu ‘puritano’ o ‘juicioso’ que, según se alega, caracteriza a los EE.UU.; es exactamente esto lo que hace Dealy.

Este patrón argumental le permite una serie de contrastes que si bien constituyen una lectura entretenida, conducen a una sociología basada en estereotipos y denominaciones de los pueblos y sus rasgos, una sociología por tanto, sin historia y sin cultura, en el sentido de cultura como un conjunto de prácticas y creencias divergentes y dinámicas.

El trabajo de Kalberg (1994) constituye una versión mucho más sutil de una argumentación similar (basada otra vez en un análisis

del éxito de los EE.UU.). El autor enfatiza que para la internalización de valores ciudadanos, es necesario un proceso de apropiación de valores como la ‘responsabilidad ciudadana’, ‘confianza social’, ‘igualitarismo’ e ‘individualidad’ (Ibid.: 91-114). Son valores que se han podido realizar en los EE.UU., gracias a la herencia religiosa, a la formación específica de identidad nacional, a la modernización económica, a un entorno propicio para la confianza en el poder del individuo para influir en su entorno por su propio esfuerzo, lo cual no ha sucedido en América Latina.

Al referirse a Ecuador, Adoum (1997: 11) parece caer en el mismo ‘estaticismo’. Él habla de “identidad colectiva”, pero sus observaciones se pueden aplicar también a la noción de cultura política. Por un lado, enfatiza que esta identidad colectiva

...no es algo definido e inmutable, conformado en los siglos anteriores a nosotros, que hubiéramos recibido como una instantánea del pasado, menos aún como un tatuaje que no podemos borrar, sino que se va haciendo, como un autorretrato, por acumulación de rasgos o como un *collage*, fatalmente incompleto...

Sin embargo, mantiene por otro lado, la idea de que

...la identidad es la raíz más honda o vigorosa... los elementos que la conforman -etnia, lengua, religión, ética, conciencia de nación... - pueden permanecer mucho tiempo enterrados bajo una dominación cultural e incluso bajo los vestigios de otra identidad, y reaparecer un día, de forma espontánea y orgullosa...”(Ibid: 13).

Percibo que en este punto el autor en mención cae en el esencialismo; sugiere que los elementos etnia, lengua, religión, entre otros, son estables e inalterables, y que hay algo que, de modo estático, puede permanecer escondido durante mucho tiempo y reaparecer de repente. Pero sus propios ejemplos (él habla de los campesinos de Chiapas en México, y de las

nacionalidades oprimidas en Europa central), más bien ilustran todo lo contrario: los mismos “renacimientos” de los cuales habla, reflejan nuevas condiciones, y son, por lo menos en parte, re-creaciones de imágenes –¿o ilusiones?– acerca del pasado “recuperado”. En la formulación de Adoum, la cultura política parecería un bagaje fijo, que incluso puede sobrevivir de forma subterránea, y re-estallar cuando las condiciones fuesen favorables. Así, resulta que los individuos no pueden deshacerse de él o transformar su bagaje cultural. Es su destino -que espera bajo la superficie hasta poder apoderarse otra vez de los actores...

De este estilo de análisis, que podemos quizá llamar ‘genérico y esencialista’ emerge una imagen de la cultura política difícil de investigar y desagregar. Es un conjunto de ‘rasgos’ que, con interpretación de génesis histórica o no, tiende a asumir la característica de una “personalidad nacional” (ver Dalton 1996). Se puede aplicar el mismo ejercicio para toda América Latina, como lo hizo Dealy o también Carlos Fuentes en su libro “The buried Mirror, Reflections on Spain and the New World” (1992). Fuentes lo hace de una manera sutil y sofisticada, pero igualmente resulta una imagen de la cultura vista como ‘herencia’ y como instancia que puede explicar todos los acontecimientos contemporáneos, sin importar sus divergencias, contradicciones o su evolución. Es, de todas formas, un enfoque ‘culturalista’.

Esta misma crítica llevó a Almond y Verba (Ibid.) y a muchos de sus seguidores, a diseñar un modelo (y una operacionalización de tal modelo) para investigar empíricamente el estado de la cultura política en los países de América Latina, como ejemplo de este caso. Un acercamiento parecido se observa en un libro recientemente compilado por Roderick Ai Camp (2001), sobre las visiones de los latinoamericanos acerca de la democracia.

En esta aproximación no existe una imagen previa sobre ‘los rasgos’ de la cultura política latinoamericana. El punto de partida, más bien, es un trabajo empírico, sondeo o encuesta, que tiene como objetivo recoger da-

tos sobre creencias, opiniones y actitudes (ver Inglehart 1990). Como dice Camp:

...cultura política [trata] de actitudes, valores, creencias, ideales y experiencias que predominan en una sociedad [...] en torno a visiones hacia lo político, la percepción que tiene la gente sobre los sistemas políticos y sobre su propio papel en lo político ... (Ibid. 2001: 7).

El enfoque entonces, no radica en el juicio que han desarrollado los investigadores sobre ‘el estado de la democracia en un país específico’, sino en “la visión de los ciudadanos sobre el tipo de democracia que existe en su sociedad [...] y sus expectativas de la democracia” (Ibid: 9). Es una estrategia de investigación de la cultura política que tiene muchas ventajas. Permite establecer correlaciones entre aquello que sustenta las prácticas y valores democráticos por un lado, y el apoyo existente para –¿y la estabilidad de?– un sistema democrático, por otro. Admite además, distinguir entre sectores y clases sociales o entre el nivel de educación y la medida en que se da una adscripción a los sistemas democráticos; son datos que permiten analizar los vínculos entre las características específicas de la historia reciente de los países y las modalidades de apoyo a las expectativas en torno la democracia y su relación con las preferencias electorales (Klesner 2001: 128-132).

Así, en un estilo casi ‘anti-holístico’ se lo gran sugerir relaciones entre sistemas políticos y actitudes poblacionales. De la encuesta en que se basó la compilación editada por Camp resultó, por ejemplo, que el apoyo para la democracia es mucho más fuerte en Costa Rica que en México o Chile. En Chile y México, apenas el 50% de los encuestados prefiere la democracia más allá de las circunstancias, mientras que en Costa Rica, el porcentaje alcanza más del 80%. En Costa Rica, la gran mayoría asocia democracia con ‘libertad’, en primer lugar, mientras que en México y Chile los porcentajes de encuestados que asocian democracia con ‘igualdad’ o ‘bien-



Resulta difícil hallar el equilibrio entre una conceptualización esencialista que recoja el ethos de un pueblo, y una reduccionista, o del tipo de 'orientaciones subjetivas medibles'. Por esta misma razón, la noción de cultura política nos confronta con problemas conceptuales y metodológicos

tar-progreso' son más altos (Seligson 2001: 91-94). No sorprende que estos resultados se presten a interpretaciones que vinculan la estabilidad y 'madurez' del sistema democrático con la 'profundidad' de la convicción democrática; y que aquello, a su vez, lleve a especulaciones sobre causas y efectos: "si la cultura política tiene alguna capacidad de predicción, pronosticaría que la estabilidad democrática en México y Chile se encuentra lejos de estar asegurada" (Ibid.: 106).

Pero es una conceptualización que a la vez, presenta limitaciones. En la misma compilación editada por Camp, Alan Knight fue invitado a expresar sus observaciones, él conculca plenamente con los editores y se resiste a la propuesta de la existencia de "culturas políticas" omnipresentes; que evocan la idea de las psiquis de los latinos (Knight 2001: 224). Pero tampoco se deja convencer por la aproximación de Camp y su equipo. Argumenta a favor de interpretaciones históricas regionales y locales (Ibid.: 225), y duda de si las encuestas puedan captar lo que pretende expresar el concepto de cultura política (Ibid: 230). Duda además de si la pretensión de las encuestas de determinar "orientaciones subjetivas" resiste una prueba crítica, ya que dichas orientaciones son "fluidas, no-específicas y tampoco se prestan a la falsificación" (Ibid.: 231). La limitación de un enfoque 'empírico' es entonces su pobreza conceptual y su empirismo, así como su tendencia a satisfacerse con una 'foto' de lo que en realidad es un proceso. Además, confía demasiado en la validez de respuestas dadas - y no dispone de los instrumentos metodológicos ni teóricos para una comparación crítica entre 'lo dicho y lo hecho'.

El reto metodológico

Resulta, entonces, difícil encontrar el equilibrio entre una conceptualización esencialista que recoja el tipo del 'ethos de un pueblo' por un lado, y una conceptualización reduccionista y del tipo de 'orientaciones subjetivas medibles', por otro. Por esta misma razón, la noción de cultura política nos confronta con problemas conceptuales y metodológicos. Optar por lo metodológicamente factible tiende a desembocar en un contenido pobre, fragmentado y deshistorizado de la idea de cultura política, mientras que una noción más rica y matizada conlleva el problema de una 'in-investigabilidad'. Estos problemas se han vuelto críticos, ya que en los últimos años la importancia de la incorporación de la dimensión de cultura política ha sido ampliamente reconocida (Dalton Ibid.).

En primer lugar, un resultado no-intencional de la incorporación de esta noción consiste en que se convierte a todos los partidos, autoridades, agentes intermediarios y al 'pueblo', en corresponsables de los éxitos y los fracasos de procesos de transición o realización de formas de ciudadanía, ya que todos reproducen el legado de sus *habitus* en su quehacer e interacciones diarias. De por sí, la noción de la cultura política no conlleva los medios conceptuales para distinguir entre las responsabilidades diferenciadas para la reproducción de rasgos culturales y no responde la pregunta sobre el impacto de las reformas estatales bajo el lema de los ajustes necesarios políticos y económicos en las transformaciones culturales diferenciadas para distintos sectores poblacionales por ejemplo, o la pregun-



El concepto de cultura política resulta complicado porque: no hay modo de integrarlo en las estrategias de investigación de una manera 'directa'; es prácticamente imposible determinar las causas y efectos cuando se introduce a la cultura en nuestros esfuerzos investigativos; es ambiguo y difícil de delimitar

ta sobre la lucha por el significado de la democracia (Paley 2001).

En segundo lugar, es un concepto difícil de delimitar y estudiar, y fácil de 'cosificar' (Pansters 2002 en prensa). La cultura política tiene algo de esos famosos conceptos que resaltan más bien por su aparente obviedad que por su claridad (Pansters 1997). Esto tiene que ver con la falsa sugerencia de homogeneidad cultural dentro del universo poblacional en cuestión, con la imprecisión del concepto por su propensión 'totalizadora', y con su tendencia a fungir como argumento de-ontológico.

Aparte de ello, existe un gran reto metodológico: lo que responde y cuenta la gente sobre sus creencias y percepciones no puede cubrir y representar la cultura política, si es que queremos tomar en serio la idea de una multidimensionalidad cultural, que no se agota en lo discursivo. Esto, a su vez, apunta hacia el problema de 'investigabilidad comparativa' en el sentido de que si en un contexto cultural específico la noción de una cultura política tal vez tiene sentido, estamos frente al problema de que los conceptos más elementales para captar esa cultura política (como 'grado de confianza', 'susceptibilidad al autoritarismo', 'personalismo') tienen significados muy distintos en otras partes (Knight Ibid.: 233).

Estas reflexiones sugieren que si pretendemos superar el error de reducir nuestro entendimiento de democratización no lo podemos lograr sin una cultura política, y tampoco la vigencia de instituciones, regularidad y 'normalidad' en procesos electorales. Por ello que el de cultura política es un concepto potencialmente fructífero en el análisis de las vicisitudes de la democracia en América Latina;

pero que a la vez nos confronta con problemas. Entre las grandes ventajas que presenta, podemos decir que nos ayuda entender reacciones de parte del electorado, de la militancia o de pobladores urbanos, que no parecen las más 'adecuadas' o 'racionales', desde el punto de vista de las expectativas generadas por las transiciones y las alteraciones en las estructuras de oportunidad política.

La cultura, hemos aprendido, tiene a veces una racionalidad que no se explica con cálculos de intereses solamente. También puede ayudarnos a entender percepciones específicas de parte de la ciudadanía en torno a sus expectativas acerca del universo político (Camp 2001). Asimismo nos ayuda a entender que las alianzas se conforman por razones que van más allá de lo compartido en términos socioeconómicos, como lo compartido (o lo que se ha imaginado como compartido) en términos de historia, raíces étnicas, género o el sentirse atraído por un discurso que enfatiza en la sugerencia de que "los políticos los han abandonado", por ejemplo. Por todas estas potencialidades, merece un lugar un nuestros estudios.

Sin embargo, resulta complicado porque no hay modo de integrarlo en las estrategias investigativas de una manera directa, y porque es prácticamente imposible determinar las causas y efectos cuando se introduce a la cultura en nuestros esfuerzos investigativos. Complicado también, porque es un concepto ambiguo y difícil de delimitar, y aún más difícil de investigar.

El aporte de la incorporación de la cultura política en la investigación sobre la democracia

Las inquietudes acerca de las culturas políticas se entretienen con la reflexión acerca del futuro de la democracia en América Latina y en el mundo. América Latina participó en la llamada “tercera ola” de democratización en el ámbito internacional. Si al inicio de la década de los 90 el mundo contó con 76 democracias, al final del año 2000, el número habría aumentado a unas 120. Sin embargo, muchas de esas nuevas democracias son “democracias con adjetivos”: democracia limitada, tecno-democracia, o democracia formal. La calidad de las democracias –nuevas y antiguas– está en entredicho. Aunque parece que según las encuestas acerca de la cultura política la gran mayoría de la ciudadanía latinoamericana se adhiere a los valores democráticos, también es cierto que buena parte de esa mayoría no está contenta con las democracias realmente existentes. Según *The Economist* (17 de agosto 2002) la suscripción a la democracia como el sistema preferible mejoró en 14 de los 17 países latinoamericanos durante el último año, aunque en comparación con 1996 disminuyó en 13 países.

En Ecuador, tanto en comparación con 1996 como con el 2001, disminuyó: un 49% apoya la democracia como ‘sistema preferible’ en el 2002. Sin embargo, a la pregunta de cómo funciona concretamente la democracia en Ecuador, casi un 80% de los ecuatorianos y ecuatorianas se declara satisfecho, mientras que en 1996 fue solamente un poco más del 60%; hecho que sin lugar a dudas tiene que ver con la última administración, que por una gran mayoría fue percibida como relativamente “honesto y eficaz”.

Desde otros puntos de vista el énfasis se coloca en otros elementos. Según ciertos analistas, la democracia y la cultura política en América Latina siempre sufrieron de ambivalencia (Schelling 2000). Mientras que por un lado están presentes una serie de rasgos estructurales y culturales que manifiestan lo

moderno, por otro, penetra lo no-moderno.

La democracia representativa (inclusive el conocimiento sobre ella y la confianza en ella), la protección del ciudadano por la Ley y la Constitución, el mercado como instancia reguladora de las relaciones sociales y económicas, la ilusión de paridad en las transacciones sociales como dimensiones ‘modernas’, todos estos elementos conviven con patrones de interacción que revelan sumisión clientelar, arbitrariedad y la utilización de tácticas adecuadas para mantener bajo control las diferencias de poder, de bienestar y las socioculturales tan profundas que inhiben las transacciones entre iguales (Pérez Baltodano 1997: 40-52, O’Donnell Ibid.: 85 ss.).

La democracia representativa coexiste con prácticas de toma de decisión que muestran un total desprecio del principio democrático (Foweraker y Landman 1997: 27). En situaciones de pobreza estructural grave (Green 1999) y en situaciones de acceso desigual a la información y a la educación, la igualdad formal es desplazada fácilmente por las relaciones patrón-cliente, y las instancias de garantía de cumplimiento de la Ley son frecuentemente socavadas por el poder de discreción de las elites (NACLA 1997, Weyland 1995).

Conviven lo moderno de la afirmación de la existencia del estado de derecho con las irregularidades y atrasos en los procesos penales, con la “justicia de clase”, con el caos jurídico y la debilidad institucional (Schor 2001, Philip 1999), con disputas “pre-modernas” sobre cuotas políticas dentro del Poder Judicial, con casos de corrupción, impunidad y arbitrariedad tan obvios que son cotidianamente comentados por la prensa y la sociedad entera. Dada esa situación, predominan las estrategias de la gente común y corriente para tratar por todos los medios de evitar se entregue su suerte al poder formal-judicial, que nominalmente es protector de su derecho, propiedad e integridad individual. El efecto se refuerza por el hecho de que nunca existieron o fueron debilitados por políticas de reestructuración y regímenes militares o por gremios de promoción de interés como sindica-

tos y asociaciones societales fuertes y autónomas; los que son mayoría numérica son muchas veces los más débiles en términos de presencia pública.

Pero el tema no queda allí: el sujeto latinoamericano funciona en circunstancias dadas; se expresa sobre todo en la capacidad para *relacionarse* con un mundo hostil mediante una vía que debilita y reblandece la dureza y el capricho de esta vida; y esta vía es la creación de la obligación que deriva del afecto personal. El afecto personal, aún cuando no sea nada más que el intercambio de una sonrisa, es la instancia que recompensa, en cierta medida, el reto de vivir en un mundo plagado de profundas desigualdades y de riesgos cotidianos.

Así, la nueva forma que emerge de la contradicción, se da en distintos niveles o escalas. Vemos, por ejemplo, cómo algunas prácticas se convierten en rutinas, en marcos operativos y en rasgos institucionales, en discursos que los legitiman u ocultan; a su vez, estos marcos vuelven a influir en las prácticas y en los límites de maniobra dentro y fuera de estas prácticas. La cultura política emerge entonces como una dimensión que no se puede desconectar de los arreglos institucionales, de los discursos oficiales y de las prácticas que evaden a ambos sin desvincularse de los parámetros establecidos por ellos.

Emerge entonces, una realidad que no funciona ni por lo moderno ni por lo no-moderno, sino por una lógica cargada de elementos culturales. La democracia *está*, y grandes mayorías se adhieren a ella, por lo menos verbalmente. Pero al mismo tiempo la subyugación a la Ley es rechazada diariamente por las elites, elites que niegan a las grandes mayorías el derecho a informarse y a evaluar los actos políticos y sus consecuencias. Estas mayorías, a su vez, aprenden a 'navegar' en estas condiciones, y la consecuencia muchas veces es que las cosas funcionan mediante "esquivaciones" de lo establecido por la Ley y la norma – o sea: lo moderno. Dentro de esta configuración, las elecciones se convierten en un protocolo vacío de competencia y significado

real. Los electores solamente en parte, votan por tener una opinión y preferencia en términos de propuestas políticas de desarrollo, o de arreglos institucionales y de procedimientos (Paley 2001: 130-138); votan también para obtener beneficios como educación, salud, trabajo, reconocimiento de su título de propiedad o servicios urbanos, a escala particular y no universal (NACLA Ibid.). El universo semántico que define la contienda política, entonces, es fragmentado y rompe con la idea misma de una comparación 'racional' de propuestas y programas de gobierno (Ibid.), pero produce prácticas y consideraciones electorales que no corresponden ni con lo moderno ni con lo no-moderno, sino con lo local. Y aquello, tan intangible, dinámico y descentrado como suena, podría apuntar a ciertas partes de la cultura política latinoamericana.

A modo de conclusión

La última sección desembocó en una suerte de esbozo e identificación de los rasgos de la cultura política latinoamericana, y en este sentido, pareció haber olvidado todas las precauciones que predominaron en las secciones anteriores. No tenía, sin embargo, otra pretensión que la de ilustrar que, sin sensibilidad para las dimensiones culturales, los significados, percepciones, lo sub-discursivo, las rutinas y, muchas veces, la asincronía entre estas 'capas', resulta difícil y parcial reflexionar sobre la democracia, la conciencia de derechos, y la naturaleza del funcionamiento de las instituciones democráticas. Por otra parte, parece injustificable aislar y dar un tinte exclusivo a la cultura política como explicación única o privilegiada (Dalton Ibid.). Es una dimensión que forma parte integral de un conjunto de factores incluido el patrón de relaciones sociales, la naturaleza del 'civismo' societal, la historia, la estratificación socioeconómica, la cultura de los partidos políticos (Lomnitz y Melnick 2000), la estructura partidaria, el sistema político y muchos más. Es además, como se arguyó, una noción problemática, tan-

to en su naturaleza y delimitación, como para incorporarse en la investigación cuando emerge el reto de su desagregación en indicadores ‘tangibles’.

A pesar de todas estas objeciones, parece imprescindible incluir la dimensión de cultura política en ensayos de investigación y comprensión de procesos de democratización. Análisis de índole institucional o estructural dan como resultado un enfoque ‘transitolgista’ pobre y parcial, y una imagen instrumental sobre la consolidación democrática, que corre el riesgo de perderse en mediciones instrumentales. Eso, a su vez, conlleva el peligro de que nosotros los investigadores terminemos por legitimar las “democracias con adjetivos” con las cuales luchamos en nuestros días.

Bibliografía

- Adoum, Jorge Enrique, 1997, *Ecuador: señas particulares*, Quito: Eskeletra Editorial.
- Almond, Gabriel y Sidney Verba, 1963, *The Civic Culture - Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Burgwal, Gerrit, 1992, “Collective Clientelism in Contemporary Quito”. *Antropologische Verkenningen* 11(2): 23-47.
- _____. 1995 *Struggle of the Poor: Neighborhood Organization and Clientelistic Practice in a Quito Squatter Settlement*, Amsterdam: CEDLA.
- Bustamante, Fernando, 1997, “¿Qué democracia?; una aproximación a los problemas de la gobernabilidad y la democracia en el Ecuador de fin del milenio”. *Ecuador Debate* 42: 53-64.
- Camp, Roderick Ai (ed.), 2001, *Citizen Views of Democracy in Latin America*, Pittsburgh University of Pittsburgh Press.
- Dalton, Russell J., 1996, “Comparative Politics: A Micro-Behavioral Perspective”, en: Robert Goodin y Hans-Dieter Klingeman (ed.): *The New Handbook of Political Science*, Oxford: Oxford University Press.
- Dealy, Glen, 1992, *The Latin Americans - Spirit and Ethos*, Boulder: Westview Press.
- Falk, Richard, 2000, “The Decline of Citizenship in an Era of Globalization”, texto de la *internet*: transnational.org/forum.
- Foweraker, Joe y Todd Landman, 1997, *Citizenship Rights and Social Movements - A comparative Statistical Analysis*, Oxford: Oxford University Press.
- Green, Duncan, 1999, “A trip to the market: the impact of neoliberalism in Latin America”, en: Julia Buxton y Nicola Phillips (ed.): *Developments in Latin American Political Economy: States, Markets and Actors*, Manchester/New York: Manchester University Press, pp. 13-32.
- Inglehart, Ronald, 1990, *Culture Shift in Advanced Industrial Society*, Princeton: Princeton University Press.
- Kaase, Max, 1983, “Sinn oder Unsinn des Konzepts ‘Politische Kultur’ für die vergleichende Politikforschung”, en: Kaase, Max & Hans Dieter Klingemann (ed.): *Wahlen und politisches System*, Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Kalberg, Stephen, 1994, “Cultural Foundations of Modern Citizenship”. Brian S. Turner (ed.) *Citizenship and Social Theory*, London: Sage, pp. 91-114.
- Klesner, Joseph L., 2001, “Legacies of Authoritarianism: Political Attitudes in Chile and Mexico”. Roderick Ai Camp (ed): *Citizen Views of Democracy in Latin America*, University of Pittsburgh Press, pp. 118-138.
- Knight, Alan, 2001, “Polls, Political Culture and Democracy: A Heretical Historical Look”. Roderick Ai Camp (ed.) *Citizen Views of Democracy in Latin America*, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, pp. 223-242.
- Kuper, Adam, 1999, *Culture - The Anthropologists' Account*, Cambridge/London: Harvard University Press.
- Lomnitz, Larissa y Ana Melnick, 2000, *Chile's Political Culture and Parties - An Anthropological Explanation*, N. Y: University of Notre Dame Press.

- Mainwairing, Scott, 1987, "Urban Popular Movements, Identity, and Democratization in Brazil". *Comparative Political Studies* 20(2): 131-159.
- NACLA, 1997, *Inequality and the Dismantling of Citizenship in Latin America* – NACLA-Report on the Americas, May/June.
- O'Donnell, Guillermo, 1999, *Counterpoints – Selected Essays on Authoritarianism and Democratization*, N. Y.: University of Notre Dame Press.
- Paley, Julia, 2001, *Marketing Democracy – Power and Social Movements in Post-Dictatorial Chile*, Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press.
- Pansters, Wil, 1997, "Theorizing Political Culture in Mexico", en: Wil Pansters (ed.): *Citizens of the Pyramid – Essays on Mexican Political Culture*, Amsterdam: Thela Press, pp. 1-37.
- _____ 2002 "Valores, tradiciones y prácticas; reflexiones sobre el concepto de cultura política (y el caso Mexicano)". Willem Assies, Marco Calderón y Ton Salman (ed.): *Ciudadanía, cultura política y reforma del Estado en América Latina*, Zamora/México: El Colegio de Michoacán /IFE (en prensa).
- Pérez Baltodano, Andrés, 1997, "Estado, ciudadanía y política social: una caracterización del desarrollo de las relaciones entre estado y sociedad en América Latina", en: Pérez Baltodano (ed.). *Globalización, ciudadanía y política social en América Latina: tensiones y contradicciones*. Caracas: Nueva Sociedad, pp. 31-66.
- Philip, George, 1999, "Institutions and democratic consolidation in Latin America", en: Julia Buxton y Nicola Phillips (ed.): *Developments in Latin American Political Economy; States, Markets and Actors*, Manchester/New York: Manchester University Press, pp. 33-48.
- Schelling, Vivian, 2000, "Reflections on the Experience of Modernity in Latin America" en Vivian Schelling (ed.): *Through the Kaleidoscope – The Experience of Modernity in Latin America*, London/New York: Verso Books, pp. 1-33.
- Schmitter, Philip, 1995, "Transitology: The science and Art of Democratization?". Joseph S. Tulchin *et al.* (comp.): *the Consolidation of Democracy in Latin America*, Boulder: Lynne Rienner Press, pp. 11-41.
- Schor, Miguel, 2001, *The Rule of Law and Democratic Consolidation in Latin America*, disponible en: <http://darkwing.uoregon.edu/~caguirre/schor.html>
- Seligson, Mitchell A., 2001, Costa Rican Exceptionalism: Why the *Ticos* are different. Roderick Ai Camp, (ed.): *Citizen Views of Democracy in Latin America*, Pittsburg: University of Pittsburgh Press, pp. 90-106.
- Sociaal en Cultureel Planbureau, 2002, *Sociaal en Cultureel Rapport 2002 – De kwaliteit van de quartaire sector*, Den Haag: SCP.
- Starn, Orin, 1992, "I dreamed of Foxes and Hawks'- Reflections on Peasant Protest, New Social Movements and the Rondas Campesinas of Northern Perú". Sonia Álvarez y Arturo Escobar (ed.), *The Making of Social Movements in Latin America; Identity, Strategy and Democracy*, Boulder: Westview Press, pp. 89-111.
- Twine, Fred, 1994, *Citizenship and Social Rights – The Interdependence of Self and Society*, London/ Thousand Oaks/New Delhi: Sage.
- Weyland, Kurt Gerhard, 1995, "Latin America's Four Political Models". *Journal of Democracy* 6(4): 125-139.

Aprendizajes y espacios de la ciudadanía

para un análisis cultural de las prácticas sociopolíticas

María Luz Morán*

Cabe observar que dentro del reciente auge de los estudios culturales existe un renovado interés por retomar el concepto de *cultura política* como herramienta útil para adentrarse en los fundamentos más profundos de la vinculación entre los individuos y la esfera de lo político. Las relecturas y las refutaciones de la versión clásica formulada por Almond y Verba (1970) han dado origen a una abundante literatura y a una no menos interesante investigación empírica. No obstante, sorprende el escaso interés por recuperar, o rebatir, una de las piezas centrales de dicha formulación: la socialización política entendida como el aprendizaje de aquellas disposiciones y contenidos básicos que conforman los “universos políticos” de las personas. Al mismo tiempo, no se puede dejar de observar que una buena parte de las escuelas hegemónicas de pensamiento -desde las teorías de la elección racional hasta el análisis institucional- si bien no encaran directamente su estudio, al operan dan por sentada aquella versión canónica de la socialización política que no es otra sino la clásica concepción parsoniana matizada por ciertas aportaciones posteriores (R. K. Merton 1987; A. Percheron 1993).

Aún así, si prestamos atención a otras muchas contribuciones surgidas en los márgenes

de las líneas predominantes de trabajo, observaremos que el problema de la socialización, o de los aprendizajes de la política, sigue considerado como un tema relevante, merecedor de reflexión y análisis. En concreto, dentro del “retorno del sujeto” aparece una revisión sistemática de dicho presupuesto, asociada al reconocimiento de estar asistiendo a un cambio de tal magnitud en las condiciones de la vida social que, muy probablemente, llega incluso a afectar a los fundamentos últimos del “cemento” de la sociedad.

Pero mi reflexión no pretende elaborar un diagnóstico de la naturaleza de la crisis de las Ciencias Sociales a comienzos del siglo XXI, ni tan siquiera aspira a pasar revista a las principales aportaciones sobre el binomio aprendizaje/innovación de aquellos valores y normas comunes que, en definitiva, ayudan a interpretar los comportamientos sociales (Bourdieu 1991, 1995; Moscovici 2000; Berger y Luckmann 1994; Dubar 1995). Mi intención en las próximas páginas, consiste en exponer una concepción de la socialización política claramente “especializada”; o, por decirlo de un modo más claro, enraizada en los espacios en los que tienen lugar las prácticas sociales. Posteriormente, en la segunda parte del texto, trataré de reconstruir el marco espacial sobre el que descansó el relato del modelo clásico de la ciudadanía. Con ello espero mostrar cómo se abren interesantes y fecundas líneas de trabajo para seguir apostando por un análisis cultural de las prácticas sociales, en socieda-

* Universidad Complutense de Madrid.

des como las nuestras, afectadas, entre otros muchos cambios dramáticos, por radicales transformaciones en los espacios de las vidas cotidianas.

A propósito de la noción de aprendizaje

Frente al planteamiento de un individuo hipersocializado en el que desembocaba el postulado de la unidad del mundo social -el presupuesto de la Antropología Cultural clásica y de la escuela funcionalista- entiendo que la interpretación del mundo contemporáneo requiere incorporar la confrontación de lógicas de acción heterogéneas. Se trata de una tesis que ha sido formulada de diversos modos por las teorías de la acción y de la incertidumbre, que coinciden en afirmar que ni la socialización ni tampoco la acción social pueden reducirse a una dimensión única. Es en este punto donde el marco de análisis propuesto por F. Dubet (1994) me resulta extremadamente pertinente.

Dubet parte de la constatación del “estallido de la Sociología [clásica]” para defender la utilidad de operar con el concepto de “experiencia social”; una noción con la que designa las conductas individuales o colectivas dominadas por la heterogeneidad de sus principios constitutivos y por la actividad de individuos que deben construir el sentido de sus prácticas en el seno de dicha heterogeneidad. Entre otras consecuencias, el reconocimiento de este estado de cosas vuelve a conferir actualidad a la idea de Simmel y Weber de la pérdida de unidad del mundo como criterio esencial de la modernidad.

Este punto de partida se concreta en tres ideas fundamentales. La primera afirma la he-



Gonzalo Vargas

terogeneidad de los principios que organizan las conductas de los actores. De ello se deriva que la identidad del sujeto ya no sea un “ser”, algo ya dado, sino un trabajo, la mayor parte de las veces arduo y laborioso. Los individuos deben esforzarse por construir la unidad a partir de los diferentes elementos de la vida social y de su multiplicidad de orientaciones. Por consiguiente, los

roles y las posiciones sociales ya no bastan para definir los elementos estables de la acción. En segundo lugar, la propia experiencia de la heterogeneidad de las lógicas de acción que se cruzan en la experiencia social, lo que explica que los individuos establezcan una distancia con respecto al sistema, lo que no significa ausencia de socialización. De este modo, se reconoce que las personas no se adhieren plenamente a roles y a valores, sino que establecen una “separación crítica y reflexiva” frente a éstos. Finalmente, dentro de este mundo la construcción de la experiencia colectiva reemplaza la noción de alienación en el seno del análisis sociológico. Ya no ha lugar para seguir operando con uno de los pilares de la tradición sociológica, desde Durkheim, pasando por Parsons y Elias para finalizar en la escuela funcionalista: considerar la acción social como la realización de normas y valores que se institucionalizan en roles interiorizados por los individuos a lo largo del proceso de socialización¹.

La complejidad y fecundidad de la propuesta de este autor desborda el alcance de estas páginas. Por ello, retengo únicamente otras dos ideas suyas sobre las que desarrollaré mi argumento. Ante todo, en contraposi-

ción con aquellas corrientes sociológicas que afirman poder reconstruir el conjunto social a partir de una única lógica de acción, desde la opinión de los actores ya no existe un “punto de vista único”. Por el contrario, en sus prácticas sociales, éstos adoptan todos los puntos de vista a la vez; es decir, combinan de modo continuo las distintas lógicas según las situaciones a las que se enfrentan. Finalmente, deseo destacar lo que Dubet (junto a otros sociólogos de la acción) denomina el “trabajo del actor”: la relevancia de sus prácticas sociales. Hay que partir de un “sujeto actuante” que construye su(s) identidad(es) social(es) en un proceso de actividad incesante, y siempre conflictivo, poniendo en relación principios heterogéneos.

Por consiguiente, la principal tarea de una sociología de los aprendizajes sociales consiste en dar cuenta de estas actividades. Se trata de sustituir el énfasis en los procesos psicosociales de integración de valores y normas en nuestra propia personalidad, por una sociología de las prácticas sociales. La socialización ha de entenderse como un proceso biográfico de incorporación de las competencias sociales generadas en los diferentes ámbitos de la vida social en los que los individuos desarrollan sus vidas cotidianas. Ello obliga a repensar la diversidad de los lugares y de las instituciones en los que tienen lugar dichas prácticas, admitiendo tanto el cambio evidente en la naturaleza y funcionamiento de estos “ámbitos de aprendizaje”, como el posible “estallido” de algunos de ellos.

Mi propuesta adopta simultáneamente, un enfoque dinámico que considera que la secuencia de los aprendizajes (y de los olvidos) se dilata a lo largo de toda la existencia de las personas. Asimismo, los aprendizajes son, por naturaleza, procesos conflictivos que reflejan

las tensiones provocadas por las distintas lógicas de acción que estructuran las experiencias sociales de los actores; una afirmación que, sin embargo, no debe ser tomada como sinónimo de una concepción dramática de la existencia. Finalmente, el dinamismo se refleja también en la multiplicidad de viejos y nuevos espacios en donde estos mismos se producen, se reproducen y se transforman.

Con base en todo lo anterior, me interesa insistir en la relevancia que adquieren los momentos y lugares de las prácticas sociales. La reflexión debe detenerse, inicialmente, en los mecanismos que emplean los actores para enmarcar la realidad, considerándolos como promotores de marcos alternativos para su interpretación. Estos procesos de “atribución de significados” son el resultado agregado de experiencias personales, memorias colectivas y prácticas sociales “objetivables”². Hay que reconocer la capacidad de los actores sociales para apropiarse y transformar, por medio de sus prácticas, los componentes de sus culturas políticas -entendidas aquí como el resultado último de sus aprendizajes colectivos.

Los actores confieren sentido al mundo leyéndolo, narrándolo y transformándolo en un trabajo que se asemeja a una labor de *bricolaje* que tiene lugar en múltiples espacios de interacción y comunicación social. Los aprendizajes son, pues, esencialmente activos e innovadores, nunca una mera recepción y asimilación pasiva de valores y normas de conducta. Pero, además, toda cultura política se encuentra enraizada en una ecología política en la medida en que está anclada en los diversos espacios de sociabilidad. Por consiguiente, las prácticas que tienen lugar en estos espacios -más aún, que los definen y les otorgan realidad - se convierten en auténticos “locus” de aprendizajes, de atribución de significados y de elaboración de estrategias y repertorios de acción social (Cefaï 2001).

1 “La sociología de la experiencia aspira a definir la experiencia como una combinación de lógicas de acción, lógicas que vinculan al actor con cada una de las dimensiones de un sistema. El actor está obligado a articular lógicas de acción diferentes, y es la dinámica engendrada por esta actividad la que constituye la subjetividad del actor y su reflexividad.” (Dubet 1994:105; traducción de la autora).

2 En realidad, no hago sino recurrir a la idea de “praxis cultural”, tal y como la emplea el denominado *frame analysis* en el estudio de la acción colectiva. Para una presentación más detallada de sus postulados véase Eyerman (1998).

Un paso adelante: los lugares y espacios de los aprendizajes sociopolíticos

En suma, la hipótesis que deseo defender afirma que aquel complejo fenómeno que acostumbramos a llamar ‘socialización política’ consiste, en lo esencial, en un conjunto de aprendizajes y olvidos que tienen lugar en aquellos espacios que contienen las prácticas sociales y que se suceden a lo largo de toda la existencia. Estos espacios sociales poseen, además de muchas otras características, la de ser lugares físicos (geográficos/geométricos) por lo que es pertinente suscitar como problema de reflexión las relaciones mutuas entre los espacios que posibilitan prácticas (y que a su vez son transformados por éstas) y las prácticas sociales vinculadas/ancladas en los espacios (que, a su vez, también inciden sobre las primeras). El binomio espacios/aprendizajes se presenta así, como eje de una nueva mirada de los procesos de socialización política.

Pero aún hay más. Desde hace tiempo asistimos simultáneamente, a la profunda transformación de estos espacios (físicos/sociales) como consecuencia de los profundísimos cambios que afectan a las sociedades contemporáneas. Pese a la inexistencia de un acuerdo sobre la naturaleza y las consecuencias últimas de dichas transformaciones, desde las Ciencias Sociales se admite que estos movimientos están provocando rupturas, o al menos alteraciones considerables, de dos de las dimensiones tradicionales del análisis sociopolítico clásico: el tiempo y el espacio; aquellas que daban sentido a la concepción de sociedad, y más concretamente de integración social, sobre la que han descansado hasta hace poco nuestros análisis.

Podrían citarse ejemplos de trabajos recientes que reconocen el impacto de estas transformaciones de los espacios de la vida social en los conflictos que aquejan a las sociedades contemporáneas³. Con diferentes énfasis e intenciones, estas contribuciones señalan la nueva tensión en la que está inserta la vida social. Por un lado, frente a la aceleración del

tiempo y a la omnipresencia del espacio, presenciemos una mayor visibilidad y un aumento del vigor de los viejos y nuevos localismos. Un redescubrimiento del valor de las “pequeñas dimensiones” que se traduce en la recuperación de la comunidad como espacio natural de la vida social y en el resurgir de formas de solidaridad primaria. Fenómenos tales como la importancia que han adquirido los movimientos e ideologías de la etnicidad, el *close to home* o los nuevos nacionalismos parecen responder a esta lógica. Por otro lado, se produce, simultáneamente, un movimiento en sentido contrario, hacia la globalización, que provoca la aparición de conflictos y movimientos sociales a escala planetaria, en donde los límites tradicionales de los espacios de la vida social se diluyen, y en donde el espacio geográfico del análisis social tradicional se torna problemático y parece ser sustituido por la idea de flujos. Recientemente, se ha popularizado el término “glocalización” para dar cuenta de esta doble tensión (Held et al. 1999).

Aunque los diagnósticos acerca de las consecuencias a mediano y largo plazos de todos estos procesos todavía están en pañales, sí estamos en condiciones de reconocer que esta nueva situación provoca la transformación, o incluso la disolución, de algunos de los espacios tradicionales de la vida social y política. Pero, al mismo tiempo, asistimos al nacimiento de potencialidades inéditas generadas por los nuevos espacios globalizados o virtuales. A pesar de la magnitud y la visibilidad de estos cambios, sorprende que las Ciencias Sociales, a lo largo de las últimas décadas, hubieran prestado mucha mayor atención a la dimensión temporal que a la espacial.

En el proceso histórico de “compartimentación” de las Ciencias Sociales el análisis espacial fue confinado casi exclusivamente a las

3 Entre otros muchos, pueden citarse los trabajos sobre la “sociedad red” de M. Castells (1981 1995, 2001), la concepción de los “no lugares” de M. Augé (1993) o los últimos trabajos de D. Harvey (1998) quien sigue profundizando en el tema de las relaciones entre espacio y desigualdad social.



Asistimos al nacimiento de potencialidades inéditas generadas por los nuevos espacios globalizados o virtuales. Pese a la magnitud y visibilidad de estos cambios, sorprende que las Ciencias Sociales, a lo largo de las últimas décadas, hubieran prestado mucha mayor atención a la dimensión temporal que a la espacial

disciplinas geográficas, y se lo introdujo en el análisis social a través de la Ecología y el Urbanismo. Mientras se reconoce que el lenguaje y la propia vida política son esencialmente espaciales, es patente el escaso peso de la investigación sociopolítica sobre el tema, más allá de la geografía política o de ciertas especialidades de las Relaciones Internacionales. El espacio adquiere así, en el vocabulario de la sociología política y más concretamente en los estudios de cultura política, connotaciones casi siempre metafóricas, que generan constantes referencias a esferas o espacios de la vida sociopolítica pero que no suelen descender, más que en contadas ocasiones, al análisis específico del modo en que se interrelacionan los espacios físicos y las prácticas sociales de aquellos que los habitan.

No obstante, es obligado reconocer que se ha producido un cierto interés por el análisis del espacio en la sociología política. Un movimiento paralelo a la recuperación de la dimensión diacrónica, aunque con mayores dificultades, puesto que está lastrado por la prevención que suscita un posible retorno de los viejos determinismos físicos de algunos de los fundadores de la teoría sociológica. Para empezar, a partir de la obra de S. Rokkan (1973, 1983) diferentes investigaciones de sociología histórica insisten en la conveniencia de trabajar con nuevos marcos espaciales en el estudio de los procesos históricos de desarrollo sociopolítico (Wallerstein 1991a, 1991b, 1998).

En muchas aportaciones de los teóricos de la acción colectiva, y particularmente en sus investigaciones sobre los “viejos y nuevos” movimientos sociales, también subyacen los

marcos espaciales como elementos significativos de las “estructuras de oportunidades políticas” (Tilly 1978; Tarrow 1997). Por su parte, algunos estudios sobre la construcción histórica de la ciudadanía confieren un papel destacado a los espacios en los que se generan las prácticas ciudadanas (Thompson 1977; Somers 1993, 1999). Finalmente, mencionaré que una parte muy importante de la discusión actual acerca de la naturaleza y profundización de la democracia en las sociedades contemporáneas, remite directamente al problema de sus escalas, de los marcos espaciales de los procesos de toma de decisiones y de la implicación ciudadana.

Admitámoslo: en la investigación sociopolítica, el espacio aparece por todos lados; pero casi nunca se le presta una atención directa. Además, a pesar de la disparidad y riqueza de sus enfoques de análisis y de sus objetos de estudio, ninguno de los ejemplos que acabo de mencionar aborda de modo directo la cuestión de los “aprendizajes” de lo político. Pero todos ellos afirman, explícita o implícitamente, una estrecha vinculación entre las prácticas sociales y las culturas políticas particulares que permiten atribuir significados a la realidad y, por consiguiente, intervienen en la acción social.

¿Cómo introducir, entonces, una concepción del espacio cuyo eje sea la experiencia social? La propuesta de M. De Certeau (1990) parece responder a este requisito. Para él “espacio es un lugar practicado” por lo que una calle definida geoméricamente por un urbanista se transforma en espacio por la acción de los “caminantes”. Además, existen profundas relaciones entre el lugar físico y el espacio

habitado⁴. En su argumentación, son las narraciones que efectúan los individuos, los caminantes, las que transforman incesantemente los lugares en espacios; y, a la inversa, son también éstos últimos los que organizan los juegos de relaciones cambiantes entre ambos. Pero, más allá de la centralidad que atribuye el antropólogo francés al lenguaje como herramienta de construcción de los mundos vividos, puede admitirse que otras prácticas o relaciones sociales, no necesariamente verbales, pueden establecer también estos puentes. En la misma línea, debe recuperarse la propuesta de M. Augé (1993) quien denomina “lugar antropológico” al espacio habitado y lo define como una construcción concreta y simbólica de éste, que constituye un principio de sentido para quienes lo habitan y, a la vez, es también un principio de inteligibilidad para quien lo observa. Para Augé estos lugares poseen tres rasgos comunes: se consideran (y son considerados) como identificatorios, relacionales e históricos. Por lo tanto, son espacios sociales plenos porque contienen en sí mismos, todo un conjunto de posibilidades, prescripciones y prohibiciones⁵.

A estas alturas parece ya inevitable plantear de una vez por todas, la pregunta que se insinúa en toda mi exposición: ¿Cómo articular ambas dimensiones -los aprendizajes y los espacios habitados- con una mirada que privilegia las prácticas sociales y que, al mismo tiempo, es deudora del nuevo análisis cultural de la política desarrollado desde los años 80?⁶

4 “Es un lugar el orden (sea el que fuere) según el cual ciertos elementos están distribuidos en relaciones de coexistencia [...] Un lugar es, pues, una configuración instantánea de posiciones. Implica una indicación de estabilidad.” (M. de Certeau 1990:173; traducción de la autora).

“Existe un espacio desde el momento en que se toman en consideración los vectores de dirección, las cantidades de velocidad y la variable del tiempo. El espacio es un cruce de móviles. En cierto modo está animado por el conjunto de movimientos que se despliegan en su seno.” (M. de Certeau, 1990:173; traducción de la autora).

5 “[el lugar antropológico] No es sino la idea, parcialmente materializada, que se hacen aquellos que lo habitan de sus relaciones con el territorio, con sus semejantes y con los otros.” (M. Augé Ibid.: 61).

El telón de fondo del discurso sobre el desarrollo histórico de la ciudadanía

Para avanzar en esta dirección, a lo largo de las próximas páginas, según la recomendación de M. Somers (1993, 1999) de llevar a cabo una sociología histórica de la formación de conceptos, plantearé el siguiente ejercicio: considerar los marcos espaciales implícitos en la concepción clásica de la ciudadanía y en la construcción de las culturas políticas asociadas a ésta.

El modelo del desarrollo urbano de la modernidad europea se encuentra en el trasfondo de la explicación y legitimación de toda la argumentación clásica sobre la construcción y el desarrollo de la ciudadanía y, al tiempo, sobre las características esenciales de la cultura política asociada a ella. Más aún, podría afirmarse que ésta opera con unos “mapas” excesivamente simplificados de la multiplicidad y variedad de las formas de organización espacial que generaron, incluso dentro del ámbito europeo, la Revolución Industrial y el “advenimiento de la sociedad moderna”.

Existe una vinculación estrecha entre los discursos acerca del “proceso de civilización”, la construcción del mundo urbano y el desarrollo de la ciudadanía. La ciudad se convierte, así, en el símbolo de la inclusión y de la exclusión -cuya representación física son las murallas que la ciñen y las puertas que permiten el paso a su interior- y en el lugar por excelencia de la vida social moderna. Muy pronto se advierte que la ciudad se estructura de acuerdo con los patrones de las grandes líneas de la desigualdad social; pero, paralelamente, se difunde una idea central en todo el pensamiento político y social contemporáneo: la ciudad es el lugar por excelencia para habitar, aquel que hace posible el pleno desarrollo de las capacidades intelectuales y morales de los seres humanos. En cierto modo, la

6 He tratado de analizar los principales rasgos de este “retorno de la cultura a un primer plano” en el análisis sociopolítico en M. L. Morán (1997).

verdadera esencia de la ciudad es la de constituir un “contenedor perfecto” para las “prácticas de habitar” de la ciudadanía. De aquí que una buena parte del impulso de los arquitectos o urbanistas asociados con las vanguardias y con diferentes corrientes reformadoras en las primeras décadas del siglo XX, repose sobre la convicción de que una intervención urbana transformadora constituye uno de los pilares de una política de superación de las desigualdades de la sociedad capitalista o incluso un punto de partida para su liquidación.

En consecuencia, los discursos sobre la socialización, la cultura política y la ciudadanía que se encuentran en el centro de las formulaciones de la Sociología clásica, operan sobre una idealización de esta realidad urbana de finales del siglo XIX y comienzos del XX. El telón de fondo sobre el que cobran sentido sus argumentaciones da por sentado un proceso de diferenciación y aumento de la complejidad urbana que no sólo constituye un reflejo de la estratificación social sino que, al mismo tiempo, provoca la separación entre el lugar de residencia y el del trabajo, y la aparición del barrio como lugar destacado de socialización y de prácticas sociales. Junto a la exigencia de los desplazamientos por la ciudad -de la residencia al trabajo- que posibilita el transporte público, la ciudad burguesa se caracteriza por la figura del paseante. Aquel *flâneur* que Baudelaire presentó como esencia de la modernidad y que fue después descrito magistralmente por W. Benjamin (1989a, 1989b). Un paseante que encuentra su espacio natural en las grandes avenidas de París o Viena pero, sobre todo, en los “pasajes”, aquellos pasadizos acristalados que fueron concentrando el pequeño comercio y que, para algunos, constituyen el antecedente de los grandes almacenes⁷.



Paralelamente, el barrio se convierte en el espacio “natural” de la vida social, forjador de solidaridades grupales y de clase. La reproducción de esta distribución espacial en las esferas y prácticas de ocio refuerza la creación de culturas locales fuer-

temente espacializadas. Ello explica, por ejemplo, que el análisis de Habermas (1974, 1992, 1994) del surgimiento de la opinión pública burguesa, y de su íntima relación con la constitución de la esfera pública, sea inseparable de la toma en consideración del espacio burgués y, en concreto, del papel de los cafés centroeuropeos o de los clubes en Inglaterra como los lugares por excelencia de este proceso. Por otro lado, el desarrollo de la conciencia de clase del proletariado urbano europeo no puede entenderse sin vincularlo con la vida en las tabernas o en los *pubs*, en las iglesias o en las plazas de los barrios⁸. Sobre este esquema espacial cobran realidad las dos grandes dicotomías con las que opera la Filosofía Política, al menos desde mediados del siglo XIX: público-/privado y Estado/sociedad civil⁹.

Todos estos espacios -cafés, plazas, tabernas, fábricas, despachos- operan como lugares -físicos, antropológicos, habitados- de sociabilidad sobre los que se moldean las instituciones y organizaciones de la vida política y

7 Véanse W. Benjamin (1989a y 1989b) y el análisis que realiza de este tema P. Bourdieu en “Las reglas del arte” (1995) a partir del estudio de la obra de Flaubert.

8 Este es uno de los temas centrales en la obra de E. P. Thompson (1977).

9 Omíto conscientemente dos temas que completarían mi argumento. En primer lugar, el análisis de los elementos de ruptura y continuidad de las formas urbanas de la modernidad occidental frente a las ciudades medievales y modernas. En segundo lugar, habría que incorporar no sólo las diferencias sino también las aportaciones del mundo rural a la modernidad industrial y a la organización de los espacios de su vida cotidiana.

social del mundo contemporáneo. El ejemplo de la evolución de los partidos y sindicatos de masas a lo largo del siglo XIX y, al menos, durante la primera mitad del siglo XX es bien significativo a este respecto. Unos y otros adoptan estructuras organizativas y repertorios de acción que se moldean de acuerdo con los espacios de las vidas cotidianas de los habitantes de las ciudades modernas. De hecho, su modo de operar responde a una lógica de colonización y politización de dichos espacios. Las “casas del pueblo” o su versión burguesa, los “clubes”, constituyen un claro ejemplo de la politización de los espacios tradicionales de recreo. Al mismo tiempo, la mayor parte de los partidos políticos adoptan rápidamente estructuras organizativas basadas en la residencia -las agrupaciones de barrio- aunque en bastantes casos las combinan con otras definidas por el lugar de trabajo. Paralelamente, esta misma politización de los espacios es visible en la difusión y transformación de los repertorios de la protesta colectiva durante el mismo período -huelgas, manifestaciones, barricadas- y también en las modalidades de su represión por parte de las maquinarias estatales (Berman 1988; Tilly 1978).

Además, entiendo que en dicho modelo clásico de la ciudadanía existen tres espacios fundamentales que van a operar como principales “agentes de socialización”. En primer lugar, tenemos la propia ciudad, y de manera destacada las capitales de los Estados-nación. Los centros urbanos son “lugares de la memoria” por excelencia, por lo que constituyen piezas clave para la formación de las identidades colectivas y, en particular, para las identidades nacionales¹⁰. Sus “centros históricos” congregan los edificios en los que se encarna la esfera pública; aquellos que simbolizan la grandeza y fuerza del poder político y la unidad nacional: palacios reales, cámaras de representación, juzgados, ministerios... Todos ellos además, están pensados para la celebra-

ción de las ceremonias públicas a través de las cuales se actualizan y refuerzan los símbolos y mitos asociados a esta pertenencia común. Una arquitectura civil que va inscribiendo en la piedra, el cemento o el cristal los derechos y deberes inherentes al estatuto de la pertenencia, de la ciudadanía (Edelman 1995).

Efectivamente, a partir de finales del siglo XIX la ciudad se entiende cada vez más como el “contenedor” de una historia común. Ello explica el interés por la conservación de los centros históricos, la obsesión por multiplicar los museos o la auténtica manía de la estatuaría que ha abarrotado desde entonces, las principales plazas y calles con un nuevo “santoral” laico compuesto por un conjunto de ejemplarizantes “próceres de la patria”. En este mismo sentido, tampoco hay que olvidar el papel de los nombres que se asignan a las calles y monumentos cuyos cambios dan fe de los vaivenes de cada historia nacional.

De este modo, se concreta la función pedagógica de la ciudad: una ciudad-museo en la que el aprendizaje de algunos de los elementos esenciales del “nosotros común” tiene lugar a través de la contemplación y el paseo. El caminante, a lo largo de su recorrido, no sólo asiste a una representación cotidiana de la identidad colectiva y de la historia común, no sólo admira la grandeza y solidez del poder político, sino que el propio movimiento de su cuerpo entraña una auténtica práctica de estos espacios. Esta dimensión de la ciudad como encarnación de la nación es especialmente visible en aquellos casos en los que se idearon y construyeron *ex novo* capitales de estados, como Washington o Brasilia. Libres del peso de las complejas evoluciones históricas de los centros urbanos más antiguos y sin tener que soportar el lastre de lugares inconvenientes de la memoria, fueron concebidas simplemente como centros de poder. De aquí que en ellas la dimensión simbólica, la glorificación de una nueva religión civil, predominen sobre todas las demás facetas urbanas.

No obstante, contra esta imposición del espacio urbano como encarnación del poder tiene lugar su reapropiación por parte de los

¹⁰ La obra de referencia clásica en este punto sigue siendo la de M. Halbwachs (1968, 1976). Puede consultarse también el trabajo dirigido por P. Nora (1997) sobre la Francia contemporánea.



Existe una vinculación estrecha entre los discursos acerca del "proceso de civilización, la construcción del mundo urbano y el desarrollo de la ciudadanía..."
En un modelo clásico existen tres espacios fundamentales para el aprendizaje de ciudadanía: la propia ciudad, la escuela y la familia

ciudadanos. Sus desplazamientos, sus paseos, todos los modos que tienen de habitar estos espacios pueden interpretarse como formas de resistencia que generan notables mutaciones de sus significados y, por lo tanto, abren la posibilidad a nuevas prácticas colectivas. La interpretación del "texto urbano" se convierte así, en una labor muy compleja puesto que se trata de un manuscrito sometido a la transformación incesante que provocan las "lecturas cotidianas" de aquellos que lo habitan¹¹.

Al mismo tiempo, en torno al centro histórico y monumental de la ciudad tradicional crecen los barrios, auténticos ejes de la vida social. Junto a los edificios públicos de segundo orden -que siguen afirmando la presencia de la organización del Estado en las periferias- juntas municipales de distrito, comisarías de Policía, escuelas, oficinas de correos o juzgados de primera instancia- son los mercados, las plazas y los parques los centros por excelencia de la vida cotidiana de los ciudadanos. Así pues, los barrios son un lugar relevante para la construcción y la práctica de "subculturas políticas" ciudadanas.

El segundo espacio clave para los aprendizajes ciudadanos es la escuela¹². Más concretamente, el modelo laico de escuela pública que se implantó con ritmos e historias particulares, en Occidente desde la segunda mitad del siglo XIX, mediante la difusión de la educación primaria universal. No se debe olvidar que una de las grandes innovaciones de este modelo fue reunir en un mismo espacio -el

aula- a niños y jóvenes de la misma edad, sometidos a un programa educativo común. Un programa definido y controlado por el Estado e impartido por un cuerpo de funcionarios estatales. De entre todas las vivas discusiones pedagógicas que se originaron a partir de entonces, me interesa destacar dos ideas recurrentes:

En primer lugar, se entiende que el sistema educativo está destinado, primordialmente, a la formación de ciudadanos. Por ello, se pone el énfasis en la transmisión de aquellos valores que se consideran básicos en la formación de la personalidad de los "buenos ciudadanos" y de aquellos contenidos que vertebran el nosotros común (la lengua oficial del Estado-nación, la historia patria, la literatura "nacional"). El peso de la construcción de ciudadanía es mucho mayor que la preparación para el mercado de trabajo, aunque muy pronto se produce la división entre una educación de orientación humanista y otra de tipo técnico que se corresponden a *grosso modo* con la procedencia social de los alumnos.

En segundo lugar, todo el discurso educativo reposa sobre la igualdad de los alumnos dentro del aula. En ella, la única diferencia le-

11 N. García Canclini (1997) estudia el modo en que se producen estos cambios de significado y la consiguiente reapropiación de los espacios en Ciudad de México.

12 En un trabajo sobre la construcción y la práctica de la ciudadanía en la escuela (T. Gordon 2000) se espacializa de forma explícita el objeto de estudio por medio de una sugerente metáfora: el baile. Así pues, se distinguen tres escuelas: 1) la oficial, que es la que enseña los pasos correctos de la danza; 2) la informal, que es aquella en la que se practican pasos improvisados; y 3) la física, (el edificio) que es la sala de baile. Las complejas relaciones entre estas tres escuelas, así como sus conflictos y la forma de resolverlos, marcan la vía para comprender el baile final: los aprendizajes y prácticas ciudadanas en el ámbito escolar.

gítima se establece con base en el mérito y se concreta en un sistema de calificaciones homogéneo y universal. Las relaciones de los profesores con los alumnos están marcadas por los principios de igualdad, imparcialidad y justicia. Por su parte, las relaciones de los alumnos con el profesor responden al reconocimiento de una autoridad que le confiere no sólo la posesión de competencias y conocimientos básicos para la plena realización de la ciudadanía, sino también el hecho de que éste encarna la legitimidad de la organización estatal de la educación¹³.

De este modo, la escuela, y concretamente el aula, emergen también como espacios centrales en la construcción de la ciudadanía, y el estudiante es visto como un “ciudadano en formación”. Posiblemente, además, la clase sea aquel espacio en el que el niño y el joven reconocen y ejercitan por primera vez sus derechos más allá de la “ciudadanía por delegación”, de la que hablan los estudiosos¹⁴. Por otro lado, más allá de la propia realidad del aula, la escuela tradicional está claramente “espacializada”. Dentro de las ciudades, las escuelas primarias se ubican de acuerdo con la distribución de la población en los barrios y reclutan a sus alumnos entre sus residentes. En el modelo de desarrollo urbano tradicional europeo esta lógica garantizaba un cierto interclasicismo dentro de las aulas que iba desapareciendo a medida que se ascendía en los distintos niveles educativos. Pero esta situación se rompe definitivamente con la progresiva territorialización de la desigualdad social.

En cualquier caso, el conjunto “barrio + escuela” aparece como el contenedor por excelencia de los aprendizajes primarios de la vida política y social. A ello contribuye el hecho

de que sean los espacios en donde se forman y configuran los “grupos de pares”, las primeras amistades que, después, a lo largo de la vida, se irán complementando con las relaciones que se establecen en el mundo del trabajo y en otras esferas de la vida social.

Por último, el tercer espacio de aprendizaje ciudadano es la familia. Tanto los viejos como los nuevos trabajos sobre la/s socialización/es y la/s cultura/s política/s siguen destacando la centralidad del grupo familiar en los aprendizajes de valores y normas básicas de la conducta social, y también su influencia en algunas predisposiciones y actitudes esenciales con respecto a lo político. No quiero, por lo tanto, ni insistir ni tampoco introducir matización alguna sobre este tema. Sólo me interesa, como hasta ahora, tratar de presentar a la familia como espacio de aprendizaje, lo que me parece bastante más complejo que en los dos casos anteriores.

En el modelo de la modernidad, la familia se reduce hasta alcanzar las dimensiones y composición de lo que entendemos como “familia nuclear”¹⁵. Marcada por una división de funciones según el sexo y la edad de sus componentes y por una clara estructura de autoridad, ésta va a definir su propio territorio dentro de la vivienda o domicilio familiar. El domicilio -la casa unifamiliar en los suburbios, el piso burgués, la buhardilla o la vivienda obrera- se convierte progresivamente en el espacio de la privacidad, una vez producida la disociación entre el lugar de trabajo y el de la “vida privada”. La evolución, y progresiva uniformidad del diseño de las viviendas marca, a su vez, una nueva división entre los espacios íntimos o privados (el cuarto de baño, los dormitorios) y los espacios comunes para la vida familiar “pública” (el salón, el comedor o la cocina)¹⁶ en un esquema bastante rígido que

13 No deseo entrar en la crítica al funcionamiento real del modelo, en la exclusión de las mujeres ni tampoco en los motivos de su crisis actual; temas sobre los que existe una abundante literatura.

14 La “ciudadanía por delegación” (*citizenship by proxy*) es aquella en la que el disfrute de los derechos está supeditado a la existencia de relaciones de parentesco con un ciudadano “pleno”. Por ello los niños y jóvenes son los ejemplos por excelencia de este tipo de ciudadanía dependiente e incompleta.

15 Tampoco voy a entrar en este caso a considerar las críticas que los sociólogos e historiadores de la familia han hecho a la supuesta universalidad del modelo de familia nuclear.

16 Véase el análisis que realiza P. Bourdieu en “La distinción” (1991) sobre la organización del espacio y el “contenido” de las viviendas en Francia.

únicamente la enorme carestía del suelo urbano, y la consiguiente reducción de la superficie de las viviendas, han conseguido alterar.

La vivienda familiar es también el escenario de los afectos y de las solidaridades “primarias”. La puerta de la casa (con cerrojos) marca una separación neta en la vida privada (en la que se es siempre madre, padre, hija, esposo...) y la vida pública en la que nuestras identidades son mucho más complejas, plurales, conflictivas y, sobre todo, están sometidas a un intenso cambio. El ámbito familiar es así, el lugar de desarrollo de la dimensión del sujeto, la cara oculta indispensable para la formación de la “personalidad ciudadana”.

A pesar de la multitud de transformaciones que ha sufrido este modelo, la “ciudad integrada” ha seguido operando -y sigue haciéndolo aún hoy en día- como trasfondo de los estudios sobre la ciudadanía. Es el escenario que se corresponde con los discursos sobre el “deber ser” ciudadano y al que se adecuan las instituciones y organizaciones que vertebran las prácticas ciudadanas. Sólo sobre este telón de fondo adquiere sentido la existencia de una esfera pública ciudadana porque sólo en su seno cabe pensar en que ésta pueda realizar su promesa de unidad de la existencia social.

Aunque se trate de una ciudad marcada por las fronteras de la desigualdad social, se presenta -y es experimentada por sus habitantes- como una articulación de lugares vividos en los que están anclados los procesos de aprendizaje que conforman las identidades ciudadanas (y su incesante mutación). Lo verdaderamente relevante es que todos estos procesos dependen del contacto físico que genera cada una de las prácticas sociales que “corresponden” a cada uno de estos espacios: el trabajo en la línea de montaje, la compra en el mercado, la cerveza en el bar, el baile en la plaza, el paseo en el parque, la lección en el aula o el mitin en la plaza de toros.

Numerosos estudios indican la enorme capacidad de adaptación y resistencia de las formas de vida tradicionales en los procesos de transformación del tejido urbano. Pero otros muchos insisten en los efectos más perversos

de la mutación o incluso destrucción de los espacios físicos de la vida en común, tanto en las trayectorias vitales de los individuos como también en la adquisición de las cualidades básicas de la ciudadanía y en las posibilidades reales para su ejercicio efectivo¹⁷. Por el momento, sólo podemos admitir nuestro desconocimiento de las consecuencias a las que pueden dar lugar estos movimientos en direcciones aparentemente opuestas y aventurar que, muy probablemente, nos enfrentamos ya a nuevas formas de sincretismo entre viejas y nuevas prácticas ciudadanas.

Epílogo a modo de programa de trabajo: nuevos espacios y nuevos aprendizajes

Espero que toda la exposición anterior demuestre la necesidad de establecer un diagnóstico de la situación actual, que evite tentaciones milenaristas, que dé cuenta del modo en que se articulan las experiencias de ciudadanía con los viejos y nuevos espacios de la vida social y de la esfera pública. Para comenzar, no está de más reconocer que el viejo discurso de la ciudadanía, tal y como fue defendido por la teoría política y la sociología clásicas nunca cumplió su promesa. La unidad del mundo social, la nítida división entre las esferas pública y privada o la dicotomía Estado/sociedad civil, sobre la que reposaban una buena parte de sus fundamentos, han sido sometidas hace ya tiempo a una crítica sistemática. Paralelamente, la investigación aplicada en las Ciencias Sociales ha mostrado las fisuras y limitaciones del modelo de la “modernidad triunfante” y su incapacidad para dar cuenta de las desviaciones y disparidades que se ocultan bajo su aparente homogeneidad.

Sin embargo, parece obligado reconocer que la promesa y la propia realidad del discurso de la ciudadanía se ven mucho más com-

17 Así lo hacen, entre otros R. Sennet (1998) o M. Castells (1995) quien señala el doble movimiento de globalización virtual y de esfuerzo por recuperar y vivificar la vida de barrio en muchas ciudades.

prometidas, hoy en día, por una serie de transformaciones que afectan (entre otras muchas cosas) a los espacios de las prácticas sociales, y más en concreto de las prácticas ciudadanas. Por resumirlo de una forma muy rápida –y seguramente insuficiente- estamos asistiendo a un “desmembramiento” de los tradicionales espacios cuyo entramado constituía la esfera pública. Pero, por otro lado, ante nuestros ojos –probablemente sin que seamos plenamente conscientes de ello- se van configurando otros nuevos espacios –no necesariamente “físicos”- en donde inevitablemente tienen que recomponerse las relaciones sociales y políticas. Nuevos espacios para las nuevas prácticas ciudadanas.

Consideremos muy brevemente, tres transformaciones: ante todo, como efecto del desarrollo de las nuevas tecnologías los expertos afirman que está teniendo lugar una rápida difusión de una economía global, una de cuyas características esenciales es su menor dependencia del espacio. Unas economías “desterritorializadas” que están haciendo sentir su impacto en los sectores industriales y de servicios más tradicionales y que, para algunos, inauguran una nueva era del capitalismo global. Simultáneamente, como consecuencia de estos procesos, que tienen también un indudable impacto en las estructuras y pautas de desigualdad social, se generan transformaciones muy importantes en las vidas cotidianas de los ciudadanos que afectan al trabajo, la residencia, la educación o, incluso, a las formas de ocio. Ante esta situación algunos autores aprecian un aumento muy notable de la disolución de la vida urbana tradicional como consecuencia de la ruptura de los viejos tiempos y relaciones espaciales. Por último, la vida de los habitantes de las modernas metrópolis estaría dominada progresivamente por los “no lugares”: los espacios de tránsito y de consumo que alteran, si es que no imposibilitan, las formas tradicionales de convivencia social¹⁸. Así, los ritmos y exigencias de este nuevo tipo de vida –que afectan directa o indirectamente a un número cada vez mayor de personas a lo largo y ancho del mundo- están

rompiendo, o al menos transformando seriamente, las formas de la sociabilidad clásica. Los viejos espacios e instituciones vinculados a las prácticas de la ciudadanía se ven, así, seriamente amenazados, al tiempo que tenemos que prestar atención a la emergencia de nuevas esferas de prácticas ciudadanas.

¿Cuáles son los aprendizajes que se corresponden a estas nuevas situaciones? Esta es la pregunta que queda por contestar.

Bibliografía

- Almond, G. y Verba, S., 1970, *La cultura cívica*, Madrid: ed. Euroamérica.
- Augé, M., 1993, *Los “no lugares”: espacios del anonimato: una antropología de la modernidad*, Barcelona: Gedisa.
- Benjamin, W., 1989a, “Le flâneur”, en *Paris capitale du XIXème siècle*. París: les Éditions du Cerf, pp.434-472.
- _____ 1989b, “Pasages, magasins de nouveautés, caliquots”, en *Paris capitale du XIXème siècle*. París: Les Éditions du Cerf, pp.65-89.
- Berger, P. y Luckmann, T., 1994, *La construcción social de la realidad*, Buenos Aires: Amorrortu.
- Berman, M., 1988, *Todo lo sólido se desvanece en el aire: La experiencia de la modernidad*. Madrid: Siglo XXI.
- Bourdieu, P., 1977, *Outline of a Theory of Practice*, Cambridge: Cambridge University Press.
- _____ 1991, *La distinción: criterio y bases sociales del gusto*, Madrid: Taurus.
- _____ 1995, *Las reglas del arte*, Barcelona: Anagrama.
- Castells, M. 1981, *Crisis urbana y cambio social*. Madrid: Siglo XXI.
- _____ 1995, *La ciudad informacional: tecnologías de la información, reestructuración Económica y el proceso urbano-regio-*

18 La película “American Beauty” ha sido interpretada por algunos críticos cinematográficos como una parábola de los efectos perversos de esta nueva vida “asocial”.

-
- nal}. Madrid: Alianza.
- _____ 2001, "La era de la información. Economía, sociedad y cultura". Vol. 2. *El poder de la identidad*. Madrid: Alianza.
- Cefaï, D., 2001, "Expérience, culture et politique", en D. Cefaï (ed.) *Cultures politiques*. París: PUF pp. pp.93-117.
- De Certeau, M., 1990, *L'Invention du quotidien. 1. Arts de faire*. París: Gallimard.
- Dubar, C., 1995, *La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles*, París: Armand Collin.
- Dubet, F., 1994, *Sociologie de l'expérience*, París: ed. du Seuil.
- Edelman, M., 1995, *From Art to Politics. How Artistic Creations Shape Political Conceptions*, Chicago: University of Chicago Press.
- Eyerman, R., 1998, "La praxis cultural en los movimientos sociales", en P.Ibarra y B. Tejerina (eds.) *Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural*. Madrid: Trotta. pp.139-164.
- García-Canclini, N., 1997, *Imaginario Urbanos*. Buenos Aires: Eudeba.
- Gordon, T. et al, 2000, *Making Spaces: Citizenship and Difference in Schools*. London: Macmillan.
- Habermas, J., 1974, "The public sphere", *New German Critique*, pp. 49-55.
- _____ 1992, "Further reflections on the public sphere", en C. Calhoun (ed.) *Habermas and the Public Sphere*, Cambridge, MA: MIT Press, pp. 421-462.
- _____ 1994, *Historia y crítica de la opinión pública*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Halbwachs, M., 1968, *La mémoire collective*. París: PUF.
- _____ 1976, *Les cadres sociaux de la mémoire*. París: Mouton.
- Harvey, D., 1998, *La condición de la posmodernidad*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Held, D. et al., 1999, *Global Transformations*, Cambridge: Polity Press.
- Merton, R. K., 1987, *Teoría y estructura sociales*. México: Siglo XXI.
- Morán, M. L., 1997, "Sociedad, cultura y política: continuidad y novedad en el análisis cultural", *Zona Abierta* 77/78, Madrid.
- Moscovici, S., 2000, *Social Representations: Explorations in Social Psychology*, Cambridge: Polity Press.
- Nora, P. et al., 1997, *Les lieux de mémoire*, ed. Gallimard, París.
- Percheron, A., 1993, *La socialisation politique*, París: Armand Collin.
- Rokkan S. y Eisenstadt, S.N., 1973, *Building States and Nations: Models and Data Resources*, Sage: Londres.
- Rokkan, San y D. Urwin, 1983, *Economic Territory Identity: Politics of West European Identities*. London: Sage.
- Sennet, R., 1998, *La corrosión del carácter*, Barcelona: Anagrama.
- Somers, M. R., 1993, "Citizenship and the public sphere. Law, community and political culture in the transition to democracy", *American Sociological Review* vol 58, pp.587-620.
- _____ 1999, "La ciudadanía y el lugar de la esfera pública: un enfoque histórico", en S. García y S. Lukes (ed.) *Ciudadanía, Justicia Social, Identidad y Participación*, Madrid: Siglo XXI, pp. 217-234.
- Tarrow, S., 1997, *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Madrid: Alianza Universidad.
- Thompson, E. P., 1977, *La formación histórica de la clase obrera en Inglaterra (1780-1832)*. Barcelona: Laia.
- Tilly, C., 1978, *From Mobilization to Revolution*. Londres: MacGraw Hill pp.143-17.
- Wallerstein, I., 1991a, *El Moderno Sistema Mundial*. México: Siglo XXI.
- _____ 1991b, *Unthinking Social Science. The Limits of Nineteenth-Century Paradigms*. Cambridge: Polity Press.
- _____ 1998, *Abrir las Ciencias Sociales: informe de la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las Ciencias Sociales*. México: S. XXI.

Repertorios insurgentes en Argentina contemporánea

Javier Auyero*

Durante los años 90, nuevas y poco convencionales formas de beligerancia popular transformaron a la Argentina en un verdadero paisaje de insurgencia colectiva y, parecería ser que, a partir de los eventos de diciembre del año 2001, este ciclo de acción colectiva aún no ha terminado. Durante la última década, tomas y ataques a edificios públicos (casas de gobierno provincial, legislaturas, sedes de gobiernos municipales, tribunales), barricadas en rutas nacionales y provinciales y campamentos en plazas centrales, se han generalizado y han aumentado en su frecuencia en el sur, centro y norte del país. Los episodios que se exponen a continuación, quizás sean los que mejor ilustren la dinámica y el carácter de la acción colectiva insurgente en la Argentina contemporánea.

El *santiagazo*

El 16 de diciembre de 1993, tres edificios públicos -la casa de gobierno, los tribunales, y la legislatura- y una docena de residencias privadas de políticos y funcionarios locales fueron invadidos, saqueados e incendiados por cientos de habitantes Santiago del Estero: em-

pleados estatales y municipales, maestras, jubilados, estudiantes, dirigentes sindicales entre otros, reclamaban el pago de sus salarios, jubilaciones y pensiones (adeudados desde hacía tres meses), protestaban contra la implementación de políticas de ajuste estructural y la generalizada corrupción gubernamental. Conocido como el *santiagazo*, este episodio tiene características singulares, se lo considera una rebelión de gente “hambrienta e indignada” (como la describió buena parte de la prensa nacional) que convergió en las residencias particulares de funcionarios y en los símbolos del poder público; prácticamente ningún comercio fue asaltado, ni se conocen víctimas fatales.

La *pueblada*

En junio de 1996, miles de habitantes de las localidades vecinas de Cutral-co y Plaza Huincol (provincia de Neuquén) bloquearon las rutas de acceso al área durante 7 días y 6 noches. Los *piqueteros*, como se denominaron los manifestantes en las barricadas, reclamaban “fuentes de empleo genuinas”, rechazaban la intervención de las autoridades democráticas y de otros políticos locales (los acusaban de “falta de honestidad” y “arreglos poco claros”) y demandaban la presencia del Gobernador para discutir sus reclamos. La impresionante cantidad de manifestantes (20.000, según la mayoría de las fuentes) hi-

* Departamento de Sociología, State University of New York at Stony Brook. CECYP -Centro de Estudios en Cultura y Política-. Fundación del Sur, Buenos Aires.

zo retroceder a las tropas de la Gendarmería Nacional (enviadas por el Gobierno Nacional). El 26 de junio, el gobernador Sapag accedió a cada una de las demandas en un acuerdo firmado con la recientemente formada Comisión de Piqueteros. La *pueblada* constituye también otro evento extraordinario en la Argentina democrática: las tropas retrocedieron en aparente derrota, y las autoridades cedieron (formalmente, al menos) a las demandas populares.

La Plaza del aguante correntino

Entre el 7 de junio y el 17 de diciembre, miles de correntinos acamparon en la plaza principal de la capital de la provincia. Placeros, maestras, empleados estatales, judiciales, abogados, entre otros manifestantes, reclamaban sus salarios impagos (con atrasos de entre 2 y 5 meses), se oponían a los despidos en la administración pública y protestaban contra la generalizada corrupción de los gobiernos provinciales y municipales. Los manifestantes comían y dormían en la plaza, organizaban marchas y demostraciones, además de varios cortes de ruta en el puente General Belgrano, que une a las ciudades de Corrientes y Resistencia. Estos seis beligerantes meses se conocieron como el *correntinazo*; ninguna otra protesta en la Argentina contemporánea duró tanto tiempo.

El *santiagazo*, la *pueblada* y el *correntinazo* fueron, sin duda, episodios extraordinarios, pero difícilmente aislados. Son parte de un ciclo de beligerancia cuyas raíces estructurales, modalidades y sentidos son el objeto de este trabajo.

Repertorios de la beligerancia

La teoría de “repertorio de acción colectiva” elaborada por Charles Tilly (1986, 1992, 1995) y su análisis de las transformaciones estructurales en la raíz de los cambios en la beligerancia popular, nos ofrecen una poderosa



herramienta para diagnosticar la mutación de los medios y los significados de la lucha popular en la Argentina contemporánea. El concepto se refiere a “un conjunto limitado de rutinas que son aprendidas, compartidas y ejercitadas mediante un proceso de selección relativamente deliberado”, y nos invita a examinar las regularidades en las maneras de actuar colectivamente en defensa o prosecución de intereses compartidos a lo largo del tiempo y del espacio.

En primer lugar, Tilly nos ofrece un modelo que articula diferentes niveles de análisis, desde cambios macro estructurales como el desarrollo del capitalismo (con la consiguiente proletarianización del trabajo) y los procesos de conformación del Estado (con el crecimiento paralelo de la complejidad y penetración de su poder extractivo y coercitivo) hasta regularidades en las interacciones entre estados y ciudadanos. Este modelo nos exhorta a mantener conceptualmente juntos macro estructuras y micro procesos y a mirar de cerca los modos en que las grandes transformaciones dan forma a la acción colectiva *de manera indirecta* al afectar intereses, oportunidades, organizaciones e identidades de la gente común. El modelo enfatiza, al mismo tiempo, en la necesidad de un análisis diacrónico y simultáneamente sincrónico, con su énfasis

tanto en las formas de la protesta como en sus transformaciones.

En segundo lugar, la noción de repertorio es eminentemente *política* pues este conjunto de rutinas beligerantes: a) surge de luchas continuas contra el Estado, b) tiene una relación íntima con la vida cotidiana y con las rutinas políticas y c) es condicionada por las formas de represión estatal. En este sentido, Tilly nos previene contra un error bastante generalizado entre los observadores de la protesta: las penurias, los problemas sociales (llámense pobreza, desempleo o lisa y llanamente hambre) no bastan para provocar la protesta. Las necesidades, por urgentes y angustiantes que sean, no son suficientes para generar acción colectiva; éstas operan en una matriz de relaciones políticas, luchas colectivas anteriores y respuestas estatales a esas luchas. La beligerancia, dice Tilly, “no expresa los descontentos y/o problemas de una población sino que surge de los procesos políticos centrales de ésta” (Tilly 1997:120). Sidney Tarrow, otro estudioso de la protesta, lo pone en términos similares: “los cambios en las oportunidades y condicionamientos políticos son los incentivos más importantes para iniciar una nueva fase de beligerancia” (Tarrow 1998: 7).

En tercer lugar, el concepto de repertorio es *cultural* en su raíz, pues se centra en los hábitos de beligerancia adoptados por los distintos actores, en las formas que toma la acción colectiva como resultado de expectativas compartidas e improvisaciones aprendidas. El repertorio no es meramente un conjunto de *medios* para formular reclamos sino una colección de *sentidos* que emergen en la lucha, de manera relacional; sentidos que, como diría Geertz (2000: 76) se “imprimen en el flujo de los eventos”. *Aprendizaje por medio de la lucha*: esta idea está en el centro de la metáfora teatral de repertorio: “Los repertorios son creaciones culturales aprendidas, pero no descienden de una filosofía abstracta” (Tilly 1995:26) (tampoco, podríamos agregar, del “espíritu del pueblo”), sino que emergen de la lucha, de las interacciones entre los ciudadanos y el Estado. ¿Qué es lo que aprenden los

manifestantes? Para Tilly “la gente aprende a romper ventanas en una protesta [...] a destruir casas no honorables, a llevar a cabo marchas, peticiones, reuniones formales, a organizar asociaciones específicas. En un momento particular de la historia, sin embargo, aprenden un conjunto relativamente pequeño de formas alternativas de actuar en conjunto”. ¿Cómo afecta este proceso las maneras subsiguientes de manifestarse? “El repertorio existente constriñe la acción colectiva; lejos de la imagen que algunas veces tenemos de multitudes irracionales, la gente tiende a actuar dentro de límites conocidos, a innovar en los márgenes de las formas existentes y a perder muchas oportunidades que, en principio, estarían disponibles. Ese condicionamiento es resultado, en parte, de las ventajas de la familiaridad, en parte de la participación de otros actores en las formas establecidas de acción colectiva” (Tilly 1986: 390-391). De esta manera, el concepto nos invita a combinar dos intereses que, por mucho tiempo, han estado divorciados: el impacto que tiene el cambio estructural en la protesta y los cambios en la cultura de la lucha popular (Tarrow 1996).

Llevar a Tilly al campo de la insurgencia popular argentina sugiere que debemos prestar atención *simultánea* a las siguientes variables:

- Las *regularidades en las formas de beligerancia*. La primera parte de este artículo examina la última década de protesta e identifica dentro de una gran variedad de formas, una modalidad crecientemente normativa de lucha colectiva: las huelgas en las fábricas dejan su lugar como forma predominante de protesta, a los cortes de rutas nacionales y provinciales.
- Los *cambios estructurales en la raíz de estas regularidades*. La segunda parte del artículo examina la desproletarización, la retirada del Estado, y la descentralización de servicios de salud y educación como las tres macro transformaciones que afectan la dinámica beligerante durante la última década.

-
- La *interacción entre intereses, organizaciones, oportunidades e identidades* que actúa como una suerte de máquina traductora de las presiones creadas por estos grandes cambios. La tercera parte de este trabajo varía el ámbito de análisis de macro estructuras y procesos a micro interacciones (y de investigación de archivos a trabajo de campo etnográfico), al centrarse en las crecientemente dominantes identidades de los manifestantes (al mirar los entendimientos compartidos que dividen al “pueblo” de la “clase política”), en sus intereses (al describir cómo la protección del trabajo y la adquisición o defensa de subsidios de desempleo devienen bases de la beligerancia), sus organizaciones (al examinar la multiplicación de organizaciones de base) y sus oportunidades para actuar (al observar, sobre todo, al faccionalismo de las elites como un aspecto central en la génesis de la protesta).
 - Las *continuidades entre protesta y política rutinaria*. La cuarta y última parte indaga brevemente la relación que la protesta tiene con una forma dominante de la política cotidiana en el país: el clientelismo. Se prestará particular atención al funcionamiento de las redes clientelares: como proveedoras de recursos fundamentales para iniciar la movilización; como factores cruciales para entender la forma que toma la protesta, y como canales por los cuales los logros materiales obtenidos por los manifestantes como resultado de un episodio contencioso específico, son distribuidos luego de dicho evento, dejando fuera a algunos protagonistas del conflicto y ocasionando una nueva fase de protesta.

En las conclusiones trato distintos aspectos que, al ser constitutivos del concepto de repertorio, requieren de mayor investigación empírica: el proceso de aprendizaje colectivo por medio del cual los medios y sentidos de la protesta son incorporados a los esquemas beligerantes de los actores y luego ejercitados; las formas que ha tomado la represión estatal

durante la última década y que sin duda, actuaron sobre las características de la protesta, y el papel jugado por las concesiones gubernamentales en la adopción del corte de ruta como forma particular dominante.

Este artículo se basa en un gran cuerpo de datos documentales y etnográficos que incluye: a) análisis de contenido de los diarios nacionales: La Nación, El Clarín, Página 12 (1990 y 2000) y regionales: La Mañana del Sur, Río Negro, El Litoral, El Liberal, Diario del Norte (que cubrieron protestas específicas); b) trabajo de campo etnográfico en las ciudades de Santiago del Estero, Cutral-co, y Plaza Huincul entre los meses de junio y julio (1999), julio y agosto (2000) y enero y marzo (2001). Entrevisté a decenas de manifestantes, periodistas, líderes sindicales, curas y monjas, policías, profesores secundarios y universitarios y maestras primarias, jueces y otros funcionarios locales (concejales, ex intendentes, etc.). El trabajo de campo también incluyó la recolección de comunicados de prensa de diversas organizaciones, volantes, diarios personales de manifestantes, expedientes policiales y penales. Además, observé videos producidos por canales de televisión locales y por particulares.

Las formas de la beligerancia

Otros dos ciclos de beligerancia durante la última década sirven para ejemplificar las recientes modalidades de protesta que los tres episodios mencionados encapsulan a manera de tipos ideales realmente existentes. Entre abril y junio de 1997, los cortes de ruta en demanda de empleo y ataques a edificios públicos se multiplicaron en el país. En abril, las ciudades de Cutral-co y Plaza Huincul fueron sitiadas durante varios días en reclamo del cumplimiento de las promesas realizadas por el gobernador luego de que los habitantes de la zona realizaran su primera *pueblada* en junio de 1996. Tres meses más tarde, autoridades de los gobiernos provincial y municipal fueron tomadas como rehenes por unos 300

manifestantes que reclamaban el aumento en los subsidios de empleo. En mayo, 21 cortes de ruta organizados por gremios municipales y organizaciones de desempleados, aislaron la provincia de Jujuy durante 12 días, a consecuencia de lo cual todo el gabinete ministerial del entonces gobernador Ferraro presentó su renuncia.

Cutral-co y Jujuy son tal vez los casos más recordados pero no los únicos. En estos meses, ‘piqueteros’, ‘fogoneros’ y ‘zanjeros’ cortaron la Ruta Nacional 3 en Trelew (Chubut) por un día, en demanda de puestos de trabajo; vecinos y desocupados organizados en una multisectorial interrumpieron el tráfico en la Ruta Nacional 38 en Cruz del Eje (Córdoba); los municipales pidieron la incorporación a la planta permanente de la municipalidad y el pago de sueldos atrasados, cortaron además, la Ruta 11 en Capitán Bermúdez (Santa Fe). En estos meses, también ocurrieron cortes de rutas nacionales y provinciales en Catriel (Río Negro), Banda del Río Salí (Tucumán) y en la ciudad de Neuquén, mientras que los maestros de todo el país confluyeron en la Plaza de los dos Congresos (Buenos Aires) y levantaron allí la llamada “Carpa Blanca”.

A poco más de tres años, en noviembre del 2000, esta forma de protesta ya había sido aprendida y adoptada en todo el país. Se suceden cortes en Isidro Casanova, Esteban Echeverría, y Glew (Buenos Aires), Plottier (Neuquén), Salvador Mazza, Tartagal, General Mosconi, Cuña Muerta y Zanja Honda (Salta), Libertador General San Martín (Jujuy), Resistencia (Chaco), Belén (Catamarca).

Entre los numerosos observadores de las nuevas formas de protesta (Schuster 1999; Scribano 1999) quizás sea Marina Farinetti quien más detalladamente ha diagnosticado las transformaciones en la beligerancia popular, ocurridas a partir de los inicios de la década del 90. Según esta autora (1999: 30), el periodo está marcado por: el *desplazamiento* del conflicto laboral del área industrial al sector público; la *disminución* de reclamos por aumentos salariales y el *crecimiento* de demandas por pago de salarios adeudados y por

despidos; la *reducción* de huelgas y el *incremento* de cortes de ruta, ollas populares y huelgas de hambre como modos de acción colectiva; el *aumento* de la frecuencia de la protesta en las provincias, y el *creciente protagonismo* de los gremios provinciales y municipales como actores centrales del conflicto.¹ Para Farinetti (1999), estas protestas, “devinieron en formas de organización popular nuevas: asambleas populares, organizaciones no gubernamentales, etc. Estas formas de organización re-crearon -o crearon- redes sociales. Más que las protestas de los estatales en las provincias por el pago de salarios atrasados o contra las medidas de ajuste, los cortes de ruta llevaron la política a territorios rezagados y colocaron el tema de la desocupación y las consecuencias sociales de la política socioeconómica del gobierno en el centro del debate”.

A pesar de la gran variedad de formas de protesta existentes durante los 90, las modalidades por las cuales la gente común formula sus reclamos parecen agruparse en un conjunto limitado y bastante bien definido de tipos de acción. Estas formas no cambian radicalmente entre una fase y la otra (digamos entre abril y junio de 1997 y noviembre del 2000) cuando actores similares activaron la protesta (desocupados y/o empleados públicos). Es más, los manifestantes parecen darse cuenta de esta recurrencia al referirse pública y análogamente a sus acciones y a las de otros (el corte), a sus autodefiniciones y a las de otros manifestantes (la de *piqueteros* fue la denominación que comenzó a aparecer con más frecuencia). Es evidente la emergencia de una forma de protestar, un cúmulo de rutinas aprendidas y compartidas mediante las cuales los grupos sociales formularon colectivamente reclamos al Estado.

1 De acuerdo a un informe del Centro de Estudios Nueva Mayoría los cortes de ruta casi se cuadruplicaron entre 1997 y el 2000 y se concentran desproporcionadamente (con relación a la cantidad de población) en las provincias.



Han emergido formas de protestar, rutinas aprendidas y compartidas mediante las cuales los grupos sociales formulan colectivamente demandas al Estado. Las modalidades de reclamo de la gente común, existentes durante los 90, parecen agruparse en un conjunto limitado y bastante bien definido de tipos de acción

Cortes vs. huelgas: falsa dicotomía

Conviene sin embargo, no exagerar el carácter novedoso de las formas y sentidos de la protesta con el fin de no perder de vista la continuidad existente con modalidades previas de lucha. Estas “nuevas formas” no reemplazan a otras, como la huelga y la manifestación callejera, ni pueden ser asociadas simplemente a una demanda en particular como el reclamo de empleo. Por el contrario, cortes y paros, ataques a edificios y manifestaciones, campamentos y huelgas, conviven, se complementan y se potencian de acuerdo a su relativo éxito o fracaso en la obtención de sus demandas. Si bien la forma “corte de ruta” está predominantemente asociada a la demanda de trabajo y de subsidios de empleo (los llamados “Planes Trabajar”) no puede ser vinculada de manera directa y exclusiva con un tipo de reclamo, como lo demuestran los ganaderos con sus cortes de ruta en protesta por el resurgimiento de la aftosa en Formosa; los trabajadores del ingenio La Esperanza en San Pedro (Jujuy) en demanda del pago de salarios atrasados o los grupos indígenas que bloquean el paso en la Ruta 34 en Salta en demanda de tierras (noviembre del 2000). Si bien los desocupados adquieren prominencia en los cortes de ruta, los sindicatos de empleados estatales y los gremios docentes (en Jujuy en 1993, 1995 y 1997 o en Neuquén en 1997, por ejemplo), organizaciones de segundo grado (la Central Argentina de Trabajadores en los cortes de ruta en el Gran Buenos Aires), y otros tipos de organización (frentes barriales, comisiones vecinales, etc.) también adoptaron

esta forma de lucha colectiva. Quizás sean las huelgas de los años 1997 (agosto) y 2000 (junio), llevadas a cabo durante los gobiernos de Menem y De la Rúa, las que mejor grafiquen esta coexistencia de formas establecidas de protesta con otras emergentes. El paro general del 97 combinó cortes de ruta, ollas populares, manifestaciones y piquetes de huelga en todo el país. El paro del 2000 incluyó cortes de puente (Misiones y Capital Federal); de ruta (Jujuy y Chubut); de vías ferroviarias (Castelar, provincia de Buenos Aires); ataques a oficinas de Repsol -YPF (Neuquén), del Citibank (Santa Fe y San Juan); pedradas contra edificios públicos (Secretaría de Educación en Neuquén), y bloqueos a destilerías (Ensenada, Provincia de Buenos Aires).

Por último, la dicotomía huelga (de trabajadores) - cortes de ruta (de desempleados) nos puede hacer perder de vista el encadenamiento de las emergentes formas de protesta durante los 90, con otras que predominaron en los 80: quizás haga falta recordar que uno de los líderes de la Federación de Tierras y Vivienda (Luis D’Elia), organización clave durante los cortes de ruta en el Gran Buenos Aires, fue también uno de los organizadores de las tomas de tierras (asentamientos poblacionales en tierras fiscales y/o privadas) durante la dictadura y el primer gobierno democrático (Merklen 1991). Cuando en noviembre del 2000, las autoridades de los gobiernos provincial y nacional no accedían a las demandas de quienes cortaban la ruta en La Matanza, uno de los piqueteros encapsula en un solo comentario lo que a muchos observadores de la protesta en Argentina parece esca-

párseles, en sus intentos por construir modelos dicotómicos de la acción colectiva, decía: “Si es necesario, les vamos a armar un asentamiento en la ruta.”

Hiper desempleo, abandono estatal, y descentralización

El contexto estructural de este aumento y el cambio de forma de la beligerancia popular están caracterizados por tres procesos que, si bien pueden ser separados analíticamente, se encuentran en la raíz de la protesta de manera simultánea y se refuerzan mutuamente:

- *La desproletarización*: el aumento explosivo de la desocupación, producto de la desindustrialización del país y de la desconexión funcional entre las tendencias macro económicas y los niveles de empleo² ha sido objeto de numerosos y detallados estudios por lo que no me detendré aquí en este aspecto³. Como sintetiza Aronskind (2001): “Los pobres eran el 21,5% de la población en 1991, y el 27% al final del período (en el 2000). Los indigentes eran el 3% de la población, para alcanzar el 7% en el 2000. Los desocupados y subocupados, aproximadamente 1.600.000 personas al comienzo de la década, superaban los 4.000.000 al fin de la misma”.
- *La retirada y el desmantelamiento del Esta-*

2 Desde 1991, el crecimiento del PIB viene de la mano con el aumento del desempleo. De acuerdo a datos provenientes del Banco Central de la Nación y del Ministerio de Economía, el crecimiento del PIB fue de 8,9% en 1991, 8,7% en 1992, 6% en 1991, y 7,4% en 1994. Durante esta fase expansiva de la economía, la tasa de desempleo creció, de acuerdo a las mismas fuentes, de 6,9% a 10,7%. Tomando en cuenta a las firmas industriales líderes, la desconexión funcional entre crecimiento económico y empleo es aún más clara. Ha habido un crecimiento del 35% en el PIB de estas firmas entre 1991 y 1994, y un 10% de reducción en su personal.

3 Se pueden consultar los excelentes trabajos de Lo Vuolo y Barbeito (1993); Beccaria y López (1996); Murmis y Feldman (1996).

do de bienestar-populista hacen que los riesgos implicados en situaciones de privación material sean aún mayores. En la última década, la Argentina ha asistido a un proceso de constante degradación de los sistemas públicos de educación, salud y de las políticas de vivienda dedicadas a sectores de bajos ingresos. El carácter caótico de las políticas destinadas a “combatir el desempleo” y de las políticas sociales destinadas a “combatir la pobreza” hace que la situación sea aún peor: los pobres son cada vez más débiles y están cada día más desprotegidos. Una particular indiferencia ha demostrado el Estado con respecto al destino de los desempleados: el seguro de desempleo cubre a una exigua proporción de quienes perdieron su trabajo y el dinero otorgado en cada subsidio no alcanza a cubrir sus necesidades básicas.

La privatización de las empresas estatales no es sólo otro aspecto de la retirada del Estado de sus funciones básicas sino que tiene un importante impacto en los niveles de empleo. Entre 1989 y 1999, aproximadamente 150.000 trabajadores perdieron sus ocupaciones como consecuencia directa del proceso de privatización de las compañías estatales de teléfonos, correos, aviación, agua, energía, transporte ferroviarios y gas. Como veremos, el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales -YPF- es de particular importancia dado que muchos de sus despidos ocurrieron en comunidades cuya existencia dependía, en buena medida, de la presencia de esta empresa (Cutral-co y Plaza Huincul en Neuquén, Tartagal y General Mosconi en Salta, por ejemplo).

- Junto al hiper desempleo y a la retirada del Estado en su función de bienestar (ya que su función represiva no ha menguado), *el proceso de descentralización de los servicios educativos y de salud* es otro aspecto que, si bien no ha sido estudiado con relación al aumento de la protesta, es de crucial importancia para entenderla. A partir del año 1989, los servicios educativos (sobre todo

la educación media) y los de salud comenzaron a ser transferidos de la órbita del Gobierno Federal hacia las provincias⁴, descentralización que profundiza la crisis de ambos sectores dado que las administraciones provinciales tienen que afrontar esta nueva responsabilidad con sus ya escasos recursos financieros. Como afirma Rodríguez Larreta: “el personal no solo está sujeto a los bajos salarios en el sector, sino que ese hecho se combina conflictivamente al tratarse de empleados públicos provinciales, con las recurrentes crisis de las economías de las jurisdicciones subnacionales”⁵ (Rodríguez Larreta et al. 2000).

Estos cambios transformaron a los gobiernos provinciales en objeto de demandas por parte de los ahora provinciales, empleados públicos. El aumento de la protesta por parte de los docentes y trabajadores de la salud en las provincias (los llamados “jeringazos” en los hospitales públicos de Corrientes y los innumerables paros en la educación) son difíciles de comprender si no se tiene en cuenta que, como consecuencia directa del proceso de descentralización, lo que cambia es el blanco de las demandas, el *locus* de la acción colectiva; de reclamar al Estado nacional, antes responsable por salarios, condiciones de trabajo, infraestructura, etc., ahora la protesta se traslada al ámbito provincial -veremos, cómo, en el caso de Santiago esto se expresa claramente en los inicios del conflictivo año 1993.

La retirada del Estado y el hiperdesempleo vistos desde abajo

Cutral-co y Plaza Huincul se originan y desarrollan a partir de la actividad petrolera. Desde sus comienzos en 1918 y 1933 respectivamente, ambas ciudades crecieron al ritmo (y se volvieron altamente dependientes) de los beneficios provistos por la extracción de petróleo y las actividades de la compañía estatal YPF. Al descubrimiento del “oro negro” en la región, le siguieron su ocupación territorial y el asentamiento poblacional, ambos llevados a cabo bajo auspicio estatal. El rápido crecimiento demográfico de las dos ciudades refleja la expansión de las actividades de YPF: entre 1947 y 1990, el total de la población aumentó de 6.452 a 44.711 habitantes, un crecimiento demográfico impresionante bajo cualquier estándar.

El estado de bienestar representado por YPF otorgaba a sus obreros salarios más altos que el promedio nacional, viviendas modernas servidas por el mismo personal de la empresa, acceso a un excelente hospital, obra social y vacaciones pagas. El bienestar de YPF se extendía más allá de los límites de la empresa: toda la vida económica y social de la región estaba dinamizada por su presencia: barrios enteros, tendidos de luz y cloacas, un hospital moderno, un teatro y un centro deportivo.

En menos de 2 años, un sistema económico y una forma de vida que duró más de 4 décadas se hicieron trizas. La privatización de YPF fue sancionada por el Congreso de la Nación el 24 de septiembre de 1992 y al poco tiempo, los devastadores efectos se hicieron sentir en ambas comunidades. YPF no sólo redujo su personal de 4.200 operarios a 600, en menos de un año (Favaro y otros Ibid.), sino que dejó de ser la empresa-bienestar alrededor de la cual giraba la vida de ambas ciudades; se convirtió en una industria de enclave conducida bajo premisas estrictamente capitalistas.

Mientras ocurrían los despidos masivos, los artículos en los principales periódicos

4 Para estudios detallados del proceso, se pueden consultar los trabajos de Rodríguez Larreta et al. 2000 y Rothen 1999.

5 En 1987, por ejemplo, 53% de los profesores secundarios eran empleados federales, 10 años más tarde sólo el 3% de ellos se mantuvo en el ámbito federal. Cerca de 47% de ellos eran empleados provinciales en 1987; 10 años más tarde 98% de los profesores secundarios trabajaban para los gobiernos provinciales

describían el “sentimiento de incertidumbre” sobre los inicios de un proceso que hoy se encuentra en su forma avanzada: el hiper desempleo. En Cutral-co, el 30% de la población económicamente activa (25.340 habitantes) estaba desempleada en 1997. En la actualidad, más de la mitad de la población de ambas ciudades vive debajo de la línea oficial de pobreza (Favaro y otros Ibid.: 17).⁶

Lejos de allí, en el extremo norte del país, un residente de General Mosconi (provincia de Salta) describe a la ciudad en términos dolorosamente familiares para los cutralquenses y huinculenses: “Hace 10 años Mosconi se transformó en un pueblo fantasma. La privatización de YPF marcó el fin de una época dorada. Mi marido trabajó durante 20 años en el Correo y siempre hablaba de los enormes aguinaldos que cobraban los empleados de la empresa petrolera. Ahora, la gente tiene que salir a cortar la ruta para recibir poco más que una limosna.”

Organización e intereses

La desproletarización y la retirada del Estado ubicaron nuevos actores (desempleados) y nuevas demandas (empleo) en el centro de la escena junto a trabajadores del sector público, en la mayoría de los casos, que exigían sus salarios impagos; la descentralización convirtió a las administraciones provinciales en objeto de reclamo; en ciertos casos, la generalizada corrupción de éstas hizo que, como veremos, las identidades que se construyeron en la protesta adquirieran una carácter político específico.

Durante los 90, con el crecimiento de la insurgencia, se multiplicaron simultáneamente las organizaciones de base, las más activas fueron aquellas que agruparon a los desempleados.



La interacción entre intereses, redes, oportunidades e identidades insurgentes: el caso de Cutral-co y Plaza Huincul 1996

Temprano en la mañana del 20 de junio de 1996, una de las principales radios de Cutral-co y Plaza Huincul, Radio Victoria, emitía la noticia de la cancelación del contrato entre el gobierno provincial y la compañía canadiense Agrium para la construcción de una planta de fertilizantes, que habría de generar alrededor de 50 puestos de trabajo permanentes en la zona; la radio difundió la noticia y “abrió los micrófonos a los oyentes. Se empezaron a suceder los llamados, que con el correr de las horas se fueron incrementando”. El dueño y director de la radio, Mario Fernández, cuenta que: “Llegaron a entrar llamados telefónicos donde la gente decía que era lamentable lo que ocurría... que había que participar... hubo quien propuso (reunirse) en la ruta” (ver Sánchez 1997). Quienes participaron en la pueblada recuerdan esos mensajes radiales, no sólo por cómo la radio convoca a la gente, sino también por la manera en que la radio *enmarca* la cancelación del proyecto de la planta de fertilizantes.⁷ En Radio Victoria, el ex Intendente Adolfo Grittini y Fernández, su

6 En marzo 2001, sólo el 35% de los desempleados recibían subsidios (de un promedio de USD 150) del gobierno nacional o provincial.

7 Sobre la noción de “marco” y su relevancia en la acción colectiva, ver Snow y Benford (1988, 1992); Benford y Snow (2000).

aliado político del momento, describen la suspensión del proyecto como “la última esperanza perdida”, “como un tremendo golpe para ambas comunidades”, como una “decisión totalmente arbitraria del gobierno provincial”. Daniel, un manifestante que pasó días y noches en uno de los piquetes, recuerda: “Había mucha ira... la radio... decía que había que ir a apoyar, que hacían falta personas valientes”. “Yo me enteré del corte,” recuerda Zulma, “por la radio... estaban hablando de la situación social”. Daniel, Zulma y muchos otros apuntan al mismo agente y a sus similares funciones: una de las radios locales construía un sentido de lo que estaba sucediendo y procuraba persuadir a la gente para que se acercara a la ruta.

Mientras la radio emitía “la ira que sentíamos” (Daniel) y convocaba a manifestarse a la Torre Uno sobre la ruta 22, los taxis y remises locales llevaban a la gente sin cargo. ¿Era esta una abrupta expresión de indignación colectiva en la cual los periodistas radiales, los taxistas y remiseros eran solo los primeros en reaccionar? Difícil de creer. Las disputas internas dentro del entonces partido de gobierno, el Movimiento Popular Neuquino - MPN-, y en particular, las acciones del ex intendente, Grittini (Línea Blanca) quien llevaba a cabo su lucha interna y personal contra el intendente Martinasso y contra el gobernador Sapag (Línea Amarilla), estaban en la raíz, no sólo del “marco de injusticia” con el que se presenta la cancelación del contrato con Agrium, sino también de la movilización de recursos que ocurre durante ese primer día de la pueblada. En una entrevista que me pidió no grabara, porque “la verdad no puede ser contada frente a un grabador”, el entonces intendente de Cutral-co, Daniel Martinasso, me dijo: “Grittini apoyó la protesta durante los primeros días. ¿Cómo? En primer lugar, comprando un par de radios para que convoquen a la gente a la ruta.” “¿Es tan fácil comprar una radio?”, pregunté. “Mirá, yo mismo le pagué la radio... para que dijera lindas cosas sobre mí y sobre mi administración. El *living* que vos ves al entrar a la radio lo hicie-

ron con plata que yo les pagué... así es la política en Cutral-co”, me explicó. Los esfuerzos organizativos de Grittini y sus aliados (siendo Fernández uno de los más importantes) no terminan allí. Si bien la evidencia es circunstancial, muchas fuentes consultadas (periodistas, políticos y los propios piqueteros) indican que él también envió los camiones con los cientos de gomas utilizadas en las barricadas y las topadoras para interrumpir el tráfico. Grittini también estuvo detrás de la distribución gratuita de comida, nafta, leña y cigarrillos en los piquetes durante los dos o tres primeros días de la protesta. Hay quienes sugieren que él pagó 50 pesos por noche a decenas de jóvenes piqueteros, y que sus seguidores distribuyeron vino y drogas que los piqueteros pagaron con la plata que él mismo les dio.

Las cámaras de televisión y los diarios registran la presencia de Grittini entre los manifestantes, sobre todo, durante los dos primeros días de la protesta. En una larga entrevista le pregunté sobre sus acciones durante estos días. Lo que obtuve fue una firme reivindicación de la pueblada como una “acción espontánea en defensa de lo que la gente se merece”, pero ninguna mención sobre el apoyo material brindado a la protesta. Es más, por oposición a su entonces archi rival, el intendente Martinasso, no ve ninguna conexión entre el faccionalismo del MPN y el surgimiento de la protesta (“eso no tiene nada que ver con la *pueblada*”, me dice). Tanto él como el dueño de Radio Victoria insisten en el carácter espontáneo, natural y sorpresivo de la revuelta.

Estén o no detrás Grittini y su grupo, la movilización de recursos y la construcción de la cancelación del proyecto como “decisión arbitraria” sí ocurrieron. La radio emitió los “mensajes de ira”, decían que “algo había que hacer” y convocaron a la gente a la Torre Uno; alguien llevó cubiertas de autos y de camiones, y distribuyó sin cargo: comida, cigarrillos, y otros productos -“¡Teníamos hasta pañales para bebés!” -recuerdan varias mujeres en los piquetes. La movilización de recur-

.....

sos y el “enmarcamiento” del problema (que considero son precondiciones de la protesta) no ocurrieron sin embargo en el vacío sino, en primer lugar, en un contexto que, como vimos al hablar de la desaparición del trabajo asalariado y del rápido incremento de la pobreza, estaba maduro para una revuelta de gran escala, y en segundo lugar, mediante redes políticas bien establecidas mediante las cuales se distribuyeron información y recursos.

“Che, esto no es joda, acá hay gente bien vestida,” dijo un gendarme que, cuando vio que 20.000 personas esperaban a los menos de doscientos gendarmes en la Torre Uno de Plaza Huincul, el 25 de junio de 1996. La multitud, que había bloqueado el acceso a Plaza Huincul y a Cutral-co durante 5 días, incluía “gente bien vestida” no solo pobres y desocupados. Y por tanto, “no era joda”, era una protesta que excedía la capacidad represiva de la gendarmería, no sólo por el número sino por la diversidad del “objetivo”. La jueza federal que comandaba el pelotón de gendarmería con la orden de despejar la ruta pidió hablar con representantes de esas 20.000 almas; en medio de la ruta los habitantes de Cutral-co y Plaza Huincul le espetaron: “Acá no hay representantes, acá está el pueblo... venga a hablar con el pueblo.”

A 4 años de la protesta, Laura, portavoz de la comisión de piqueteros, afirma: “Decir que esa fue una protesta de desocupados o de los excluidos, es hacer una mala lectura. Ahí estaba todo el pueblo.” La evaluación de Laura fue y es compartida por muchos habitantes de Cutral-co y Plaza Huincul; durante los días de la protesta, los habitantes de esas dos localidades repitieron frente a las cámaras: “Nosotros queremos laborar. Les damos la luz, el gas, el petróleo y ¿Nos pagan así? ¿Que venga Felipe!, somos 30.000, no somos 5.000. ¡Está todo el pueblo, acá no hay políticos, acá está el pueblo!”

Esta multitud-en-la-ruta se definía como *unida; numerosa; comprometida* con un objetivo; *valiosa y carente de líderes políticos*. Tanto en las maneras de llamarse a sí mismos como en su composición social, tanto en su dis-

curso como en sus relaciones sociales, los manifestantes construyeron una identidad participativa que giraba alrededor de la noción de “pueblo”.

Esta identidad insurgente, sin embargo, no aparece de la nada ni de un sustrato siempre presente dispuesto a activarse frente a una situación objetivamente injusta (como si tal cosa existiese); es, por el contrario, una construcción colectiva y conflictiva. Durante seis noches y siete días en la ruta, los manifestantes realizaron incansables esfuerzos por definirse a sí mismos diciendo quiénes *eran* y quiénes *no eran*.

En las afirmaciones de Laura y de muchos otros piqueteros, el término “pueblo” tiene dos connotaciones diferentes. Por un lado, el “pueblo” se refiere a la localidad, a las ciudades de Cutral-co y Plaza Huincul. Las repetidas referencias a “todo el pueblo” apuntan, parcialmente al hecho de que buena parte de la población de ambas ciudades estaba en la ruta. Y lo estaban para que el Gobernador y “todo el país” reconociesen el proceso de extinción por el que rápidamente atraviesan luego de la privatización de YPF. En las representaciones de los habitantes, este es un pueblo muy especial porque provee de energía (gas y petróleo) al resto del país. Como grita un piquetero, a metros de los amenazantes gendarmes: “Les damos el gas, la nafta, la electricidad... ¿Y nos pagan así?” El piquetero se refiere de esta manera al pueblo-como-localidad, una significación que está profundamente enraizada en las creencias comunes de los habitantes de la región. Entre cutralquenses y huinculenses existe una creencia generalizada (enraizada, a su vez, en una pertinaz retórica nacionalista que describe a los habitantes como “dueños” del petróleo de la región) de que los recursos minerales de YPF les pertenecen. La frase “*Nosotros* les damos el gas, *nosotros* les....” no es pues, una expresión idiosincrática de este piquetero, sino que repetida en más de una ocasión durante la protesta, reflejaba un conjunto de creencias compartidas: los entendimientos mutuos, las identidades colectivas que se forjaron en la ruta durante

esos días, encuentran sus raíces (sus bases materiales, diría) no sólo en la situación actual de Cutral-co y Plaza Huincul como ciudades en peligro de extinción, sino en las memorias de los “tiempos de oro” de YPF y en una convicción compartida sobre la propiedad de los recursos naturales. Así, las memorias colectivas sobre el funcionamiento de un Estado de semibienestar durante el tiempo de YPF otorgan una suerte de ímpetu solidario para organizarse colectivamente y defender los que son considerados intereses de la ciudad. Este “nosotros” colectivo tiene dos preocupaciones fundamentales: la falta de oportunidades y trabajo y los riesgos que éstas implican para la supervivencia de ambas comunidades.

Existe, sin embargo, otra connotación importante del término “pueblo” implícita en el rugir de la multitud. Los manifestantes construyeron su identidad colectiva y sus demandas en términos democráticos contra lo que ellos percibían como oscuras negociaciones de los políticos y sus constantes intentos de “usar al pueblo”. Desde el punto de vista piquetero, quiénes eran los manifestantes y por qué estaban en la ruta tiene tanto que ver con la devastación provocada por la retirada del Estado, expresada en la privatización de la empresa petrolera estatal, como con la ruina producida por las acciones interesadas de los políticos. Una perspectiva sensible a las palabras y las acciones de la multitud, a las demandas y a las creencias compartidas, nos alerta sobre el actor principal *en oposición al cual* los piqueteros construyen su identidad: la “clase política” o, en términos de Laura, “las personas que están al mando [...] las personas que dicen que más adelante voy a hacer esto, si me votan, voy a hacer aquello”. Sin sus representantes habituales (o mejor dicho, a pesar de sus representantes) los manifestantes pueden hacer oír su voz de descontento por el rápido deterioro de ambas comunidades y hacérselo saber al resto del país. “Por una vez”, Laura y muchos otros piqueteros repiten una y otra vez, “los políticos no nos pudieron usar” sabedores de lo paradójico de esta afirmación dado que en el origen de sus ac-

ciones beligerantes estaban estos mismos políticos.

La lucha intra elites y las oportunidades para actuar: el correntinazo

Así como la pueblada ilustra la manera en que el faccionalismo de las elites políticas está vinculado a la movilización de recursos que detonan la protesta inicial, el caso del correntinazo muestra cómo las luchas intra elite, en ocasiones, posibilitan la movilización. Durante seis meses en Corrientes, los manifestantes reclamaron el pago de salarios, protestaban contra despidos en la administración pública, pedían “castigo a los responsables de la situación” y criticaban a viva voz “el clientelismo, los punteros políticos, el caudillismo y la corrupción” -gritaban, en otras palabras, contra el generalizado nepotismo gubernamental y contra una persistente manera de hacer política en la provincia.

Desde marzo de 1999 se incrementaron la frecuencia de las movilizaciones y el número de manifestantes. Las maestras de escuela fueron las primeras en tomar las calles cuando comenzó el calendario escolar, demandaban el aguinaldo adeudado desde diciembre. En abril, el sindicato de maestros lideró marchas masivas y en mayo, se sumaron otros empleados públicos (judiciales y administrativos) que bloquearon el puente General Belgrano por primera vez en el año. Desde entonces, la protesta comenzó a generalizarse con marchas, cortes de calles, concentraciones en la plaza principal, huelgas (de empleados públicos, de judiciales, y docentes) y un autoacuartelamiento policial.

Entre abril y diciembre se depusieron a dos gobernadores en rápida sucesión y se removió al intendente (ex gobernador y caudillo local) de la ciudad de Corrientes, “Tato” Romero Feris, quien fue arrestado (y luego sentenciado) bajo cargos de apropiación y uso ilegal de fondos públicos. Los dos gobernadores y el intendente (los tres pertenecientes al Partido Nuevo -PANU-) fueron desplazados

por una coalición de partidos opositores (peronistas, radicales, autonomistas liberales) que acusaba al gobernador Braillard Pocard de liderar una administración fraudulenta e incompetente.

El nuevo gobernador Perié se enfrentó con la quiebra de la administración, luego del monumental aumento de la deuda provincial contraída por el gobierno anterior. Entre 1993 y 1999 el gasto público al igual que la deuda, crecieron en la provincia de manera acelerada (de 561 a 1.400 millones) ¿De dónde provenía el dinero? Después de la provincia de La Rioja, Corrientes fue la más favorecida en términos de dinero recibido de los aportes del Tesoro Nacional. Las razones de este “privilegio” fueron estrictamente políticas. La administración del PANU había sido una aliada incondicional del presidente Menem (algunos analistas sostienen que la misma creación del PANU luego de una división del Partido Autonomista Liberal, fue una maquinación del menemismo). Esos fondos fueron, por una parte, a parar a los bolsillos de funcionarios corruptos y por otra, a financiar la desbordante expansión del empleo público. Indudablemente, el incremento del empleo público es una manera en la que los gobiernos provinciales lidian con el aumento del desempleo causado por la devastación de las economías regionales⁸, pero es también una manera en la que el gobierno provincial puede crear y mantener su maquinaria clientelista.

La nueva coalición en el gobierno enfrentó tres desafíos diferentes aunque relacionados: uno proveniente del PANU, el otro del gobierno nacional que amenazaba con la intervención federal, y el tercero el de los miles de empleados públicos que, desde el 7 de junio, acampaban en la plaza principal de la ciudad de Corrientes, rebautizada como *Plaza del aguante y la dignidad*.

Con el gobierno provincial en quiebra y en medio de la escalada de la protesta y la vio-

lencia, el gobierno nacional comenzó a considerar la intervención federal. A fin de evitar ser reemplazado por funcionarios federales y recibir fondos para pagar a los contenciosos empleados públicos, el nuevo gobierno fue forzado a implementar un “duro ajuste”, que consistía en un extenso programa de reducción de gastos y privatizaciones, que incluían la venta del banco provincial y de la Compañía de Energía. El ajuste, de acuerdo al mandato nacional, debía concentrarse en la municipalidad de Corrientes que tenía un exceso de aproximadamente 5.000 empleados. Como sostuvo el nuevo gobernador -al admitir implícitamente la vinculación entre clientelismo y empleo público: “La municipalidad de Corrientes tiene 7.000 empleados cuando nunca tuvo más de 2.000 [...] esto es un disparate. Tenemos que reducir el número de miembros del PANU que fueron contratados con fondos públicos”.

Desde el 7 de junio, cerca de 200 carpas ocupaban la plaza frente a la legislatura. Las primeras fueron levantadas por los maestros; una semana después no había más lugar en la plaza, trabajadores del interior de la provincia ocuparon los últimos lugares vacantes. Abogados, transportistas escolares, trabajadores municipales, maestras jardineras, empleados judiciales, trabajadores de sanidad, incluso familiares de agentes de la Policía provincial, tenían sus carpas. Bajo el nombre de “autoconvocados”, fracciones disidentes de varios sindicatos se unieron a la protesta. Los manifestantes hablaban de “recuperar las instituciones, la libertad y la justicia”, describían a la administración gubernamental como un “monumento a la corrupción”, organizaban sus marchas cantando “esto no es pagado, esto no es pagado” para diferenciarse de una manera de movilización política a la que criticaban como clientelar, al tiempo que una demarcación entre “nosotros, el pueblo” y “ellos, los gobernantes y los políticos” adquiría mayor nitidez con el transcurso de los días en la plaza. El mejor resumen que encontré sobre las demandas de los placeros proviene del título de uno de estos volantes distribui-

8 Se calcula que en la provincia de Corrientes la tasa de desempleo, sin tomar en cuenta el empleo público sería de 25,7% de la PEA, cuando la tasa actual es de 12,9% (datos del 2000).

dos en la plaza (*Aguanta. Hoja del Pueblo Correntino Autoconvocado*). El título dice: “¿Salarios o justicia?” y al pie de página se lee: “Salarios y justicia”.

Contrariamente a lo que se esperaba, el nuevo gobierno provincial no condenó las acciones de los manifestantes. Miembros de la coalición gobernante que destituyó al PANU reconocieron en repetidas oportunidades la importancia de los *placeros* (quienes siguieron las sesiones de la legislatura por los altoparlantes que transmitían los eventos en la plaza) en la remoción del gobernador y del intendente. Como un miembro de la coalición afirmó: “La gente en la plaza nos dio fuerza (para desplazar al gobernador)”. Ese mismo día, el nuevo gobernador admitía que tenían que obtener fondos del Gobierno Federal en forma apresurada “porque la plaza del aguante y la dignidad no nos va a dar mucho tiempo para que encontremos una solución [...] Si no encontramos una solución, el apoyo de la gente va a durar sólo unas horas”. Un mes más tarde, cuando las maestras decidieron continuar su huelga, el nuevo gobernador afirmaba: “Cuando recibamos más fondos vamos a pagar los salarios. Respetamos la decisión de los maestros de seguir con su protesta hasta que reciban sus salarios”.

Cuando una delegación de la Plaza del Aguante marchó a Buenos Aires con la intención de acampar en la Plaza de Mayo, el gobernador Perié se identificó con ellos al decir que “los correntinos estamos a punto de perder la paciencia [...] si no recibimos una solución, el pueblo de Corrientes sabrá qué hacer”.

Estos son algunos de los episodios que demuestran la *validación* del “aguante” por parte de los funcionarios del gobierno opuestos al PANU, convalidación que no puede comprenderse sin dar cuenta de las disputas intra elites, convalidación o certificación que provenía también de otro importante actor en la política local: la Iglesia católica. En repetidas oportunidades, las autoridades eclesíásticas reconocieron la legitimidad de sus demandas y de su “lucha”. Como un cura afirmó frente a la multitud reunida en la plaza: “Señor,

nuestro pueblo pide por la fuerza necesaria para mantener su dignidad”.⁹

Hacia mediados de diciembre, debido al bloqueo del puente General Belgrano, la ciudad de Corrientes estaba “prácticamente aislada”. Miles de manifestantes tuvieron repetidos enfrentamientos con la gendarmería durante los seis días que duró el bloqueo. Los negocios estaban cerrados por temor a los saqueos y debido al desabastecimiento. Prácticamente no hubo clases durante el año, la mayoría de los empleados públicos estaban en huelga, al igual que la Policía (esta última dividida en dos fracciones, aquellos leales a “Tato” y aquellos que apoyaban al nuevo gobierno), la mayoría de los servicios sociales (como los comedores infantiles) estaban suspendidos. En otras palabras, la vida cotidiana era un completo desorden dado que la ciudad vivía “al ritmo de la administración pública” (las ventas comerciales habían disminuido 80% en unos pocos meses).

Luego de haber sido testigo de la rápida sucesión de tres gobernadores en seis meses, la provincia tenía dos gobernadores de facto: uno elegido por la nueva legislatura (en octubre el PANU ganó las elecciones provinciales y pudo revertir la destitución de Braillard, quien intentó entrar a la casa de gobierno al liderar una marcha de 2.000 seguidores), y otro apoyado por la coalición. Después de que el gobierno nacional (finalmente) se decidiera por la intervención federal, la gendar-

9 Por otra parte, miembros del PANU, en especial su líder “Tato” Romero Feris, desacreditaban constantemente a los manifestantes como “falsos representantes de la voluntad popular”, como “manipulados por intereses externos a la provincia”. A menos de una semana de comenzado el campamento en la Plaza 25 de Mayo, el entonces intendente se refirió a ellos como “militantes de partidos políticos, gente traída del interior de la provincia y de otras provincias”. Argumentaba que eran menos de lo que los medios afirmaban, repetía las acusaciones que las elites, como vimos, han sostenido en más de una oportunidad durante esta última década: esto era el producto de agitadores externos. Como “Tato” sostuvo en una entrevista: “Esta es gente de Quebracho, de Patria Libre y de otros grupos de izquierda. Son los mismos que andan dando vueltas por la ciudad como vándalos, creando una falsa sensación de caos”.



Cortes de ruta, campamentos en plazas, ataques a edificios públicos, están no sólo en el centro político del país, sino que se ubican en el corazón de las formas en que los argentinos actúan colectivamente a favor de sus intereses. Estamos, si Tilly está en lo cierto, en el comienzo de una nueva era

mería reprimió brutalmente a los miles de manifestantes que bloqueaban el puente, mataron a dos manifestantes en acciones que aún no han sido esclarecidas.

Movilización de recursos y formas cotidianas de clientelismo

Entendido como la “distribución (o la promesa) de recursos por parte de funcionarios o candidatos políticos a cambio de apoyo político, fundamentalmente, aunque no de manera exclusiva, en la forma de votos” (Gay 1990: 648), el clientelismo ha sido visto como un arreglo social *opuesto a* la acción colectiva contenciosa; como una forma de atomización y fragmentación del electorado o de los “sectores populares” (Rock 1972 y 1975), y como una forma de inhibir a la organización colectiva y de desalentar la participación política real y efectiva.¹⁰

La mayoría de los estudios académicos y las observaciones periodísticas concuerdan en que el predominio de este tipo de relación política frustra el surgimiento de la protesta. Sin embargo, si nos tomamos el trabajo de mirar más de cerca episodios específicos de beligerancia veremos que las redes clientelares están profundamente imbricadas en el *curso, génesis, y resultados* de la acción colectiva contenciosa. Los casos de Cutral-co y Plaza Huincul examinados anteriormente, ilustran claramente la relación entre el clientelismo y los orígenes de la protesta. En esta última sección, quiero explorar brevemente dos episo-

dios para demostrar la manera en que el funcionamiento de las redes clientelares también impacta en la forma (Santiago del Estero 1993) y los efectos (Salta 1997-2000) de la protesta. Además está decir, que se necesita una pormenorizada investigación empírica para entender los vínculos intrincados, y muchas veces ocultos, entre política clientelar y protesta popular.

Quizás el caso del *Santiagazo* de 1993 sea paradigmático en cuanto a la relación de las redes clientelares y la forma que adquirió la protesta. Las residencias de funcionarios y políticos locales que los manifestantes atacaron, saquearon y quemaron el 16 de diciembre habían sido definidas como “blancos” en los meses previos. La “precisión” con la que la multitud se movió de una casa a la otra —“precisión” en la que algunos funcionarios y periodistas vieron la prueba de la presencia de “agitadores”— ilustra, en realidad, la existencia de un itinerario tácito, que constituye una suerte de mapa que señala aquellas residencias que, en palabras de otro participante, “merecían ser quemadas”.

¿Cómo sabían los manifestantes quiénes lo “merecían” y quiénes no? La cartografía del fuego había sido construida en los meses previos mediante los reiterados escándalos de corrupción descritos en abundancia por el principal periódico local: “Lo que pasa es que en ese momento los blancos eran perfectamente visibles. Uno sabe quién es quién aquí en Santiago. Es chico, te conoces, los medios resaltan quién es quién... Era como que todo el mundo entendía que teníamos que ir ahí”, me explicaba Mariano a seis años de los hechos. Por otro lado, ese itinerario tácito seña-

¹⁰ Para una revisión crítica reciente, ver Gay (1998).

la las residencias de los jefes políticos, los dispensadores de favores personales más notorios; residencias que muchos manifestantes solían visitar con cierta frecuencia. Como me contaba Carlos, otro manifestante que encapsula en un comentario lo que debe ser objeto de detallada investigación:

Aquí, en Santiago, hay barras grandes que son multiuso, jóvenes marginales que el radicalismo, el peronismo, les paga el asado, los traslada, les da unos pesos y son las barras de los actos... Ellos conocen todos los mecanismos para manguear a todos, desde punteros políticos hasta ministros. Y ellos no son ni radicales ni peronistas, ellos funcionan para todos. Entonces, conocen la casa. Porque el político corrupto al llevarlos, les va haciendo conocer parte de su operatoria. Entonces esos tipos venían en bandada y la gente les indicaba. Frente a la casa, se ponían ahí, rompían la puerta y entraban...

Así como Cutral-co y Plaza Huinul, las localidades de General Mosconi, Aguaray, Salvador Mazza, Campamento Vespucio y Tartagal en la provincia de Salta, han sido particularmente devastadas por la privatización de YPF, con tasas de desempleo que oscilan entre el 30% y el 40% de la población económicamente activa, estas pequeñas ciudades, como sus contrapartes en la Patagonia, están siempre al borde de transformarse en pueblos fantasmas. Campamento Vespucio, por ejemplo, perdió hospital, escuela, correo, y destacamento policial desde la privatización en 1992. Esta área registra niveles altísimos de beligerancia con cortes de ruta que duraron semanas y que ocurrieron con mayor intensidad y participación desde 1997.

El 10 de noviembre de 2000, al intentar remover a los manifestantes de la ruta 34, la policía local asesinó al piquetero Aníbal Verón. Al día siguiente, manifestantes atacaron y quemaron el edificio municipal de Tartagal; la sucursal del Banco Nación; la oficina de un parlamentario peronista; las oficinas de la

compañía de energía local; de Atahualpa (compañía de transportes en la que trabajaba Verón hasta ser despedido pocos días antes de su muerte); del periódico provincial (“El Tribuno”), y algunos comercios. Las acciones de los manifestantes apuntan con claridad al cataclismo ocasionado por el abandono oficial y el consiguiente hiper desempleo, pero al mismo tiempo hablan de la corrupción de los políticos y funcionarios locales.

A seis meses de esta protesta, en la misma zona, los piqueteros demandaban trabajos, la renuncia del intendente y de los concejales y la intervención de los municipios porque, según los manifestantes, los intendentes distribuían “los subsidios de empleo entre sus punteros políticos y nosotros no tenemos nada que darle a nuestras familias”. Cuando uno ve imágenes de manifestantes que atacan edificios públicos y demandan la renuncia de sus representantes tiene que contextualizar estas acciones en el conjunto de prácticas políticas dominantes y en su impugnación por parte de quienes no forman parte de ellas. Cuando uno escucha a la piquetera salteña decir que “nadie quiere a esos guanacos” (en referencia a los políticos locales) más que pensar en protestas “anti-políticas” habría que pensar en el significado de esta expresión en el contexto de un Estado local cuya manera predominante de distribuir recursos es a través de redes partidarias.

Salta nos enseña una lección: los recursos materiales que los manifestantes reclaman (y en ocasiones obtienen), son distribuidos (en más de una oportunidad) mediante aceitadas máquinas partidarias; una forma de adjudicación que excluye a muchos manifestantes, produce una nueva fase de (la misma) protesta, suma un nuevo objeto de reclamos (los funcionarios locales) y una nueva demanda (transparencia).

Conclusiones y tareas futuras

Cuando se les pregunta por las razones que los llevan a cortar una ruta (razones que no

necesariamente constituyen una buena guía para entender la cadena causal que origina la protesta), los manifestantes en distintos puntos del país responden con una frase similar: “Es la única manera de conseguir que nos escuchén”. Y una manera, agregaría, que ha probado cierto éxito. En realidad se podría aventurar la hipótesis de que el florecimiento de esta modalidad durante los 90, está íntimamente relacionado con cierta efectividad en la obtención de las demandas que los manifestantes expresaban en cada episodio.

Dos ejemplos bastan para ilustrar esta suerte de contagio que le sigue al éxito relativo de un episodio. El 16 de mayo de 2000, un grupo de mujeres cortó la Ruta 22 en Central-co, pocos días después de que funcionarios nacionales negociaran una solución a otro conflicto en la provincia de Salta. Estas mujeres reclamaban los mismos “Planes Trabajar” que sus contrapartes en el norte, decían que “Los que cortan las rutas son los que reciben ayuda”. En noviembre de ese mismo año, luego de que los funcionarios firmaran un acuerdo con los líderes piqueteros de La Matanza y les concedieran todas sus demandas, 4 nuevas protestas con similares reclamos, ocurrían en Buenos Aires (La Plata, Bosques, San Francisco Solano y Sarandí) y en Salta.

Este contagio o “efecto dominó” debe ser estudiado con mayor detalle para examinar: el papel que juegan las organizaciones de manifestantes y los medios nacionales y locales en la difusión de información sobre las formas de protesta exitosas y las no-exitosas; y el rol del aprendizaje colectivo en la adopción del corte de ruta y los ataques a edificios públicos como modalidades importantes dentro de un repertorio emergente. Al mismo tiempo, se debe prestar particular atención a los actores que “enseñan” a los no iniciados las formas prácticas de la beligerancia (quemar llantas, bloquear rutas, defenderse de la represión), de la protesta.

También necesitamos investigación y análisis sobre las bases del éxito que, en ocasiones, obtienen los manifestantes. Una posible

razón se relaciona con uno de los elementos que dan forma a un repertorio, es decir, con los patrones de represión estatal. Los manifestantes usualmente bloquean rutas nacionales porque saben que sólo tropas de la gendarmería pueden removerlos de allí (o al menos, eso es lo que esperan), y la gendarmería no llega inmediatamente al lugar del conflicto (como sí lo haría la Policía local); permite así a los manifestantes lograr apoyo, organizarse, establecer contactos con autoridades locales para negociar una solución. Las formas de represión, a su vez, han determinado la modalidad de la protesta, su duración, su grado de violencia y su recurrencia en formas que aún no conocemos con profundidad.

El 7 de noviembre de 2000, un artículo publicado en “El Clarín” describía al corte de ruta como una forma de protesta que “nació en la Patagonia... y está ahora a las puertas de la capital federal”. Los cortes, los campamentos en plazas, los ataques a edificios públicos, están no sólo en el centro político del país, sino que se ubican en el corazón de las formas en que los argentinos actúan colectivamente a favor de sus intereses. Estamos, si Tilly está en lo cierto, en el comienzo de una nueva era.

Bibliografía

- Aronskind, R., 2001, *¿Más cerca o más lejos del desarrollo? Transformaciones económicas en los 90*. Buenos Aires: Libros del Rojas, UBA.
- Barbeito, Alberto y Rubén Lo Vuolo, 1993, *La Modernización Excluyente*. Buenos Aires: Losada.
- Beccaria, Luis y Néstor López, 1996, “Notas sobre el comportamiento del mercado de trabajo urbano,” en *Sin trabajo. Las características del desempleo y sus efectos en la sociedad argentina*. Luis Beccaria y Néstor López (Ed.) Buenos Aires: Losada, pp. 17-46.
- Benford, Robert y David Snow, 2000, “Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment.” *Annual Review of Sociology* 26: 611-639.

- Farinetti, Marina, 1999, "¿Qué queda del 'Movimiento Obrero'? Las Formas Del Reclamo Laboral En La Nueva Democracia Argentina." *Trabajo y Sociedad* 1, (Julio-Septiembre) <http://habitantes.elsitio.com/proit/zmarina.htm>.
- Favaro, Orietta, Mario Bucciarelli, y Graciela Luomo, 1997, "La Conflictividad Social En Neuquen. El Movimiento Cutralquense y Los Nuevos Sujetos Sociales." *Realidad Económica* 148: 13-27.
- Gay, Robert, 1990, "Community Organization and Clientelist Politics in Contemporary Brazil: a case study from suburban Rio de Janeiro". *International Journal of Urban and Regional Research* 14, N. 4: 648-665.
- _____ 1998, "Rethinking Clientelism: Demands, Discourses and Practices in Contemporary Brazil". *European Review of Latin American and Caribbean Studies* 65 (December): 7-24.
- Geertz, Clifford, 2000, *Available Light: Anthropological Reflections on Philosophical Topics*. New Jersey: Princeton University Press.
- Merklen, D., 1991. *Asentamientos en La Matanza. La terquedad de lo nuestro* Buenos Aires: Catálogos.
- Murmis, M. y S. Feldman, 1996, "De seguir así", en Luis Beccaria y Néstor López (ed.) *Sin trabajo. Las características del desempleo y sus efectos en la sociedad argentina*. Buenos Aires: Losada
- O'Donnell,Guillermo, 1996, "Illusions About Consolidation". *Journal of Democracy* 7, no. 2: 34-51.
- _____ 1998, *Contrapuntos*. Buenos Aires: Paidós.
- Rock, David, 1972, "Machine Politics in Buenos Aires and the Argentine Radical Party, 1912-1930". *Journal of Latin American Studies* 4, no. 2: 233-56
- _____ 1975, *Politics in Argentina: the Rise and Fall of Radicalism, 1890-1930*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rodríguez Larreta et al., 2000, *Descentralización de políticas sociales. Segundo informe de avance*. Buenos Aires.
- Rothén, D., 2000, *Global-local conditions of Possibility: the case of Education Decentralization in Argentina*. Ph.D. dissertation, Department of Education, Stanford University.
- Sánchez, Pilar, 1997, *El Cutralcazo. La Pueblada De Cutral-Co y Plaza Huincul*. Buenos Aires: Cuadernos de Editorial Ágora.
- Schuster, Federico, 1999, *La protesta social en la Argentina democrática: balance y perspectivas de una forma de acción política*. Buenos Aires (mimeo).
- Scribano, Adrian, 1999, "Argentina 'Cortada': Cortes de ruta y visibilidad social en el contexto del ajuste." En Margarita López Maya (ed.) *América Latina en los Años del ajuste*. Venezuela: Nueva Sociedad, pp. 45-72.
- Snow, David E. y Robert Benford, 1988, "Ideology, frame resonance, and participant mobilization." En Bert Klandermans, Hanspeter Kriesi y Sidney Tarrow (ed.) *From Structure to Action: Comparing Social Movement Research*. International Social Movement Research, Vol.1. Greenwich, Conn: JAI Press, pp. 197-217.
- _____ 1992, "Master Frames and Cycles of Protest," En Aldon Morris y Carol McClurg (ed.) *Frontiers in Social Movement Theory*. New Haven: Yale University Press, pp. 133-155.
- Tarrow, Sidney, 1996, "The People's Two Rhythms: Charles Tilly and the Study of Contentious Politics," *Comparative Studies in Society and History*: 586-600.
- _____ 1998 *Power in Movement. Social Movements and Contentious Politics*, New York: Cambridge University Press.
- Tilly, Charles, 1986, *The Contentious French*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- _____ 1992, "How to Detect, Describe, and Explain Repertoires of Contention". *The Working Paper Series* 150.
- _____ 1995, "Contentious Repertoires in Great Britain," en Mark Traugott (ed.) *Repertoires and Cycles of Collective Action*. Durham, NC: Duke University Press.
- _____ 1997, "Parliamentarization of Popular Contention in Great Britain, 1758-1834", *Theory and Society* 26: 245-73.

Movimientos étnicos y cultura política en Ecuador*

Carlos de la Torre**

Este artículo discute las posibilidades de construir ciudadanía en un contexto institucional y cultural poco propicio para el efecto, a partir del análisis de las demandas de los movimientos indígena y afroecuatoriano a la sociedad y al Estado. Si bien los movimientos étnicos han tenido un profundo impacto democratizador e innovador, muchas de sus demandas y prácticas se basan en el legado cultural e institucional con el que otros grupos subalternos negociaron prebendas y privilegios con el Estado. Parecería que la incorporación de los indígenas y de los afroecuatorianos no se basa tanto en la creación de ciudadanía nuevas, como en relaciones paternalistas, en su búsqueda de inserción en nuevos pactos corporatistas, y en la resignificación de la noción populista de “pueblo”. El artículo tiene tres secciones: la primera, analiza la incorporación corporatista de diferentes grupos al Estado. La segunda, estudia los legados del

populismo, como discurso y forma de entender la democracia en los eventos que culminaron en el golpe de Estado del 21 de enero del 2000. La tercera sección analiza la cultura política de quienes son discriminados por su raza y etnicidad a través de sus respuestas cotidianas al racismo.

El corporatismo

Marx escribió, “la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos” (1951: 224). Así, los intentos de los grupos y asociaciones negras por organizarse como un movimiento social, y gran parte de las demandas del movimiento indígena se basan en las tradiciones corporatista y populista del proceso de incorporación de los sectores populares al Estado. Las discusiones sobre el corporatismo latinoamericano de los años 70 dejaron en claro que a este tema había que verlo como una serie de estructuras que organizan la relación entre la sociedad civil y el Estado. En el corporatismo, el Estado “crea grupos de interés, intenta regular su número y les da la apariencia de tener un cuasimonopolio representacional con prerrogativas especiales. A cambio de estas prerrogativas y monopolios, el Estado demanda el derecho de monitorear a los grupos representados” (Stepan 1978: 46).

El Estado ecuatoriano ha sido el marco de referencia en las luchas por recursos y preben-

* Se presentaron versiones de este trabajo la reunión del Latin American Studies Association, Washington D.C., septiembre del 2001 y en FLACSO-Ecuador en diciembre del 2001. Agradezco a los participantes en estas conferencias y en especial a Carmen Martínez, Francisco Rhon, Manuel Alcántara y Flavia Freidenberg por sus comentarios y sugerencias.

** Profesor de Sociología en el Departamento de Sociología y Antropología de Northeastern University Boston. Autor de *Populist Seduction in Latin America*. Athens: Ohio University Press, 2000 y *Afroquiteños: Ciudadanía y Racismo*. Quito: CAAP, 2002.

das de diferentes grupos corporativamente constituidos (León 1991, 1994, 1997). Así, en los años 30 se reglamentó que los grupos empresariales pertenecieran a las Cámaras de Agricultura, Comercio o Industria (Conaghan 1988: 85). El Estado no sólo organizó a los grupos hegemónicos de poder, éstos vieron en él un botín y un garante de sus prerrogativas y privilegios, a tal grado, que en palabras de Fernando Bustamante (2000: 44), “la reproducción de buena parte del sector empresarial se ha basado en una compleja maraña de subsidios, protecciones arancelarias, prebendas y rentas políticamente generadas.” Éste fue también el mecanismo a través del cual el Estado incorporó a los diferentes sectores populares. Éstos negociaron recursos y prebendas, en su calidad de trabajadores públicos, obreros sindicalizados y, a partir del último retorno a la democracia, durante el gobierno de Roldós-Hurtado (1979-84), el pacto corporatista se amplió a los grupos previamente excluidos de él como las mujeres, los pobladores urbanos, los campesinos y los indígenas (León 1997).

El legado de esta tradición corporatista y populista consiste en que si un ciudadano común no pertenece a un grupo organizado, que es o busca ser reconocido por el Estado, es invisible, está solo y aislado. Para que un conjunto de personas que comparte un problema o una condición social, sea reconocido como interlocutor por parte del Estado tiene que conformarse como grupo y exigir que se lo reconozca. Por esto, las prácticas corporativas del Estado, promueven por un lado, la organización social: se otorgan incentivos para que diferentes grupos se organicen y puedan acceder a recursos y prebendas estatales; por otro, también se reconoce a los representantes y portavoces de los diferentes grupos organizados con quienes se negocia la transferencia de recursos y además, como lo anota Jorge León (1991: 377; 1997: 36), se promueve la movilidad social de los líderes de estos grupos al incorporarlos a las estructuras estatales como empleados y consultores.

Cuando el Estado otorga incentivos para



Gonzalo Vargas

que las demandas sociales se canalicen a través de negociaciones con grupos particulares, intenta regular y normalizar la protesta social. Algunas formas de protesta son vistas como más aceptables y son premiadas con la respuesta estatal favorable, mientras que otras no sólo no tienen posibilidades realistas de éxito sino que también pueden ser reprimidas. Al incorporar a los líderes de las diferentes organizaciones sociales al Estado también se regula la protesta pues los intereses de muchos líderes obedecen, a veces, más a sus necesidades de movilidad social que a las demandas de las bases. Es así como en muchos casos al acceder a puestos estatales los líderes son cooptados por el aparato estatal.

El Estado se vuelve referente esencial de la protesta social y es visto como el árbitro de los conflictos y como la fuente de recursos para los grupos específicos. Su capacidad de negociar las demandas de los diferentes grupos depende de sus recursos fiscales. Es interesante que pese a la crisis fiscal del Estado ecuatoriano que empieza en los años 80, los nuevos grupos corporativos como las mujeres, los indígenas y los afroecuatorianos negocian los recursos que son entregados al Estado por organismos internacionales. El Banco Mundial comprometió 40 millones de dólares para proyectos de desarrollo de los indígenas y de

los afroecuatorianos por 4 años (*Hoy*, 8 de febrero, 2001). Algunos estados europeos como Holanda, Bélgica y Dinamarca incluyeron políticas específicas para los grupos indígenas en sus programas de cooperación para el desarrollo (Dandler 1999: 127), y diferentes ONG europeas y norteamericanas entregan fondos para la “cuestión étnica”.

A través de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador -CONAIE-, el movimiento indígena se ha constituido en un nuevo grupo corporativo, integrado al Estado. Los indígenas han articulado demandas étnicas como la alfabetización en kichwa y shuar durante el gobierno de Osvaldo Hurtado 1981-1984; la educación bilingüe que fue organizada a través de la CONAIE durante el gobierno de Rodrigo Borja 1988-1992, y los cambios constitucionales que reconocen el carácter pluricultural y plurinacional del Ecuador en la nueva Constitución de 1998, con propuestas que canalizan recursos tanto internacionales como estatales para el desarrollo, a través de las organizaciones indígenas. Además, desde el primer levantamiento de 1990, los indígenas han incorporado demandas generales que trascienden a sus intereses corporativos étnicos, como el caso de los planteamientos que cuestionan las políticas de ajuste estructural, de eliminación de subsidios a la luz eléctrica o del gas para uso doméstico y, recientemente, la adopción del dólar como la nueva moneda nacional. Las demandas indígenas han sido exitosas al cambiar la imagen de la identidad nacional de mestiza a plurinacional; al cuestionar las percepciones racistas de pasividad y falta de inteligencia de los indígenas, algunos de los cuales ocupan en la actualidad, altos cargos políticos y públicos, y al incorporar a una parte de la intelectualidad indígena al Estado, como representante de su grupo y como intermediaria entre éste y el Estado.

Los afroecuatorianos son un nuevo grupo que busca incorporarse al Estado. El interés de los líderes del movimiento negro de ser reconocidos como grupo corporativo coincide con el interés del Estado y del Banco Mundial de

consolidar un movimiento negro unitario con quien se pueda negociar, pues no les conviene que existan varios líderes que dicen representar a los afroecuatorianos. El Estado ha tenido un papel activo en la promoción de una organización unitaria de los afroecuatorianos. Durante el gobierno de Fabián Alarcón (febrero 1997- agosto 1998), se promovió la creación del Plan Nacional de Derechos Humanos del Ecuador que incluye propuestas específicas sobre los derechos colectivos de los pueblos negros. Entre éstas se incluye la de “fortalecer y consolidar el movimiento afroecuatoriano” (Chiriboga Zambrano y Darlic Mardesci 1999: 14). El gobierno de Jamil Mahuad auspició, según reporta la prensa, el Primer Congreso Nacional de Negros en marzo de 1999, en este escenario se conforma la Confederación Nacional Afroecuatoriana -CNA-.

El Estado no sólo ayuda a consolidar un movimiento unitario que aglutina a los negros de la sierra y costa, también negocia con los líderes negros la creación de organismos estatales que les canalicen recursos. Luego del fallido intento del gobierno de Abdalá Bucaram (agosto 1996-febrero 1997) de organizar el Ministerio Étnico, durante el gobierno de Fabián Alarcón (febrero 1997- agosto 1998) se crea el Consejo para el Desarrollo de los Pueblos Indios y Negros -CONPLADEIN-. Este organismo que incluía a indígenas y negros, se fragmentó por las rivalidades que surgieron entre estos grupos en torno a cómo administrar los recursos del Programa de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador -PRODEPINE-, financiado por el Banco Mundial. Los indígenas formaron el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador -CODENPE- y los negros, la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano -DAE-, para canalizar los recursos del PRODEPINE (“El Universo”, 28 mayo, 2000).

Es interesante anotar que la propuesta que más publicidad ha tenido es la de creación de comarcas y palenques negros, sobre todo el planteamiento de crear “La Gran Comarca del Norte” en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas (Consejo



...pese a su impacto democratizador... parecería que la incorporación de los indígenas y de los afroecuatorianos no se basa tanto en la creación de ciudadanía nuevas, como en relaciones paternalistas, en su búsqueda de inserción en nuevos pactos corporatistas y en la resignificación de la noción populista de "pueblo"

de Palenques 1999, 2000; Halpern y Twine 2000). La Gran Comarca, que incluiría a negros y a indígenas del norte de Esmeraldas, les brindaría un "territorio propio" para "afianzar nuestra identidad étnica y cultural y mantenernos [...] como pueblo culturalmente diferenciado", tener "poder político-administrativo y representación en el Estado", "administrar, manejar y usar de manera sostenible nuestros recursos naturales" y "tener participación directa en la elaboración, ejecución y administración de los proyectos de desarrollo" (Consejo de Palenques 1999: 6-8).

Al igual que en otros países de la región como Colombia (Wade 1998), estas propuestas ilustran un proceso de "relocalización de la 'negritud' en estructuras de alteridad que cada vez se parecen más a la 'indianidad'" (Wade 1997: 37). El que muchas organizaciones y movimientos negros presenten sus demandas al Estado como si fueran indígenas se explica, según Peter Wade, por la forma en la que el Estado construyó las categorías "negro" e "indígena" y por los éxitos de las demandas de los movimientos indígenas a los estados nacionales en las últimas dos décadas.

Los estados latinoamericanos, desde la época colonial, han construido a los indígenas como personas con una cultura diferente, que necesitan de un trato especial y con obligaciones específicas ante el Estado. Así, la categoría de indio fue una construcción administrativa colonial que reguló el pago del tributo indígena hasta el siglo XIX (en el Ecuador hasta 1857). Según Wade, desde los años 20 y 30 las políticas estatales indigenistas que rescataban el glorioso pasado de las civilizaciones prehispánicas en museos, monumen-

tos, en el arte y la literatura se basaron en políticas estatales que suponían la necesidad de los indios de un reconocimiento especial. Los antropólogos y sociólogos también estudiaron a los indígenas como un grupo con una cultura específica que se manifiesta en prácticas tales como la reciprocidad y la comunidad, supuestamente diferentes de las prácticas culturales del resto de la población.

Los descendientes de los esclavos africanos no tuvieron, con las excepciones de Cuba y Brasil (Wade 1997: 33), un reconocimiento especial o positivo por parte del Estado. Fueron vistos como ciudadanos normales o fueron invisibilizados en sus países. En todo caso, a diferencia de los indígenas, no fueron institucionalizados como "otros" que tenían necesidad de políticas estatales específicas. Recién en los años 90 se crean políticas estatales específicas para los afroecuatorianos, vistos como un grupo con una cultura diferente y necesidades particulares.

Al ser construidos por el Estado, por los científicos sociales y por las iglesias como una cultura diferente, con necesidades propias, y al existir toda una tradición de políticas estatales específicas para los indígenas fue más fácil que se crearan más organizaciones e identidades indígenas que negras, pues como lo demuestra Anthony Marx (1998), para que se creen identidades raciales y étnicas es fundamental que el Estado categorice a la población con políticas que diferencien a los distintos grupos étnicos. Las políticas estatales también facilitaron el proceso organizativo de quienes fueron construidos como grupos étnicos o raciales diferentes. Como resultado de esta tradición estatista, las demandas indíge-



nas fueron atendidas por los estados latinoamericanos. En los años 90, en varios países se lograron reformas constitucionales que señalan el carácter pluricultural o plurinacional de las naciones, que reconocen sus “territorios ancestrales” a los indígenas y se crean políticas específicas de educación bilingüe, de rescate de la medicina tradicional y de respeto al derecho consuetudinario en las comunidades indígenas, entre otras.

Debido al éxito de ciertas demandas de los movimientos indígenas, algunos afrolatinoamericanos en Colombia (Wade 1998) y Ecuador están siguiendo este patrón para negociar con el Estado. Frente a éste y a los organismos internacionales se presentan como portadores de una cultura diferente que ocupa un territorio ancestral y demandan se le reconozca su territorio, se les otorgue recursos para rescatar y afianzar su cultura y sus formas de organización económica, y para defender sus territorios de la penetración de las empresas capitalistas que los desplazan. Es importante anotar que tanto las demandas indígenas como las de los afroecuatorianos se basan en la Convención N° 169 de 1989, de la Organización Internacional del Trabajo - OIT-. Este instrumento internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas estipula el derecho a la autoidentificación de diferen-

tes grupos como indígenas, su derecho a decidir sus prioridades de desarrollo y a controlarlo, la urgencia de que sus territorios ancestrales sean respetados y a que se reconozca a la medicina tradicional, así como aquel referido a retener “sus costumbres e instituciones, incluyendo los métodos tradicionales para resolver conflictos y ofensas de los miembros de las comunidades, siempre y cuando no sean incompatibles con los derechos fundamentales estipulados por el Derecho nacional e internacional” (Dandler 1999: 121).

Los proyectos de constituir palenques y comarcas, por un lado, como lo reconocen Halpern y Twine (2000), son parte de la resistencia de las comunidades rurales de esta zona al despojo de sus tierras por parte de empresas capitalistas camaroneras, madereras y de agroexportación. Un problema que presenta este proyecto radica en que asume que no hay conflictos entre indígenas y afroecuatorianos en el norte de Esmeraldas, entre tanto las etnografías de Norman Whitten sobre esta zona presentan una visión menos idílica, pues demuestran que los indígenas ven con recelo que grupos cada vez más numerosos de afroecuatorianos se asienten en sus territorios, tampoco ven con buenos ojos las uniones entre hombres negros y mujeres indígenas (1974: 51). Las zonas donde se propone crear palenques tienen altos índices de pobreza y no queda claro si estos palenques pudiesen convertirse en reservas negras, tipo reservaciones indígenas estadounidenses, en los lugares más pobres y marginados de la sociedad.

En todo caso, y pese a los problemas que presenta el proyecto de constitución de palenques y comarcas, esta propuesta ilustra el patrón corporatista con el que los grupos subalternos negocian con el Estado. Las comarcas y palenques permitirán que algunas organizaciones de afroecuatorianos manejen recursos estatales e internacionales para proyectos de desarrollo. La administración de estos proyectos, la elaboración de políticas etnoeducativas, el rescate de las tradiciones permitirán que algunos líderes e intelectuales negros accedan a puestos de trabajo estatales o

cuasiestatales y manejen recursos económicos. La movilidad social de algunos líderes se complementaría con su reconocimiento como interlocutores ante el Estado. El ser líder o representante del “pueblo negro” dota de una serie de privilegios económicos y de *status* social.

Además, para que estos líderes representen a los negros deben establecer activa y continuamente las diferencias entre los negros y los otros grupos. Por esto se rescatan y se crean tradiciones en todo tipo de manifestación cultural como la música, la poesía, la medicina tradicional, entre otras, y “las formas ancestrales para resolver conflictos internos” (Consejo de Palenques 2000: 25). Como lo anota Charles Tilly (1998: 61-62), “los líderes de los grupos étnicos muchas veces adquieren un interés en mantener las distinciones o diferencias entre las clases dominantes y sus seguidores; se vuelven partidarios de la educación bilingüe, de instituciones culturales diferentes y de la protección legal de categorías” étnicas. Por esto estos líderes buscan preservar e incrementar las distinciones categóricas entre los afroecuatorianos y los otros grupos étnicos. El que a corto y mediano plazo esta búsqueda de la diferencia contribuya o no a reducir la desigualdad social entre negros y no negros es una pregunta abierta cuya respuesta dependerá de que los palenques y comarcas se vuelvan reservaciones desde las cuales los sectores marginados de la sociedad administren la pobreza de sus regiones excluidas, o de que exista un verdadero interés del Estado por otorgar recursos para desarrollar estas áreas.

Es interesante anotar que algunos líderes del movimiento afroecuatoriano aceptan las visiones dominantes en torno a que la verdadera negritud se expresa en las áreas rurales, tal vez debido a la búsqueda de espacios territoriales desde los cuales negociar con el Estado, estrategia que dio buenos resultados a las organizaciones indígenas de la amazonía. Estas visiones del negro como campesino contribuyen a que los negros no sean vistos en sus realidades actual y futura, es decir co-

mo habitantes negros de ciudades en las cuales se los discrimina y se los relega a las ocupaciones más humildes. Es interesante anotar además, que estas propuestas de volver al campo se basan en visiones urbanas de lo rural, que lo idealizan como área donde supuestamente se asienta la cultura negra ancestral. Ésta es vista como una serie de prácticas y creencias tradicionales específicas que comparten todos los afroecuatorianos que existen sin conflictos internos, y desconoce los problemas de pobreza y las historias de explotación de estas regiones.

La búsqueda por parte de los líderes del movimiento afro de la verdadera cultura negra, que determinaría lo que significa ser negra o negro, tiene implicaciones autoritarias. ¿Quién tiene la autoridad para dictaminar qué significa ser negro o negra? ¿Quién será incluido o excluido de la verdadera negritud? Si como se anotó, para ser verdaderamente negro hay que pertenecer a las áreas ancestrales donde históricamente ha existido la negritud, ¿qué hacer con los negros de la ciudad? Por último, Norman Whitten (1974) demuestra que las relaciones de género no son igualitarias dentro de las comunidades negras del norte de Esmeraldas. ¿Es apropiado y liberador que se busquen formas tradicionales de resolver conflictos y formas de “poder y autoridad ancestrales” que relegan a las mujeres a un rol secundario?

El “pueblo” y el populismo

Una vez que “el pueblo” es una construcción discursiva más que una realidad sociológica evidente y que “es una palabra cuyo significado tiene tantos matices como aplicaciones tiene el término” (Samuel 1984: 23), es importante analizar los usos de esta noción por parte de los políticos y de las organizaciones sociales que dicen encarnarlo. A continuación, hago un resumen bastante escueto de los avatares que ha sufrido este término desde los años 30 y 40 en que emerge el populismo con José María Velasco Ibarra, hasta los usos



Los apelativos e invocaciones a los grupos subalternos como "el pueblo" han ido acompañados por movimientos que han concebido que la democracia no debe basarse en el respeto a una normativa y a una serie de procedimientos y reglas de juego... más bien, es vista como una forma directa de participación popular...

que se dan de esta categoría, por parte de algunos líderes del movimiento indígena.

Para Velasco Ibarra, en los años 30 y 40, "el pueblo" fue una construcción política. Éste se enfrentaba a la oligarquía que usufructuaba del poder a través del fraude electoral. El discurso velasquista tuvo gran eficacia, pues la mayoría de sectores organizados de la sociedad veían a la política como la arena donde se constituía el poder de la sociedad. Como se evidenció en "La Gloriosa" con las insurrecciones militar-populares del 28 y 29 de mayo de 1944 en contra de un presidente liberal, la lucha política entre la oligarquía liberal y el pueblo velasquista fue moral y abarcó todos los aspectos de la sociedad. Además, esta articulación de lo popular excluía a quienes no podían votar e imaginaba al Ecuador como un país de ciudadanos blancos y mestizos en el que los indios y los negros estaban fuera de la política.

A partir de la fundación de Concentración de Fuerzas Populares -CFP- realizada por Carlos Guevara Moreno en 1949, los términos "pueblo" y "oligarquía" adquieren, cada vez con mayor fuerza, un contenido social. El término profundamente ambiguo y poco específico de "pueblo" incluyó a los pobres, a los trabajadores del sector informal de la economía, a los marginados y a los excluidos. Obviamente, estos cambios en el sentido de la palabra "pueblo" reflejan el incremento del número de pobres que trabaja en el sector informal y que vive en las ciudades en condiciones de exclusión. Las elecciones de 1996, en las que ganó el candidato del Partido Roldosista Ecuatoriano -PRE- Abdalá Bucaram, demuestran cómo la oposición entre la "gente

bien" y los excluidos abarca todos los ámbitos de la sociedad.

El discurso de Abdalá Bucaram articuló la lucha entre el pueblo y la oligarquía como una confrontación antagónica y moral predominantemente simbólica y cultural. Bucaram no cuestionó las bases económicas de la dominación, pues dijo creer que el mercado capitalista iba a democratizar la sociedad acabando con los privilegios estamentales y los monopolios de los empresarios de la oligarquía tradicional. Su discurso apuntó, más bien, al reconocimiento de formas de ser y de vivir que dijo eran características de las personas comunes y que se diferenciaban de las de los "añiados." Así, "el pueblo" de Bucaram se distinguió de la oligarquía por lo que el líder dijo son su manera de vestir, lenguaje, gusto culinario y formas de masculinidad. Esta confrontación discursiva incluyó dentro de la categoría "pueblo", a grupos tan disímiles como las elites empresariales marginales de origen libanés de Guayaquil -vistas por las elites tradicionales como contrabandistas-, hasta los más pobres y excluidos.

El peso de las tradiciones políticas populistas, que se basan en la articulación discursiva de lo que diferentes líderes consideran como "lo popular", ha influido para que las diferentes organizaciones sociales que buscan negociar sus prebendas específicas con el Estado, recurran a este discurso y a esta retórica presentándose como la encarnación del "verdadero pueblo ecuatoriano". Así, cuando los sindicatos obreros, por ejemplo, negociaron sus necesidades específicas de forma corporativa con el Estado, dijeron "representar y encarnar los anhelos y aspiraciones de todo el pueblo". Ya

que el pueblo no se puede autorepresentar y autoconstituir, pues no está ahí como un dato empírico sino que es una relación de posicionalidades discursivamente construida siempre se necesita de expertos o de elites que expresen, articulen, descubran y glorifiquen lo que ellos consideran como “lo popular”. Esta búsqueda del pueblo, no sólo legitima a quienes se autoproclaman como sus portavoces y su encarnación, también se basa en la exclusión de quienes no son pensados dentro del campo de lo popular y que, por lo tanto, o son parte del bloque en el poder o no existen en el imaginario y discurso políticos.

Así, los indígenas y los negros no fueron parte de la construcción discursiva “pueblo” articulada por Velasco Ibarra, ni estuvieron presentes en la construcción del “pueblo” que realizaron los sindicatos obreros de inspiración marxista o demócratacristiana.

Parece ser que el concepto de “pueblo” usado por los líderes indígenas se ha transformado en esta última década. Cuando la CONAIE irrumpió en la esfera pública con el levantamiento indígena de 1990 los líderes dijeron ser “pueblos o nacionalidades indígenas que buscaban una ciudadanía que los reconociera como ciudadanos diferentes” (León 1994). Cuando algunos líderes de la CONAIE se tomaron el Congreso el 21 de enero del 2000, el presidente de esta organización Antonio Vargas, articuló una noción de pueblo diferente cuando dijo “el pueblo ecuatoriano ha triunfado” (“El Comercio” 22 de enero, 2000). Según este líder “el pueblo” serían quienes ocuparon el Congreso, es decir, los indígenas y los militares liderados por el Coronel Lucio Gutiérrez quien también incluyó a los indígenas dentro de esta categoría: “hoy el pueblo ecuatoriano ha tomado la decisión de refundar el país” (Ibid).

Los apelativos e invocaciones a los grupos subalternos como “el pueblo”, han ido acompañados por movimientos que han concebido que la democracia no debe basarse en el respeto a una normativa y a una serie de procedimientos y reglas de juego. La democracia, más bien, es vista como una forma directa de par-

ticipación popular, como la ocupación de espacios públicos, la aclamación de líderes y las chiflas e insultos a los oponentes. Por esto la política populista se basa en la constante aclamación y legitimación plebiscitaria del líder. La política populista sólo puede tener políticos que encarnen los “buenos” valores populares o sus rivales vistos como enemigos del pueblo. Los políticos se convierten en ventrílocuos que hablan en nombre del pueblo, dicen personificarlo y lo constituyen como pueblo. Esta categoría se transforma en un principio de legitimidad del poder bastante ambiguo. Por un lado, los políticos tienen que personificarlo, constituirlo y mimarlo. Por ello, orquestan manifestaciones y mítines para demostrar y escenificar la voluntad popular y también distribuyen recursos y prebendas para su pueblo. Pero, por otro, la voluntad popular sólo es pensada como un dato moral-ético homogéneo que no admite divergencias, contradicciones o variaciones. Esta apropiación del poder político en nombre de los intereses del pueblo, que los políticos dicen encarnar, lleva a los peligros del autoritarismo populista. Así, quienes se autoproclaman como su encarnación se sitúan más allá del respeto a las normas y procedimientos de la democracia liberal, que son vistas como obstáculos para conseguir las verdaderas aspiraciones del pueblo que, por supuesto, son construidas de acuerdo a los caprichos de los líderes.

Las acciones colectivas del 21 de enero del 2000, que terminaron en el derrocamiento del presidente Jamil Mahuad, forman parte de esta tradición populista de ver la democracia como la ocupación de espacios públicos. Los indígenas, sus aliados de izquierda y los militares ocuparon los centros donde se asienta el poder político y del cual se sienten excluidos: el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el Palacio Presidencial. La toma de espacios públicos en nombre del pueblo fue vivida como una forma directa de ejercer la democracia. Desde una tradición populista e izquierdista, la democracia fue conceptuada como un sistema corrupto que no representa los verdaderos intereses del pueblo. Como las instituciones y

las normas del convivir democrático no se percibieron como incluyentes, no asombró que los líderes indígenas formaran alianzas con los militares para dar un golpe de Estado al que lo caracterizaron como un “gran movimiento de protesta popular”. Es interesante que los golpes de Estado del 5 de febrero de 1997 en contra de Bucaram, y del 21 de enero del 2000 en contra de Jamil Mahuad fueran dados en nombre del “pueblo movilizado”, en este caso mayoritariamente indígena, que se toma las calles para refundar la democracia. Parecería que, al menos en estos dos momentos de efervescencia colectiva, se resignificó la categoría de “pueblo”. Los indígenas, dejaron de ser los excluidos, y se transformaron en la encarnación del “pueblo virtuoso”.

La falta de fe en la democracia de algunos líderes del movimiento indígena tal vez se explique por el incremento de su marginación y pobreza en las últimas décadas, que coincide con el último período de gobiernos civiles. Desde la crisis de los años 80, como lo anota Andrés Guerrero (2001: 222-223), los salarios urbanos que eran fundamentales para la reproducción de los campesinos indígenas, casi desaparecen. Los migrantes jóvenes no consiguen trabajo en el sector formal de la economía y tienen que subsistir del comercio informal. El Estado además, recorta los programas de salud, educación, vivienda y de construcción de carreteras. Me parece que la pobreza no explica totalmente su falta de apego a las prácticas de la democracia liberal. Más bien esta falta de fe es producto de una tradición populista de no respetar la normatividad democrática y de la visión instrumental de la democracia que comparten la mayoría de políticos del país sin distinción de tendencias ideológicas, etnicidad y de sus discursos y autoproclamas como verdaderos demócratas.

El estado de derecho y las luchas por la igualdad en la vida cotidiana¹

Se ha analizado el peso de las tradiciones corporatistas y populistas en la forma en que los

líderes de las organizaciones indígenas y afroecuatorianas negocian con el Estado y con el sistema político. Esta sección estudia las estrategias de la gente común negra e indígena para acomodarse o resistir a la dominación étnica y racial. El estudio de las estrategias con las que los grupos discriminados sobrellevan su situación, que los marca como inferiores y los margina de los recursos que son otorgados a los miembros de los grupos dominantes, es una puerta de entrada privilegiada para estudiar la cultura política de los grupos subalternos y el significado que tiene la ciudadanía en su vida cotidiana. Los miembros de los grupos racializados como inferiores han desarrollado una serie de estrategias para resistir o acomodarse a la discriminación racial en el día a día. Éstas se basan en un repertorio de prácticas y discursos que utilizan su dignidad para negociar el acceso a recursos económicos, culturales y políticos básicos o en casos extremos, su integridad física. Los actores sociales, por lo general, recurren a estas estrategias casi espontáneamente pues las aprenden al observar las respuestas de familiares y amigos al racismo, o de sus éxitos o de sus errores en el pasado.

Al analizar el último proceso de democratización en América Latina, Guillermo O'Donnell (1999: 320) señala que se han dado procesos “truncados de ciudadanía o ciudadanías de baja intensidad” que si bien respetan y garantizan el derecho al voto, no lo hacen con los derechos civiles de los ciudadanos. Así, de acuerdo con O'Donnell, en la mayoría de países de la región, con excepción de Costa Rica y Uruguay, no se vive dentro de un estado de derecho. Debido a que no hay igualdad ante la Ley, el sistema legal no otorga estabilidad y regularidad a las relaciones de los ciudadanos con el Estado y a las interacciones entre ellos. Esto significa que mientras los poderosos están más allá de la Ley, porque cuando les conviene pueden escapar de ésta a través de la corrupción o de sus contactos con

¹ Esta sección está basada en mis trabajos sobre racismo y vida cotidiana. (Véase De la Torre 1996 y 2002)

los magistrados que no tienen que rendir cuentas a nadie sobre su actuación, los pobres y los miembros de los grupos racializados como inferiores sienten la Ley como un sistema que los oprime y los margina. Debido al carácter drástico de las leyes, gran parte de la población está al margen de lo legal y es vulnerable a la represión policial cuando, por ejemplo, los vendedores ambulantes ocupan el espacio urbano sin permisos de venta o cuando los pobres invaden o se asientan o terrenos para construir viviendas. Además, la Ley no garantiza que las agencias estatales traten a todos los ciudadanos como iguales. Para que los pobres y los miembros racializados como inferiores sean atendidos en las oficinas burocráticas o para que tengan acceso a sus derechos a la educación pública o a la salud tienen que suplicar favores o ir con recomendaciones de notables para que los funcionarios de Estado cumplan con sus deberes y atiendan y solucionen sus pedidos.

Ya que los derechos constitucionales de ciudadanía no protegen a la gente común de la arbitrariedad de los agentes represivos del Estado y de los ciudadanos poderosos, los pobres y los excluidos dependen de patrones poderosos o de políticos para que los protejan de la arbitrariedad policial o de los ricos. La debilidad de las prácticas ciudadanas contrasta con la fuerza del paternalismo como mecanismo para acceder a recursos estatales, a posibilidades de empleo y a la movilidad social.

En condiciones de fuerte desigualdad, en aquellas sociedades en las cuales los derechos ciudadanos están escritos en la Ley pero no funcionan en lo cotidiano, para los pobres y las personas de grupos étnicos racializados como inferiores los contactos personales con los miembros de las clases dominantes dan protección de la arbitrariedad policial y acceso a recursos a los cuales de acuerdo con la Ley se tiene derecho pero no acceso. Así, los indígenas y los afroecuatorianos, al igual que otros pobres y desamparados, usan sus contactos con los “notables” para acceder a derechos fundamentales como: un cupo en la escuela o en el colegio, una cama en el hospital, o para

conseguir empleo. De esta manera, los individuos del grupo dominante todavía pueden ejercer una gran influencia al definir las características morales y éticas que deben tener sus subordinados para merecer sus favores, de manera que encajen dentro de sus visiones de quién es un buen subordinado.

Si bien el paternalismo es la estrategia más común con la que los indígenas y los afroecuatorianos negocian su integridad y acceso a derechos, hay ocasiones en que articulan discursos y prácticas basadas en la ciudadanía para resistir al racismo. Muchos entrevistados indígenas y afroecuatorianos usaron el discurso de la igualdad y de los derechos ciudadanos en sus discusiones y propuestas de qué hacer para acabar con el racismo. Por ejemplo, un profesor afroecuatoriano manifestó: “Estoy buscando aceptación, que seamos tratados con los mismos derechos y deberes que todo el mundo. Eso es lo único que estamos pidiendo y yo estoy pidiendo eso, no con gritos, no con llantos, sino con un trabajo, con mi sacrificio, con mi esfuerzo”. Un estudiante universitario indígena anotó, “uno como indio tiene que demostrar la dignidad de uno que es libre en un país democrático en donde hablan de igualdad. Y no sólo debe haber privilegio para los mestizos sino también privilegio y mejores condiciones para los indios”.

La lucha colectiva en contra de la violencia policial es una estrategia que privilegia los derechos humanos y la igualdad de los afroecuatorianos. Por esto “los plantones frente a las instituciones públicas,” y los recursos de *habeas corpus* para sacar de la cárcel a personas detenidas injustamente son mecanismos que usa la Federación de Organizaciones Negras de Pichincha para demandar sus derechos, visibilizar el problema de los negros con la Policía y buscar aliados con grupos que luchan por los derechos humanos. Es interesante que la estrategia de algunas organizaciones negras como la Afro 29 de Quito sea la de otorgar un carné de identificación a sus miembros, a través de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, para que lo presenten cuando los policías les pidan una identificación.

Conclusiones

Este trabajo ha analizado las ambigüedades de las demandas y de las acciones de las organizaciones afroecuatorianas e indígenas para la democratización de la sociedad. Por un lado, es indudable que el movimiento indígena y las organizaciones afroecuatorianas han tenido un profundo impacto democratizador. Muchas de sus demandas como la lucha contra la corrupción y la impunidad de los poderosos o las prácticas que resisten la discriminación a través de la construcción de la ciudadanía, tienen un gran potencial para profundizar el significado de la democracia. Los movimientos étnicos han cuestionado las imágenes racistas creadas desde la época colonial para marginar a quines representan de los recursos y oportunidades a los que han tenido acceso los blancos y los mestizos. Estos movimientos también han promovido la revalorización de identidades indígenas y negras. Y, por primera vez en la historia, los líderes e intelectuales indígenas y afroecuatorianos discuten con los representantes del Estado, con los partidos políticos, los medios masivos de comunicación y con otros actores sobre problemas públicos de envergadura nacional.

Pero por otro lado, cuando los líderes de las organizaciones indígenas y negras presentan sus demandas al Estado en la esfera pública, utilizan muchas veces las retóricas y las prácticas populistas y corporatistas que fueron exitosas en el proceso de incorporación de otros grupos subalternos. Los representantes del Estado han favorecido estas estrategias de negociación pues han sido el instrumento histórico a través del cual se ha canalizado la protesta. Es apresurado llegar a conclusiones sobre si las demandas corporatistas de las organizaciones indígenas y afroecuatorianas ayudarán a reducir la desigualdad social entre los diferentes grupos étnicos o si sólo conseguirán la incorporación de algunos líderes al aparato estatal y su movilidad social. Este proceso de movilidad social, aunque fuera de un número relativamente pequeño de personas de grupos racializados como inferiores,

ayudará en todo caso, a terminar con las imágenes y visiones racistas que asignan a los indígenas y a los negros las ocupaciones más humildes y el trabajo manual.

Al darse la movilización a través de discursos en nombre del pueblo que lucha antagónicamente en contra de la oligarquía y al favorecerse concepciones de la democracia que desconocen las instituciones de la democracia liberal y que privilegian la ocupación de espacios y las alianzas con quien sea para llegar al aparato estatal, la democracia sigue siendo vista únicamente desde una perspectiva instrumental. Algunos líderes de las organizaciones políticas de los indígenas, por supuesto, no son los únicos que tienen visiones instrumentales de la democracia y de la Ley. Sus prácticas, más bien, se parecen cada vez más a las de los otros actores políticos. Lo grave es que la democracia, que permitió el surgimiento y la expresión del movimiento indígena, y en menor medida del afroecuatoriano, no sólo a través de políticas estatales al traspasar recursos a éstos grupos, sino también por la falta de represión, esté cada vez más desinstitutionalizada. Desde el año 1996 el Ecuador ha tenido 4 presidentes y ha experimentado dos golpes de Estado semiconstitucionales. Las acciones de los políticos y de los líderes de algunos movimientos sociales como la CONAIE, entre otros, han colocado a los militares, al igual que en el pasado, en árbitros de los destinos del país.

En condiciones en las que el estado de derecho no informa el acceso a los derechos y obligaciones que existen en las leyes y las constituciones no asombra el peso de las prácticas parterneristas. El problema es que éstas no permiten ver la dominación como un fenómeno estructural y privilegian el acceso de un individuo, grupo o familia a recursos, antes que la lucha colectiva para que la igualdad ciudadana se convierta en una realidad.

A diferencia de la visión de la exclusión ciudadana como una anomalía y una contradicción con las categorías liberales de la igualdad, muchas feministas, teóricos postestructuralistas y postcoloniales sostienen que la ciu-

dadanía es en sí un proceso que a la vez que incluye, excluye a varias categorías de la población. Argumentan que la exclusión de las mujeres o de los no blancos no es una anomalía o una desviación de un patrón universalista que podrá ser corregido por las demandas de movimientos sociales, sino que está basada en la forma en que han sido construidas las categorías modernas de ciudadano, derechos, democracia, esfera pública, etc. Todas estas categorías, aparentemente universalistas, se han forjado con la imagen del hombre blanco occidental y de clase media alta como punto de referencia normativo. “Las características, cualidades, comportamientos e identidades de quienes han sido considerados como miembros de la comunidad política se han derivado de una serie de valores, experiencias, modos discursivos, rituales y prácticas que explícita e implícitamente privilegian a los hombres y a lo ‘masculino’ y excluyen a las mujeres y a lo ‘femenino’” (Jones 1998: 221).

Basándose en las críticas postestructuralistas y feministas a la noción de ciudadanía, Andrés Guerrero sostiene que la ciudadanía ecuatoriana se constituyó con base en la alteridad despreciada de los indígenas. “Por sí misma, la ciudadanía se constituye por vías de esta exclusión. Por su formación histórica, es una relación de dominación que instituye un ‘afuera indígena’, una exterioridad originaria conformada por las poblaciones carentes de racionalidad: los ‘sujetos’ no civilizados de la República” (2000: 47).

El planteamiento de Andrés Guerrero ayuda a reconceptualizar el estudio de la ciudadanía de la esfera jurídica del Estado en la vida cotidiana. Su crítica también plantea la pregunta de si los valores que encarnan las categorías de ciudadano, derechos, democracia, construidos con la alteridad indígena como marco constitutivo, son lo suficientemente universalistas como para poder incorporar a éstos y a los negros con sus demandas particularistas de respeto a su cultura y valores, o si es necesario repensar nuevos conceptos de acción y de pertenencia a la comunidad política.



A diferencia de estas críticas inspiradas en el feminismo y en el postestructuralismo, historiadores y sociólogos como Charles Tilly (1998: 198-99), reconocen que si bien las retóricas de los derechos y de la ciudadanía se han usado para excluir a diferentes grupos, es importante anotar que son lo suficientemente universalistas como para permitir que quienes han sido excluidos luchen por su inclusión articulando demandas y discursos basados en los derechos y en la ciudadanía. ¿Será éste el camino a través del cual las organizaciones étnicas luchen por una sociedad más democrática e igualitaria, o el peso del pasado privilegiará las prácticas no democráticas del corporatismo, del populismo y del paternalismo?

Bibliografía

- Bustamante, Fernando, 2000, “¿Y después de la insurrección qué?”, en *Ecuador Debate* N° 49, abril. Pág. 43-56.
- Chiriboga Zambrano, Galo y Darlic Mardesic, Vjekoslav, 1999, *Plan operativo de los Derechos Humanos. Una propuesta participativa*. Quito: ILDIS.
- Conaghan, Catherine, 1988, *Restructuring Domination: Industrialists and the State in Ecuador*. Pittsburgh: University of Pitts-

- burgh Press.
- Consejo de Palenques, 1999, *Propuesta para la creación de una comarca territorial de negros en la provincia de Esmeraldas*.
- _____ 2000 Derechos colectivos de los pueblos afroecuatorianos.
- Dandler, Jorge, 1999, "Indigenous People's and the Rule of Law in Latin America: Do They Have a Chance?", en Juan Méndez, Guillermo O'Donnell y Paulo Sérgio Pinheiro (eds.), *The (Un) Rule of Law and the Underprivileged in Latin America*, Notre Dame: University of Notre Dame Press. Pág. 116-152.
- De la Torre, Carlos, 1996, *El racismo en Ecuador: experiencias de los indios de clase media*, Quito: CAAP. (Segunda edición Abya-Yala 2002).
- _____ 2002, *Afroquiteños: ciudadanía y racismo*, Quito: CAAP.
- Guerrero, Andrés, 2000, "El proceso de identificación: sentido común ciudadano, ventriloquía y transcritura", en Andrés Guerrero (ed.), *Etnicidades*, Quito: FLACSO. Pág. 9-61.
- _____ 2001, "Los linchamientos en las comunidades indígenas. ¿La política perversa de una modernidad marginal?", en *Ecuador Debate* N° 53. Pág. 197-226.
- Halpern, Adam y France Winddance Twine, 2000, "Antiracist activism in Ecuador: Black-Indian community alliances", en *Race & Class* Volumen 42, N° 2, octubre-diciembre: 19-33.
- Jones, Kathleen, 1998, "Citizenship in a Woman-Friendly Polity", en Gershon Shafir (ed.), *The Citizenship Debates*, Minneapolis: University of Minnesota Press. Pág. 221-251.
- León, Jorge, 1991, "Las organizaciones indígenas: igualdad y diferencia", en Diego Cornejo (ed.), *Indios*, Quito: ILDIS. Pág. 373-419.
- _____ 1994, *De campesinos a ciudadanos diferentes*. Quito: CEDIME-Abya-Yala.
- _____ 1997 "Entre la propuesta y el corporativismo", en *Íconos* 2, mayo-julio. Pág. 29-40.
- Marx, Anthony, 1998, *Making Race and Nation. A Comparison of the United States, South Africa, and Brazil*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Marx, Carlos, 1951, "El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte", en *Carlos Marx, Federico Engels. Obras Escogidas*. Moscú: Ediciones en Lenguas Extranjeras.
- O'Donnell, Guillermo, 1999, "Poliarchies and the (Un)Rule of law in Latin America: A Partial Conclusion", en Juan Méndez, Guillermo O'Donnell y Paulo Sérgio Pinheiro (eds.), *The (Un) Rule of Law and the Underprivileged in Latin America*, Notre Dame: University of Notre Dame Press. Pág. 303-339.
- Samuel, Raphael, 1984 "Historia Popular, Historia del Pueblo" en Raphael Samuel (ed.), *Historia Popular y Teoría Socialista*, Barcelona: Editorial Crítica, 1984. Pág. 15-48.
- Stepan, Alfred, 1978, *The State and Society. Peru in Comparative Perspective*, Princeton: Princeton University Press.
- Tilly, Charles, 1998, *Durable Inequalities*, Berkeley: University of California Press.
- Wade, Peter, 1997, *Race and Ethnicity in Latin America*. London: Pluto Press.
- _____ 1998 "The Cultural Politics of Blackness in Colombia", en Norman Whitten y Arlene Torres (ed.) *Blackness in Latin America and the Caribbean. Social Dynamics and Cultural Transformations*, Bloomington: Indiana University Press. Pág. 311-335.
- Whitten, Norman, 1974, *Black Frontiersmen Afro-Hispanic Culture of Ecuador and Colombia*, Illinois: Prospect Heights.

Conflicto, democracia y culturas políticas

Franklin Ramírez Gallegos*

Este texto explora las relaciones entre conflicto político y democracia desde la perspectiva de las culturas políticas. Se trata de la construcción de un campo teórico-analítico que busca dar cuenta del conjunto de prácticas de significación y tramas de representación construido por la ciudadanía al rededor de eventos conflictivos en el ordenamiento democrático. Las páginas que siguen, que tienen como telón de fondo el estudio del conflicto desatado desde el 16 de enero de 1987 a raíz de la detención del entonces Presidente de la República en la base aérea de Taura, buscan colocar ciertas consideraciones sobre los estudios de la cultura política en el Ecuador y argumentar acerca del potencial analítico de los acontecimientos conflictivos para los estudios culturales de la democracia.

Trazos conceptuales

La opción por estudiar las culturas políticas a partir de su activación en/desde determinados conflictos políticos responde no sólo a la

sospecha de que es durante tales momentos cuando se intensifica la capacidad interpretativa de los ciudadanos y se desatan de modo público, sus prácticas, experiencias y repertorios de relacionamiento con la vida política - es decir, una elección que respondería a una particular estrategia investigativa- sino a la importancia que, desde un punto de vista teórico, tiene la relación entre conflicto y democracia.

En efecto, desde diversas perspectivas se ha planteado que la relación entre conflicto y democracia es tan estrecha que incluso es posible definir a esta última a partir de aquel. Una vertiente más institucional señala, por ejemplo, que la democracia es un régimen político que permitiría procesar el conflicto sin negarlo. Mientras que una perspectiva desde la filosofía de la democracia radical¹ plantea que el campo democrático se constituye como forma de articulación incesante entre momentos/espacios de conflictividad política y puntos de ordenamiento/cristalización institucional; en otros términos, se trata de la conjunción de una multiplicidad de antagonismos y disputas con las instancias y las

* Sociólogo. Centro de Investigaciones CIUDAD. Este trabajo está basado en mi tesis (2002) de Maestría en Ciencia Política, "Representaciones, prácticas y discursos del conflicto en el Ecuador democrático: el tauro (1987)", de la Universidad Internacional de Andalucía - España.

1 Tal filosofía de la democracia presupone la imposibilidad de constituir la sociedad como un conjunto cerrado, totalizado y autosuficiente en la medida en que la diferencia y el conflicto jamás desaparecen de su seno: "la remanencia del antagonismo, al imponer *desde siempre ya* la estructura de la falta en el seno mismo de la sociedad es lo que vuelve a la democracia *al mismo tiempo* posible e imposible" (Bostells Ibid.: 99). (La cursiva es del autor).

formas de regulación institucional a las que aquellos cuestionan de modo permanente. La democracia ha de definirse, entonces, por el reconocimiento colectivo de la irreductibilidad del conflicto social y la correlativa necesidad de institucionalizarlo (Merquior 1982).

Se ha reconocido que la conflictividad ocasiona, en todo ordenamiento democrático, un efecto de desbordamiento de la política -que la conduce más allá de los límites del Estado o del sistema político (Ver: Ardití 1995; Castoriadis 1997; Lefort 1986). Este 'exceso de política' -en la medida en que el antagonismo se muestra como ineludible y como un diferendo para el que no hay litigio posible (Bostells 2001)- sería señal particular y expresa del campo de la política democrática, a saber, constituye a "la democracia como una forma cualitativamente superior, como la *radicalización de la política*" (R. Maíz 2001: 93. *Cursiva en el original*).

El conflicto es, por tanto, el afuera constructivo de todo ordenamiento político y no el lugar 'patológico' en que se cancela la producción de una institucionalidad. Es en su existencia reconocida que la democracia abre el juego para su propio cuestionamiento -es por ello que 'lo instituido' nunca llega a ser 'lo establecido'-, deja instalada la posibilidad de su perfectibilidad y se coloca como parte de los procesos de autoconstitución de lo social. De ahí que la democracia pueda ser entendida como un sistema de incertidumbre relativa (como efecto de los incontrolables resultados y efectos de la conflictividad) normativamente regulada (ahí el lugar de lo institucional) (ver Maíz *Ibid.*).

Desde esta perspectiva cabe señalar que la democracia no está amenazada únicamente cuando existe un déficit de consensos y de adhesión sobre las instituciones y valores que la organizan, sino cuando su dinámica agonística es obstaculizada por férreos consensos (Mouffe, 1999) o por una sobre-regulación institucional².

La centralidad sociopolítica del conflicto lo convierte en un objeto de estudio de particulares condiciones como para proyectar las



Gonzalo Vargas

estructuras y los procesos que sostienen a las democracias realmente existentes (ver Sánchez-Parga 1998), tanto en sus características institucionales, en las relaciones de poder que entretejen los diferentes actores y en sus modos de significación de la vida democrática.

De ahí que, por medio de la comprensión de las formas y características que adoptan la producción, procesamiento y resolución (o no) de la conflictividad política sea factible poner en evidencia, no solo los intereses, recursos, objetos y actores en disputa, sino además, las diferentes culturas políticas que moldean su morfología e intervienen en su gestión. Cabe situar la orientación analítica del problema, entonces, dentro de las relaciones específicas entre los marcos institucionales y las culturas políticas (en su función de modulación, canalización y regulación del conflicto).

No se trata sin embargo -tal y como lo han sugerido otros trabajos sobre la democracia ecuatoriana (Sánchez-Parga *Ibid.*; Sánchez

² Para una interpretación de los excesos institucionales en la gestión de la conflictividad del movimiento indígena ecuatoriano ver, por ejemplo, Franklin Ramírez Gallegos (2001).

López 2001)-, de dirigir el análisis hacia la determinación de las tendencias ‘contractuales-dialógicas’ o ‘confrontacionales-combativas’ que predominarían y definirían a *la cultura política ecuatoriana*, lejos de ello, se procura más bien entender los modos en que las culturas políticas existentes, a modo de ‘gramáticas particulares’(ver Morán 1996/1997), inciden e intervienen en el desenvolvimiento mismo de la conflictividad política. ¿Cómo se ponen en juego tales modos culturales para significar y representar la turbulencia política? ¿Qué discursos, prácticas e imágenes se derivan de tales gramáticas y en qué modo son activadas y utilizadas a medida que el conflicto se despliega?

Por conflicto político entiendo, siguiendo a Ch. Tilly (1998), todas las ocasiones en que: 1) algún grupo de personas realiza reivindicaciones colectivas públicas visibles sobre otros actores (si estas reivindicaciones se cumplieren afectarían los intereses de estos últimos); y 2) al menos una de las partes afectadas por tales reivindicaciones, incluidas terceras partes, es un gobierno (Ibid.: 39). Así, la conflictividad política revela la existencia de reivindicaciones en disputa, que consisten en declarar determinadas preferencias con respecto a otros actores (demandas, ataques, peticiones, súplicas, señales de apoyo o resistencia y declaraciones de compromiso) ³.

Es preciso señalar además, y con ello pretendo tomar distancia de los análisis instrumentales de la política que sitúan a la conflictividad de los modernos sistemas políticos como asociada fundamentalmente a la disputa por la escasez de recursos, que los conflictos deben ser vistos como confrontaciones acerca de los sentidos y orientaciones de la vida pública. Existen pues, en los carriles paralelos a los de las confrontaciones por intereses, una serie de batallas de significación -en las que se

expresan las identidades, comunidades, experiencias, memorias, tradiciones de los diversos grupos sociales- por medio de las cuales los procesos políticos son cargados de sentidos específicos.

En una línea similar se pronuncia Eyerman cuando señala que “los cambios de ‘significado’, esa lucha por ‘definir la situación’, pueden constituir en sí mismos un aspecto fundamental del poder y del cambio social” (1998: 140). La vida política no consiste sólo en elecciones e intereses sino en representaciones: “...la necesidad o el interés no deviene necesidad o interés social sino en función de una elaboración cultural, de un sistema de significaciones imaginarias que valorizan y desvalorizan, estructuran y jerarquizan preferencias y bienes articulándolos como intereses” (Maíz, Ibid.: 81).

Es desde esta perspectiva, que se puede señalar que el conflicto político está atravesado por, y es producto de, una serie de culturas políticas disímiles en sus modos de expresión, que se hallan confrontadas con respecto a los significados y representaciones de los acontecimientos específicos, de las relaciones de poder y de la vida política / el campo democrático en general.

En este sentido, cabe situar al menos cuatro orientaciones conceptuales y metodológicas, respecto de las formas en que se ha desplegado la categoría de cultura política en el análisis del conflicto político:

- Las culturas políticas son producciones colectivas, asentadas en determinados contextos de interacción social, generadas en el marco de las articulaciones entre instituciones-organizaciones y redes, y compuestas de repertorios de identificación, de narración y de representación, de reserva de saberes y de un cúmulo de experiencias (Cefaï 2001: 98). Los actores sociales son modelados por ellas, en determinados contextos de experiencia y actividad, pero a su vez las renuevan por medio de determinadas competencias, compromisos, críticas que giran en torno de las ‘estructuras

3 Por lo tanto el conflicto político abarca revoluciones, rebeliones, guerras, disputas étnicas, movimientos sociales, campañas electorales, huelgas, cierres patronales, incautaciones, marchas, tomas, y otras formas de interacción (Tilly Ibid.: 39).

de pertinencia⁴ de sus marcos de significación y de la pragmática específica con que cualifican a objetos, personas, situaciones y procesos políticos.

- En una perspectiva más sociológica, las culturas políticas deben ser estudiadas a partir de sus especificidades en cuanto a territorios, anclajes sociales, tradiciones, instituciones y organizaciones en un modo tal, que sea posible trazar sus movimientos temporales y sus variaciones contextuales. Se trata de colocar el análisis de las relaciones entre cultura y política a partir de su inscripción en espacios y tiempos, de sus mecanismos de concreción y difusión entre grupos y generaciones, y de sus modos de funcionamiento por medio de determinados dispositivos de actividad práctica e interpretativa.
- Las culturas políticas aparecen indisolubles de sus usos pragmáticos y estratégicos. En contra de una visión que alude a la cultura política como una instancia que no abarca la acción propiamente tal, sino solamente las orientaciones para la acción (Ver Lechner 1987), se plantea un enfoque que pone el acento en la dimensión práctica-material de la cultura política, en tanto conjunto de programas operacionales o algoritmos que permiten a los actores sociales inventar, crear y desarrollar respuestas adecuadas a circunstancias nuevas. Se pone de manifiesto que gran parte del bagaje intelectual y afectivo de las personas está constituido por pragmáticas más que por normas y valores que proporcionarían respuestas fijadas de antemano a los problemas de la existencia cotidiana (Bustamante 1996). La idea bourdieusana del *habitus* remite, precisamente, a aquel ‘con-

junto de disposiciones adquiridas y duraderas’ que guían la acción social mientras la ajustan / adecuan de modo espontáneo a las condiciones objetivas de su realización. Se trata de un continuo proceso de invención sociocultural limitado por condiciones objetivas aprehendidas a través de esquemas socialmente constituidos que organizan las percepciones. El *habitus* aparece así como producto de la historia a modo de “hipótesis prácticas fundadas sobre la experiencia” social de los individuos y los colectivos (Bourdieu 1991: 91-111).

- Las diversas capacidades prácticas e interpretativas que desarrollan los actores en su relación con el campo de lo político pueden comprenderse como modalidades específicas y racionalidades de participación política, de disputa de determinadas posiciones en una comunidad política y, por tanto, como formas sustantivas de implicación ciudadana en la vida pública de sus sociedades.

Estas advertencias abren la posibilidad de diseñar ‘mapas o cartografías de la cultura política’ (Sousa Santos 1991; Lechner Ibid.) en los que se precisen, además de los contextos espacio temporales de experiencia y actividad de los actores, las conexiones o síntesis que se operan entre ‘instituciones-organizaciones-redes’ y ‘prácticas-experiencias-discursos-representaciones’ en un modo tal que se puedan evidenciar sus morfologías cambiantes, sus líneas de transformación y fuga, sus modos jerárquicos de agrupación y sus herramientas y mecanismos de constitución, propagación y contestación. Todo ello permitiría matizar simultáneamente las metáforas organicistas y holistas del funcionamiento de los esquemas culturales y las visiones excesivamente instrumentalistas de la cultura como una caja de herramientas siempre manipulable⁵.

4 La ‘estructura de pertinencia’ alude a los cuadros interpretativos y pragmáticos con que los actores definen una situación y se posicionan ante ella (en términos de elecciones y preferencias); no se trata de códigos preestablecidos que se imponen a los actores bajo la forma de consensos sobre formas de objetividad y moralidad, sino de esquemas de pertinencia que se ajustan a las coordenadas del contexto (Cefaï Ibid.).

5 Ver A. Swidler, 1996/1997, para un tratamiento instrumental de la cultura política.

Las culturas políticas como polifonías discordantes

Aún a pesar de que el estudio tuvo un carácter experimental y exploratorio -sobre todo en términos de la estrategia de investigación utilizada- y de que aún no se ha trazado un análisis histórico-comparativo con relación a otros conflictos en el período democrático, quisiera plantear algunas ideas generales acerca de las culturas políticas en Ecuador. Tales reflexiones deben ser tomadas como un punto de partida para profundizar, en el futuro, estudios que tomen distancia de los argumentos normativos y teleológicos producidos desde las perspectivas convencionales y dominantes en los estudios políticos locales⁶.

Así, cabe sostener en primer lugar, que en el país las culturas políticas se expresan como una diversidad de estrategias, representaciones y racionalidades -una 'polifonía discordante'- con la que los actores sociales y políticos se vinculan con el mundo de la política. Los lamentos sobre la fallida construcción de *una cultura política democrática* solo ocultan tal pluralidad de modos y estilos de involucramiento en los asuntos públicos nacionales.

Ello tiene implicaciones, que tal vez puedan no gustar a los adeptos al discurso de la gobernabilidad, con relación a admitir que el espacio de la confrontación y la disputa respecto de las significaciones de la democracia está abierto y que ello forma parte de su mismo proceso de construcción, consolidación y negación. Tal margen de disputa / disenso, entonces, debe ser explorado desde la óptica de los estudios culturales de la democracia, no como una anomalía o disfunción entre el sistema político y los discursos y representaciones de sus actores, sino más bien como uno de los rasgos constitutivos de tal relación.

De este modo, debe quedar claro que la imagen del desfase entre una cultura política tradicional, arcaica y antiinstitucional y un marco normativo tendencialmente democrá-

tico -imagen ya instalada en los diagnósticos convencionales de la democracia ecuatoriana- no sólo oculta los puntos específicos de intersección entre ambos espacios sino que deshistoriza sus desenvolvimientos concretos.

Quiero decir con esto que aún cuando las culturas políticas absorban y desplieguen repertorios madurados en el largo plazo, muchas de sus características son remodeladas, tal vez de modos imperceptibles, según la trama de relaciones entre la institucionalidad política, las líneas de poder social y los usos específicos que los actores las destinan según las situaciones que enfrentan. En el caso analizado resulta obvio que el régimen político (el gobierno de Febres Cordero, 1984-1988) experimentó una contracción en sus tendencias de apertura democrática y que, en el terreno de los procesos culturales, se generaron una pluralidad de constelaciones que sostenían tal dinámica y otras que la socavaron, la contestaron; y circularon, incluso, relatos democratizantes.

Tal idea permite postular la existencia de una fuerte incidencia de los marcos normativos y dispositivos institucionales en la construcción de una parte de las culturas políticas y, a su vez, la relativa autonomía de algunos de sus segmentos que, más bien, estarían siendo producidos/moldeados desde otros textos y procesos culturales presentes en las esferas públicas (memorias colectivas, culturas institucionales, ideologías, experiencias políticas, etc.). Otro modo de enunciar tal idea sería sostener que el ordenamiento político afecta de formas y niveles diversos a las gramáticas culturales existentes y en formación. Ello apunta a negar la idea de *la* cultura política como un puro terreno de obstáculos al proceso de democratización -imagen homogeneizante, si las hay- y a plantearla como encubridora de la historia del desenvolvimiento institucional de la democracia ecuatoriana (repleta de candados autoritarios) y como un intento de estandarización de las disímiles estrategias y representaciones culturales de la democracia.

Por otro lado, partir, de modo deliberado, desde una mirada de lo político no centrada

6 Para una crítica de las visiones dominantes sobre la cultura política ver Andrade (2001); Ramírez (1999).

en la esfera pública oficial y plantear, más bien, su interacción con una multiplicidad de esferas públicas semioficiales, autónomas, contrahegemónicas o débiles⁷ facilita la comprensión y ubicación de una serie de espacios, lugares, y modos de participación ciudadana -no dependientes de los canales institucionales fijados para el efecto- que obligarían a matizar, por lo menos, la recurrente aseveración de la nula / escasa participación de los actores sociales en las cuestiones democráticas en Ecuador.

No cabe afirmar que únicamente las modalidades de participación que atraviesan e inciden en la toma de decisiones públicas y en su gestión y evaluación posteriores deben ser consideradas como prácticas ciudadanas o de participación efectiva. El diálogo democrático requiere, imposible negarlo, de esferas públicas fuertes (aquellas en las que se toman decisiones) y fortalecidas por la presencia ciudadana; sin embargo, las interacciones discursivas operan además -y es deseable que así sea-, alrededor de espacios autónomos, con sus propias fórmulas comunicativas, sus debates políticos específicos y usos diferenciados de la información y el conocimiento allí construidos. Tales esferas públicas débiles (construyen opinión pública sin incidir en la toma de decisiones) asedian y regulan, desde los márgenes del sistema político, el despliegue y desenvolvimiento del poder y, sobre todo, no son funcionalizadas por sus necesidades estratégicas.

El rumor, el chisme, el humor y las redes comunicativas asociados a ellos, entre muchas otras prácticas políticas presentes en el país, deben ser colocados como repertorios de movilización y participación política que sostienen y fortalecen la autonomía de ciertos escenarios públicos, informan a los ciudadanos sobre las cuestiones de interés colectivo y permiten así su posicionamiento reflexivo en la opinión pública. Se trata de modos no oficia-

les de inclusión de los ciudadanos en el juego político; su importancia es mayor en contextos de violencia y autoritarismo político (tal como en el caso analizado).

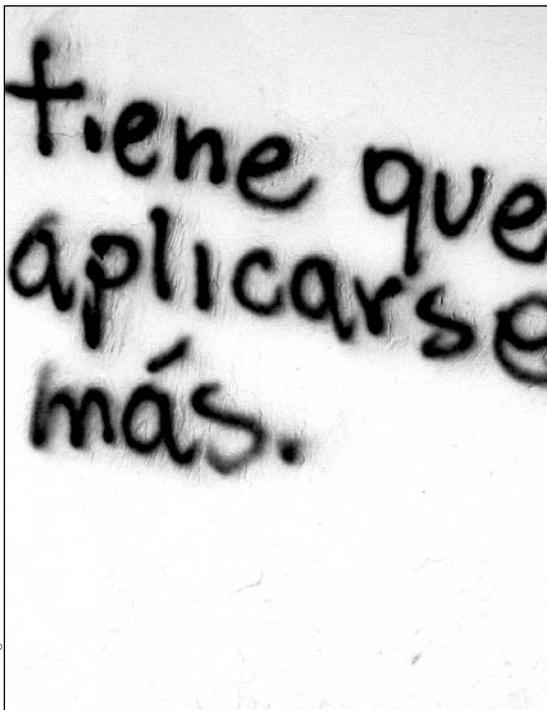
La ampliación de la ubicación espacial de lo político, por la vía de Habermas pero en su contra, ha permitido además visibilizar una serie de discursos que, al bordear los límites del sistema político, hacen una referencia diversa de él: eufemización y goce, caricatura y vulgaridad, chisme y pornografía, se pasean públicamente como narrativas de emergencia y contestación del poder desde estrategias específicas, vocabularios locales/populares y categorías idiosincráticas. La distancia de los cuerpos estatales es recortada desde el juego y el secreto, fantasía mediante, de las intimidaciones del poder. ¿Banalización de lo político? ¿Irreverencia ante la solemnidad del poder? Las expresiones culturales de lo político, en cualquier caso, se diseminan, bifurcan y localizan en una multiplicidad de lugares no previstos, que re-significan sus contenidos en diversos grados.

Tal comprensión discursiva de la cultura política no debe ser vista como una apuesta por una comprensión ideacional de aquella. Se busca más bien intercalar el lugar de lo puramente narrativo con el despliegue de prácticas y repertorios específicos con los que se materializan las culturas políticas. La coincidencia o disyunción entre discursos y prácticas políticas puede ser un terreno fértil, y aún poco explorado en el medio, para el análisis de las pragmáticas democráticas contemporáneas asentadas en los juegos y *performances* mediático-televisivos de sus líderes⁸.

La convivencia de culturas políticas, representada como una 'polifonía discordante', debe ser pensada como una pluralidad de sentidos/argumentos/contenidos y significaciones que politizan, de modos confrontados, los

7 Respecto de la relación entre esferas públicas y democracia, ver: Costa (1995); Calhoun (1992); Habermas (1992, 1996); Fraser (1997); Somers (1993).

8 Tal como sostiene A. Giddens: "las elaboraciones más importantes por lo que toca a la teoría social no demandan tanto un giro hacia el lenguaje cuanto una visión distinta de la intersección entre decir (o significar) y hacer, a fin de ofrecer una concepción novedosa de la praxis" (1995: 23).



Conrado Vargas

ámbitos de lo social y, a la vez, como la irreductible presencia, en su interior, de estilos, modos, herramientas, lenguajes, vocabularios, dispositivos, repertorios, experiencias, memorias, identidades, imaginarios que los tensan, los fracturan e impiden una configuración nítida y homogénea de sólidos bloques culturales.

En el conflicto analizado, cabe señalar que la articulación de contenidos y prácticas al interior de las expresiones culturales del conflicto político se sitúa y puede ser observada desde sus anclajes específicos en redes institucionales (partidos, movimientos, organizaciones) y funciones estatales (Poderes Ejecutivo y Legislativo, organismos de control, etc.), así como según las necesidades y usos para evidenciar y activar posiciones de poder y contestación en el transcurso de la conflictividad. Tal constatación, sin embargo, deberá ser matizada y observada, a futuro, desde las continuidades y rupturas en el tiempo de tales dinámicas organizativas y de los trastornos o persistencias de las líneas de poder en la sociedad.

Redes institucionales y necesidades estratégicas, no obstante, están atravesadas y conectadas por filamentos culturales, más o menos subterráneos y, seguramente, más sólidos

y sostenidos en el tiempo. Se trata de algo así como *sustratos representativos*, con orígenes más profundos y desplazamientos graduales, que los diversos actores sociales y políticos comparten de un modo muchas veces inconsciente -lo que, por tanto, debilita una posible explicación estratégica de su persistencia- y que, más aún, podrían ser enunciados como componentes 'estructurales' de las culturas políticas de la sociedad⁹.

Así, aún cuando una serie de nexos y pasadizos conectan las representaciones políticas, la idea de una cultura política nacional queda colocada más como una configuración normativa -un dispositivo de normalización política desplegado desde ciertas elites intelectuales y políticas- que como un supuesto analítico: la diversidad, la diferencia y el antagonismo entre diversos conjuntos representacionales y regímenes significativos parece ser la marca por excelencia del mundo de las culturas políticas.

El potencial heurístico del conflicto

El ruido característico de las sociedades democráticas -en especial si se lo compara con los susurros y voces cautos de los regímenes cerrados- deviene de inevitables confrontaciones y conflictos políticos en los que actores sociales, partidos, movimientos muestran su rivalidad y diferencias, a la vez que las procesan, en torno a situaciones de poder. La rivalidad, el disenso y la disputa política no confrontan únicamente intereses contrapuestos o pugnas por la escasez de recursos sino además, proyectos de sociedad, orientaciones de sentido, definiciones de las situaciones beligerantes y/o sistemas de representación y significación.

⁹ Lealtades patrias y mitologías de unidad nacional, además del recurso a lo militar como sostén / garante del poder instituido, y la 'sobre masculinización' del conflicto político constituirían pasadizos vinculantes entre las culturas políticas específicas identificadas en el proceso estudiado.

De ahí que la opción por estudiar el conflicto político como vía para desarrollar una óptica desde la cultura política en el análisis de la democracia ecuatoriana apunta a captar, observar y comprender la conjunción y despliegue público de voces disímiles -mucho ruido- que componen el espacio político.

El conflicto deconstruye el espacio y los flujos de comunicación política; a su alrededor, múltiples actores son interpelados -atacados, contestados, defendidos, elogiados, etc.- y marcados, de modo público, en función de sus identidades y roles políticos: autoridades desafiadas, opositores situados, líderes ridiculizados, alianzas invocadas. En este proceso, los enmarcados culturales y los modos de representación juegan un rol de capital importancia: actores políticos se definen con relación a mitos y símbolos ampliamente compartidos y, simultáneamente, su conducta simbólica constituye un elemento estratégico imprescindible en la propia competencia política.

De ahí que indagar este nivel 'cultural-simbólico' de la vida democrática a través de conflictos políticos específicos, permite captar la versatilidad y diversidad de tales modos de representación y significación de la vida política, a la vez que, observar el lugar que ocupan en cuanto pragmáticas específicas e hipótesis prácticas a disposición de los actores sociales en función de las situaciones que atraviesan. De este modo, el conflicto permite observar la dimensión instrumental y estratégica de las culturas políticas en cuanto asociadas a lecturas e intervenciones específicas a las que obligan las dramáticas coyunturas políticas.

En efecto, acudir a los conflictos políticos para 'mirar' las gramáticas culturales específicas con las que los actores se vinculan con el mundo de la política supone colocarlas en relación con prácticas y usos específicos, y no únicamente como orientaciones normativas despegadas de la acción social. Las constelaciones de cultura política movilizadas alrededor del conflicto político, por tanto, pueden (y deben) ser definidas por sus contenidos discursivos / representacionales, por su inciden-

cia y funcionalidad en el desenvolvimiento y gestión del conflicto y por las prácticas y repertorios -los dispositivos interpretativos- con los cuales se hacen efectivas de modo público.

Así, 'la estructura de temporalidad'¹⁰ del conflicto se desplaza y se moviliza, no sólo en relación a los objetos específicos en disputa, sino de las estructuras de significación emergidas y provocadas a su alrededor. La instancia del conflicto suscita, resucita y descubre la capacidad y los potenciales interpretativos de los ciudadanos: la política se come y se bebe en horas distintas a las de los noticiarios y en lugares y formas diferentes de los que habitualmente se conocen. El ruido político se exagera, se intensifica y se hace público. El espacio del conflicto marca, así, ese exceso de política propio de las sociedades democráticas. La 'densidad interpretativa' de determinado conflicto puede ser señal, incluso, de su relevancia y de su impacto políticos en la legitimidad de las bases institucionales de la democracia y en los imaginarios, memorias y representaciones colectivos sobre la vida pública.

Una lectura cultural del conflicto en el espacio democrático abre, adicionalmente, la mirada hacia dos cuestiones de fundamental importancia en las relaciones entre los procesos culturales y la vida política: el problema de la legitimidad del orden y aquel de la hegemonía y la resistencia.

Así, al hurgar en las representaciones construidas alrededor del conflicto es posible, además de evidenciar las 'fisuras' y 'fugas' en el reconocimiento / aceptación ciudadano de las instituciones, comprender los modos en que las sociedades estructuran la comprensión del lugar, de la función, del sentido del conflicto en el régimen democrático. ¿Existen culturas

10 Tal noción alude a los usos de las memorias subjetivas y colectivas, y a los modos de actualización, innovación y reactivación de historias específicas de grupos, colectividades y objetos; hace alusión, además, a la estructuración de esquemas de conocimiento, puntos de ubicación, y referentes de acción que permiten a los actores sociales orientarse e intervenir de manera adecuada en las coyunturas que enfrentan: "las culturas políticas emergen y se transforman en tales contextos temporales" (Cefaï. *Ibid.*: 95).

de legitimación del conflicto o resistencias culturales a su legitimación? La visibilidad aceptada (o no) de las turbulencias y las controversias que recorren el escenario político puede, de este modo, ser situada y comprendida en y desde el mismo decurso de los sucesos que las explican y caracterizan.

Evidentemente, lo anterior se liga con la forma en que los sujetos políticos articulan líneas de poder y contestación en la perspectiva de configurar campos hegemónicos. El momento del conflicto político deja traslucir los modos en que los sectores hegemónicos se esfuerzan por asegurar su dominación y vigilar los mecanismos de legitimación de los aparatos políticos que controlan. Conflicto de por medio, algo se subvierte y se perturba en el estado vigente de las relaciones de poder: el consentimiento y la aceptación de los términos del juego político decrecen a la vez que puntos de fractura y resistencia, no-oficiales / contrahegemónicos, intensifican y publicitan su movilización opositora. El estudio de las representaciones culturales del conflicto permite, entonces, documentar los modos de defensa y contestación de las líneas de poder social.

Es por todo ello que el conflicto político aparece como un prisma que *refracta y proyecta*: a) las condiciones estructurales de su emergencia, radican allí el lugar y la importancia de observar las instituciones, normas y reglas del juego político; b) las líneas de fractura y articulación política entre los principales actores del sistema, ahí el problema del poder, la hegemonía y la resistencia, de la legitimidad y la contestación, de las múltiples posiciones de sujeto (identidades políticas en movimiento y movilizadas); y c) las cargas representativas y simbólicas que los actores despliegan como marcos comprensivos y estratégicos con los que pueden situarse en el curso de la conflictividad.

Quisiera plantear, entonces, al espacio/momento del conflicto político como recurso fundamental para captar -y fundir- la dimensión disociadora y agonística de las esferas de la cultura y de la política, de un modo

tal que -para su comprensión- sea preciso desagregar y reconocer tanto la pluralidad de sujetos y voces, de prácticas y discursos (el lugar de la cultura) que tematizan, en inagotable tensión, la conflictividad en curso, como los efectos que ellos van produciendo en el desenvolvimiento y gestión (el lugar de 'la política') de los mismos conflictos.

Estudiar la dinámica de la cultura política con relación a conflictos políticos concretos apunta, así, a dar cuenta de los múltiples y disímiles modos con que los actores sociales y políticos leen, se vinculan, participan y juegan con la vida política de la nación: cómo responden a los imperativos de la política institucional, y cómo se sitúan dentro de las relaciones de dominación, poder y control que emanan de los cuerpos gubernamentales.

Bibliografía

- Andrade Xavier, 2001, "Adiós cultura y hasta la vista cultura política. Sobre el tratamiento sociológico del regionalismo y populismo en Ecuador", *Revista Nueva Sociedad* 175, Caracas.
- Arditi, Benjamín, 1995, "Rastreado lo político", en *Revista Sociedad y Política*. México D.F.: Universidad Iberoamericana.
- Bostells, Bruno, 2001, "Democracia radical. Tesis sobre la filosofía del radicalismo democrático", *Revista Metapolítica* 18. México: CEPACOM.
- Bourdieu Pierre, 1991, *El Sentido Práctico*, España: Taurus.
- Bustamante, Fernando, 1996, "La cultura política y ciudadana en el Ecuador", en *Ecuador: un problema de gobernabilidad*, Quito: CORDES-PNUD.
- Calhoun, Craig (ed.), 1992, *Habermas and the public sphere*, Cambridge, MA: MIT Press.
- Castoriadis, Cornelius, 1997, "La democracia como procedimiento y como régimen", en *El avance de la insignificancia*. Buenos Aires: Eudeba.

- Cefaï, Daniel (ed.), 2001, *Cultures politiques*. Paris: PUF.
- Costa Sérgio, 1995, "A democracia e a dinâmica da esfera pública" en *Lua Nova revista de cultura e política* 36. Sao Paulo.
- Eyerman, Ron, 1998, "La praxis cultural de los movimientos sociales", en P. Ibarra y B. Tejerina (eds.), *Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural*. Madrid: Editorial Trotta.
- Fraser Nancy, 1997, *Justice interruptus: critical reflections on the postsocialist condition*. London: Routledge.
- Giddens, Anthony, 1995, *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- Habermas, Jürgen, 1992, "Further reflections on the public sphere", en *Habermas and the Public Sphere*, Craig Calhoun (editor), Cambridge.
- _____ 1996, "Civil society and the Public Sphere", *Between facts and norms*, MIT.
- Lechner, Norbert (compilador), 1987, "Presentación", en *Cultura Política y democratización*. Santiago-Chile: FLACSO-CLACSO-ICI.
- _____ 1997, "El malestar con la política y la reconstrucción de los mapas políticos", *Culturas políticas a fin de siglo*, Rosalía Winocur (coordinadora). México D.F.: FLACSO.
- Lefort, Claude, 1986, *Essais sur le Politique XIX – XX siècles*. France: Editions du Seuil.
- Maíz, Ramón, 2001, "Democracia participativa. Repensar la democracia como radicalización de la política", *Revista Metapolítica* 18. México: CEPCOM.
- Merquior, J. G., 1982, *A Natureza do Processo*. Río de Janeiro.
- Morán, María Luz, 1996/97, "Sociedad, cultura y política: continuidad y novedad en el análisis cultural", en *ZONA Abierta* 77-78. España: ARCE.
- Mouffe Chantal, 1999, *El Retorno de lo Político*. Madrid: Paidós.
- Ramírez Gallegos, Franklin, 1999, "Explorando en un agujero negro: hacia una crítica de las visiones dominantes sobre cultura política en el Ecuador", en *Revista Iconos* 7. Quito: FLACSO – Ecuador.
- _____ 2001, "Las paradojas de la cuestión indígena", *Revista Nueva Sociedad* 176, Caracas-Venezuela.
- Sánchez López, Francisco, 2001, "Una democracia en busca de actores: reflexiones sobre el proceso político ecuatoriano a partir de la transición", *Revista Iconos* 12. Quito: FLACSO.
- Sánchez-Parga, José, 1998, *La Pugna de Poderes*, Quito: Ediciones Abya-Yala.
- Somers, Margaret R., 1993, "Citizenship and the place of the public sphere: Law, Community and Political Culture in the transition to democracy", *American Sociological Review* # 58.
- Sousa Santos, Boaventura de, 1991, "Una cartografía simbólica de las representaciones sociales. Prolegómenos de una concepción posmoderna del derecho", en *Revista Nueva Sociedad* 116. Caracas.
- Swidler, Ann, 1996/1997, "La cultura en acción: símbolos y estrategias", en *ZONA Abierta* 77/78. Madrid: ARCE.
- Tilly, Charles, 1998, "Conflicto político y cambio social", en *Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural*, en P. Ibarra y B. Tejerina (eds.). Madrid: Editorial Trotta.

DEBATE

0

La migración vista desde el lugar de origen

Comentarios al dossier
“los claroscuros de la migración”,
Íconos 14.

Gioconda Herrera*

Antes de ser inmigrante se es emigrante nos recuerdan Bourdieu y Wacquant (2001) en un artículo en homenaje al sociólogo argelino de las migraciones Adelmalek Sayad. Con esta afirmación lo que los dos investigadores buscan subrayar es la importancia de conectar el lugar de origen con el de destino en los estudios sobre migración y la necesidad de reconocer que estos procesos modifican la vida de los que se quedan, de los que se van y de las sociedades de destino. Los cambios y permanencias observados en dos espacios geográficos conectados a partir del mismo fenómeno, no expresan únicamente el carácter transnacional de los procesos migratorios o el surgimiento de espacios plurilocales sino que para estos autores la migración es ante todo, producto y expresión de una relación histórica inter-nacional de dominación material y simbólica. Esta dominación toma cuerpo en las trayectorias, prácticas y experiencias individuales de las personas migrantes y también se expresa en una alteración de las fronteras que definen el orden social tanto en las sociedades de origen como en las de destino. Expresiones de estos cambios son, por ejemplo, los procesos de movilidad social de los migrantes y sus familias que no siempre son legitimados por los códigos culturales de las so-

ciedades locales, produciendo estigmatización, extrañamiento y un sentido de no pertenencia de estos sectores frente a la sociedad local. También las alteraciones en los arreglos familiares y en las percepciones sobre los beneficios y perjuicios de la migración son fenómenos que expresan algún tipo de trastocamiento de valores y normas dominantes, sobre todo ahora con la progresiva feminización mundial de la movilidad humana. Por último, los cuestionamientos a las fundaciones legítimas de la ciudadanía y su relación con el Estado y la nación, que provoca la presencia de inmigrantes en los países receptores, es otra de las expresiones de esta relación de dominación.

Los trabajos sociológicos sobre migración internacional, seguramente por su origen, han privilegiado el estudio del fenómeno en el lugar de destino, es decir de la condición de *inmigrantes*. Gran parte de la literatura norteamericana sobre el tema se basa precisamente en la discusión sobre los procesos de adaptación, asimilación, resistencia, guetoización, discriminación o transnacionalización que significan la inmigración y las consecuencias que ha tenido la llegada de estos nuevos contingentes humanos (más que ciudadanos y ciudadanas) para el mercado laboral, la economía local, las políticas sociales y las leyes en las sociedades receptoras (Portes y Rumbaut 1996, Cordero-Guzmán, Smith y Grofoguel, 2001). Curiosamente, a pesar de su importancia en términos numéricos para la socie-

* Profesora-Investigadora de FLACSO-Ecuador. Coordinadora del Programa de Género.

dad de origen, la migración ecuatoriana a Estados Unidos ha pasado prácticamente desapercibida por los especialistas sobre migración¹. Por otra parte, la inmigración en los países europeos ha sido analizada en el marco de las discusiones sobre la conformación de sociedades multiculturales más complejas, el incremento del racismo, de manifestaciones xenofóbicas, y los procesos de lo que se ha llamado la desterritorialización de los Estados-nación (Basch, Schiller y Blanc, 1994). En efecto, la migración ha interrogado las historias particulares de constitución de los estados nacionales y su legitimidad frente a estas poblaciones, calificadas como “extra comunitarias”. En esta discusión, debido al carácter más reciente de la migración ecuatoriana hacia Europa, ésta ha sido también poco analizada.

Uno de los primeros desafíos que tenemos entonces es situar a la migración ecuatoriana en los debates sobre migración internacional y encontrar qué sentido tiene en la redefinición de procesos de construcción de la ciudadanía en términos globales. En otras palabras, los estudios sobre migración en nuestro país tendrían que apuntar a develar qué nos enseña el flujo de migrantes ecuatorianos de fin de siglo que no sepamos a partir de los estudios realizados con los llamados nuevos inmigrantes a partir de los años 70. ¿Cuáles son los rasgos, características o elementos que hacen de la migración ecuatoriana un proceso distinto a los analizados en el caso de la migración caribeña a Estados Unidos y Europa, de la migración filipina y del sudeste asiático, de los y las mexicanas a los Estados Unidos y otros grupos más? ¿Estamos repitiendo los mismos patrones y características de estos flujos o estamos frente a una situación cualitativamente distinta?

1 Los estudios se han concentrado en el caso de América Latina y el Caribe. Hay trabajos sobre cubanos, portorriqueños, centroamericanos, mexicanos, dominicanos y colombianos. Uno de los pocos trabajos encontrados es el de Margaret Chin (2001) sobre mexicanos ecuatorianos y chinos en la industria textil de Nueva York.

Si bien estas particularidades pueden ser exploradas en los lugares de destino, parecería que un punto de partida interesante para empezar a ubicar las especificidades del proceso radica precisamente en mirar con más atención los entornos donde se origina la migración.

¿En qué nos aporta una mirada sobre el lugar de origen de la migración? ¿Cuál es su relevancia para la comprensión de la migración como un proceso de dominación simbólica y material? ¿Cómo nos ayuda el análisis de las trayectorias de migración, de las conexiones entre los dos espacios y los impactos en las sociedades de origen en la comprensión



Antonio Mena

política del fenómeno? En definitiva, como punto de partida para comentar los artículos de Iconos 14 y como pregunta que se desarrollará en trabajos posteriores, me gustaría plantear al lugar de origen como espacio fundamental para una interpretación del fenómeno de la migración en tanto proceso de dominación simbólica y material.

Antes de ser inmigrante se es emigrante afirman Bourdieu y Wacquant, para subrayar la importancia de conectar el lugar de origen con el de destino en los estudios sobre migración, y de reconocer que estos procesos modifican la vida de los que se quedan, de los que se van y de las sociedades de destino.



En primer lugar, voy a situar brevemente estos artículos en el marco de la producción de trabajos sobre migración en el país, luego paso a comentar dos ejes que comparten la mayoría de los artículos: su preferencia por los imaginarios, las redes sociales y las estrategias familiares como instrumentos conceptuales de interpretación del fenómeno, por encima de explicaciones económicas; y en segundo lugar, el tema de la identidad, que aparece con menos fuerza en los artícu-

los pero que considero revelador para ser trabajado en investigaciones posteriores. A partir de estos dos ejes propongo algunos temas que podrían complementar los estudios sobre migración desde el análisis de género.

El lugar de la migración en los trabajos sociológicos en Ecuador

El interés por los estudios sobre migración al extranjero en el país es reciente, a pesar de que el fenómeno como tal ha sido parte de las experiencias vitales de muchas familias ecuatorianas desde los años 60.² En efecto, se pue-

de recuperar una primera ola migratoria en los años 60 y 70 que tuvo como destino entre otros países a Venezuela y Estados Unidos, de la cual se conoce muy poco en términos sociológicos pero que con seguridad marcó la historia personal de muchas familias urbanas de clase media de Quito, Guayaquil y otras ciudades intermedias del país.³ El fenómeno migratorio que vive el Austro también empieza temprano en los años 80 y asume el carácter de masivo en la década de los 90. Esta migración se da principalmente a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York. Sobre este proceso en particular existen algunos estudios que analizan diversos aspectos del fenómeno tanto en el lugar de origen como en el de destino (Jokisch 1998, 2001; Kyle 2000; Walmsley 2001; Pribilsky 2001; Carpio 1992; Borrero 1995).⁴

Por otro lado, en los años 80 uno de los temas trabajados por las ciencias sociales ecuatorianas fue precisamente la migración interna campo-ciudad, subrayando la conformación de redes sociales de apoyo y de estrategias de supervivencia como los rasgos fundamentales que explicaban la lógica de reproducción de muchos grupos empobrecidos.

Los artículos de Iconos 14 se enmarcan, sin duda, en la creciente preocupación en el país por entender el éxodo de ecuatorianos y ecuatorianas que se da a raíz de la crisis financiera y política de 1999.⁵ En ese sentido, con excepción de Maldonado⁶, los autores se cen-

2 Vale la pena señalar que tampoco tenemos una tradición de estudios sobre población inmigrante en el Ecuador, a pesar de que la ciudad de Guayaquil y otras ciudades de la costa han constituido focos de recepción durante todo el siglo veinte.

3 Inclusive en la zona austral se señalan experiencias migratorias en los años 40, pero se conoce muy poco al respecto.

4 Algunos de los trabajos mencionados se encuentran bajo la forma de artículos en la Revista Ecuador Debate, No. 54, Quito, junio, 2001.

5 No es gratuito que precisamente dos revistas ecuatorianas de ciencias sociales le hayan dedicado un número especial al tema en el mismo año.

6 Ver las referencias en ÍCONOS No. 14, FLACSO-Ecuador, Quito, agosto, 2002.

tran en la emigración reciente hacia Europa y particularmente a España. Sospecho que en parte esto se debe al hecho de que la migración hacia España marque un giro importante en el circuito migratorio de los ecuatorianos cuyas razones necesitan ser analizadas a profundidad. Además, las experiencias de hombres y mujeres migrantes han sido retratadas con mayor frecuencia en los medios de comunicación y han sido motivo de debate y negociación entre los dos estados, por tanto, han copado más la opinión pública a pesar de que en términos numéricos Estados Unidos sigue siendo un destino importante.

Un primer elemento que llama la atención en estos artículos es precisamente que no se recuperan las experiencias migratorias anteriores, ni los estudios existentes sobre el tema, sobre todo los relativos a los procesos experimentados por las poblaciones de Azuay y Cañar desde hace más de 30 años. Tampoco se retoman los trabajos sobre migración interna, que de alguna manera ya anunciaron varios de los temas propuestos para el análisis en algunos de los artículos: las estrategias familiares, la conformación de redes sociales, los vínculos de parentesco y de ayuda como elementos fundamentales que explican la decisión de migrar y el proceso mismo de inserción en los lugares de destino. En cierta forma, esto produce una lectura de la migración como un fenómeno nuevo, reciente, cuando en realidad han existido experiencias de este tipo desde hace largos años que han marcado la vida, la organización social y la configuración de varias regiones del país.

En ese sentido, una tarea pendiente para seguir avanzando en la comprensión de las especificidades de la emigración ecuatoriana es indagar sobre las características y dimensiones de los procesos migratorios anteriores a 1998. Ello nos va a permitir entender mejor por qué esta nueva ola migratoria representa un giro importante respecto a las anteriores y situar su significado concreto dentro del flujo global. Paralelamente, desde una perspectiva de reflexividad sobre nuestro propio oficio (Bourdieu y Wacquant, 1992) me parece im-

portante incluir en esta reconstrucción de la trayectoria de la migración un análisis de la forma en que hemos mirado el fenómeno en estudios pasados y el sentido que estas interpretaciones tuvieron en su momento. En otras palabras, es necesario recuperar los distintos elementos, por ahora dispersos, que permitan pensar en la conformación paulatina de un campo de estudios sobre la migración en el país, aunque éste sea todavía incipiente. La identificación de cambios dentro de procesos de más larga duración es un punto de partida necesario para ofrecer una comprensión más específica de la migración ecuatoriana en el marco de las experiencias migratorias en el ámbito global.⁷

Imaginarios, redes sociales, cadenas y estrategias familiares

Con excepción del texto de Pujadas y Massal, que concentra su atención en la percepción mediática y la situación jurídico normativa de los y las inmigrantes ecuatorianos en Barcelona, los trabajos de Ramírez y Goycochea, Pedone, Ruiz y Maldonado coinciden en señalar que los enfoques de racionalidad económica son insuficientes para explicar la emigración. Es innegable que la crisis financiera y la falta de oportunidades adecuadas de empleo fueron detonantes importantes para la decisión de migrar, argumento señalado por varios de los articulistas, pero eso no parece explicar en su totalidad ni la decisión de migrar ni la forma e inserción en los lugares de destino. En efecto, contrariamente a lo que sostienen los medios de comunicación masiva, los artículos coinciden en señalar que la migración no surge a partir de una decisión racional, de costo-beneficio únicamente, sino que entran en juego factores sociales y culturales que no necesariamente responden a una

7 Esta es una idea discutida en el taller organizado por el profesor Brian Gratton, que tuvo lugar en FLACSO en junio de 2002, con un grupo de investigadores cuyas memorias serán publicadas próximamente.

lógica económica racional. “Imaginarios”, “redes sociales”, “cadenas horizontales y verticales” y “estrategias familiares” son las herramientas conceptuales que se despliegan para ofrecer una interpretación social y cultural antes que económica de la migración, y centrar el análisis en actores antes que en estructuras.

Respecto a los imaginarios sociales, el trabajo de Goycochea y Ramírez ofrece una entrada interesante para entender la migración desde los actores y sus entornos de origen y cómo éstos están estrechamente conectados con el espacio extra-nacional. El estudio enfatiza la relevancia de mirar la producción de significados alrededor de la experiencia migratoria de otros, como uno de los factores que apuntalan la decisión individual de migrar. Esto tiene que ver, nos dicen, con las representaciones que se van forjando a partir de los relatos de familiares y amigos, fotografías, de todo un conjunto de representaciones simbólicas sobre el éxito y el progreso personal que es permanentemente contrastado con la visión del espacio local como un mundo en crisis y clausurado para la realización de proyectos de vida. Esta posibilidad de imaginarse viviendo en otro lugar como un factor fundamental en la decisión de migrar ha sido también trabajada por Wamsley (2001) en el caso de la migración campesina del Cañar. Wamsley utiliza la categoría de “síndrome migratorio” para indicar que más allá de la pérdida de oportunidades de trabajo y de dificultades estructurales de supervivencia, el impacto cultural de la migración en los entornos locales es un elemento fundamental que facilita, condiciona y explica el ciclo migratorio. De acuerdo a su estudio, los cambios en las pautas de consumo de los familiares que reciben remesas, los imaginarios acerca de la vida de los migrantes en los países de destino, las modificaciones en el paisaje arquitectónico local, son todos elementos que afectan las creencias, los valores y las aspiraciones de la población local, “creando una impresión de privación social relativa además de la privación económica real de las familias que no

migran y esto fomenta la creencia de que la migración es la única manera de cambiar de estatus” (Wamsley 2001:156).

En ese sentido, los imaginarios sociales pero también las propias modificaciones que se dan en las prácticas cotidianas de las familias de migrantes, sus entornos materiales y el significado que se les otorga, y las propias experiencias de migrantes que han retornado son un terreno que debe ser indagado con mayor detenimiento no sólo para entender la decisión de migrar sino también para interpretarla como parte de un proceso de dominación simbólica específico.

Claudia Pedone también hace hincapié en las representaciones sociales que construyen los y las migrantes sobre el lugar de destino, las potencialidades laborales y las oportunidades en términos de proyecto de vida. Pero introduce un elemento más en el análisis de estas representaciones: el proceso de resignificación que de estos imaginarios se da en los distintos eslabones de la cadena migratoria. Para la autora, esto deviene en una brecha entre lo deseable y lo posible y crea efectos de desinformación y tergiversación que afectan los procesos de inserción en los lugares de destino, por ejemplo respecto a potencialidades laborales y oportunidades de vida.

El concepto de redes sociales es también ampliamente utilizado para caracterizar los procesos migratorios y éste está íntimamente relacionado con tomar a la familia como unidad migratoria. Las redes actúan como vínculos entre la comunidad migratoria en el lugar de destino y la comunidad que permanece en el lugar de origen. Así, los distintos lazos que se entretajan entre familiares aquí y allá son tan importantes para estimular la migración como los cálculos de bienestar económico. Además, el viaje es visto, nos mencionan varios de los articulistas, como una inversión familiar. Las formas, la articulación y el funcionamiento que adquieren las redes con el tiempo influyen en las trayectorias espaciales y en las estrategias migratorias (Pedone 2000b:3). Este concepto podría ser explorado por ejemplo, para tratar profundizar el análisis

sis sobre el giro en el circuito migratorio ecuatoriano de Estados Unidos hacia España e Italia en los últimos años, aunque tendría a su vez que ser corroborado con la influencia de factores estructurales sobre el funcionamiento de estas redes. Un análisis que busque determinar el peso de los cambios de las políticas migratorias de los países receptores sobre las redes podría ser iluminador para entender las transformaciones de las trayectorias espaciales y cualificar de mejor manera los procesos migratorios.

Más allá de las estrategias familiares

Una premisa importante de la perspectiva de las redes sociales es aquella de que la decisión de migrar no es una decisión individual sino más bien un proceso familiar y social, es decir, una suerte de “estrategia colectiva combinada destinada a reducir riesgos y restricciones en la sociedad natal” (Malgesini 1998, citado en Pedone 2000a). Si bien esta visión complejiza el fenómeno migratorio, ubicando con claridad cómo el impacto de la migración tiene que ser estudiado tanto desde la comunidad de origen como en los lugares de destino, desde una perspectiva de género ubicamos un gran vacío que es el dejar de lado los juegos de poder que permean las decisiones, intereses y estrategias familiares. No todos los miembros de la familia actúan en igualdad de condiciones ni cuentan con las mismas capacidades de negociación. La visión de las estrategias familiares ya ha sido cuestionada por el análisis de género en otros ámbitos en donde se ha demostrado que al tratar a la familia como un todo unificado y uniforme se invisibilizan las desiguales relaciones de poder existentes al interior de la familia, los valores culturales e ideológicos que permean la asignación de roles, la construcción de las identidades y las condiciones de reproducción de las personas (Moore 1988).

Varias autoras, desde una perspectiva de género, han señalado que la dinámica social que se va creando con los continuos flujos

migratorios implica un modelo de familia que no necesariamente rompe con los patrones hegemónicos de la familia, a pesar de que se trastocan muchas de las prácticas cotidianas (Kofman et al. 2000., Lawson 1998, Hondagneu 1994, D’Aubeterre 2001). Para D’Aubeterre, con la migración se estaría conformando un tipo de conyugalidad a distancia que supone la no co-residencia, las continuas negociaciones entre marido y mujer en la toma de decisiones concernientes a los procesos de producción y reproducción que involucran al grupo doméstico, la fidelidad femenina y la mantención de los bienes sociales y simbólicos tales como el honor, el prestigio y las relaciones valiosas (D’Aubeterre 2001: 4). Asimismo, como lo ha señalado Pierrette Hondagneu (1997), esta nueva modalidad de familia implica diversas formas de explotación económica encubiertas por la ideología del parentesco y no conlleva a un cuestionamiento de las representaciones hegemónicas de género. Parecería que esta situación se complica aún más cuando hablamos de una mujer migrante.



Ramírez y Goycochea mencionan en su artículo que las decisiones familiares están atravesadas por dinámicas de poder y control social que generalmente tienen que ver con desigualdades de género. En ese sentido nos alertan sobre la necesidad de analizar, en tra-

La nueva modalidad de familia, efecto de la migración, implica diversas formas de explotación económica encubiertas por la ideología del parentesco y no conduce a un cuestionamiento de las representaciones hegemónicas de género. Parecería que esta situación se complica aún más cuando hablamos de una mujer migrante.

bajos posteriores, las consecuencias de estas desiguales relaciones de poder al interior de la familia para entender el fenómeno migratorio.

Una manera de hacerlo podría ser con el análisis de la brecha entre las percepciones sobre la familia y las prácticas sociales de reordenamiento de los roles y sus significados, para demostrar que detrás de la concepción de estrategias familiares yace una visión homogénea de la misma que no toma en cuenta tanto los efectos como las percepciones diferenciadas que se tienen sobre este fenómeno entre sus protagonistas.

En efecto, los resultados de una investigación realizada en la zona sur del país (Herrera y Martínez 2002) demuestran que las percepciones frente a las decisiones de migrar y frente a los beneficios de la migración son distintas si la persona que migra es hombre, mujer, padre, madre, hija o hijo de familia. Asimismo, el uso y control de las remesas por parte de las mujeres están supeditados a una serie de controles familiares en donde se sigue ejerciendo y reproduciendo el rol masculino a nombre de la familia. Por último, las mujeres que se quedan a cargo del cuidado de la familia no disminuyen sino más bien incrementan sus niveles de dependencia frente a los ingresos provenientes del esposo migrante, puesto que por una serie de factores culturales y sociales no tienen la libertad de decisión sobre estos recursos.

En otras palabras, el análisis de las redes y estrategias familiares tiene que ser complementado por una perspectiva interpretativa que incluya el análisis de las relaciones de poder que se entretienen entre los distintos miembros de la familia y al interior de las comunidades. Esto, por ejemplo, permite a Pedone encontrar redes y cadenas sostenidas por mujeres y preguntarse sobre su importancia para entender el flujo cada vez mayor de la migración femenina.

La migración como capital cultural

El trabajo de Maldonado nos presenta una entrada diferente a las anteriores. Su énfasis está en discutir la relación entre experiencias migratorias e identidad cultural. La migración de jóvenes otavaleños al extranjero le sirve como un terreno muy fértil para abordar las ambigüedades que supone la construcción de identidades, la maleabilidad de éstas y cómo la migración implica una serie de procesos culturales que modifican nuestra propia concepción de lo que serían las identidades, nuestro sentido de pertenencia y los referentes con los cuales construimos nuestras auto-percepciones. En eso se acerca mucho a la mirada de Ruiz sobre los y las migrantes ecuatorianos en Ámsterdam. Sería interesante contrastar lo analizado por Maldonado en Otavalo entre jóvenes migrantes comerciantes y artesanos, con lo que se observa en otros entornos del país en donde también se perfila ya la presencia de una cultura migrante, caracterizada por un consumo determinado, una forma de vestir, diversiones específicas entre los jóvenes y otros elementos más. ¿Qué tipo de identidades están surgiendo como producto de estos cambios? ¿Cómo se relaciona esto con los procesos de movilidad social y transformaciones en el sistema de valores que ordena la vida local? ¿Cuáles son los mecanismos de control social que se desatan para contrarrestar estos procesos? Todas estas son todavía preguntas que necesitan ser abordadas para profundizar en la mirada de la migración como capital cultural y articularla a una visión más amplia de la relación entre el lugar de origen y el de destino.

Un complemento a esta mirada sobre la cultura de la migración es aquel de las percepciones que tienen los entornos locales sobre los y las migrantes. Al respecto, habría que indagar sobre el peso de las construcciones culturales del género sobre estas percepciones. Un trabajo exploratorio (Herrera y Martínez 2002) en la región sur develó que existe una valoración diferenciada por género. La migración en los hombres, especialmente cuando

son padres de familia, es vista como parte de un consenso familiar en el cual su papel de proveedores está legitimado, mientras que en el caso de las mujeres migrantes este rol representa un trastocamiento de los valores tradicionales de familia que afectan su imagen. Las percepciones respecto a la mujer migrante están imbuidas en representaciones tradicionales de género que ven a las mujeres en papeles heroicos, dispuestas a cualquier sacrificio por los demás. Pero estas imágenes conviven con visiones descalificadoras que perciben a las mujeres como ambiciosas o moralmente en riesgo. Estas representaciones de familia nuclear trastocada también afectan de manera significativa la percepción que se tiene sobre los hijos e hijas que se quedan. Existe una estigmatización frente a los hijos de los migrantes que los coloca como producto de familias desestructuradas y por ende potenciales ciudadanos peligrosos.

Una de las vetas más interesantes que debe ser analizada es entonces combinar esta miradas sobre la migración como capital cultural con los mecanismos de control cultural y social que se despliegan en estos entornos. Habría que investigar por ejemplo, si existe una relación entre esta percepción de ruptura de ciertas jerarquías sociales en entornos con alta migración y las imágenes estigmatizantes de los hijos de migrantes como posibles trastocadores de ciertos valores y jerarquías.

Quisiera concluir señalando que si bien se ha demostrado ampliamente la utilidad de categorías como las redes sociales, las cadenas migratorias, los imaginarios, las representaciones sociales y la importancia de la mirada desde los actores como entradas para el análisis de la migración ecuatoriana al exterior, nos queda mucho por conocer y quisiera dejar mencionados dos aspectos que han sido poco abordados en este dossier: la economía de la migración y el tema de la ciudadanía. Respecto al primero, es necesario empezar a pensar las implicaciones de las remesas en la lógica microeconómica de los hogares, su articulación con la reproducción de la fuerza de trabajo, sus posibles beneficios y perjuicios. En

lo relativo a lo macro, es necesario que conozcamos más sistemáticamente las formas de inserción laboral de los y las migrantes ecuatorianas y su peso en la economía mundial. Estos dos aspectos son necesarios para contextualizar las visiones sociales y culturales de la migración. Por otro lado, los dilemas alrededor de la construcción de la ciudadanía y de los derechos que implica la condición de migrante también necesitan de un análisis más detenido. El trabajo de Pujadas y Massal, por ejemplo, nos deja con un inquietante diagnóstico sobre la cada vez más difícil situación de los y las migrantes extracomunitarios que califican como de “endémica provisionalidad” respecto a su condición ciudadana. Desde el lugar de origen es necesario que podamos estudiar cuál es la noción de derechos que tienen los actores de la migración, de qué manera esta visión se mantiene o modifica en el país receptor, cómo trastoca esta visión la experiencia migratoria en el lugar de origen, con el fin de enmarcar igualmente las perspectivas culturales y sociales en la política de la migración.

Bibliografía

- Basch, L. N. Schiller y C. Blanc, 1994, *Nations Unbounded: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and deterritorialized nations-states*, Ed. Gordon y Breach, Langhore.
- Borrero, Ana Luz et al., 1995, *Mujer y migración: alcances de un fenómeno nacional y regional*, Abya Yala, Quito.
- Bourdieu, Pierre y Loic Wacquant, 1992, *An Invitation to Reflexive Sociology*, Chicago University Press, Chicago.
- , 2001, “The Organic Ethnologist of Algerian Migration” www.sociology.berkeley.edu/faculty/wacquant/algerian.pdf
- Carpio, P., 1992, *Entre pueblos y metrópolis: la migración internacional en comunidades austroandinas en el Ecuador*, Instituto Lati-

- noamericano de Investigaciones sociales, Quito.
- Chin, Margaret, 2001, "When coethnic assets become liabilities: Mexican, Ecuadorian and Chinese garment workers in New York City", en H.R Cordero-Guzmán, R.C Smith, y R. Grosfoguel, eds., *op cit.*
- Cordero-Guzmán, H.R., R.C Smith y R. Grosfoguel, eds., 2001, *Migration, Transnationalization and Race in Changing New York City*, Temple University Press, Philadelphia.
- D'Aubeterre, María Eugenia, 2001, "¿Todos estamos bien? Género y parentesco en familias de transmigrantes poblanos", LASA, Washington DC, septiembre 6-8.
- Herrera, Gioconda y Alexandra Martínez, 2002, "Género y migración en la Región Sur", FLACSO-Embajada real de los Países Bajos, mimeo, Quito, mayo.
- Hondagneu-Sotelo, Pierrette, 1994, *Gendered Transitions*, University of California Press, Berkeley.
- Hondagneu-Sotelo, Pierrette, 1997, "I am Here, but I am There. The Meanings of Latina Transnational Motherhood", en *Gender and Society*, vol. 11, No. 5, pgs. 548-565.
- Jokisch, Brad, 1998, "Landscape of Remittances: Migration and Agricultural Change in High Lands of South Central Ecuador", Tesis Doctoral, Universidad de Clark.
- , 2001, "Desde Nueva York a Madrid: tendencias en la migración ecuatoriana", en *Ecuador Debate*, No. 54, diciembre, pgs. 59-84, Quito.
- Kofman et al, 2000, *Gender and International Migration in Europe*. Routledge. Londres y Nueva York.
- Kyle, David, 2000, *The Transnational Peasant: Migration Networks and Ethnicity in Andean Ecuador*, John Hopkins University Press, Baltimore.
- Kyle, David, 2001, "La diáspora del comercio otavaleño: capital social y empresa transnacional" en *Ecuador Debate*, No. 54, diciembre, pgs. 85-110, Quito.
- Lawson, V., 1998, "Hierarchical households and gendered migration in Latin America: Feminist extensions to migration research" en *Progress in Human Geography*, No.22(1): pgs. 39-53.
- Moore, Henrietta, 1998, *Feminism and Anthropology*, University of Minnesota Press, Minneapolis.
- Pedone, Claudia, 2000a, "Globalización y migraciones internacionales. Trayectoria y estrategias migratorias de ecuatorianos en Murcia", en *Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, Universidad de Barcelona, agosto.
- Pedone Claudia, 2000b, "La migración extracomunitaria y los medios de comunicación: la inmigración ecuatoriana en la prensa española" en *Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, Universidad de Barcelona, agosto.
- Portes, Alejandro y R. Rumbaut, 1996, *Immigrant America: a Portrait*, University of California Press, Berkeley and London.
- Pribilsky, Jason, 2001, "Nervios and modern childhood: migrations and changing context of child life in the Ecuadorian Andes. *Childhood: a Global Journal of Child Research* No.8(2) : pgs. 251-273.
- Wamsley Emily, 2001, "Transformando los pueblos: la migración internacional y el impacto social a nivel comunitario" en *Ecuador Debate*, No. 54, diciembre pgs. 155-174, Quito.

DIÁLOGO

o

Pobreza y desigualdad en América Latina

diálogo con Rob Vos*

Fander Falconí**
y Mauricio León G.***

Rob Vos es economista, profesor de Finanzas y Desarrollo y vicerrector del Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Países Bajos. Ha realizado una serie de publicaciones sobre macroeconomía y desarrollo social en Ecuador desde inicios de la década del 80, y se ha vinculado como asesor a varias instituciones gubernamentales del país como el CONADE, INEC y SIISE. Ha colaborado además, como profesor visitante de FLACSO en diversas oportunidades. Actualmente, coopera con la especialidad de Economía del Desarrollo del Programa de Economía de esta institución académica.

Ha realizado recientemente varias publicaciones sobre pobreza y desigualdad en América Latina, entre las que se destaca: *Economic Liberalization, Distribution and Poverty: Latin America in the 1990s*, trabajo que efectúa conjuntamente con Enrique Ganuza, Lance Taylor y Ricardo Paes de Barros en el año 2001 (Cheltenham UK, Northampton, MA: Edward Elgar Publishers). En los últimos años, particularmente en el año 2000, han salido a la luz varias de sus investigaciones sobre el Ecuador entre las que constan: *Ecuador*

1999: *Crisis y Protección Social*, estudio que realiza con otros autores. Con Mauricio León desarrolla la investigación *La pobreza urbana en el Ecuador: Mitos y realidades*. El material bibliográfico ecuatoriano que aquí se menciona contó con el auspicio del SIISE y el sello editorial de Abya-Yala.

Su larga trayectoria como investigador de temas del desarrollo en América Latina y su vasto conocimiento sobre la realidad ecuatoriana hacen del Dr. Rob Vos un referente necesario para entender de mejor manera el desempeño económico y social de la región y el país, en las últimas décadas.

F.F. - M.L.G: ¿Cuál ha sido el impacto general de la liberalización comercial registrada a partir de los años 90 en América Latina, en cuanto a la estructura económica, el mercado de trabajo, la pobreza y la desigualdad?

El resultado más marcado es el aumento de la desigualdad en la distribución de ingresos. Ello sucedió en casi todos los países de la región, de acuerdo a un estudio que se publicó recientemente.¹ La liberalización comercial ha provocado un cambio tecnológico en sectores importantes de las economías de la región; ha demandado, en particular, más ma-

* Professor del Institute of Social Studies-The Hague

** Coordinador del Programa de Economía de FLACSO, Ecuador

*** Coordinador (e) del capítulo Ecuador de la Red sobre Desigualdad y Pobreza (NIP, por sus siglas en inglés)

1 El estudio comprende un análisis de 17 países de la región, fue realizado para PNUD y CEPAL. Ver: Enrique Ganuza, Lance Taylor, Ricardo Paes de Barros y Rob Vos (coord.), 2001, *Liberalización, Desigualdad y Pobreza: América Latina y el Caribe en los 90*, Buenos



no de obra calificada. Ello en muchos casos, se produjo a costa del empleo de los trabajadores con menos educación, quienes cayeron en el desempleo o tuvieron que buscar trabajo en el sector informal y, generalmente, perdieron remuneración. En otras palabras, la liberalización comercial ha sido buena para algunos y no tanto para otros. El efecto sobre la pobreza es menos generalizable porque ésta también ha sido fuertemente influenciada por otros factores, tales como la política macroeconómica. Si se aísla sólo el impacto de la liberalización comercial, se puede decir que en muchos casos ha sido un elemento que contribuyó con el aumento de la pobreza, si no se lo contrarresta con otros factores, que sí resultan favorables.

F.F. - M.L.G.: ¿Existen diferencias entre los distintos países, o se puede afirmar que el impacto ha sido homogéneo?

Aires: Ediciones Universidad de Buenos Aires. También será publicado en inglés: Rob Vos, Lance Taylor y Ricardo Paes de Barros (eds.) *Economic Liberalization, Distribution and Poverty. Latin America in the 1990s*, Cheltenham (Inglaterra): Edward Elgar.

La tendencia hacia una mayor desigualdad entre trabajadores calificados y no calificados se observa en casi toda la región. Sin embargo, el impacto sobre la pobreza y la desigualdad en el ámbito de los hogares no ha sido uniforme; tampoco lo han sido los mecanismos de ajuste estructural. Por ejemplo, en Argentina, la apertura tanto comercial como financiera ha otorgado un empuje al aumento de la productividad en el sector manufacturero, lo cual ha producido una expulsión de trabajadores tanto calificados como no calificados.

Inicialmente ello no provocó un mayor crecimiento de la pobreza, gracias a la expansión y modernización del sector de servicios (telecomunicaciones, etc.), donde el empleo se expandió, sobre todo para la mano de obra calificada. Ya mucho antes de la crisis actual, la suerte de los argentinos se revirtió, proceso que se inició con el efecto “Tequila”, ante la crisis que sufrió el peso mexicano en 1995.

Con la disminución de los flujos de capital a Argentina se frenó también la expansión del empleo en el sector de servicios y el desempleo aumentó significativamente. La tendencia estructural ha tendido a que el aumen-

to de la desigualdad y la pobreza en Argentina de los 90, se deba principalmente al desempleo estructural generado en el sector manufacturero, y al aumento de la brecha de las remuneraciones entre trabajadores calificados y no calificados en el sector de servicios. La crisis actual ha multiplicado dicho efecto sobre la pobreza, particularmente a través del rápido aumento del desempleo y la reducción de los salarios reales.

En México, en cambio, la liberalización comercial y la apreciación del peso mexicano a inicios de los 90, impulsaron una modernización del sector manufacturero, con mayor demanda de mano de obra calificada a costa de los trabajadores de menor calificación. Los trabajadores con menos educación tuvieron cierta suerte con la expansión de la maquila, pero muchos tuvieron que buscar empleo en el sector informal urbano o en la agricultura tradicional. Igualmente, aumentó la desigualdad pero a causa de otro tipo de ajuste estructural en la economía.

En algunos países con mayor peso de la maquila o en otros sectores orientados a la exportación se consiguió generar buena cantidad de nuevos empleos, especialmente para las mujeres. Éste ha sido el caso en países como El Salvador, República Dominicana o Chile. Allí, las mejoras en los niveles de remuneración y la disminución del desempleo ayudaron a reducir la pobreza. Una lección que nos queda a partir de estos casos radica en que se aplicaron esquemas de promoción de exportaciones (no tradicionales) relativamente eficaces y amplios.

En Ecuador se observa también un aumento de la demanda de mano de obra calificada después de la liberalización comercial, a inicios

de los años 90; pero igual, en casi todas las ramas de actividad con excepción de los sectores de comercio y servicios personales donde se encuentra la mayoría del sector informal urbano que aparece como el empleador residual de la economía. Tanto antes como después de la crisis de 1999 se observa un aumento de la de-

sigualdad en los ingresos laborales en el país, que se contrarresta sólo momentáneamente en aquellos años en que se aplicaron ajustes significativos en los salarios mínimos.

F.F. - M.L.G: ¿Cuál es la importancia relativa y la secuencia de elementos como estabilización, crecimiento y distribución en una estrategia sostenible de desarrollo económico y social?

Es difícil establecer prioridades entre estos elementos porque están relacionados en gran

medida. Sin estabilidad es difícil lograr un crecimiento sostenido, mientras el crecimiento con mucha desigualdad tiende a enfrentar límites como la falta de expansión de un mercado interno, demasiada tensión social o mucha gente sin acceso a la educación. Si se proyecta la pregunta al caso ecuatoriano, la estabilidad económica es una condición necesaria para crear el contexto que permita encaminar acciones que ayuden a promover la inversión y el crecimiento sostenido en el largo plazo. Así, se daría una alta prioridad a asegurar la estabilidad económica. Una de las formas más estructurales para reducir la desigualdad y sostener un proceso de crecimiento alto radica en la inversión en el desarrollo humano, es decir en educación, salud, etc. Ésta debe ser otra prioridad y requeriría, entre otros elementos, que se otorgase mayor preponderan-

*Reducir la desigualdad y sostener un proceso de crecimiento alto requieren inversión en desarrollo humano: educación, salud, etc.
El gasto social debe tener mayor prioridad en el presupuesto del Estado a costa de otros gastos, si se busca resguardar la estabilidad macroeconómica*



cia al gasto social en el presupuesto del Estado a costa de otros gastos, si se busca resguardar la estabilidad macroeconómica.

Considero que en algunas otras áreas también se requiere conceder cierta prioridad a las políticas redistributivas, sobre todo a la redistribución de activos mediante una reforma agraria en ciertas partes del sector rural y mayor acceso a créditos para la pequeña industria, por ejemplo. El crecimiento más bien debe ser visto como un resultante de estas condiciones antes que como un objetivo de las políticas en sí mismas.

F.F. - M.L.G: ¿Mantiene aún relevancia la denominada “economía del desarrollo” en el contexto económico internacional actual?

Indudablemente que sí. Una de las características importantes del enfoque de la economía del desarrollo desde sus fundamentos teóricos es que toma en consideración los impedimentos estructurales para el desarrollo. Son aspectos que en la actualidad se tienden a denominar como “factores institucionales”. Pueden cubrir muchos componentes, desde el ámbito legal del funcionamiento de mercados, la regulación de mercados financieros, la credibilidad de las intervenciones del gobierno, los arreglos en los mercados financieros, etc., etc. Estos aspectos que tienen sus propias características en determinados espacios geográficos son obvios en el contexto de muchos países en vías de desarrollo.

Aunque desde ángulos distintos, la economía del desarrollo ha puesto a veces énfasis en la importancia así como en el contexto histórico de estos factores, la relevancia actual obvia es que en los contextos de globalización y liberalización económica se siente con mucha más fuerza si los arreglos institucionales son débiles o inadecuados para “controlar” el funcionamiento de los mercados, lo cual presenta efectos desastrosos como los que hemos observado en Ecuador, Argentina y en muchos otros lugares del continente. No es gratuito que ya no exista economista en el FMI o el Banco Mundial que desconozca la impor-

tancia crucial de estos factores, aunque a veces la retórica suene diferente o la práctica de las políticas malinterprete estos elementos que no se dejan reformar fácilmente.

Es más bien la Economía tradicional neoclásica, predominante en muchas universidades de los países ricos, que debería aprender mucho de la denominada “economía del desarrollo”.

También en las economías “desarrolladas” importan mucho las instituciones. Poco a poco se acepta esta posición en la Economía ortodoxa. Por ejemplo, la teoría de la información asimétrica y los arreglos de garantías implícitas a contratos de préstamo, tal como fue desarrollada por Stiglitz, constituye ya el enfoque estándar en la teoría del funcionamiento de mercados financieros con resultados muy distintos al supuesto tradicional de mercados flexibles con información perfecta. El mismo Stiglitz formó muchas de sus ideas teóricas (tal vez no sus ideas sobre el FMI) en Kenia, en un contexto con problemas de desarrollo, y ahora sus propuestas son muy aceptadas entre los economistas neoclásicos.

La teoría neoclásica de crecimiento endógeno que surgió en los años 80, constituye un ejemplo distinto. Aquí se trata de explicar los factores que a su vez aclaran el cambio tecnológico detrás del crecimiento de largo plazo, incluidos los factores institucionales. Cuando uno estudia bien las primeras teorías del desarrollo observa que en gran medida, la teoría neoclásica de crecimiento endógeno trata de incorporar los mismos elementos enfatizados ya en las ideas planteadas hace más de cincuenta años por los teóricos del desarrollo, aunque ahora se las estudie con más herramientas matemáticas y econométricas. Lastimosamente, muchos economistas neoclásicos no tienden a reconocer estas contribuciones y pretenden haber inventado la rueda.

F.F. - M.L.G: ¿Cuáles son las corrientes ideológicas relevantes en el debate sobre la economía del desarrollo?

En décadas pasadas había una controversia fuerte entre una tendencia llamada “estructu-



ralista” (que incluye la teoría de la dependencia) y la “neoclásica”. Entre los economistas del desarrollo, el estructuralismo (por cierto con diferentes orientaciones) fue más bien la “ortodoxia”, expresada en ese entonces, y entre otros aspectos, en la política de sustitución de importaciones, que para bien o para mal, tuvo un fundamento teórico fuerte en el pensamiento de Raúl Prebisch y la CEPAL. Pero también predominó, créanme o no, una escuela estructuralista en el Banco Mundial en los años 60 y 70, cuando Hollis Chenery era economista jefe y, entre otros factores, fue protagonista de una estrategia de desarrollo denominada “crecimiento con redistribución”; enfatizaba en que sin reducción de la desigualdad y redistribución de activos no es posible lograr un crecimiento sostenible de la economía.

La “contrarrevolución” neoclásica, si se quiere, surgió sobre todo en los 80, y declaró la bancarrota de los modelos anteriores, tanto teóricos como de políticas de desarrollo. Las deficiencias de la intervención estatal recomendada por los estructuralistas serían mucho

peores que las deficiencias de los mercados. Así surgió la filosofía sustentada por el pensamiento neoclásico en cuanto a que es mejor reducir la intervención estatal y liberalizar la economía. Estamos viviendo este proceso ahora. Sin embargo, como indiqué anteriormente, la teoría neoclásica ya no es tan simple en cuanto a sus supuestos sobre la realidad, como tal vez sugieren los libros de texto: se han incorporado muchos de los elementos enfatizados por los estructuralistas. En el ámbito teórico creo que ahora hay mucha más convergencia entre las dos posiciones.

También los “estructuralistas” reconocen que no se puede suponer tanta rigidez en el funcionamiento de las economías en desarrollo, tal como la ineficacia de los mecanismos de ajuste de los precios relativos, por ejemplo. La diferencia crucial tiende a ubicar cuál es el punto de partida para el análisis. Comenzamos con una situación “ideal” de mercado y el tema central es estudiar “las distorsiones” de dicho mundo ideal, como suele ser la formación de muchos economistas neoclásicos; o más bien partimos de un contexto histórico de mercados imperfectos, agentes que no siempre pueden “optimizar” su utilidad, e instituciones que pueden funcionar de manera distinta en contextos diferentes.

Creo que el punto de partida debe ser la última posición, pero con el reconocimiento de que tanto de la escuela neoclásica como de otras escuelas podemos derivar las herramientas de análisis que nos permitan entender mejor la realidad y guiar la política económica. Las posiciones ideológicas también influyen en el pensamiento económico, pero lo peor es caer en posiciones fundamentalistas. Esto no ayuda ni al avance teórico, ni al desarrollo económico.

F.F. - M.L.G: Usted se ha dedicado a investigar la realidad económica y social del Ecuador desde inicios de la década de los 80. ¿Cuál es el balance económico y social que haría sobre los últimos veinte años en el país?

Si se observan los años recientes se diría obviamente, que el balance ha sido más bien ne-

gativo. Sin embargo, quisiera enfatizar primero en ciertos logros que no se reconocen a veces. El desarrollo social ha mejorado indudablemente en algunos aspectos. La esperanza de vida ha aumentado en las últimas dos décadas de 60 a 70 años, la escolaridad de la población en general ha mejorado sustancialmente, la tasa de mortalidad infantil bajó de 50 a 18 por cada mil nacidos vivos, y también hoy existe mucha más gente con acceso al agua potable que hace veinte años. Todos éstos son logros importantes que hay que reconocer. En general, si se lo mide a través de estos indicadores sociales, los ecuatorianos viven mejor hoy que hace dos décadas. No obstante, también existen razones para una visión más pesimista:

- Primero, se observa un cierto estancamiento en los logros sociales durante la última década, a causa, en parte, de la caída casi perpetua del gasto social real desde 1982.
- Segundo, se ha dado demasiada volatilidad en la situación económica que ha causado mucha incertidumbre y ha frenado inversiones que realmente contribuyen al desarrollo a largo plazo. Dicha volatilidad no solo se debe a la mala suerte, como en el caso del fenómeno El Niño o las caídas en el precio del petróleo. Más bien, el país ha sufrido además, de un mal manejo de la economía, sin mucha visión de largo plazo. Sabemos que el precio del petróleo es inestable y que hay muchas formas para suavizar el impacto de esta volatilidad. No se han aplicado, y hasta la actualidad faltan, las medidas para un manejo prudente de la riqueza generada por el petróleo. No se puede evitar que ocurra el fenómeno El Niño, pero sí hay varias formas para prevenir muchos de los daños que causa típicamente. En este sentido, se ha realizado poco esfuerzo real. El manejo de la política económica y social en las últimas décadas ha estado sujeto a los ciclos políticos y a los intereses particulares. En el panorama político actual no he escuchado voces que realmente apunten seriamente a superar esta deficiencia.

- Tercero, en términos políticos e institucionales el país ha caído en una crisis de gobernabilidad. La gente tiene poca confianza en lo que hace el Gobierno, pero al mismo tiempo, exige que éste resuelva todos los problemas. No hay medidas milagrosas que puedan revertir esta situación de un día para el otro. Va a ser necesario un proceso duro y largo para superar esto.

F.F. - M.L.G: ¿Es partidario de la dolarización?

Me han hecho muchas veces esta pregunta. Creo que no está adecuadamente formulada. ¿Por qué? Porque es difícil favorecer un régimen monetario frente a otro, sin ver las condiciones bajo las cuales se lo propone. Es un error creer que con un cambio de la moneda se resuelven automáticamente los problemas. En Ecuador, a inicios del año 2000, existió una crisis económica y financiera y sobre todo también una crisis de confianza en el manejo de la economía que requería un *shock* monetario de algún orden. Con el alto grado de dolarización de facto (con la gente teniendo ya muchos dólares en su “Colchon Bank”), una dolarización oficial era una opción no tan ilógica. En teoría, creo que para un país como Ecuador no conviene un régimen monetario tan inflexible porque disminuye considerablemente las opciones para ajustar la economía ante desequilibrios económicos sin afectar mucho el bienestar de la población. Sin embargo, en la actualidad – ya tomada la decisión de dolarizar – creo que es inconveniente proponer revertirla. ¿Cuánto mejor ha vivido el país con los regímenes cambiarios de los años 80 ó 90? Creo que revocar el esquema de dolarización ahora, tendría un costo económico y social tremendo por la incertidumbre que causaría y por la historia del mal manejo monetario que el país ha experimentado en los últimos veinte años o más.

Es más, el debate sobre dolarizar o no, desvía la atención de los problemas de mayor envergadura que es necesario resolver. La dolarización por sí misma no trae automáticamente

más estabilidad, ni tampoco su eliminación. El país puede caer nuevamente en una crisis financiera tanto bajo la dolarización como sin ella. La ventaja principal de mantener ahora la dolarización radica en que ofrece un punto fijo de confianza al sistema económico, que debería ayudar a pensar sobre otras reformas que son necesarias bajo cualquier régimen monetario, tales como crear un fondo de estabilización y ahorro para los recursos petroleros, introducir un sistema de manejo fiscal sostenible, profundizar la reforma a la regulación y supervisión bancaria, entre otros aspectos.

Sin un manejo mejor en estas áreas, la economía puede hundirse bajo cualquier régimen monetario. Es demasiado fácil apuntar a la dolarización como el mal de la economía. Considero que ahora hay que aprovechar el hecho de que la dolarización ha simplificado las opciones de manejo macroeconómico para realizar las reformas que se debieron haber hecho hace décadas.

F.F.- M.L.G: En el ámbito de las próximas elecciones presidenciales, ¿Cuáles considera Ud. que son los desafíos de política económica y social en el contexto de la dolarización de la economía ecuatoriana?

Como lo mencioné anteriormente, considero que en primer lugar, es necesario dejar de lado la discusión sobre la dolarización. Hay que apuntar al tipo de reformas económicas que he señalado. En el ámbito social se requiere una agenda tan ambiciosa como realista. Primero, hay que revertir la tendencia hacia la reduc-

ción del gasto social de los últimos veinte años. Este cambio ya se ha iniciado bajo el gobierno de Gustavo Noboa. No obstante, requiere un esfuerzo sostenido que, con las limitaciones fiscales dadas, implica una clara prioridad por mucho tiempo para el gasto público en educación, salud y protección social, algo que ha faltado en todos los gobiernos anteriores.

Segundo, hay que mejorar mucho la calidad y la eficiencia del mismo gasto para lograr mejores resultados. Tercero, se requiere fortalecer en gran medida el sistema de protección social. La crisis de 1999-2000 mostró que ni el sistema de seguridad social ni los programas de asistencia social tenían la cobertura y la flexibilidad para dar protección a la población más vulnerable, justamente cuando más se lo necesitaba. En muchos hogares pobres, algunos

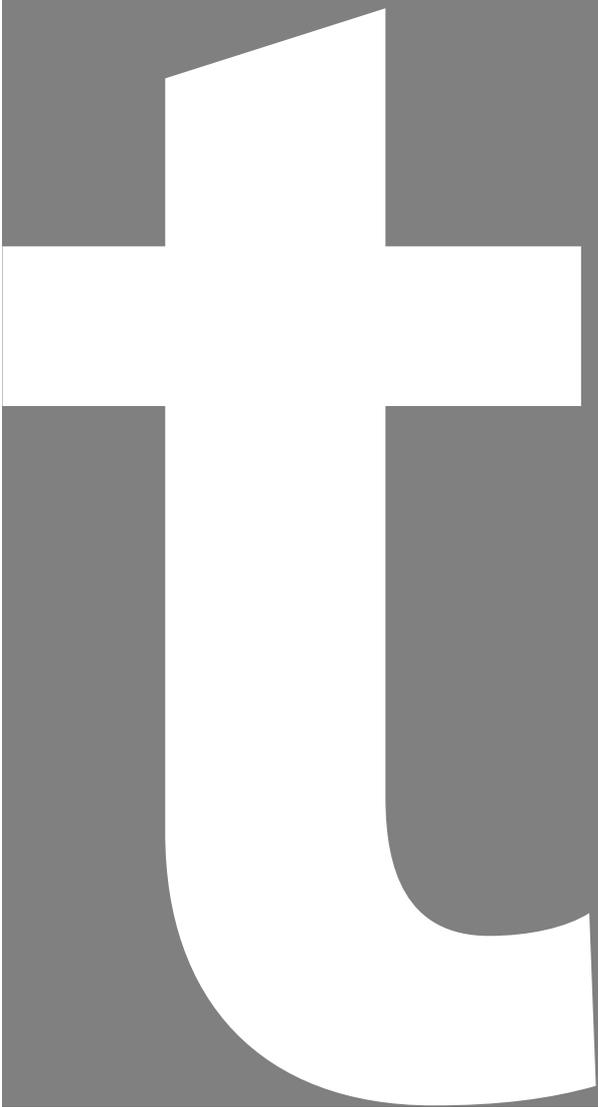
niños dejaron de ir a la escuela o sufrieron de desnutrición, lo que afectará sus posibilidades a una vida mejor en el largo plazo.

En una economía dolarizada el gobierno tiene menos opciones de manejo económico a corto plazo para suavizar dichos costos sociales, por lo que requiere de un sistema de protección social que pueda ser más efectivo en períodos de revés económico y que ahorre recursos en tiempos mejores. No es fácil realizar este tipo de cambios en una situación de restricción fiscal, pero hay que caminar en esta dirección y asumir una visión que, ojalá, supere el ciclo político y que sea durable. En el pasado hemos visto demasiados procesos de un paso hacia delante y tres para atrás, tal como en un tango falso. Hay que intentar otro baile que busque sólo los pasos pa' delante.

En una economía dolarizada el gobierno tiene menos opciones de manejo económico a corto plazo para suavizar los costos sociales que se producen; requiere de un sistema de protección social que sea más efectivo en períodos de revés económico y que ahorre recursos en tiempos mejores.



TEMAS



Historia social y mentalidades:

Los higienistas, el ornato de la ciudad y las clasificaciones sociales

Eduardo Kingman Garcés*

Al momento de hacer una historia del pensamiento social ecuatoriano no siempre se han tomado en cuenta las vertientes que se desarrollan al margen de sus canales legitimados o “naturales” de producción (los de la Sociología, la Antropología, las Ciencias Políticas). Me refiero a las formas de pensamiento que han acompañado y acompañan las prácticas cotidianas de organización de la vida social: la escuela, la institución familiar, la racionalización del trabajo en la fábrica, el salubrismo público, las labores de control y vigilancia de la ciudad.

El objetivo de este artículo es el de llamar la atención sobre un aspecto específico dentro de este campo: los discursos de los higienistas quiteños a finales del siglo XIX e inicios del XX y su relación con un *habitus*.

Lo que me interesa de los higienistas (o salubristas, como los llamaré ocasionalmente) son sus propuestas de manejo de la ciudad y los individuos; me gustaría además, relacionar esas propuestas con los cambios que se produjeron en las mentalidades, y de manera más específica, con las ideas de *ornato* y decentamiento urbanos, tal como funcionaron en Quito desde la segunda mitad del siglo XIX. Mi perspectiva no es tanto la de la historia de la medicina o de la urbanística, tam-

poco la de la historia de las ideas, como la de la historia social y sus imaginarios.¹

La medicina social en Europa y en los Andes

Las políticas salubristas se instauraron y desarrollaron en Europa desde el siglo XVIII, pero su incidencia en los Andes y en Ecuador en concreto, fue mucho más tardía. A pesar de existir antecedentes (escritos, propuestas) de este tipo en Quito, desde los años mismos de las reformas borbónicas y durante el siglo XIX, como parte de las preocupaciones de las capas ilustradas, el salubrismo no pasó a constituir una tendencia coherente de acción social sino en los años 30 del siglo pasado.

El problema no consiste, en todo caso, en mostrar la relación del salubrismo (o higienismo) con respecto a modelos europeos, sino en saber cómo funcionaba como corriente de intervención social en una ciudad de los Andes; de qué modo fue utilizado, cómo fue modificado con relación a nuestro propio contexto; o lo que es mejor aún: intentar entender por qué se hizo uso de sus dispositivos, desde qué fines prácticos y de qué modo.

El higienismo ha sido estudiado en Europa como un sistema disciplinario: con el desarrollo de la manufactura y en lo posterior

* Profesor-Investigador de FLACSO-Ecuador.

¹ En este texto me limitaré a sintetizar algunas ideas de una investigación más amplia realizada hace algunos años, que sólo ha circulado en versión mecanográfica.



Blanca Yoder - Inauguración de la Cruz Roja, Quito, hacia 1920

con el de la industria fabril, la urbanización y la constitución de formas modernas de soberanía, la higiene de las poblaciones comenzó a formar parte de las políticas de Estado. Se trataba de una preocupación que iba más allá del campo estrictamente médico y se orientaba, de acuerdo a Foucault, en la línea de una anatomopolítica y una biopolítica.

Tengo dudas sin embargo, en cuanto a que este dispositivo moderno hubiese podido ser aplicado del mismo modo en los Andes y en Europa. En primer lugar, se trataba de un modelo surgido en el contexto de determinadas dinámicas de urbanización y de desarrollo industrial que no alcanzaban nuestros países; en segundo lugar, hablamos de climas distintos desde los puntos de vista intelectual y moral. Si bien las elites se habían orientado en la idea del progreso, no abandonaban su carácter rentístico y un *habitus* marcado por criterios de distinción racial, decencia y privilegio. Las urbes, al mismo tiempo que pretendían modernizarse, seguían siendo en términos de su configuración social y de los tratos y relaciones cotidianas, ciudades en gran medida “señoriales” o de “antiguo régimen”. En ellas tenían aún un gran peso formas embozadas de servi-

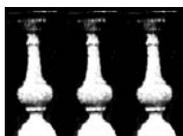
dumbre, así como vínculos patrimoniales y sistemas de organización social corporativos. Se trataba de una “ciudad de mercado”, estrechamente relacionada con el agro, en la que predominaba la pequeña producción manufacturera; aunque habían surgido algunas fábricas, el desarrollo del capital industrial era muy débil. En ese contexto existía una gran cantidad de población flotante ligada al peonazgo urbano y semiurbano, a la servidumbre, así como al pequeño comercio, el vagabundaje y a una gran diversidad de oficios.

¿Hasta qué punto podemos hablar en ciudades de este tipo, del surgimiento de un asalariado moderno (en el sentido de Marx) que hubiese requerido pasar por un proceso de disciplinamiento? ¿En qué medida las relaciones cotidianas no estaban aún fuertemente marcadas por la “costumbre”, al punto de que las propias innovaciones se veían condicionadas por ello? A lo mejor, sólo podemos hablar de una modernidad incipiente de la cual estaban excluidas (para bien o para mal) amplias capas sociales. Y si esto fuese así, ¿cuál pudo haber sido el rol de una tecnología disciplinaria como la que habían desarrollado en Europa los higienistas?

El cuidado de la ciudad y la “policía”

Las ordenanzas, disposiciones y correspondencia del Cabildo de Quito registran, a lo largo de todo el siglo XIX, acciones en el campo de la salud pública; pese a ello, no se

Las disposiciones que el Cabildo de Quito emitipó a lo largo de todo el siglo XIX en el campo de la salud pública respondían por un lado, a la idea de ornato y por otro, a la idea de beneficencia, tanto en lo relacionado con el cuidado de la ciudad como en un sentido de asistencia a los pobres



puede hablar de salubridad o de higienismo en un sentido moderno. Me refiero a las medidas asumidas frente a las pestes, o aquellas adoptadas para el control de los “lázaros” o de los locos que deambulaban por la ciudad, así como para el cuidado de las acequias, quebradas, calles, plazas, edificaciones públicas, los mercados, carnicerías, etc.

Se trataba de medidas que respondían por un lado, a la idea de ornato, pero por otro, a la idea de beneficencia, tanto en un sentido amplio referente al cuidado de la ciudad, de la familia, de los presidios urbanos, de los abastos y los medios de transporte, como en sentido restringido, de asistencia a los pobres (de protección y vigilancia). De hecho, las medidas salubristas estaban ligadas a las acciones de la Policía, sin que formasen un cuerpo doctrinario propio ni fuesen objeto de preocupación de organismos especializados, menos aún de organismos técnicos; la noción de *policía* era, en todo caso, más amplia que la actual.

El cuidado de las plazas, calles y demás lugares públicos, así como de los abastos y la moral pública dependía tanto de la acción de los organismos de Policía² como de los pobladores. En el siglo XIX no existía *policía* fuera

de la población, su acción partía de las redes organizadas en su interior: barrios, gremios o familias patriarcales.

No todas las acciones que la Policía promovía eran voluntarias, pero la mayoría de ellas tenían un asidero en el “sentir de la gente”. No existía al mismo tiempo, un acuerdo sobre todas las acciones. Se esperaba que la gente participase en el cuidado de los espacios públicos y en el control de las pestes denunciando, entre otras cosas, a los leprosos y a los apestados, pero en muchas ocasiones, sobre todo en los llamados barrios, era la propia gente la que se ocupaba de ocultarlos.

Era ese sentido común ciudadano (del que habla Guerrero) lo que llevaba a utilizar, de modo natural, a los indígenas y no a los blancos, en cualquier tarea relacionada con la salubridad pública. En marzo de 1876 la Dirección de Policía aclaraba que “cuando existía la Contribución de Indígenas, por estar exonerada de esta contribución, los pueblos de Zám-biza y Nayón, eran éstos los únicos llamados al aseo público, ganando medio real por su trabajo y que una vez eliminada esta contribución, se distribuyó el trabajo del aseo a los pueblos de las cinco leguas, abonándoles el jornal que gana cualquier peón”. La nota aclaraba además, que los pobladores de esas parroquias no podían eximirse del trabajo cuando les tocaba su turno o “cuando había necesidad de atender con mayor número a las obras públicas”³. A inicios del siglo XX los indígenas de la parroquia de Zám-biza seguían comprometidos con este servicio: Harto conocido por usted es la preferente atención que ha de menester el cuidado del aseo de la ciudad ya que interesa a todos de una manera general y esa parroquia es la única que provee de la cuadrilla acostumbrada (50 brazos) para el indicado objeto⁴

2 Cuando hablo de Policía me refiero a la institución policial, mientras que la idea de *policía*, en el sentido de gobierno de la ciudad, la he tomado de los documentos coloniales y del siglo XIX, aunque lógicamente bajo una lectura foucaultiana.

3 Archivo Nacional de Historia, Archivo de la República, Vol No 527, 1876, f. 44

4 ANH, Archivo de la República, Vol No 527, 1902, f. 34



Fotógrafo: G. Illescas © Archivo Histórico del Banco Central del Ecuador

Barrenderos indígenas, Quito, hacia 1920

Los indígenas no sólo se ocupaban de la limpieza de las calles y del cuidado de las acequias, sino del manejo de los miasmas y el traslado de los muertos y de los enfermos durante las pestes. En eso compartían tareas con los indigentes y los llamados “vagos”.

Un segundo momento en este cuidado de la ciudad, se produce a finales del siglo XIX con la aparición de los primeros higienistas; me refiero a hombres públicos como Manuel Jijón Bello y Gualberto Arcos. Se trataba de un higienismo práctico que acompañaba a las medidas municipales y de Policía. Los términos higienistas de su discurso se confundían aún con los de los publicistas, así como con el sentido común ciudadano. Una muestra de esto es la “Reseña Higiénica de Quito”, publicada en 1902 por el Doctor Manuel Jijón Bello en la que pasa revista sin establecer diferencias, a cuestiones médicas y de salubridad, ordenanzas municipales, leyes y reglamentos, asuntos relacionados con el ordenamiento social.

Un tercer momento se produce en las primeras décadas del siglo XX. Si durante el si-

glo XIX el interés de las políticas urbanas se afincó en el desarrollo de un cuerpo legal que permitiera el gobierno de la ciudad, a partir del siglo XX los que comienzan a predominar son criterios técnicos de normatividad: crecimiento normal de la ciudad y de la población. Es en este contexto donde se inscribe la segunda generación de salubristas. Así como en el siglo XIX, las reformas introducidas por García Moreno en los hospitales permitieron una integración entre el saber médico y la práctica médica hospitalaria (visitas por las salas, autopsias y experimentación con los enfermos), el control de las pestes dio, desde inicios del siglo XX y aún antes, la ocasión de experimentar en el campo de la medicina social. Este tipo de prácticas se desarrolló más tempranamente en la ciudad portuaria de Guayaquil que en Quito. Existe, en todo caso, una gran diferencia entre la primera generación de salubristas y la segunda, a la que se hará referencia en el siguiente acápite, ya que mientras los unos mezclaban parámetros médicos con jurídicos y morales, propios del pu-

blicismo, los segundos harían prevalecer los criterios científicos de la moderna medicina social.

Pablo Arturo Suárez y la medicina social

A Pablo Arturo Suárez (destacado médico y hombre universitario) se le deben las primeras observaciones sistemáticas sobre las condiciones de vida de las poblaciones, y particularmente de los sectores populares. Se trataba de estudios fundamentados en observaciones y estadísticas, dirigidos a medir las potencialidades de la población y a proponer disposiciones de mejoramiento social, encuadradas en el campo de la medicina social. Gran parte de los estudios fueron realizados con grupos de estudiantes de la Universidad Central, que contaban con muy escasos recursos para el efecto. Suárez fue uno de los primeros en utilizar información cuantitativa, obtenida directamente, como fundamento y principio de autoridad de sus observaciones. La realidad era concebida por Suárez, en términos de “laboratorio social”, sujeta a mediciones y comprobaciones médicas y sociales:

Como fundamento imprescindible de una labor médico-social en el Instituto de Previsión, debía no sólo concretar mi primera labor a ir estableciendo dispensarios, laboratorios y otras dependencias como órganos de investigación y de defensa de la salud de los asegurados; sino establecer datos numéricos e índices que reflejen el estado de crecimiento y desarrollo económico-social, valor biológico o vital, capacidad de rendimiento y estado higiénico-sanitario de las poblaciones (Suárez 1937: 8).

Se trataba de un “examen de conciencia de cada población” que permitía calcular el ciclo vital de sus habitantes, saber “cuántos somos, cuántos mueren de cada grupo de edad, cómo vivimos (alojamiento, alimentación), qué volumen de dinero pasa por nuestras manos, qué grado de instrucción elemental tenemos, cuál es en fin, la mayoría de una población pues, es

esa mayoría la que determina el valor moral y físico de una población” (Ibid.). En todo esto existía, además, una preocupación por encontrar una causalidad a partir de evidencias empíricas. Las estadísticas permitían establecer una correlación entre la tuberculosis y el clima de Quito, o medir el aire que respiraban los obreros en las manufacturas. El Doctor Suárez había trabajado antes como médico en el Hospital San Juan de Dios y sostenía la posibilidad de experimentar con cierta categoría de enfermos. También el espacio social era asumido como un ámbito apropiado para el conocimiento y la experimentación.

Para Pablo Arturo Suárez había pasado la hora de lamentarse por la suerte del indio y del obrero y de especular sobre su situación; de lo que se trataba era de “meditar y en especial de obrar, pero sobre bases reales”. En condiciones de crisis en donde todo se redefinía, tanto el mundo rural como el urbano necesitaban ser redescubiertos; además, ahora eso era posible, gracias a las perspectivas abiertas por la ciencia positiva.

En sus observaciones de la ciudad intenta el doctor Suárez, establecer una “división clasista, no étnica, de los sectores populares” ya que “no tenemos generalmente en cuenta las razones de orden económico-social que agrupan a los hombres en clases sociales” (Suárez 1934: 80). No obstante, las clases no eran asumidas en términos de relaciones de producción o de trabajo, sino de niveles de ingreso y condiciones de vida.

El criterio expuesto en líneas anteriores conducía a hablar de “dos tipos de clase obrera” al interior de la ciudad de Quito: la que agrupaba a jornaleros, cargadores, barrenderos, vendedores ambulantes de comestibles, pequeños oficiales de taller, todos ellos con ingresos menores a 30 sucres; y la que se refería a albañiles, modestos artesanos, comerciantes de ínfima categoría, obreros industriales, con ingresos todos estos que oscilaban entre los 30 y 100 sucres. Las condiciones de vida de estos sectores semejaban en múltiples aspectos, a las de los campesinos indígenas. Las familias del primer tipo vivían en cuartos

con piso de tierra, que a más de servir como habitación y cocina, eran utilizados en ocasiones como talleres y depósitos. En estas habitaciones el aire era viciado por la ausencia de aseo personal, por la acumulación de desperdicios, la utilización de fogones y la convivencia con los animales. Apenas el 25% de los miembros de esa población estaba en condiciones de sobrevivir (Ibid.).

En lo que se refiere a los obreros industriales, los datos que consigna Suárez de las principales ciudades del interior, muestran que constituían un ínfimo porcentaje de la población. Compárese, por ejemplo en el caso de Quito, el número de obreros fabriles (1.651, es decir el 4.6% de la población de la ciudad) con los obreros de taller (el 10%), los trabajadores autónomos (el 23.5%) o los sirvientes (21.1%). El 90% de los trabajadores laboraba aproximadamente 11 horas diarias y no se hallaba sujeto a ninguna protección industrial (Ibid.).

Existía una estrecha relación entre factores médicos y sociales: de acuerdo a Suárez, en nuestros países se vivían condiciones de “anemia económica”, “pobreza general”, “miseria biológica”. Se daban situaciones negativas de salubridad relacionadas con las condiciones sociales y culturales de la población. El 31% de los nacidos morían antes de cumplir los veintiún años. Sólo en Quito, morían 1.300 niños menores de tres años, el 69% de los fallecidos era de “la clase inferior” (Ibid.: 82). Todo esto formaba parte de “la vorágine destructora de una nacionalidad” (Suárez 1937: 11). La preocupación no se centraba ya en los expósitos (como en el siglo XIX) sino en los niños y niñas de clase trabajadora, en sus altas tasas de mortalidad y en sus taras endémicas:

La debilidad de una raza se proclama por su inutilidad creadora: hijos que mueren a la primera infección, hijos débiles y retrasados, hijos anormales y deformados, hijos nacidos muertos, hijos prematuros y abortos espontáneos (Suárez 1934: 54).

En la concepción de Pablo Arturo Suárez hay un proceso degenerativo de los sectores popu-

lares en el cual “cada generación engendra otra más débil y menos capaz”; por eso la primera condición para integrar a los obreros a la civilización consiste en colocarlos en condiciones mínimamente humanas. Desde su perspectiva de estudioso de la medicina social, cualquier acción previa en el camino de la reforma social, no tenía sentido (en sus planteamientos había una crítica implícita a las posiciones socialistas que se hicieron presentes en esos años):

Antes de colocar a estas clases en posiciones doctrinarias y ejecutivas que requieren salud mental y corporal, es necesario situarlas en posiciones de reconstrucción, de curación verdadera. Nuestro país debe constituirse, por el momento, más que en un laboratorio de experimentación social, en un gran asilo o casa de salud. La labor de las clases dirigentes debe ser, ante todo, tutelar, previsiva y justa, eminentemente proteccionista (Ibid.: 69).

Objetivo (no siempre explícito) de los higienistas era buscar condiciones mínimas para la formación de un asalariado urbano. Para esto el Estado debía asumir un rol previsor en las fábricas, en los barrios obreros; pero había también un tipo de preocupación moral, la de determinar los límites de lo aceptable en materia de trabajo, salud, alimentación. Suárez y sus discípulos plantean una serie de propuestas prácticas en ese sentido, dirigidas por ejemplo, a la creación de panaderías municipales y comedores populares. En Quito existían 60 panaderías, la mayoría de las cuales estaba en manos de gente del pueblo, en ellas se elaboraba el pan en condiciones nada higiénicas y es que se trataba, de acuerdo al mismo Suárez, de negocios pequeños, que trabajaban con medio, uno, o a lo mucho, dos quintales de harina, lo que no dejaba margen para hacer inversiones que mejorasen su calidad, mientras que la municipalidad podría favorecer a través de instalaciones modernas e higiénicas, las necesidades de la población.

Suárez utilizaba la metáfora del asilo, de la casa de salud; pero su sentido no era tanto el del encierro como el de la cura. El asilo como algo tutelar, previsivo, justo; al mismo tiempo

permite ejercer un control. El asilo era percibido como protección, pero no en el sentido clásico de encierro, orientado a “dejar morir”, sino, por el contrario, a “permitir vivir”. En los higienistas seguidores de Suárez la mirada estaba puesta sobre la ciudad, en la constitución de ciudadanos, y esto suponía un sentido clasificatorio, pero también la posibilidad de incorporar e integrar capas de la población, de modo selectivo. No se trataba de una ciudadanía basada en aspectos raciales, como en diversos “estilos de vida”.

Los hábitos son los que permiten establecer gradaciones sociales y éstos pueden ser modificados (hábitos de alimentación, de higiene, de trabajo, también costumbres). La diferenciación se establece con respecto a un sector no urbanizado, no incorporado; con respecto a lo que al interior de la propia ciudad (y al interior de cada uno) subsiste como no urbanizado, no incorporado. José Tavares habla de “colonización de la vida cotidiana” y de la producción de una “revolución blanca” al interior de la casa (Tavares 1993: 751). Igual se puede hablar de incorporación ciudadana. Se trata de todo un proceso de formación de la subjetividad, basado en la interiorización de estructuras significantes, en la generación de sistemas de disposiciones. Sabemos con Bourdieu, que los hábitos son estructurados y estructurantes: generadores de prácticas y de esquemas de percepción y apropiación. Éstos pueden ser modificados a través de medidas higiénicas.

La higienización se basaba en pautas universales de comportamiento e incluía tanto el mejoramiento de los cuerpos como la modificación de las costumbres. Estas ideas se generalizaron en los años 30 y 40 del siglo XX y abarcaron ámbitos tan diversos como la educación y protección de la infancia, la salud, el ordenamiento urbano. Antes que un mestizaje en términos de blanqueamiento, lo que se buscaba era el mejoramiento biológico y cultural. Todo esto pasaba por cambiar las condiciones de vida de la “clase obrera”, o por lo menos, de una parte de ésta. Objetivo (no siempre explícito) de los higienistas era bus-

car condiciones mínimas para la formación de un asalariado urbano. Para esto el Estado debía asumir un rol previsor: en las fábricas, en los barrios obreros. Así, la construcción de casas especiales, casas obreras, en las que fuera factible llevar una “vida sana”. “Casitas ventiladas y claras, rodeadas de anchas avenidas y jardines, para que el aire puro y la luz economicen drogas e intervenciones médicas” como se decía de modo lírico en un diario.⁵ En Quito, esto no sólo preocupaba a los organismos estatales y a los salubristas especializados, sino a publicistas y filántropos y estaba orientado a una “urbanización de las costumbres”. Existía una estrecha vinculación entre las políticas habitacionales y las de protección del hogar, mejoramiento de las costumbres, promoción cívica.

El doctor Pablo Arturo Suárez realizó un estudio del estado de las viviendas populares y apoyó los primeros programas de construcción de casas obreras del Instituto de Previsión Social. De acuerdo a Suárez, las condiciones de la vivienda obrera, tal como estaban, no contribuían a brindar salud ni sosiego a sus habitantes, eran una suerte de “antros de la miseria”, instigadoras de vicio y disgusto permanentes. Su tono no era moralista, sino más bien objetivo, se basaba en evidencias. Formaba parte de las preocupaciones positivistas por la suerte de la parte útil de la población:

Todo lo que se haga por ofrecer al obrero de hoy una habitación sana, debe considerarse como de incalculable trascendencia para el progreso de un País, cuyas bases son capital humano sano y de mentalidad normal y trabajo de rendimiento eficiente” (Suárez s/f).

Existía preocupación por la distribución interna de las casas y por su aseo. Las viviendas obreras eran modelos reducidos de las viviendas de clase media. Al igual que éstas reproducían el modelo de la “casa-jardín”, e intentaban desarrollar en la distribución de sus espacios, la idea de privacidad. Igualmente se

5 *El Día*, 26 de febrero de 1926.

buscaba una mayor circulación del aire con el fin de impedir la propagación de las enfermedades, principalmente de aquellas de tipo respiratorio. En Quito, no siempre se hablaba de “casas para obreros” sino más bien de “habitaciones higiénicas”. En la práctica, la mayoría de los programas de vivienda obrera fueron a parar en manos de las clases medias, las únicas que podían pagarlas.

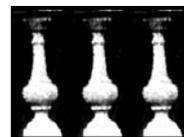
Este conjunto de disposiciones prácticas fueron haciendo permeables patrones de conducta “ciudadanos” y contribuyeron al proceso civilizatorio. De hecho, se establecía un puente entre las preocupaciones médicas y las preocupaciones urbanísticas y sociales. Los programas de vivienda no sólo favorecen a la higiene y la modificación de las costumbres, sino que promueven el ahorro. Se dice que lo primordial en este tipo de programas será la higiene. Ahora bien, la habitación higiénica era percibida como “el secreto para que la nacionalidad prospere y la raza se fortifique”⁶ Este conjunto de disposiciones y prácticas fueron haciendo permeables una serie de patrones de conducta “ciudadanos” y contribuyeron a un proceso civilizador.

Lo interesante de este tipo de políticas civilizatorias era que tomaban a la familia como referente, pero la familia como una entidad sujeta a sospecha y control, así como a reforma. La familia jugaba un papel fundamental en la organización de la vida cotidiana en esos años, pero se trataba de familias ampliadas al interior de las cuales se daban los patrones básicos de socialización. El modelo que trataba de incorporarse, por el contrario, tomaba como referente la familia nuclear y la metáfora del hogar y de la casa. Es posible que en las capas medias el ideal de los individuos comenzase a asimilarse a la vida en familia, “y que la propia familia tendiese a asociarse a la idea de una casa limpia y bien equipada” (Beugin citado por Tavares 1993: 751). Al mismo tiempo, se desarrollaba la imagen de la familia obrera y de la casa obrera, así como de la cultura obrera, como formas “decentes” de existencia popular.⁶

Salubrisimo y ornato

Por último, quiero relacionar higienismo y *ornato*. A finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, el cuidado de las ciudades andinas estaba directamente relacionado con el *ornato*. No me refiero sólo a las reformas introducidas en la ciudad a partir de los criterios de “ordenamiento”, “adecentamiento” y “ornamentación”, sino a una tendencia o forma de percepción impulsada por las elites a partir de sus propias prácticas de exclusión y separación, que había pasado a dominar el ambiente social de la época. La cultura, antes que como producción, o como una forma de acumulación de un tipo de capital específico, era percibida, desde el sentido común de las elites, como adorno o como buenas costumbres.⁸

El *ornato* era una institución que modelaba los sentidos, las formas de percepción, condicionaba los gustos. El ornato público de una ciudad, así como proporcionaba comodidades a sus habitantes, podía servir para medir su grado de cultura y para establecer distancias con respecto a lo “no-culto”. El *ornato* era, a su vez, parte importante de la “arquitectura”



Las disposiciones prácticas introdujeron patrones de conducta "ciudadanos" y contribuyeron al proceso civilizatorio. Se establecía un puente entre las preocupaciones médicas y las preocupaciones urbanísticas y sociales. Los programas de vivienda favorecieron la higiene, modifican las costumbres y promueven el ahorro

6 *El Día*, 2 de febrero de 1934.

7 Los propios obreros asumen la cultura obrera, así como el papel de la familia obrera desde parámetros distintos a los del Estado. Eso es lo que colijo de mis entrevistas al Gremio de Albañiles de Quito.

8 El propio Gonzalo Zaldumbide como representante de una tendencia aristocrática poseedora de un capital cultural y no sólo de un capital de prestigio, criticaba ese reduccionismo.



Archivo Guillermo Echeverría

Jóvenes, Quito, hacia 1920

tectura social”, ya que normaba el comportamiento y las relaciones de las elites, así como sus criterios de distinción, diferenciación y separación con respecto a los otros. Las ideas de reordenamiento y de separación eran los patrones que marcaban las relaciones urbanas en ese entonces.

Durante el siglo XIX no se desarrollaba aún una preocupación por el cuerpo individual y social como fuerzas productivas, tampoco por una racionalización del espacio de la ciudad en función productiva. ¿En qué medida esto se modificó con el desarrollo de relaciones salariales y hasta qué punto el higienismo constituyó una forma moderna de preocupación por lo urbano, sustitutiva del *ornato*, en el contexto de estas nuevas relaciones? ¿Cuáles eran las vinculaciones entre higienismo y *ornato*? ¿Se trata de lenguajes paralelos, yuxtapuestos o de dos formas radicalmente distintas de percibir las relaciones sociales? Cuando hablo de higienismo me refiero a una corriente

médico-social que buscaba ordenar el funcionamiento del espacio social y físico a partir de criterios positivistas, como la salud y el bienestar de las poblaciones. Sin embargo, cuando intento relacionar el higienismo con el “clima moral” de la sociedad quiteña en esa época, me nace la sospecha de que en la vida cotidiana, las enseñanzas de la moderna medicina social se intercalaban con los sentidos incorporados del *ornato* y el adecentamiento urbanos.

Si en “cada cultura existen una serie coherente de líneas divisorias” o “actos de demarcación” en el sentido foucaultniano (Foucault 1990:13), habría que ver en qué medida las propuestas supuestamente objetivas del higienismo eran incorporadas a las demarcaciones ciudadanas hasta pasar a ser parte de su sentido común. De modo tentativo me atrevería a afirmar que la diferencia fundamental entre las prácticas del *ornato* y las del higienismo radica en que mientras el primero separa, el segundo desarrolla prácticas de *urbanización* y de *ciudadanización*, modela los *habitus*, intenta civilizar el cuerpo de los individuos y el cuerpo social. Ahora bien, en el caso de Quito las ideas del *ornato* entraban en juego con las del salubrismo al momento de organizar la limpieza de las calles y de las plazas, o de prohibir la crianza de animales, chicherías, curtiembres (consideradas a partir de determinado momento como actividades no urbanas). E igual sucedía con la clasificación de los barrios para la generación de políticas salubristas o con las campañas dirigidas a expulsar y encerrar a los indigentes y a los llamados ‘vagos’.

En principio, los higienistas planteaban pautas de mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y de vida en los barrios, al interior de las casas, las fábricas, los espacios públicos; se basaban para el efecto, en elementos objetivos como el control de las pestes y enfermedades así como del mejoramiento de la población. En la práctica, los que primaban eran los mecanismos de percepción cotidianos, marcados por la exclusión y la separación. Incluso, buena parte de los criterios salubristas fueron asimilados por el sentido común ciudadano desde la perspectiva racista, inherente

a su *habitus*. Así, la prohibición de expender productos alimenticios mientras se usaran vestidos indígenas, o la negativa a que viajaran indígenas en el tranvía o que se comercializaran productos de indígenas y para indígenas en determinados sitios considerados “públicos”. Las oposiciones planteadas por los higienistas entre salud y enfermedad, suciedad y limpieza, se convirtieron en recursos para pensar lo social en un momento de tránsito de la ciudad señorial a la “moderna”. Muchos de los criterios salubristas (referentes al contagio de enfermedades, por ejemplo) contribuyeron a acrecentar el recelo frente al Otro y particularmente el recelo de los cuerpos⁹. Por otra parte, los criterios médicos de los higienistas sirvieron de base (y aún sirven) a las acciones de la Policía dirigidas a desalojar a los sectores populares y sobre todo, a “los usos populares” del centro de la ciudad y de otros espacios decentes o en proceso de readecentamiento.

¿Significa esto que el sentido disciplinario de los higienistas, no tuvo ningún efecto? Si nos limitamos a mirar la coyuntura de ese entonces, debemos concluir que sus acciones fueron limitadas, cuando no cayeron en el vacío; pero si intentamos mirar desde el largo plazo y desde las transformaciones que este tipo de acciones han producido y continúan produciendo en la vida cotidiana y en la rela-

ción entre las clases, nuestra perspectiva de análisis puede ser distinta. Buena parte de las acciones de los salubristas, al igual que las que se desarrollaron con los niños y niñas en las escuelas “modernas”, o los enfermos y marginales en los hospitales y centros de beneficencia, tenían un carácter experimental; sin embargo, que no funcionasen de manera masiva no elimina su interés histórico. Al mismo tiempo, cada acción disciplinaria (al igual que cada acción excluyente) se vio acompañada por tácticas de resistencia. O como dice el mismo Foucault, todas las demarcaciones son ambiguas: “desde el momento en el que señalan los límites, abren el espacio a una transgresión siempre posible” (Foucault Ibid.: 13)

Bibliografía

- Guerrero, Andrés, 2000, *Etnicidades*. Quito: FLACSO.
- Bourdieu, Pierre, s/f, *El Sentido Práctico* (fotocopia).
- Foucault, Michael, 1990, *La vida de los Hombres Infames*, Madrid: Editorial Altamira.
- Suárez, Pablo Arturo, 1934, *Contribución al estudio de las realidades entre la clase obrera y campesina*. Quito: Imprenta de la Universidad Central.
- _____, 1937, “Estudio numérico y económico-social de la población de Quito”, en *Boletín del Departamento Médico Social del Instituto Nacional de Previsión Social* N° 1: 8.
- _____, s/f “La casa colectiva para obreros” *Boletín del Departamento Médico social n. 3*
- Tavares, José, 1993, “A construação da casa popular no Recife (década de 30)”, en *Análise Social, Revista do Instituto de Ciências Sociais*, Universidad de Lisboa.

9 Las enfermedades de la piel eran las que más preocupaban, éstas debían ser erradicadas con “medios sanitarios” y con una reordenación de las costumbres. Existía una preocupación cotidiana, que se veía corroborada por la opinión de los médicos, por los factores de contagio: el contacto con los cuerpos de los virulentos, mendigos y gente del campo, “el roce de los vestidos toscos infectados”, la manipulación de billetes de banco, las peluquerías, la confusión de la ropa en el lavado: “en nuestro país no se lava aún en agua hirviente ni con substancias químicas: primax, bórax, sosa o potasa; y en la misma piedra en la que lavó ayer una mujer de cuartel, se lava hoy ropa que va a casas sanas y cuidadosas” (*El Día*, 31-VII-1925: 1).

Una mirada al nuevo enemigo social:

las pandillas juveniles

Francisco Cevallos Tejada*

*Los expulsados, los excluidos,
los explotados, los exhibidos,
los no explicados,
los no explorados
...algo dirán!*

Pedro Guerra

La modernidad que ha tratado de ordenarlo todo en torno a la racionalidad, enfrenta sentidos y subjetividades atribuidos expiatoriamente a la juventud, a través de comportamientos que buscan *ponernos en aprietos* e irrumpir en los espacios públicos con sus fachas, estruendosos ritmos musicales, prácticas “violentas y delincuenciales”; éticas y estéticas que, consideradas molestias sociales,¹ son estereotipadas, condenadas, reprimidas, por parte de los adultos.

Los jóvenes no son la sociedad adulta en un grado inmaduro de desarrollo, sino la sociedad futura en estado de gestación y fermentación (Castellanos 1996). Si los jóvenes en general son estigmatizados, no se diga sus agrupaciones pandilleras; atribuirles todo acto delictivo violento y hasta criminal es una ecuación fáctica cuando se trata de generar la

explicación (rápida y simplista) que la sociedad requiere.

Este corto artículo cita relatos de “pandilleros”, recogidos en los últimos meses (Cerbino y Cevallos 2002); “si con ello [ojalá] somos capaces de oír lo nuevo detrás de lo conocido y asumir lo distinto detrás de lo que ya sabíamos con anterioridad” (Lieberman 1994), en otras palabras, si evitamos lo obvio seremos capaces de “entender” estas situaciones o percíbilas de manera diferente.

Violencia, mundo, sociedad y medios

Las formas de estar y habitar el espacio común y los ritos que implican, suponen una imagen de los otros usuarios que, según lo afirma Aguilar (1999), al exceder unilateralmente estos espacios, se vuelven irreconocibles e imprevisibles y aparecen los ritos de negación del contacto.

Preocupa la irrupción o invasión del espacio común (público para unos, privado para otros); alarmismo social que configura negaciones: estigmatización del sujeto juvenil (no sólo del pandillero) como aquel que implanta *terror*; que necesita de soluciones *terapéuticas* (¿para qué enfermo?, habría que preguntarse); un joven actor, protagonista y generador de violencia, que responde exclusivamente a condiciones factuales, desbordes de la norma, locura.

* Investigador independiente.

1 “No son actividades delictivas ni criminales, pero sí perturban la convivencia - escuchar música a alto volumen, jugar en la calle hasta altas horas de la noche, o simplemente ‘vacilar’ en grupo o crear temores en los vecinos” (Santacruz y Concha-Eastman, 2001).

Asistimos a la búsqueda -muchas veces caótica y agresiva- de un reordenamiento de nuestros vínculos con la historia y con este mundo que habitamos y que nos habita tan conflictivamente (Lieberman Ibid.); tanto hombres como mujeres jóvenes, si bien están inmersos dentro de los contextos de violencia, ello no significa que sean quienes la crean, como se afirma de manera estigmatizadora. El fenómeno de la violencia no es, ni podría serlo, inmune a los mundos juveniles; por el contrario, convive con ellos de la misma manera que lo hace en escenarios públicos y privados: familia, escuela, grupo de pares, redes de consumo e industrias culturales.

La violencia, escenificada como espectáculo mercadotécnico, se hace y se transmite públicamente a través de programas televisivos (Nateras 2001) y discursos que favorecen determinadas representaciones respecto a la violencia en general, ligados a lo juvenil, en particular. El espectáculo noticioso así como genera y (re)produce violencia, también puede generar, y lo ha hecho, estereotipos sociales: ser joven, pobre y llevar una vestimenta *sui generis*, provocan no sólo sospecha, sino también juicios.

La efervescencia que las instituciones y, especialmente los medios “promotores y transformadores de sentidos”, causan frente a un tema, no hace más que provocar “soluciones inmediatistas que no curan el vacío, pero evitan que se agrave, [pues] la pérdida de los sentidos modernos ha hecho que se hayan globalizado instituciones dadoras de mentalidades neoconservadoras...” (Fajardo 2001).

De ahí que los medios como acto social, hagan referencia a lenguajes y miradas ampliamente difundidos y asimilados. Una característica importante de la violencia contemporánea es el intenso flujo existente entre experiencia personal y mediática (Aguilar Ibid.), ya que a través de los medios la sociedad se comunica entre sí, se juega valores, símbolos, memorias compartidas y futuros inmediatos (Cruzvillegas 1998), donde lo que está en cuestión no es tanto un mensaje o un contenido aislado, sino la cultura que lo



Gonzalo Vargas

hace posible y permite interpretarlo y asimilarlo (Aguilar Ibid.: 153).

Si bien el individuo no es un ser bajo entera influencia, manejado por la sociedad y por su propia cultura incorporada, cada persona actúa sobre sí misma y sobre las demás, con una parte de libertad y de racionalidad, en la medida de sus posibilidades (Warnier 2001); esta racionalidad se ejerce a través de prácticas sociales de orden, disciplina y control que se convierten en exclusión, marginación y discriminación; compromisos enfermizos que la sociedad asume en contra de sí misma y de lo que aspira (Cevallos y Cevallos 1999), ya que esta búsqueda de control reduce los márgenes de tolerancia hacia la heterogeneidad social, revela la tendencia al control cotidiano de espacios y actividades de ciertos grupos y el consiguiente desconocimiento de espacios ocupados por otros, de lo cual resulta la cancelación del espacio heterogéneo y, finalmente, una involución de la sociabilidad.

En nuestro contexto, una suerte de discurso esquizofrénico aduce una *conducta irregular* de adolescentes y jóvenes, para los cuales es necesario organizar comisiones de “Control y Vigilancia” y decretar “toques de queda”².

2 El menor de edad que circula “libremente” por las calles de Guayaquil a partir de las 10 de la noche es

Guayaquil, diciembre, 2001: “jóvenes organizados en extrañas ‘sectas’, pandilleros ‘asesinos’ de taxistas”; entre otros, parecerían cualquiera de los titulares que daba cuenta de la existencia del “fenómeno” de las pandillas juveniles, que no es nuevo; sin embargo, se ha convertido en el “nuevo” enemigo común; enemigo construido, en gran parte, desde la mirada estigmatizadora de los medios de comunicación y de la opinión pública (léase publicada).

De hecho, “la virtual transformación de los otros en enemigos en potencia es prácticamente legitimada y aceptada por un pensamiento social estructurado a partir de la noción de individualidad y vida privada” (Aguilar Ibid.), juego discursivo que valora la propiedad y la búsqueda incansable de la sociedad de ser propietaria de algo; “necesidades” que llevan, en muchos casos (juveniles), a la apropiación incluso violenta de los espacios públicos; quizá como único lugar del que se puede ser propietario y que brinde una adscripción identitaria; o “como un proceso de ‘conquista’ de espacios urbanos que se expresa en una lucha por la autonomía de la vida cotidiana” (Feixa 2000).

Guayaquil, mayo, 2002: “jóvenes ‘desadaptados’ desatan escándalo y alarma en la sociedad ‘normal’”. En el “*Mall del Sol*”, centro comercial al estilo Miami, espacio público y “seguro” donde priman las leyes del mercado, primaron las balas (y no necesitaron ser las 22H00); al “Sol” lo invadió la “oscuridad”. Sin desconocer el alto riesgo de estos actos, ni justificar dichos enfrentamientos, la irrupción en espacios de este tipo profundiza el clima de desconfianza social, miedos “solucionados” con “más” seguridad, control y con la restricción de las actividades cotidianas, ya que mientras sigan en sus barrios, en sus “escondites”, la violencia no importa; peor aún sus razones.

Estos roles y conductas sociales (no sólo juveniles) tan cotidianos como imperceptibles,

alteran el orden social, sobre todo el urbano, pero se encuentran marcados por distintas formas de violencia: espacios públicos y semipúblicos que a pesar de su fachada abierta, se rigen por normas particulares de acceso y uso que marcan las diferencias sociales. Asimismo y, paradójicamente, se condena la violencia y se trata de eliminarla a través de los mismos medios, es decir, “las reacciones que provocan las violencias son uniformes e indiscriminadas como las violencias mismas” (Reguillo 1999), pues “los comportamientos de inclusión y exclusión social adecuados para gobernar son cada vez más interiorizados dentro de los propios sujetos” (Negri y Hardt 2001).

Abuso, acoso, atropello, desigualdad, discriminación, imposición, inequidad, intolerancia, irrespeto, invisibilidad, represión, violencia: eso encuentran los jóvenes -varones y mujeres- en la sociedad, en la calle, en la familia, en los establecimientos de estudio, en el trabajo, en el grupo de pares, en cualquier lugar, en cualquier momento; brechas generacionales, sociales, económicas, culturales; formas permanentes de desventaja y riesgo. Si eso encuentra la juventud, su reacción no puede ser distinta, pues “la marginalidad y la exclusión son condiciones que se aprenden, se vuelven piel, se hacen conducta y ésta es una violencia mayor” (Reguillo Ibid.).

La juventud es como es, retrata con trazos fuertes a la sociedad global, la cual no siempre gusta de verse retratada (Aranguren en Feixa 2000); sabe inclinarse frente al destino, pues existe una especie de sabiduría para hacerlo³; descontento juvenil que tiene que ver con la fragmentación e inestabilidad de los mecanismos de integración tradicional (Reguillo Ibid.), los espacios sociales de ilusión y futuro (Aguilar Ibid.), o las instituciones disciplinarias como mecanismos de inclusión / exclusión (Negri Ibid.), sean éstas la familia, los partidos, los gobiernos, las instituciones públicas y privadas.

considerado contraventor y penado con reclusión (de máximo 24 horas).

3 Paráfrasis de Esquilo que usa Maffesoli (2001).

Asombros y a sombras, el proceso etnográfico

Lunes, 12h00, a la salida de un (cualquier) colegio se acercan dos jóvenes; si potencialmente son unos ‘patos’, también pueden ser ‘pacos’ encubiertos; Chrystiam y yo, en una nueva “aventura” etnográfica encontramos a cuatro jóvenes “normales” vacilando fuera de un colegio de chicas: uno con traje formal (del colegio, por supuesto); dos de ellos con “buena” ropa, bien peinados, con celular incluso; el cuarto, de camisa negra, tatuajes, melena corta, pantalones rotos.

Más allá de los respectivos (pre)juicios, ellos y nosotros buscábamos dónde conversar: “esta esquina no es nuestra” -dijeron-, “¿qué quieren saber?” -fue su siguiente pregunta-. “Saber de ustedes, qué piensan, cómo viven; otros han (hemos) hablado suficientemente por ustedes, ... ya es hora de que los propios jóvenes digan lo que tengan que decir” -respondimos-.

En la conversación “confiesan”: tres de ellos pertenecían a una pandilla, dos roban autos (curiosamente, los mejor vestidos, los que levantarían menores sospechas); el cuarto, tenía su banda... de *rock*: sí, el de los tatuajes, lejos de organizaciones pandilleras, lejos de un aula de clase un año atrás, y muy cercano al maltrato de su padre, “yo sí tengo problemas” -dijo-. Los otros, los “pandilleros”, tenían un hogar “normal”, padre y madre, estudiaban y tenían mejores posibilidades económicas.

Esta historia no es distinta del conjunto de relatos, sólo evidencia el desconocimiento de los mundos juveniles que los discursos “autorizados” y autoritarios dicen de ellos, sea por su ‘pinta’, por su facha o, por si acaso...

Comunidades y territorios emocionales

*Y cada amigo es la familia
que escogemos entre extraños*

Rubén Blades

Ni la escuela, ni la familia provocan directamente el ingreso a las pandillas; pero tampoco han generado espacios de reconocimiento y expresión propios de la juventud, ni se han constituido en alternativas no violentas o menos peligrosas, pues la violencia no es algo que los jóvenes “descubren” al salir del hogar:

*mi hermana se portaba agresiva conmigo,
me pegaba, me decía que soy un estorbo,
una tal una cual, me gritaba.*

La sensación de inexistencia, desconocimiento y miedo es latente:

*Yo, ¿a qué le tengo miedo?, a mi mamá;
a mi papá sí le tengo miedo, es una bestia;
tengo un padrastro, pero es como no tener a nadie...*

Entre desintegración y desapego familiar:

*Un amigo es más que un hermano porque
te sabe comprender, te apoya en todo,
le consideras más que a tu familia, le pides
consejo...*

La pandilla se convierte en la adscripción identitaria individual y colectiva en términos emocionales y simbólicos, que afirma su pertenencia a un lugar y a una gente: su segunda familia que, sin sustituir a la primera, se transforma en una comunidad de acogida que brinda seguridad y afirmación:

*Entonces, dijo: “oye loco, tú eres de los
nuestros”; dije, “¿Por?” ¿Quieres que te
presente a tu familia?*

Lo refleja incluso su lenguaje: ‘familia’, ‘ñaño’, ‘primo’, ‘brother’. Al contrario de quienes afirman que los jóvenes pandilleros y pandilleras carecen de valores personales y familiares, éstos se encuentran presentes en sus prácticas:

De mi vida, mi mamá es lo más importante; a ella le debo la vida, por ella me trajeron a este maldito mundo... Ellos se metían con tu familia o tu casa, porque eso es lo que más te duele siempre...

Riesgo, vértigo y diversión

Porque vivir era un vértigo y no una carrera
Luis Eduardo Aute

La vinculación pandillera no sólo responde a problemas familiares, lo hace también frente a las expectativas, por el atractivo que ésta despierta en ellos, ya sea por los beneficios materiales o emocionales que obtienen (Cruz y Portillo en Santacruz y Concha-Eastman 2001).

...Por lo que yo era mi necesidad tener, porque yo ya le digo, no hacía nada en la casa, mi vida no valía nada, entonces comencé a salir con mis panas, con ellos en cambio ya tuve dinero, ya comencé a tener incluso, hasta pelada...

No sólo la familia expulsa, la calle también atrae: no sólo acoge “sin problemas ni condiciones” o como “refugio” alterno al familiar, sino porque en tanto espacio público, permite la socialización -la pandilla es un espacio para ello-. Buscan y encuentran un “lugar” donde sus integrantes ponen las reglas, conversan de lo que entre su familia, en sus casas es menospreciado o no valorado. Comparten problemas similares, los aquejan males similares y los alegran horizontes comunes; su cosmovisión es parecida, sus formas de ser y estar confluyen en un espacio compartido de ideas, prácticas, pensamientos, saberes que les sirven para relacionarse con la sociedad.

El respeto, porque cuando estás en una pata la gente te conoce y te respetan; y la joda, yo siempre he dicho estar en una pata es para joder...

No sólo dejan de reconocer “prórrogas de goce”, sino que quieren todo y de inmediato; esta “ética del instante”; esta globalización de tensiones, pobreza y anarquía provocan no sólo correr el riesgo de morir de hambre, ni siquiera de morir de amor; igual de mortal es el aburrimiento, es decir, es necesario que exista algo antes que nada. “O eres un re-cuerdo, o eres un re-loco” decía un graffiti argentino.

Lo más interesante en una pata es la joda, cagarte de la risa. Tú tenías una vida que tenías que disfrutarla, sino para qué quieres tu vida.

La violencia como proceso imaginario de identificación

El mundo de sentidos, emociones, significaciones, imaginario-simbólicos juegan un rol prominente en la acción juvenil, asimismo en su conflictividad. Es la mirada, por ejemplo, que está en el mundo de la “significancia”, como decía Barthes (1993), inicio imaginario de la conflictividad:

¿Cómo va a ser posible que esta puta venga hecha la buena a robarse la mirada de todos?...

“Dejarse ver la cara”, “dejarse ver las huevas”⁴ generan violencia ante la reducción de la palabra, por una incompreensión o por la imposibilidad de construir una mediación simbólica: entre la posibilidad de apalabrar esa mirada o no entender y explorar nuevas formas de apalabramiento.

El sentido en tanto apropiación y subjetividad que (actualmente) piensa en sí misma y no por sí misma, atrapa las relaciones de la so-

4 “Te ven las huevas cuando alguien, así estás conversando y viene otro *man*, te empieza a avasallar a ti y tú te quedas callado, frente a unas peladas y tienes que saberla arreglar, de chiste en chiste también se van de notas, y allí comienza el relajo, y a veces llega a un punto en que se te acaba la paciencia, y ya te llegó, te llegó, y le caes a puñetes y te dicen algo o que o qué y ¡pam!, le das de puñetes”

ciudad y las de los jóvenes, en elementos imaginario-simbólicos de identidad / alteridad que desatan la conflictividad y una dinámica de no ver y de no ser visto cobra fuerza; una noción de envidia que es señalada por Žižek (1995) en el sentido de *invidencia*, por ello es importante un *look* para evitar pasar desapercibidos; pues existimos porque el otro (amigos, pares, incluso enemigos) o lo otro, otorga existencia.

Quería sentirme diferente a los otros manes... A mí me gusta todo original, que sea Levis, zapatillas Nike... Sentirme mejor vestido que otros manes...

Presencia del Otro que re-significa nuestra presencia en el mundo (Lieberman *Ibid.*), que hace operar lo que hacen los demás de mí y lo que hago yo con lo que los demás hicieron de mí (Sartre), y donde la otredad existe pero ya no como potencial para la realización ética, sino como valor de cambio (Lyotard).

Procesos imaginarios y subjetivos de identificación-diferenciación ligados incluso al mercado, donde “las órdenes de consumo, obligatorias para todos pero imposibles para la mayoría, se traducen en invitaciones al delito” (Galeano 1998). Las diferenciaciones sociales (re)aparecen, se materializan, se (re)afirman y profundizan cuando el mercado ya no es sólo un mercado de bienes y servicios, sino de imágenes e imaginarios de “*status*”, “felicidades”, “confort” y “bienestar”; de consumos y satisfactores “básicos” y “exclusivos” para jóvenes.

Esto podría explicar de alguna manera porqué alguien puede asaltar a otro *simplemente* por los zapatos; porque para quien asalta, los zapatos son el signo de su visibilización y reconocimiento como sujeto en los espacios que cotidianamente ocupa. Estas identidades conflictivas y permanentemente cuestionadas empujan a la búsqueda de modelos de identificación a través de los cuales autoafirmarse, y corren imaginarios de emulación de la marca, la ‘pinta’, y “efervescen” conflictividades de alteridad y competencia.

Cuando tú vas a la disco tú no buscas, si no encuentras. Si las ‘manes’ te ven bien vestido, cuando estás a la moda, cuando tú bailas bien, o eres popular, eres alegre, divertido ellas te buscan...

El juego imaginario de producir la diferencia se compone de elementos característicos de las culturas juveniles como el vestuario, los tatuajes, el cabello “se han convertido en un emblema que opera como identificación entre los iguales y como diferenciación frente a los otros” (Reguillo 2000a); sin embargo, este carácter preeminente visual que los hace reconocibles e identificables, los lleva a ser “asociados a connotaciones negativas (lo sucio, lo feo), [y] trasladados, como atributos, a sus portadores” (Aguilar *Ibid.*).

Jóvenes que para transformar el estigma en emblema y para hacer operar con signo contrario las calificaciones negativas que les son imputadas, se encuentran volcados en nomádicas o errantes búsquedas de identificaciones e identidades que les sirvan para ser reconocidos y reconocidas y se remiten a un uso del cuerpo como forma de *politicidad*⁵ desde lo cotidiano.

Atrapados en esa alteridad imaginizada, la violencia se configura entre el mito de la afirmación que se cumple con la ritualidad del enfrentamiento, ya que “es la violencia lo que les garantiza adquirir respeto, *status*, reconocimiento social y sentido de pertenencia a un grupo” o “la forma más segura de sobrevivir” (Concha-Eastman 2001).

Por una pelea tú das todo, tú sabes que en esa pelea eres tú o él, y prefiero yo, entonces es donde juegas todo; tú me estás disparando y yo te estoy disparando y ¿a quien prefieres?, ¿tú o yo?.

El sentido del juego social pandillero podría relacionarse con lo que Bourdieu llama “illu-

5 Sobre el tema ver Cerbino y Cevallos (2002); Negri y Hardt (2001); Reguillo (2000a); con ciertas diferencias hablan de la noción de biopolítica, siempre basados en Foucault.



Genaro Vargas

sio”, por el interés y los *envites* que provocan tales acciones; asimismo, en las relaciones humanas, más difíciles que las definiciones humanas, ya Nietzsche (1994⁶) hablaba de *la alegría maligna del daño ajeno* cuando el hombre se acostumbra a considerar a los demás hombres como sus iguales, o cuando la venganza no es más que hacer que cese el peligro como un instinto de conservación provocado por el miedo al segundo golpe.

Así también los principios de la afirmación y la demostración nacen en los intersticios de las relaciones sociales; discursos cotidianos que son (re)construidos y utilizados por las organizaciones pandilleras como solución a sus propios conflictos internos e intergrupales: la masculinidad, la hombría, la virilidad, asumidas culturalmente, se vuelven práctica social, constitutivos que incluso han repercutido en masculinizar el rol femenino.

Nuestras calles, barrios o instituciones son entornos “apropiados” para adquirir los “conocimientos” para demostrar su capacidad de administrar lo imprevisto y su incertidumbre, pues la afirmación identitaria para reconocer(se) un terreno “propio”, ganar(se) un lugar en, responder(se) porque “me dicen qué o qué”, o demostrar(se) ser persona lo hace con viveza, respeto y valentía, únicas maneras de tener un nombre, un rol, un sitio.

En el tejido social, los ciudadanos gestan su

conducta, su sentido de ciudadanía y su relación con las instituciones por la vía de la violencia (el paro, la huelga). Esta configuración de relaciones es la que torna impracticables sentidos mínimos de “armonía” entre la institucionalidad y los diferentes actores de la sociedad.

Culpa, miedo y soledad: jóvenes en busca de otro lugar

Miedo que da miedo del miedo que da
Puedro Guerra

El círculo de violencia no inicia con la violencia callejera de las pandillas y tampoco concluye con los métodos de coerción social. “Si se castiga o se recompensa el pasado de un hombre” -decía Nietzsche - “deberíamos remontarnos más atrás y castigar o recompensar lo que fue causa de tal pasado, es decir, a los padres, a los educadores, a la sociedad misma...” (Ibid.)

No sólo la familia o la escuela son las únicas responsables de la violencia juvenil, tampoco lo es la calle ya que es un espacio de socialización. Así, los relatos de ex pandilleros demuestran que sus diferentes entornos como el barrio, la discoteca, entre otros, siguen siendo escenarios de conflictividad, donde la desvinculación de ellos con respecto a una organización pandillera no ha provocado mayores cambios en sus entornos cotidianos.

Ante una realidad donde caen muros y torres; ante una realidad de frío en el clima y en la esperanza, la diversión, el licor, la droga, entre otras, se muestran como alternativas para el escape⁷ hacia otros lugares, para reducir los miedos, las penas y la soledad.

...eso ñaño, se sacaba así los temores, y uno se sentía diferente y sociable... para pasar bien yo no me drogaba...

6 El viajero y su sombra (2da. Parte de Humano, demasado humano) texto original escrito entre 1879 y 1880.

7 Acerca del escapismo, ver Nomadismo Juvenil (2000) y otros textos de M. Maffesoli.

Soledad, sea por la exclusión o autoexclusión de los espacios sociales; por la reducción del espacio común hasta el ámbito privado -mediatizado especialmente por las industrias culturales e incluso por la economía; o soledad que causada por los “ritos de negación del contacto” o por la “imposibilidad de habitar la otredad”, provoca sentidos de vacío y aislamiento; soledad que Fajardo (2001) caracteriza no como la soledad rilkeana generadora de creatividad, sino la soledad aburrada, abrumadora, que provoca desgastaste, anuladora, del hombre del rincón, solitario pero globalizado.

Miedo... a la soledad. Yo tengo pavor a estar solo. Yo, a veces, me deprimó porque me siento solo.

De la soledad a la emoción; de la muerte como incertidumbre y riesgo, al inmediatismo y la ausencia de futuro; la configuración de las subjetividades juveniles transita entre no solo el riesgo de morir de hambre, o de amor... sino de aburrimiento, pues “ante una vida sin emoción, no se puede perdonar una muerte sin emoción”, ya que “la muerte tiene el extraño poder de suscitar el frenesí de la vida” (Maffesoli 2000). “Si de nada sirve vivir, buscas algo porqué morir”, dice Fito Páez en una de sus canciones.

Vivir como venga y morir de una. La vida y la muerte en los jóvenes forman parte de sus entornos cotidianos; “el infierno es lo que vivimos aquí...”. No habla sólo del “infierno son los otros” que promulgaba Sartre, sino del “infierno artificial en sí mismo” como diría Fajardo.

Jóvenes: emergentes, pero invisibles

Según Reguillo (2000b), existe una tendencia fuerte a (con)fundir el escenario situacional con las representaciones profundas de los jóvenes o, peor aún, establecer una relación mecánica entre prácticas sociales y universos simbólicos. Solamente al entender los sentidos, razones y valoraciones que para la juven-

tud tienen las pandillas, se provocaría en la mirada adulta, en la mirada social estigmatizadora, en la mirada institucional y programática la búsqueda de soluciones referidas a las causas estructurales (muchas de ellas de tipo emocional, no sólo como vehículo sino como constructor de realidades) más que a los problemas manifiestos.

La violencia juvenil no podrá ser solucionada con respuestas fáciles -léase inmediatas ni de corto plazo-, ni tampoco en la medida en que social y culturalmente se alteren patrones propios (personales y colectivos) de conducta ética y estética: desde el discurso duro, viril y autoritario, a las medidas represivas, reeducativas, rehabilitadoras, reformadoras.

Si no alteramos los entornos sociales cotidianos en los cuales los jóvenes varones y mujeres se “desarrollan”, cualquier política de juventud y menos aún en relación con la violencia, tendrá resultados efectivos. Es decir que es imprescindible superar la pobreza, la marginalidad, y la exclusión -imaginarias o simbólicas, pero igualmente reales.

Se propugna como hipótesis que la emergencia de la juventud como sujeto social se expresa en un proceso de redefinición de la ciudad en el espacio y en el tiempo (Feixa 2000). Esta emergencia de los jóvenes como actores y actoras sociales, como ciudadanos y ciudadanas, merece otro saber, uno que parta de la existencia de una(s) juventud(es) distinta(s) a “la definida”, al estereotipo, que afirme la riqueza de sus interacciones y sus búsquedas; que unas juventudes *rechazo*⁸ social -como lo son las pandilleras-, se integren como actores.

Paradójicamente, la situación juvenil entreaña y extraña esperanzas y futuros. La juventud exige actoría en lo político, en lo público, en lo privado y en lo íntimo; reclama airoosamente los espacios que le pertenecen. “Generación del suspenso” entre la autopista de la información y el estadio de la pobreza; interactivos y desconectados, hoy por hoy, se enfrentan a la composición de sus prácticas cotidianas de vida llenas de complejidad, pero a su vez y quizá en mayor proporción, llenas de vida (Cevallos y Cevallos 1999).

Por ello, es posible desarrollar respuestas efectivas si contribuimos a generar las condiciones para que la sociedad y la juventud tengan espacios de palabra y expresión; de circulación de ideas; de reflexividad sobre los sentidos de la vida; de mediación simbólica de su conflictividad, si fuera del caso.

Como lo diría Pérez (1996), solamente si se relievan las relaciones del joven con la ciudad en cuanto objeto cultural de consumo y sus experiencias de apropiación de los lugares públicos es posible entenderlo como actor social. De hecho, el reconocimiento juvenil en lo público, otorgará -a la conflictividad- más luces que sombras y ocultamientos.

Bibliografía

- Aguilar, M., 1999, "Violencia urbana y espacio público", en Leonela Cucurella (comp.), *El otro saber. Psicología social, psicoanálisis y cultura*, Quito: Abya Yala.
- Barthes, R., 1993, *La aventura semiológica*. Madrid: Paidós.
- Castellanos, C., 1996, "Introducción" en *De calles, parches, galladas y escuelas: transformaciones en los procesos de socialización de los jóvenes de hoy*.
- Cerbino, M. y F. Cevallos, 2002, "Imágenes e imaginarios de la conflictividad juvenil y sus organizaciones pandilleras" en *Diagnóstico de la problemática de los niños y adolescentes de 6 a 18 años en situación de riesgo y de los programas existentes*, Quito: FLACSO-Programa Nuestros Niños del MBS (en prensa).
- Cevallos, F. y C. Cevallos, 1999, *Sin Costo Alguno*, Quito: Foro Nacional de la Juventud.
- Cruzvillegas, E., 1998, "Los jóvenes y la televisión en México ¿en qué creen los jóvenes?", en Leonela Cucurella (comp.), *Códigos Subterráneos. Comunicación y vida cotidiana*, Quito: Abya Yala.
- Fajardo, C., 2001, *Estética y posmodernidad*, Quito: Abya Yala.
- Feixa, C., 2000, "Los espacios y los tiempos de las culturas juveniles", en Gabriel Medina (comp.), *Aproximaciones a la diversidad juvenil*, México: Colegio de México.
- Galeano, E., 1998, *Patatas Arriba. La escuela del mundo al revés*. México: Siglo XXI.
- Liberman, A., 1994, *La nostalgia del padre. Un ensayo sobre el derrumbe de la certeza paterna*. Madrid: Ediciones Temas de Hoy.
- Maffesoli, M., 2001, "Nomadismo Juvenil", en *Nómadas* 13. Departamento de Investigaciones, Bogotá: Fundación Universidad Central.
- _____, 2001, *El instante eterno*, Buenos Aires: Paidós.
- Nateras, Domínguez, A., 2001, "De cuerpos urbanos violentados", en *Jóvenes* 8, México: Centro de Investigaciones y Estudios sobre Juventud.
- Negri, A. y M. Hardt, 2001, *Imperio*, Bogotá: Ediciones desde abajo.
- Nietzsche, F., 1994, *El viajero y su sombra*, Barcelona: Edicomunicación.
- Pérez, D. y Mejía, M., 1996, "De calles, parches, galladas y escuelas: transformaciones en los procesos de socialización de los jóvenes de hoy".
- Reguillo R., 1999, "Violencias expandidas. Jóvenes y discurso social", en *JovenEs*, No. 8, México: Centro de Investigaciones y Estudios sobre Juventud.
- _____(2000a) "Emergencia de culturas juveniles", Bogotá: Norma.
- _____(2000b) "Las culturas juveniles: un campo de estudio. Breve agenda para la discusión", en Gabriel Medina, compilador, *Aproximaciones a la Diversidad Juvenil*. México: Colegio de México.
- Santacruz, M. L., y A. Concha-Eastman, 2001, *Barrio adentro, la solidaridad violenta de las pandillas*, San Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas- OPS.
- Warnier, J. P., 2001, *La mundialización de la cultura*, Quito: Abya Yala.
- Zizek, S., 1995, "La violencia entre ficción y fantasma: hacia una teoría lacaniana de la ideología". Francia: Conferencia pronunciada en la Sección Clínica de Lille.

Los pasivos ambientales

Daniela Russi
y Joan Martínez-Alier*

El término “pasivo ambiental” tiene orígenes empresariales: en el balance de ejercicio de una empresa, el pasivo es el conjunto de deudas y gravámenes que disminuyen su activo. Sin embargo, mientras las deudas financieras están minuciosamente inscritas en el balance, muchas deudas ambientales y sociales no se registran en la contabilidad de las empresas. Si estas entidades fuesen obligadas a considerar como costos al conjunto de daños que transfieren a la colectividad, probablemente los daños ambientales producidos se reducirían, porque las empresas son hábiles para minimizar los costos si tienen que pagarlos ellas mismas.

El término “pasivo ambiental” está logrando una rápida difusión. En América Latina está definiéndose una discusión sobre los pasivos ambientales de empresas mineras, químicas, petroleras y de otros sectores, a partir de casos concretos.

A veces el debate nace de reclamos por indemnización en casos judiciales, como el que se ha intentado contra la Texaco por los daños producidos en la selva ecuatoriana como resultado de la explotación petrolera; contra la Southern Perú Copper Corporation por la contaminación debida a la minería y fundi-

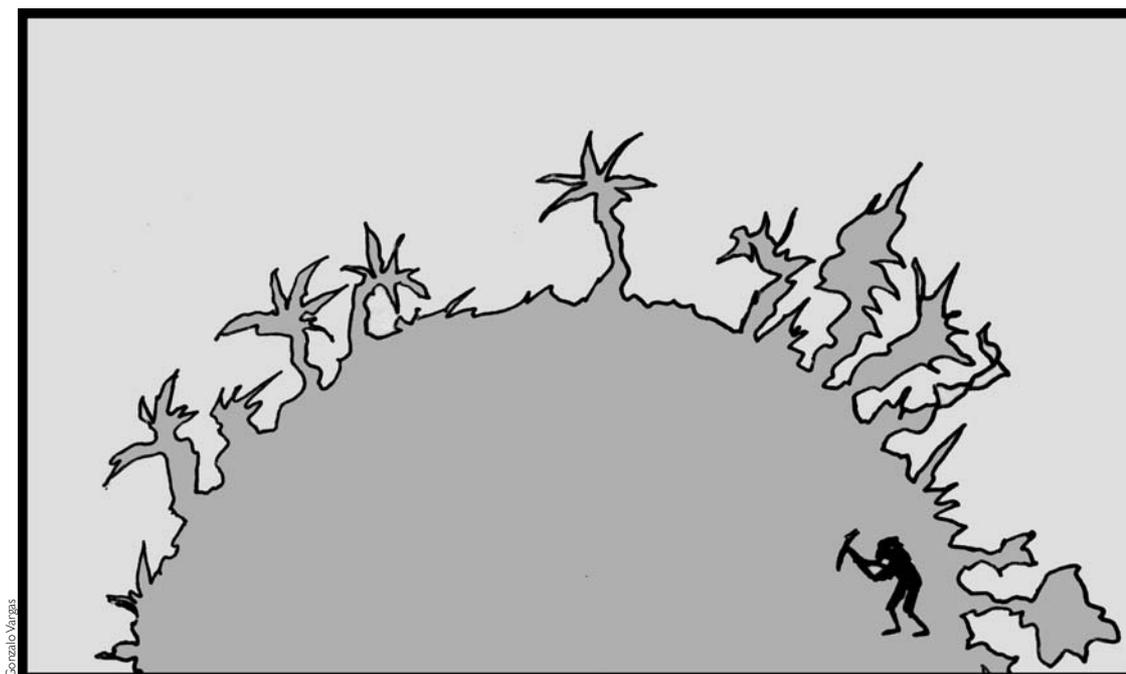
ción de cobre, o contra la Dow Chemicals por los casos de esterilidad de los trabajadores bananeros que aplicaron el nematocida DBCP. En Neuquen, Argentina, algunas comunidades mapuche están enjuiciando a Repsol-YPF, en demanda del resarcimiento de daños – hay ya varias estimaciones realizadas de ese pasivo ambiental, la primera, por Héctor Sejenovich.

En otros casos, las propias empresas, públicas o privadas, preocupadas por las deudas ocultas a la hora de su compra-venta, quieren saber si deben hacer frente a los pasivos ambientales. Existen consultoras en América Latina, que ofrecen sus servicios a las empresas para el cálculo de los pasivos ambientales. La industria minera en Chile, en Perú, en Bolivia usa el término en un contexto empresarial. La administración de Petroecuador ha iniciado la adopción del término “pasivo ambiental” (Zehner 2001)¹. Piénsese en la gran repercusión que para toda la política petrolera tendría, que se considerasen seriamente los pasivos ambientales, como los que ocasiona ya la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), incluso antes de que inicie su funcionamiento.

A veces, la administración pública intenta establecer normas sobre la reparación de daños. En el 1997, el término “pasivo ambien-

1 La diplomática e ingeniera Rosa Zehner es asesora de Petroecuador y asesora técnica de la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas.

* Universitat Autònoma de Barcelona



Gonzalo Vargas

tal” fue ya aplicado en el contexto de la privatización de la industria del aluminio en Venezuela². Por ejemplo, en Chile se discute activamente acerca de quién debe hacer frente a los gastos y cuáles son los estándares ambientales en los cierres de las faenas mineras³.

Por último, los activistas que impulsan el debate sobre la Deuda Ecológica del Norte con el Sur, incluyen los pasivos ambientales de las empresas transnacionales como uno de los principales rubros⁴.

2 Con tal propósito, Arnoldo Gabaldón se expresó como sigue: “Más temprano de lo previsto, tuvimos que ir al proceso de privatización de las empresas de Guayana. Llegó el triste momento entonces, de sincerar la corrupción y desastres administrativos que hoy nos afligen como venezolanos. Ahora, cuando se han evaluado los pasivos ambientales de esas empresas, encontramos que las del aluminio tienen saldos negativos por este concepto de alrededor de los 200 millones de dólares y Sidor otros USD 74 millones. En total cerca de 130 millardos de bolívares, que descontarán los nuevos propietarios para dedicarlos a lo que por fuerza de la Ley están obligados a invertir”, *El Universal* 30/6/97, <http://www.el-universal.com/1997/06/30/61948.shtml>.

3 Véase <http://www.idrc.ca/mpri/documents/cochilco.pdf>, http://www.idrc.ca/mpri/documents/quebecsymp_s.html, <http://www.sonami.cl/boletin/bo11135/art8.html>.

Cualquiera sea el actor social que levanta la discusión, los temas en debate son los siguientes: ¿En qué instancia reclamar los pasivos ambientales, y cuál es el procedimiento social y legalmente adecuado? ¿Puede haber una genuina “resolución de conflictos” en los casos de gran distancia social entre empresas y damnificados? ¿Es buena idea ir a juicio, en este caso, en el país donde se producen los daños o en el lugar donde las empresas tienen su domicilio principal? ¿Cuáles son los montos que se reclaman, cuál el método contable idóneo para calcularlos, cómo tratar los aspectos difícilmente expresables en dinero? ¿Qué repercusiones tendrán, en los resultados contables de las empresas y en la contabilidad nacional macroeconómica, la inclusión de los pasivos ambientales? ¿Cómo afectarán al precio de las acciones de las empresas?

4 Para más información acerca de la Deuda Ecológica, véase <http://www.cosmovisiones.com/DeudaEcologica>, <http://www.rcade.org/comisiones/deudaecologica.htm>, <http://www.redisseny.debtwatch.org/cast/observatorios/deco/index.php>.

¿Qué es el pasivo ambiental?

Por pasivo ambiental se entiende la suma de los daños no compensados producidos por una empresa al medio ambiente a lo largo de su historia, en su actividad normal o en caso de accidente. En otras palabras, se trata de sus deudas hacia la comunidad donde opera. Estas deudas a veces no son reconocidas como tales por la jurisdicción vigente, en otras oportunidades las leyes establecen límites y prohibiciones que no son respetados. Los economistas hablan de los daños ambientales como 'externalidades', es decir como lesiones al medioambiente producidas por un fracaso del mercado, que hace que no sea el responsable del daño el que pague la reparación o compensación, sino la sociedad en su conjunto. En realidad, se podría decir que dichas deudas son éxitos de traslación de los costos a la sociedad, que permiten a las empresas ser competitivas (Martínez - Alier y O' Connor 1996).

Probablemente, si las empresas tuvieran que pagar por todos los daños que producen, una parte de sus ganancias desaparecería. Tal vez muchas empresas, sobre todo en el sector de las industrias pesada, química y extractiva, quebrarían rápidamente.

Al considerar los pasivos ambientales, surgen dos temas de análisis: la evaluación monetaria y la responsabilidad jurídica. En cuanto al primero, ¿cómo determinar el impacto de una actividad contaminante en un contexto complejo y de fuerte incertidumbre? Y, puesto que se trata en la mayoría de casos de bienes no intercambiables en el mercado, ¿cómo valorar los daños ambientales?

En primer lugar, la evaluación de los pasivos ambientales se enfrenta a problemas de inconmensurabilidad de valores, es decir, la imposibilidad de representar en un solo lenguaje, en este caso el lenguaje monetario, los daños producidos en esferas diferentes de la actividad humana (Martínez - Alier, Munda y O'Neill 1998): ¿cuál es el valor monetario de la degradación de un paisaje, de la reducción de la biodiversidad, de la erosión cultural, de la pérdida de la salud?

Además, muchas veces los daños ambientales producidos y sus consecuencias a largo plazo no son fácilmente cuantificables debido a la interacción con los ecosistemas y con la sociedad humana (Chavas 2000; European Environment Agency 2001). En segundo lugar, ¿qué incluir en la evaluación del pasivo ambiental? Se podría decir que una estimación completa tendría que incluir:

- el costo de reparación del daño;
- el valor de la producción perdida a causa de la contaminación, es decir, la riqueza no producida;
- una compensación por los daños irreversibles.

Cuando una empresa causa un daño a la colectividad, la responsabilidad moral es clara, pero ¿de quién es la responsabilidad jurídica? ¿Quién tiene que hacerse cargo del costo de saneamiento de los lugares contaminados y de la compensación de los daños, cuando se puede? ¿Y quién tiene que pagar a las víctimas cuando los daños son irreversibles: la sociedad en su conjunto o el causante de la contaminación? ¿El pasivo ambiental es una responsabilidad pública o privada?

El grado de responsabilidad jurídica del pasivo ambiental al que las empresas están sujetas depende del sistema legislativo nacional donde el daño se produce. Muchas transnacionales occidentales prefieren operar en los países del Sur, no sólo porque allí están las materias primas sino también porque las nor-

Pasivo ambiental es la suma de los daños no compensados producidos por una empresa al medio ambiente a lo largo de su historia, en su actividad normal o en caso de accidente. Son sus deudas hacia la comunidad donde opera. Surgen así, dos temas de análisis: la evaluación monetaria y la responsabilidad jurídica.



mas ambientales y laborales son menos estrictas, y esto permite ahorrar en los costos. Sin embargo, muchas veces el problema principal no es tanto la falta de legislación, sino de control. Por ejemplo, las cantidades permitidas de sustancias nocivas en el agua en Perú, no son muy diferentes de los límites establecidos

La urgencia de cancelar su deuda externa crea una especialización productiva de los países del Sur en industrias que presentan alta densidad de contaminación. Así, la división del trabajo en el ámbito internacional hace que se produzcan más pasivos ambientales en el Sur que en el Norte.



por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los EE.UU. El problema radica en que en el Sur, más frecuentemente que en el Norte, estos límites no son respetados, debido al menor poder político y económico, y al doble chantaje de pobreza y deuda externa.

En una economía cada vez más globalizada, asumen siempre más importancia las normas internacionales de responsabilidad ambiental. Existen ya algunos convenios internacionales sobre temas específicos, por ejemplo sobre derrames marinos de petróleo⁵. Estos convenios deberían ser extendidos y reforzados.

Otro modelo interesante podría ser la Alien Tort Claims Act -ATCA- (Herz 2000), que cede a las cortes federales estadounidenses el derecho de ocuparse de procesos de responsabilidad civil en los casos de agravios cometidos por empresas de los EE.UU. en el extranjero, cuando hay violación de una norma correspondiente a la ley internacional consue-

tudinaria (ley de las naciones)⁶. Hay casos de abusos ambientales que se han querido llevar bajo la jurisdicción de la ATCA, aunque, desafortunadamente, con poco éxito hasta la fecha⁷. El caso de la Texaco en Ecuador ha sido uno de ellos.

Ejemplos de pasivo ambiental: empresas mineras en el Perú

La empresa minera en Perú

Existen muchos ejemplos de pasivos ambientales, en el Norte como en el Sur del mundo. Los autores de este artículo hemos tomado como caso emblemático la actividad de la industria minera en Perú, que reviste un interés particular por muchas razones.

El aumento del flujo de recursos primarios del Sur al Norte representa un buen argumento contra la tesis de la 'desmaterialización' de la economía industrializada. En los países industrializados el consumo de materia y de energía está creciendo, pese a la aparición de nuevas tecnologías que supuestamente hubieran tenido que invertir esta tendencia (Martínez- Alier 2001). El decremento de los precios de las materias primas que se observa en el ámbito internacional no responde a una reducción de la demanda, sino a un exceso de oferta, producido por una sobreexplotación de los recursos. De hecho, los estados del Sur, bajo la doble espada de Damocles de la deuda externa y de la pobreza, venden cada vez más recursos a precios que son en general más bajos (Muradian y Martínez - Alier 2001).

Esto crea una especialización productiva de los países del Sur en industrias que presentan alta densidad de contaminación. Además, la

5 Convenio Internacional sobre Daños por Contaminación Petrolera de 1992; Convenio Internacional sobre el Establecimiento de un Fondo Internacional para Compensación de Daños de Contaminación Petrolera de 1992; Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños de Contaminación Petrolera por Barcos, 2001. Véase <http://www.greenyearbook.org>.

6 Se define como "ley consuetudinaria" al conjunto de usos y prácticas de las naciones. Se puede probar la existencia de una ley consuetudinaria a través del trabajo de juristas y comentaristas, de documentos oficiales y otras indicaciones de la acción gubernamental; de acuerdos internacionales, de juicios de tribunales nacionales e internacionales y de la opinión de estudiosos de reconocida fama.

7 <http://www.earthrights.org>.

extracción de minerales se realiza principalmente por parte de empresas extranjeras, que consideran más conveniente invertir en lugares donde el control sobre la contaminación y las condiciones laborales son menos estrictos. En otras palabras, la división del trabajo en el ámbito internacional hace que se produzcan más pasivos ambientales en el Sur que en el Norte.

Las exportaciones peruanas de mineral son uno de los rubros más importantes de la economía del país: Perú es el segundo productor mundial de plata, el tercero de estaño, el cuarto de zinc y plomo, y el quinto de cobre⁸. La producción está orientada a la exportación.

El caso de Espinar

Espinar es una provincia que se encuentra aproximadamente entre los 3.800 y los 5.000 metros de altura en los Andes peruanos, entre Cusco y Arequipa. Es uno de los departamentos más pobres de Perú. Su economía se basa en la ganadería y en una agricultura de subsistencia (que produce sobre todo, papas, quinua y cañihua): se trata de un equilibrio muy frágil por las difíciles condiciones geográficas en que se encuentra. La población es de 63 mil habitantes (la mayoría quechua hablantes). El 60% vive en zonas rurales (CooperAcción y Acción Solidaria 2001).

La mina de cobre de la zona, constituida en 1980 por el Estado peruano, a través de un proceso de expropiación de la tierra de los campesinos, fue vendida en 1994 a la empresa norteamericana Magma Copper Company/Global Magma Ltd. Después de dos años, pasó a manos de la empresa australiana Broken Hill Proprietary, hoy en día BHP-Billiton, una de las empresas mineras más importantes en el ámbito mundial y famosa por su conflicto en Ok Tedi, en Papua Nueva Guinea (Ibid).

La presencia de la mina en la región ha significado para las poblaciones locales un aumento de la pobreza. De hecho, por un lado, a pesar de las expectativas iniciales suscitadas entre los campesinos, la mina ofrece una cantidad despreciable de trabajo a las comunidades locales (según una encuesta llevada a cabo por la ONG peruana CooperAcción, en el 2000 menos del 3% de los comuneros trabajaba como minero o vivía directamente de la actividad minera) (CooperAración 2000).

Por otro lado, la contaminación producida por la mina provoca no sólo graves daños a la salud⁹, sino también la muerte de una parte del ganado de los campesinos, y reduce la productividad de la agricultura¹⁰. Estos pasivos ambientales apenas han sido compensados.

Todavía no se sabe cuántos animales han muerto y porqué, ni en qué medida se ha visto comprometida la agricultura. Esto se debe no sólo a la pobreza, que vuelve difícil contratar a un veterinario para que certifique la razón de la muerte de una oveja o de una alpaca, sino también a una diferencia importante en el lenguaje. En otras palabras, una evaluación cuantitativa y científica de un daño, así como la idea de que existe un Estado que establezca normas para su reparación, es algo ajeno a la experiencia de estas comunidades.

Sin embargo, gracias a la intervención de CooperAcción, de Oxfam América y de la Coordinadora Nacional de las Comunidades Afectadas por la Minería -CONACAMI-, se ha llevado a cabo una evaluación de impacto ambiental, aunque restringida principalmente a la contaminación del agua. De dicho análisis resulta que la concentración de arsénico y plomo exceden los límites establecidos en la Ley General de Aguas (D.L. 17752) para los

8 Ministerio De Energía Y Minas, Subsector Minería, *Anuario Minero 2001*, <http://www.mem.gob.pe/wmem/publica/dgm/public01/archivo.pdf>.

9 Los campesinos entrevistados se quejan de dolores de cabeza y de estómago, de dermatitis, de reducción del rendimiento de los niños y niñas en las escuelas, etc.

10 Los campesinos afirman que sus tierras rinden menos que antes, es decir, que ahora se necesita cosechar más, y que se obtienen productos agrícolas de menor calidad. Además, sostienen que desde que la mina se ha establecido en el área, su ganado muere por beber agua contaminada.

cuerpos de agua destinados al riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales (clase III), así como la concentración de hierro para los cuerpos de agua de uso doméstico (clase I) (Equas S.A 2000).

Estos resultados no coinciden con los presentados en la evaluación de impacto ambiental de la empresa, en la cual se concluye que los contaminantes están todos bajo los límites legales. La empresa y la CONACAMI se encuentran en un proceso de negociación que determinará, entre otras cosas, un acuerdo sobre los procedimientos de evaluación del impacto.

Espinar constituye uno de los primeros experimentos de la mesa de negociación entre una mina y una comunidad campesina. La negociación con la empresa presenta ventajas y riesgos. Por un lado, se obtienen beneficios más inmediatos y más seguros. Probablemente el análisis conjunto goza de más legitimidad porque es aceptado por las dos partes. Se trata además, de un proceso más participativo y flexible. Sin embargo, podría representar una forma de legitimación para la empresa, es decir, un útil 'lavado de imagen'.

La Oroya

La ciudad de La Oroya está ubicada a 3.700 metros en la sierra peruana, donde se encuentra una fundición de plomo que pertenecía primero a la Cerro de Pasco Corporation, luego a Centromin Perú S.A. y actualmente a la empresa Doe Run Co. El Complejo Metalúrgico de La Oroya procesa aproximadamente 600.000 TM de concentrados y produce 11 metales y 8 subproductos, principalmente plomo, zinc, cobre, plata y oro¹¹.

Varios estudios han demostrado el grado preocupante de contaminación en la Oroya. Un análisis de la Dirección General de Salud Ambiental (Dirección Nacional de Salud Ambiental, Dirección Ejecutiva de Ecología y Medioambiente 1999) ha encontrado en las cuatro estaciones montadas de muestreo de plomo en el aire un promedio de respectiva-

mente 10,5; 1,9; 12,7 y 14,8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, y una concentración máxima de 27,53 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Otro análisis llevado a cabo en septiembre de 2001 por el Consorcio Unión para el Desarrollo Sustentable -UNES- (asociación ubicada en La Oroya) (Consorcio UNES-Unión para el Desarrollo Sustentable 2001), ha encontrado valores medios de plomo en el aire de 11 y 6,61 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en los dos puntos de muestreo en La Oroya nueva y de 10,35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en La Oroya antigua. Según los estándares nacionales de Calidad del Aire¹², el límite de 1,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ no debe ser excedido por más de cuatro veces por año.

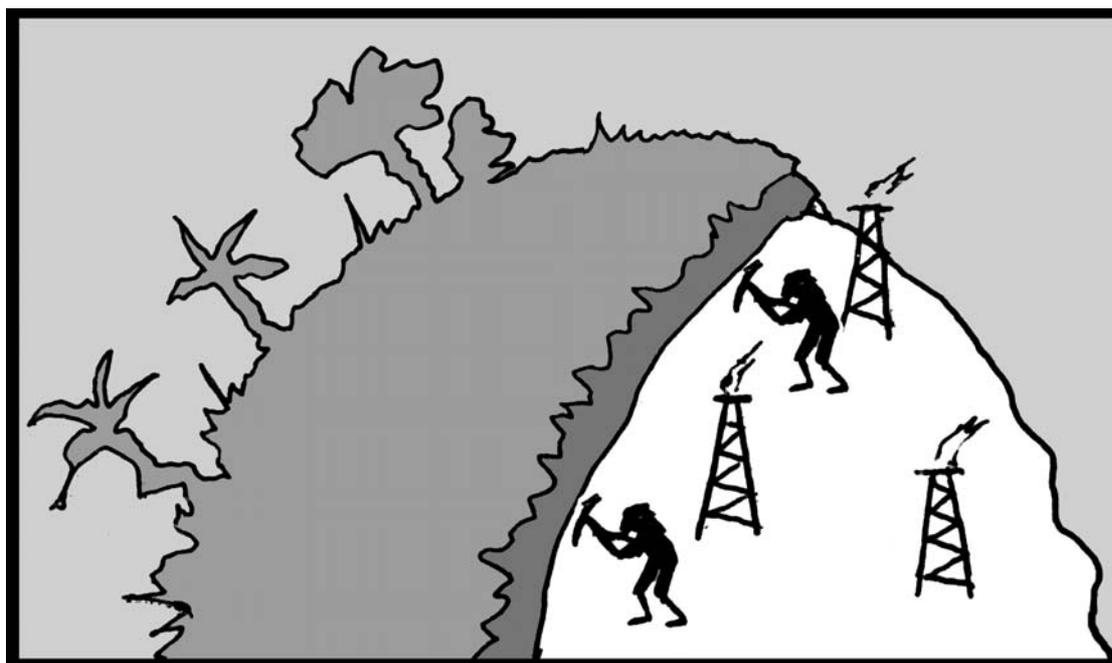
La contaminación de plomo en el aire se traduce en un nivel muy alto de plomo en la sangre de los habitantes de La Oroya. Los efectos del plomo en la salud humana pueden ser muy graves, ya que este material interfiere con el metabolismo y la función celular y puede provocar varias enfermedades, entre otras: problemas gastrointestinales, disfunciones neuromusculares, disminución de la memoria, de la atención y de la vista, depresión.

La población más afectada por la presencia de plomo en la sangre es la infantil, ya que su sistema nervioso está en desarrollo; sufren también estas consecuencias las mujeres gestantes, ante los cambios que presentan en el metabolismo óseo, que hacen que el plomo acumulado en el hueso pueda pasar a la sangre y ser transmitido al niño en gestación a través de la placenta y la leche maternas. El Consorcio UNES ha demostrado que el promedio de plomo en la sangre de las gestantes y de los niños de La Oroya es de 39,49 $\mu\text{g}/\text{dl}$ y 41,81 $\mu\text{g}/\text{dl}$, respectivamente (el 43% de los niños y niñas tiene un valor entre 45 y 69 $\mu\text{g}/\text{dl}$)¹³. Los límites indicados por las autoridades sanitarias para gestantes y niños son de 30 $\mu\text{g}/\text{dl}$ (OMC) y 10 $\mu\text{g}/\text{dl}$ (CDC)¹⁴. La Aca-

12 Decreto Supremo N° 074-2001-PCM, *Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire*, disponible en <http://www.conam.gob.pe/Normas/DS-01074.htm>.

13 La población objeto de estudio estuvo constituida por 48 mujeres gestantes y 30 niños y niñas menores de tres años.

11 <http://www.doerun.com.pe>



demia Norteamericana de Pediatría -ANP- ha establecido que el desajuste de la función cognitiva empieza en los niveles mayores a los 25 $\mu\text{g}/\text{dl}$ (Instituto Salud y Trabajo -ISAT-2000).

El papel de las asociaciones de defensa de las poblaciones, como la UNES y la CONACAMI, es tal vez más complicado en La Oroya que en Espinar. De hecho, alrededor de 3 mil de los 33 mil habitantes de La Oroya trabajan en la fundición, mil de los cuales mantienen contrato fijo¹⁵. La Doe Run Perú afirma que el 70% de la actividad laboral de la ciudad de La Oroya se debe, directa o indirectamente, a los trabajos de la empresa¹⁶. Esto hace que buena parte de la población de La Oroya esté a favor de la fundición, no obstante los riesgos a la salud que conlleva.

Otros elementos que cabe tener en cuenta son las actividades de 'lavado de imagen' que lleva a cabo la Doe Run: financiación de la

construcción de un comedor público, cursos de capacitación, un programa de reforestación y jardinería, un programa de mitigación de emisiones contaminantes, actividades todas muy bien publicitadas (Ibid.). Además, la empresa se ha comprometido a invertir USD 168 millones hasta el 2006 en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que supuestamente está reduciendo su impacto ambiental. De todas maneras, en el contrato de transferencia se estableció que el pasivo ambiental histórico de la Centromin Perú no se traspase a la Doe Run Perú (Ibid.).

En Herculaneum, Missouri, Estados Unidos, se ha llegado a un acuerdo muy reciente entre la EPA y la Doe Run Co., que posee una fundición de plomo con una capacidad productiva de 250.000 toneladas. Se establece que la empresa financiará la reubicación temporal de alrededor 100 familias, mientras las operaciones de limpieza se lleven a cabo; con un gasto de cerca de USD 8,8 millones¹⁷. En Herculaneum el 24% de niños y niñas menores de seis años resultan envenenados por plomo, según los estándares federales (10

14 Centro para el Control y Prevención de Enfermedades situado en Atlanta, Georgia, EE.UU. Es una Agencia del Departamento de la Salud y de Servicios Humanos.

15 Informaciones recibidas en ocasión de una entrevista con personal de la UNES.

16 <http://www.doerun.com.pe>

17 <http://www.planetark.org/dailynewsstory.cfm/newsid/14076/newsDate/18-Jan-2002/story.htm>

mg/dl)¹⁸. Con estos estándares, según el estudio de la UNES en La Oroya el 77% de los niños resultarían envenenados.

Es interesante comparar los resultados de los conflictos que afectan a las multinacionales en distintos lugares del mundo, cuando enfrentan reclamos de pasivos ambientales. En Estados Unidos existe una legislación muy avanzada para la reparación de daños ambientales, la Ley CERCLA (llamada coloquialmente “Superfondo”); pero hoy en día cuenta con escasa financiación. Sin embargo, no se aplica a las actividades de compañías norteamericanas fuera de Estados Unidos.

Conclusiones

En los dos casos presentados se pueden reconocer muchas de las características comunes a la generación de pasivos ambientales en los países del Sur. En ambos, las empresas extranjeras producen pasivos ambientales donde la legislación ambiental es menos estricta o el control menos riguroso que en su estado de origen. Para el Norte es conveniente externalizar las producciones más contaminantes hacia el Sur. Eso no es porque la conciencia ambientalista sea menor en el Sur sino porque resulta más barato contaminar países pobres. Sin embargo, los pasivos ambientales no son producidos sólo por empresas extranjeras: por ejemplo, la destrucción de manglares provocada por las camareras en Ecuador es producida por empresarios locales, en beneficio de consumidores extranjeros.

En los dos casos, determinar y evaluar el pasivo ambiental en términos monetarios es muy difícil, aunque éste no sea un argumento para dejar de reclamarlo. ¿Cuántas son las ovejas y las alpacas muertas por la contaminación producidas por la BHP en Espinar? ¿Cuánto cuestan en el mercado y cuánto para la subsistencia local? ¿Cuales serán en La Oroya las consecuencias en la salud de los ni-

ños envenenados por plomo? ¿Y qué valor monetario dar a estos daños para pedir compensación a la empresa?

Además, no sólo es difícil establecer el valor monetario de los daños, sino también obtener que éstos sean compensados por la empresa. Hay distintos tipos de compensación posible ya sea por los daños ya realizados o para prevenir los nuevos. En este sentido, es muy interesante analizar las diferentes compensaciones ofrecidas a los afectados por causa de una contaminación en distintos lugares del mundo. También puede verse cómo la elección de diferentes tecnologías de reducción de la contaminación en distintas partes del mundo, dependen no sólo de cuestiones técnicas sino sociales y económicas.

Por último, otro elemento interesante es la constelación de actores involucrados y los valores sociales que se ponen en juego. Por ejemplo, en la Oroya muchos ciudadanos están a favor de la fundición, al parecer. No contamos con información que permita un análisis en términos de género u otras variables. En Espinar, comprobamos que hay una gran distancia social entre los actores, y los perjudicados se ven obligados a adoptar lenguajes de valoración ajenos a su experiencia cotidiana.

Obviamente, muchos de los daños ambientales no son reversibles, como por ejemplo los daños a la salud, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de un paisaje. Sin embargo, reclamar los pasivos ambientales puede ser útil por dos razones: en primer lugar, esto vuelve más costosa y difícil la producción de nuevos pasivos ambientales. Es decir, constituye un desincentivo para las producciones muy contaminantes o, por lo menos, un incentivo a que se tomen precauciones y se adopten innovaciones tecnológicas para reducir el impacto ambiental. En segundo lugar, la compensación del daño en forma monetaria puede ser la única manera para que por lo menos quienes se han visto afectados reciban algo, sobre todo en los casos de compensación retroactiva. La compensación monetaria sirve como forma de redistribución de

18 <http://www.aida2.org/english/projects/prjdoerun.php>.

las ganancias producidas por la actividad contaminante. Además, la compensación monetaria, y el proceso o la negociación que la hacen posible, tienen un valor simbólico muy fuerte. Se trata de una reafirmación del derecho de las poblaciones locales sobre su territorio.

Bibliografía

Chavas, J., 2000, “Ecosystem valuation under uncertainty & irreversibility”. *Ecosystems* 3:11-15.

Consortio UNES, Unión por el Desarrollo Sustentable, 2001, *Evaluación de la calidad de aire, agua y suelo en la provincia de Yauli*, La Oroya.

CooperAcción, 2000, Problemas y necesidades para el desarrollo sustentable en comunidades campesinas afectadas por la minería, (en prensa).

_____ y Acción solidaria para el Desarrollo, 2001, *Los conflictos de tierras en la provincia de Espinar. El caso de BHP y las comunidades de Tintaya Marquiri y Alto Huancané*. Lima: OXFAM América.

Dirección General de Salud Ambiental -DIGESA-, Dirección Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente, 1999, *Evaluación de la calidad del aire en el distrito de la Oroya –Junín*, Lince.

Equas S.A., 2000, *Evaluación ambiental aire, agua y suelos, Área de influencia de las operaciones mineras de BHP Tintaya S.A.*, Espinar – Cusco.

European Environment Agency, 2001, “Late lessons from early warnings: the precautionary principle 1896–2000”, en *Environmental Issue Report 22*, Copenhagen.

Herz, R. L., 2000, “Litigating environmental abuses under the Alien Tort Claims Act: a practical assessment”, en *Virginia Journal of International Law*, vol. 40: 545.

Instituto Salud y Trabajo –ISAT-, 2000, *Evaluación de niveles de plomo y factores de exposición en gestantes y niños menores de 3 años de la ciudad de La Oroya*, Lima: Consorcio UNES.

Martínez – Alier J., 2001, “Mining conflicts, environmental justice, and valuation”, *Journal of Hazardous Materials* 86: 153 – 170.

_____ y M. O’Connor, 1996, “Ecological and economic distribution conflicts”, en: Costanza R., O. Segura y J. Martínez – Alier, (ed.), *Getting down to earth: practical application of Ecological Economics*, Wahington DC: ISEE, Island Press.

_____, G. Munda y J. O’Neill, 1998, “Weak comparability of values as a foundation for ecological economics”, *Ecological Economics* 26: 277- 286.

Muradian y J. Martínez - Alier, 2001, “Trade and the environment: from a ‘Southern’ Perspective”, en *Ecological Economics* 36: 281-297.

Zehner, Rosa, 2001, *Identificación, Evaluación, Control, Mitigación y Biorremediación de Riesgos Medioambientales: Programas de Remediación para Actividades Hidrocarburiíferas*, II Congreso de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Industria Petrolera, Quito, 22-26 de octubre de 2001.

<http://www.menergia.gov.ec/documentos/Proteccion%20Ambiental/Publicaciones/Libros/Programas%20de%20Remediacion.pdf>

Ediciones de FLACSO - Ecuador



Serie ATRIO

Economía y desarrollo sostenible

Fander Falconí

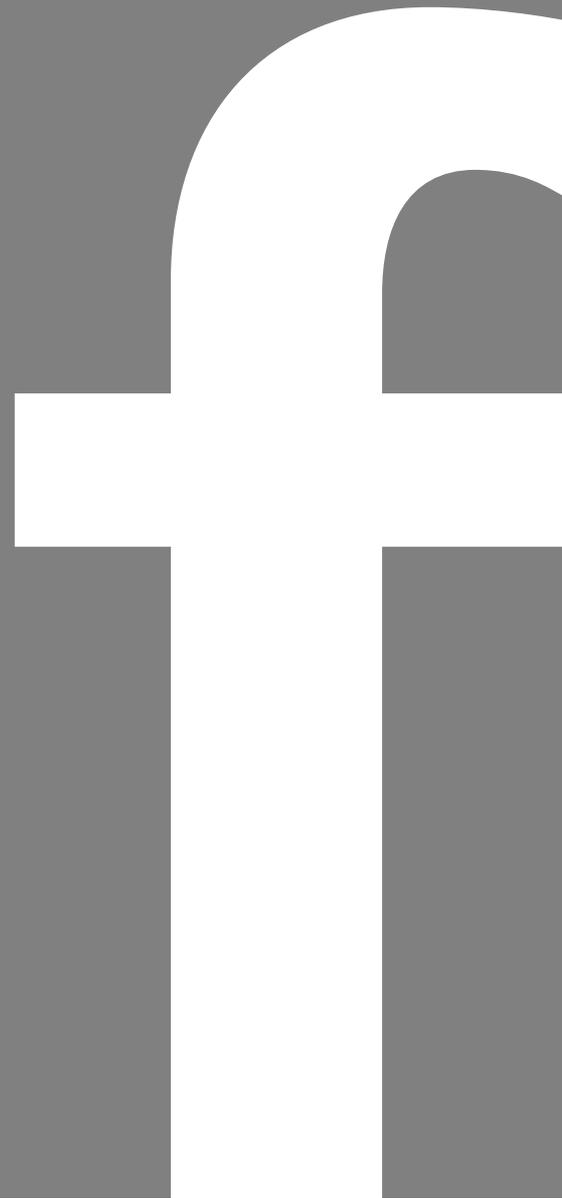
FLACSO- Ecuador - EcoCiencia - FUNDACYT

Embajada Real de los Países Bajos

Tradicionalmente, el producto interno bruto (PIB) ha sido considerado como el mejor indicador para medir el éxito de la economía nacional y el bienestar, pero si se incluyen el agotamiento de los recursos y la degradación en la calidad de vida, lo que se obtiene es un cuadro sumamente diferente de aquello descrito por los métodos convencionales.

En esta obra, Fander Falconí discute con extraordinaria claridad y competencia el concepto teórico de desarrollo sostenible y las principales herramientas para su medición empírica. El intento de medir la sostenibilidad en su naturaleza multidimensional por medio del análisis multicriterio es una parte extremadamente valiosa de la investigación desarrollada y, seguramente, la primera vez que se aplica tan sistemáticamente a una economía real en el campo científico, no solo en América Latina sino también mundialmente.

FRONTERA



Lula y Brasil: miedo, esperanza y los más diversos intereses

Carlos Ranulfo Melo
y Fátima Anastasia*

El 27 de octubre de 2002 el poder cambió de manos en Brasil. En enero de 2003, tras un intervalo de cuatro décadas, los brasileños verán a un presidente electo por el voto popular pasar la cinta a otro presidente electo por las urnas. En ese momento se completará la larga transición a la democracia en el país.

Desde 1961, cuando tomó posesión Jânio Quadros, la política brasileña ha pasado por muchas turbulencias. En el corto período comprendido entre 1961 y 1964 ocurrieron diversas transformaciones bruscas: la salida de Quadros y la posesión del vicepresidente João Goulart, que no agradó a los sectores más conservadores, la corta experiencia parlamentaria, cuyo objetivo era impedir que Goulart ejerciera los plenos poderes conferidos al cargo presidencial, el presidencialismo después del plebiscito popular y, por último, el golpe militar que dio fin a la república democrática instaurada con la Constitución de 1946.

Más tarde vinieron los duros tiempos del ciclo autoritario militar: fueron 21 años marcados por la ausencia de una institucionalidad democrática en el país y por la vigencia del ar-

bitrio y de las recurrentes tentativas de institucionalización del orden autoritario (mediante el recurso a un discurso de eficiencia económica y más tarde de distensión política).

El continuo ejercicio del poder político por los militares generó un conjunto de problemas de legitimación política. Como ha afirmado Santos (1988), a la regresión del orden político no corresponde concomitantemente la congelación del orden económico y social, lo que ha acarreado, en la evaluación de este autor, una división entre la *polis* y el *demos*: la primera sigue inaccesible e impermeable a la incorporación de nuevos actores y de nuevos contenidos que surgen en el *demos*, por consecuencia de la continuada expansión y diversificación de las dinámicas económicas y sociales.

A partir de mediados de la década de los 70, tal escenario se fue agravando por las crisis del milagro económico, lo que puso leña en la hoguera del desgaste del autoritarismo. Fue en este contexto que surgió, inicialmente, el proyecto de las elites autoritarias de implementación de una estrategia de liberalización política orientada a disminuir gradualmente la tensión sociopolítica, manteniendo intocables, sin embargo, los pilares básicos de sustentabilidad del régimen: la doctrina de seguridad nacional y el modelo de desarrollo económico (Alves 1984). Fue también en este contexto en el que surgirán en el escenario político brasileño los nuevos actores que ocupan actualmente las posiciones de mayor cen-

* Los autores son profesores del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Minas Gerais. Traducción: Claudia Arcanjo Otaviano. Edición y revisión final: Edison Hurtado.



Gonzalo Vargas

tralidad política: el nuevo sindicalismo forjado en los paros obreros de 1978, 1979 y 1980, el PT (Partidos de los Trabajadores) nacido en 1980 en el marco de la reforma partidista aprobada en 1979, los nuevos movimientos sociales de rasgos pluralistas (que expresan la creciente heterogeneidad de la sociedad brasileña) y el nuevo empresariado que empezó a discrepar públicamente con el orden autoritario y a reivindicar el retorno al estado de derecho en el país.

La transición política experimentada en Brasil ha ocurrido, según Eli Diniz (1985), de la confluencia de dos dinámicas básicas: “una dinámica de negociación y pacto conducida por las elites, y una dinámica de presiones y demandas irradiadas de la sociedad, articuladas a través de movimientos sociales y traducida en organizaciones políticas”. En consecuencia, el proyecto de abandono del orden autoritario, puesto en marcha por las elites, fue constantemente interpelado y modificado por los movimientos surgidos de dos direcciones: por un lado, por las acciones de los sectores más duros del régimen, que discrepaban de las estrategias de distensión iniciadas bajo el gobierno de Geisel en 1974 y rebautizadas como de apertura política en el periodo

de Figueredo entre 1975 y 1985; por otro lado, por las exigencias de la sociedad civil a favor de la democratización efectiva de la sociedad brasileña.

Este fue el motivo por lo cual se verificó, aún de acuerdo con Diniz (1985), el alejamiento entre el proyecto estructurado por las elites autoritarias y el proceso político real, y en el cual se encuentra la explicación para el carácter negociado de la transición política brasileña.

El primer presidente civil, Tancredo Neves, fue electo todavía de forma indirecta¹, a pesar de la gran movilización política ocurrida en el país en 1984 a favor del retorno de las elecciones directas para presidente. Lo que pasó fue que los militares perdieron el control de su partido (el PDS) y también del propio colegio electoral, lo cual abrió un camino a la victoria del binomio Tancredo-Sarney. Este binomio fue posible gracias a una ruptura ocurrida dentro del Partido Democrático Social (PDS), que generó la salida de una parte significativa de sus cuadros. El grupo que abandonó el partido fue denominado como el Frente Liberal, el cual dio origen en 1985 al Partido del Frente Liberal (PFL). Como se sabe, Tancredo falleció antes de iniciar su mandato, por lo que asumió su vicepresidente, Sarney -hombre de confianza del régimen militar hasta el comienzo de los años 80-.

La institucionalización de la democracia brasileña empezó con la inauguración del nuevo orden constitucional en 1988. Desde entonces, el país ha pasado por cuatro elecciones directas para presidente de la República y presenta las condiciones mínimas necesarias para ser incluido en el universo de las poliarquías, tal como son definidas por Robert Dahl (1989). Las elecciones periódicas han presen-

1 Con el objetivo de garantizar el control del proceso siguiente, los militares instituyeron un colegio electoral responsable de la elección indirecta del presidente de la República. Este colegio se iba reunir en enero de 1985 para sacramentar la decisión tomada por la Convención Nacional del PDS (Partido Democrático Social) -partido creado en 1980 para dar continuidad al apoyo parlamentario del régimen garantizado anteriormente por el partido ARENA-.

tado grados sustantivos de competencia política y los resultados han sido acatados por los perdedores (Przeworski, 1984). ¿Por qué, entonces, el proceso de 2002 significó cambios tan expresivos en la política brasileña?

La respuesta a esta cuestión reposa en el hecho de que, por primera vez en la historia del país, fue electo un presidente cuya plataforma y base de sustentación política están situadas a la izquierda del espectro ideológico. Luego de que participó por tres veces consecutivas en la competencia electoral y de que en todas fue derrotado, el Partido de los Trabajadores (PT) salió vencedor en la campaña de 2002. Ahora se presenta frente a los ciudadanos con una agenda de reformas que, si son llevadas a cabo, modificarán sustancialmente el perfil de la sociedad brasileña.

No hay dudas de que son muchos los desafíos y grandes las dificultades que esperan Lula, el PT y el conjunto de los ciudadanos brasileños en los próximos años. Es sabido que no basta tener voluntad política para concretar los objetivos que constan en la propuesta del PT: crecimiento económico con equidad social y perfeccionamiento de las instituciones democráticas, todo esto sin descuidar la disciplina fiscal. El tratamiento de estas cuestiones se torna aún más complicado por el panorama de desigualdad social y de crisis financiera que pasa el país y por las limitaciones impuestas por el contexto internacional.

Más allá de creer en el *slogan* de campaña *a esperança venceu o medo* (“la esperanza venció al miedo”), ahora resta, parafraseando a Weber, ver qué rumbo será dado a la política y a la sociedad brasileña para promover la interlocución entre los más diversos intereses.

De la oposición al gobierno: la trayectoria del Partido de los Trabajadores

Cuando el PT fue fundado, en 1980, la historia de la izquierda brasileña transitaba por tres caminos distintos. El más antiguo, de esencia marxista, mantenía como represen-

tantes, operando en la clandestinidad, al Partido Comunista Brasileño (PCB) y a su disidencia, el Partido Comunista de Brasil (PC de B). La segunda trayectoria de la izquierda remitía al Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), organización de carácter popular creada por Getulio Vargas en 1945, a partir de una estructura sindical relacionada al Estado y cuya herencia sería disputada por diferentes corrientes, en un proceso que terminaría en la década de los 80 por dividir el trabalhismo en dos vertientes: el PTB y el Partido Democrático de Trabajadores (PDT). La tercera y más reciente trayectoria de la izquierda se encarnaba en una serie de pequeñas organizaciones involucradas con la guerrilla urbana (entre 1968 y 1972); su objetivo era desmontar el régimen impuesto por el golpe militar de 1964, abriendo así camino para una revolución socialista en el país².

Los fundadores del PT se negaron a tener como referencia a cualquiera de estos caminos. Al contrario de los comunistas y a pesar de aceptar desde su fundación militantes y organizaciones leninistas y trotskistas, el Partido de los Trabajadores recusó un vínculo explícito con el marxismo, contentándose con un socialismo definido de forma amplia y general. A diferencia del trabalhismo, el petismo nació a raíz de una confluencia de movimientos sociales y populares en confrontación con el Estado autoritario. Habiendo surgido bajo un amplio movimiento por la redemocratización del país, el PT nunca consideró otro camino rumbo al gobierno que no fueran las urnas, allende de posiciones internas que fue-

2 El PCB surgió en 1922 y experimentó su primer período de legalidad entre 1945 y 1947. El PC de B nació en 1962 en virtud de una división entre los comunistas. Ambos fueron legalizados en 1985 con la redemocratización. Al comienzo de la década del 90, el PCB cambió de nombre y pasó a llamarse Partido Popular Socialista (PPS). En 1980, Leonel Brizola creó el PDT después de perder una disputa judicial por la posesión de la sigla PTB con la hija de Getúlio, Ivete Vargas. La guerrilla urbana fue desbaratada en el curso de uno de los oscuros períodos de la historia republicana brasileña. Algunos de sus antiguos miembros se integraron al PT tras el proceso de amnistía.

Tabla 1
Plazas obtenidas por el PT en las elecciones
1982 - 2002 (%)

Nivel de representación	Año					
	1982	1986	1990	1994	1998	2002
Gobiernos Estaduales	0	0	0	7,4	11,1	11,1
Senado Federal	0	0	3,2	7,4	11,1	18,5
Cámara de los Diputados	1,7	3,3	7,0	9,6	11,3	17,7
Asambleas Legislativas	1,4	4,1	7,9	8,8	8,6	14,1

Fuente: Melo (2002b). Los datos de las elecciones de 2002 fueron tomados del sitio web del TSE (Tribunal Supremo Electoral de Brasil).
 Elaboración: los autores.

sen ambiguas respeto a esto, y que miran al PT en una etapa previa a la construcción de un verdadero partido de revolución³.

El camino de las urnas iba a ser generoso con el PT, pero no de inmediato. En las elecciones de 1982, siendo perjudicados por la legislación impuesta por el régimen militar y teniendo en contra a dos poderosas máquinas políticas⁴, el partido cosechó un poco más del 3,5 % de los votos para la Cámara de los Diputados, sin lograr elegir ningún senador o

gobernador. En 1986, enfrentando la inmensa popularidad del presidente Sarney y su plan de control de la inflación, el PT llegó al 6,9% de los votos para la Cámara⁵. A lo largo de este período, aquellas eventuales victorias electorales se tornaron en un ruidoso fracaso. En 1985, por ejemplo, el partido conquistó la alcaldía de Fortaleza, capital del estado de Ceará. Sin embargo, frente a la gestión, se vieron como una organización revolucionaria que buscaba convertir la alcaldía en una trinchera de lucha para la organización independiente de los trabajadores contra la explotación capitalista. El resultado fue el completo caos administrativo y la desmoralización del partido en la región.

La historia comenzaría a cambiar al final de la década de los 80. Contribuyeron a este cambio la crisis del gobierno de Sarney -que terminó debilitando al PMDB y desarticulando la coalición que condujo el proceso de transición de la dictadura a la democracia- y el buen desempeño del PT tanto en los trabajos de la Asamblea Constituyente electa en 1986, cuanto en el esfuerzo conjunto con los movimientos sociales en el campo de la ope-

3 El PT fue resultado de la confluencia del “nuevo socialismo” surgido en el ABC paulista, de los más diversos movimientos populares, de militantes de base vinculados a los trabajos de la Iglesia Católica, de intelectuales y de pequeñas organizaciones de izquierdas (Keck 1991, Meneguello 1989). El proceso de absorción de estas últimas fue lento y consumió toda la década del 80. En el comienzo de los años 90, las organizaciones que no aceptaban el PT como partido “estratégico” terminaron siendo excluidas.

4 La legislación que ha regulado la elección de 1982 obligaba a los partidos a presentar listas completas para todos los cargos, lo prohibía de establecer coligaciones e impuso al elector escoger una sola leyenda para cualquiera de los niveles en disputa (municipal o estadual). Bajo el argumento de fortalecer el nuevo sistema partidario, el régimen militar buscaba evitar que la oposición se coligara contra el Partido Democrático Social (PDS) de la Derecha. La regla del juego ha beneficiado el PDS y también el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) una vez que ambos habrían recibido por herencia la estructura de las organizaciones existentes entre 1965 y 1979.

5 El Plan Cruzado después de la elección se reveló como un fracaso. Pero su popularidad fue suficiente para que el PMDB conquistara solo la mayoría en el Congreso Nacional y eligiera 22 de los 23 gobernadores.

sición. En 1988, el PT conquistó la alcaldía de tres capitales: São Paulo, Goiânia y Porto Alegre. La lección de Fortaleza fue aprendida y el saldo de estas administraciones fue positivo. A pesar de haber perdido las dos primeras alcaldías en la elección siguiente, el partido llevó a buen término sus respectivos

En 2002, el PT fue el partido que más votos recibió en las elecciones seccionales, logrando la mayor bancada en la Cámara de los Diputados y el mayor número de representantes en las Asambleas Estaduales. En el Senado el partido se quedó con el segundo puesto, habiendo conquistado 10 de las 54 plazas en disputa



gobiernos. En Porto Alegre, la administración petista alcanzó tal grado de éxito que el partido hasta hoy gobierna la ciudad, habiendo vencido cuatro elecciones sucesivas, algo inédito en Brasil. En 1989, en la primera elección presidencial tras el retorno a la democracia, el PT fue una sorpresa para todos, inclusive para sus propios miembros. Su candidato, Lula, superó al principal liderazgo de la oposición hasta entonces -el ex gobernador Leonel Brizola- y llegó a la segunda vuelta. Al final de una elección extremadamente polarizada el PT obtuvo el 47% de los votos y perdió la elección frente a Fernando Collor de Mello, quien compitió por el recién creado partido de la Reconstrucción Nacional (PRN) y alcanzó el 53%.⁶ La “casi victoria” abrió el camino para que Lula y el PT se consoliden como la principal referencia de la izquierda en el país, por encima de Brizola y el PDT. La superación del trabalhismo por el petismo sería concretada en la elección siguiente. En

6 El PRN fue creado para sustentar la campaña de Collor. Dejó de existir luego de su salida.

1994, el PT perdió la elección contra Fernando Henrique Cardoso (FHC), pero la votación de Lula en la primera vuelta había crecido de 17,5% en 1989 a 27% en aquella elección. Brizola, por su lado, cayó de 17,5% a 3,2% en el mismo periodo⁷. En las elecciones siguientes la votación de Lula en la primera vuelta subiría aún más. En 1998, nueva derrota frente a Fernando Henrique Cardoso, pero ahora con el 31,7% de los votos válidos. Finalmente, en 2002, la votación llegaría a 46,44%.

La tabla 1 muestra el desempeño del PT en las elecciones entre 1982 y 2002, en términos de porcentajes de representantes electos para los gobiernos estaduales, el Senado Federal, la Cámara de los Diputados y las Asambleas Legislativas en los estados. La trayectoria es claramente ascendente. Después de un comienzo amargo en 1982, el partido completa veinte años de disputas electorales con significativa presencia en todos los niveles. En 2002, el PT fue el partido que más votos recibió en las elecciones seccionales, logrando la mayor bancada en la Cámara de los Diputados y el mayor número de representantes en las Asambleas Estaduales. En el Senado el partido se quedó con el segundo puesto, habiendo conquistado 10 de las 54 plazas en disputa⁸.

La victoria en 2002 no fue, sin embargo, una especie de despliegue natural de la mencionada trayectoria. Más bien, la posibilidad de que Lula realmente obtuviera un triunfo en la disputa presidencial fue considerada solo en el curso de la propia campaña. A cuatro meses de la primera vuelta, en el comando del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), aún prevalecía la evaluación de que el candi-

7 El mandato de Fernando Collor de Mello se redujo de cuatro a cinco años pues debió renunciar bajo amenaza de *impeachment*. A partir de 1994, el mandato presidencial volvió a ser de cuatro años, habiendo sido introducida, de modo controvertido, la posibilidad de reelección en 1996.

8 En el Brasil, El Senado Federal está compuesto por 81 miembros y renovado en dos etapas. Cada una de las 27 unidades de la Federación tiene derecho a tres representantes. En la elección de 2002 fueran renovadas 54 postulaciones en 2006 serán renovadas 27.

dato petista sería el adversario ideal en la segunda vuelta, dado su presumido rechazo e incapacidad de mantenerse de forma estable en un nivel de votos por encima del 30%.

La victoria de Lula es, por lo tanto, algo que debe explicarse. Para ello, deben ser tomados en cuenta algunos factores. En primer lugar, el desgaste del gobierno de Fernando Henrique Cardoso y su dificultad de avanzar más allá del mantenimiento de la estabilidad económico-financiera que le dieron las victorias en 1994 y 1998, y que hizo que la disputa electoral estuviera marcada por la necesidad de cambio. Al final de la primera vuelta, no sólo que los candidatos de la oposición sumaban el 76,8% de los votos válidos, sino que también el propio candidato oficialista (José Serra del PSDB) había sostenido una postura dual frente al gobierno: el programa electoral de Serra en la radio y en la TV se centraba en la idea de que *ele era a mudança* (“él era el cambio”).

En estrecha relación con las dificultades de la gestión gubernamental, los errores en la conducción de la coalición de gobierno y en la selección de su candidato terminaron por fragmentar el bloque político con el que el PSDB contó en las elecciones de 1994 y 1998. Las evidencias de que tal fraccionamiento podría ocurrir ya eran perceptibles desde el primer año del segundo mandato de FHC (Melo 1999 y 2002a). Inicialmente, su origen estaba vinculado a la necesidad de los tres partidos más grandes de la coalición de gobierno (PMDB, PSDB y el PFL) de cuidar sus movimientos estratégicos, teniendo a la vista el escenario de la sucesión de 2002. No obstante, las disputas en el interior de la coalición de gobierno pudieron ser manejadas de manera que eviten las fracturas. Si esto no fue así, fue porque el desempeño del gobierno y sus decisiones políticas no fueron satisfactorios. Particularmente, hay que mencionar que el cambio al PMDB -en detrimento del PFL- como principal aliado, en razón de la renovación de las presidencias de la Cámara y del Senado en 2000, sumado a cómo luego fue llevada la selección del candidato presiden-

cial, José Serra (PSDB), y a la notoria exclusión como candidato del entonces gobernador del estado de Ceará, Tasso Jereissati (PSDB), crearon situaciones de difícil resolución. En repuesta, el PFL optó por una candidatura propia (Roseana Sarney, hija de José Sarney); luego de su posterior fracaso electoral, el PFL apoyó la candidatura de Ciro Gomes (PPS), que enfrentó al PSDB y que ya había atraído, además, a otro antiguo miembro de la coalición de gobierno, el PTB.

Finalmente, pero no menos importante, es necesario mencionar el desempeño del PT en la disputa electoral. En 2002, el elector brasileño medio tenía ansiedad de cambios, aunque no supiera exactamente cómo podrían ser realizados, y no estaban dispuestos a embarcarse en una aventura con Serra, que si bien tenía un discurso de cambio, representaba cierta continuidad. De ahí que la vinculación de José Serra con el gobierno de FHC fue ciertamente un impedimento para que él pudiera ser electo. Ciro Gomes, por su lado, se perdió en su propio discurso y vio caer su credibilidad durante la campaña. El candidato del PSB, Anthony Matheus Garotinho, tuvo un crecimiento limitado debido a su postura irreverente y a propuestas poco plausibles, como el aumento del 40% en el salario mínimo en el primer año de gobierno. La campaña del PT, por su cuenta, fue exitosa en dos aspectos cruciales. Por un lado, el PT tuvo éxito al reaccionar prontamente a todas las tentativas de utilizar una posible crisis económico-financiera como argumento para no votar por Lula: el viaje del presidente del PT a los Estados Unidos, el compromiso asumido con la estabilidad y con el mantenimiento de los contratos, las relaciones con el empresariado y la Bolsa de Valores fueron actitudes que ayudaron a desarmar el discurso alarmista de la situación. Por otro lado, la campaña petista fue exitosa en la presentación de Lula como líder moderado, preocupado en presentar propuestas razonables y apuntar procedimientos para la solución de los problemas del país. Aún pecando de generalidad en muchas ocasiones, Lula afirmó a lo largo de la campa-

Tabla 2

El panorama político en el Legislativo tras la elección de 2002

Partidos	Cámara de diputados		Senado Federal	
	Número	%	Número	%
PT	91	17,7	14	17,3
PDT	21	4,1	5	6,2
PSB	22	4,3	4	4,9
PPS	15	2,9	1	1,2
PC del B	12	2,3	-	-
PV	5	1,0	-	-
Total Izquierda	166	32,2	24	29,6
PMDB	74	14,4	19	23,5
PSDB	71	13,8	11	13,5
Total Centro	145	28,2	30	37,0
PFL	84	16,4	19	23,5
PPB	49	9,6	1	1,2
PTB	26	5,1	3	3,7
PL	26	5,1	3	3,7
PRONA	6	1,2	-	-
Micro partidos*	11	2,1	1	1,2
Total Derecha	202	39,4	27	33,3
Bancada de apoyo a Lula	218	42,5	30	37,0
Bancada de Oposición	204	39,8	31	38,3
Bancadas Indefinidas**	91	17,7	20	24,7

*Fueran clasificados como *micro legendas* (micro partidos) los partidos con menos de 5 representantes. En la Cámara: PSD (4); PST (3); PMN (1); PSC (1) y PSDC (1). En el Senado, el PSD con un representante.
 **Fueran contadas como indefinidas las bancadas del PMDB, del PRONA y de los micro partidos.

ña la imagen de un negociador capacitado para conducir a la sociedad a un amplio pacto social, presentado como salida a la crisis.

Más que una jugada de *marketing* destinada a superar la imagen de un partido radical y de un candidato no preparado, *Lulinha paz e amor* (“Lulita paz y amor”), como pasó a ser llamado el petista, fue una posibilidad abierta para el momento en que se encontraba el partido. El PT que llegó a la disputa presidencial en 2002 era muy diferente al PT de

hace veinte años o al de la “casi victoria” de 1989. El crecimiento de las bancadas legislativas, la conquista de puestos ejecutivos en importantes estados y municipios, así como las derrotas en las elecciones anteriores, habían cambiado al partido. Poco quedaba de aquella organización que consideraba como prioritario el trabajo junto a los movimientos sociales, que buscaba una estructuración interna a partir de grupos de base y que daba prioridad a un discurso de corte radical y de

inclinación socialista. Aunque tales ideas continuaron siendo acuñadas, sus proponentes al interior del partido tenían perdida la disputa -una disputa que se definió a lo largo de la década de los 90-. En el PT que disputó las elecciones de 2002 hubo una hegemonía de corrientes moderadas; fue un partido volcado a la disputa electoral, difusamente organizado y dotado de un discurso y una práctica claramente socialdemócratas. Fue esta situación la que permitió, por ejemplo, que Lula invitara al empresario José de Alencar, afiliado al conservador Partido Liberal (PL), a ser parte del binomio presidencial.

Límites y posibilidades del gobierno de Lula

El país que Lula recibirá de Fernando Henrique Cardoso no anda bien. El presidente saliente condujo un gobierno de centro-derecha, rígidamente alineado a las determinaciones del hoy maltrecho “Consenso de Washington”, aunque matizado por algunas concesiones sociales y un discurso flexible. Bajo los principios de la desregulación de los mercados y de la privatización de los servicios, FHC subastó gran parte del sector estatal y pretendió abrir completamente la economía nacional, con la expectativa de atraer un flujo de capitales externos -que nunca se dejó ver-. Tras ocho años, la economía se encuentra estancada, el desempleo bate récord, los salarios pierden valor, 53 millones de personas (31% de la población) están por debajo de la línea de pobreza y de éstas, 23 millones no consiguen generar la renta necesaria para garantizar la alimentación propia. Más aún, el real se desvalorizó frente a otras monedas, las tasas de interés son las más altas del mundo, la deuda interna supera el 60% del PIB y la inflación amenaza con salirse de control, es decir, la tan valorada estabilidad monetaria se encuentra actualmente cuestionada.

Para enfrentar este escenario el nuevo gobierno cuenta, inicialmente, con un capital político envidiable. Lula fue electo con una

votación que lo consagra (61.3% de los votos válidos) y el país asiste desde el 27 de octubre a una ola de optimismo y esperanza como jamás se había visto antes. Según una encuesta realizada por el Instituto Sensus a inicios de noviembre, el 71% de la población cree que Lula realizará un gobierno óptimo o bueno. Más aún, el 58% de los encuestados declaran estar dispuestos a contribuir de alguna forma en este sentido. El anuncio del programa *Fome Zero* (“Hambre Cero”) como objetivo primordial del gobierno obtuvo amplia repercusión y ha ganado aliados entusiasmados. La primera reunión realizada para discutir la creación del Consejo de Desarrollo Económico y Social contó con la presencia de los principales líderes empresariales y obreros del país. Es importante resaltar que al contrario de lo que ciertamente hubiera ocurrido en el caso de una victoria petista en 1989, no existen coaliciones de oposición articuladas contra el gobierno que asume en 2003.⁹

También en el plano político institucional las perspectivas son mejores de lo que se esperaba, pues es muy posible que el nuevo presidente consiga mayoría en el Congreso. La tabla 2 muestra el panorama en las dos casas legislativas nacionales luego de la elección de 2002 y ayuda a entender la situación.

Para el momento que escribimos este artículo, se sabe que la bancada de apoyo a Lula contará con el conjunto de los partidos de izquierda, además de dos agremiaciones tradicionalmente consideradas como de derecha - el PL, integrante de la coalición electoral desde la primera vuelta, y el PTB que se adhirió en la segunda-. Juntos, esos partidos suman 218 diputados (42,5%) y 30 senadores (37%). La coalición de gobierno podría ampliarse con la inclusión del PMDB, partido que propuso al vicepresidente en el binomio de José Serra. Tal posibilidad estaba abierta

9 Para establecer un contraste basta recordar que en 1989 uno de los mayores líderes empresariales del país afirmó que una victoria de Lula provocaría una “fuga en masa” de empresarios. En ese entonces también había una gran desconfianza entre los militares para no hablar de los propietarios de tierra.

desde la segunda vuelta, cuando los candidatos del PMDB a cargos de gobierno en estados importantes pasaron a ser apoyados por el PT y se vincularon a la campaña de Lula. Esto se vio reforzado con el acuerdo entre los dos partidos para enfrentar las disputas por las presidencias de la Cámara y del Senado¹⁰. En este caso, la base aliada pasaría a incluir al 57% de los diputados federales y al 60% de los senadores. Tampoco se debe descartar la posibilidad de que los partidos de la coalición de gobierno crezcan debido al cambio de partido de los diputados (*migração dos deputados entre as legendas*)¹¹, fenómeno que se ha vuelto rutinario en Brasil (Melo 2000).

La bancada de oposición contará con el PSDB, el PFL y el PPB, que juntos eligieron a 204 diputados y a 31 senadores. El PSDB y el PFL cuentan también con 12 gobernadores electos, incluyendo los de São Paulo y Minas Gerais, lo que no puede dejar de ser tomado en cuenta dada la estructura federalista del país. Pero, al menos inicialmente, no se debe esperar una oposición muy virulenta. En una reunión del PSDB, realizada luego de los resultados de la segunda vuelta, el presidente Fernando Henrique Cardoso recomendó moderación a sus compañeros. Además, importantes líderes del PFL en Bahia (el senador electo Antônio Carlos Magalhães) y en Minas Gerais (el vicegobernador electo Clésio Andrade) apoyaron a Lula en la segunda vuelta.

Todo indica que el nuevo gobierno deberá tener un perfil más amplio que el del PT y de la izquierda. Pero la conducción de una plataforma política con tales características -muchos partidos y diversificación del espectro ideológico- demandará, más allá de buenas dosis de habilidad política, un buen desempeño del gobierno en la conducción de su agenda. Lo que, evidentemente, también interferirá con el ánimo de la sociedad respecto del nuevo presidente y su equipo.

10 Por el acuerdo, el PMDB apoya el nombre indicado por el PT para la Cámara y recibe en cambio la garantía de apoyo para el Senado.

11 Fenómeno conocido en Ecuador como "cambio de camiseta" o "camisetazo". *N. del E.*

Ciertamente, es en la conducción de la agenda de gobierno donde reside todo el peligro. Conciliar disciplina fiscal, crecimiento económico y distribución de la renta no será tarea fácil. Lula y su equipo deberán dar alguna repuesta a las demandas sociales largamente reprimidas, en un panorama de evidentes restricciones presupuestarias y con una economía que, como se afirmó anteriormente, tiene soportes débiles. De un lado, el gobierno sentirá la presión de los militantes y del ala izquierda del propio PT, de los desempleados, de los sindicatos y de los funcionarios públicos en particular, de los sin tierra, para mencionar sólo a los más visibles. A los primeros tendrá que recordarles que el presidente fue electo con más del doble de los votos obtenidos por su partido; con los demás tendrá que negociar y convencerles de *ir devagar com o andar que o santo é de barro* ("ir despacio con el andas que el santo es de barro").

De otro lado, es preciso recordar que durante la campaña, el PT se comprometió a acatar el último acuerdo firmado con el FMI. Pero eso no significa que el nuevo gobierno dejará de argumentar, junto a la comunidad financiera internacional, que la senda seguida por el país en los últimos ocho años se encuentra desgastada y que además fue derrotada en las urnas. En la larga negociación que debe abrirse a partir de 2003, Lula y su equipo partirán del supuesto de que la autoridad democráticamente constituida en el Brasil ya no se encuentra vinculada a un único objetivo -la estabilidad monetaria- como en el caso de su antecesor. Bajo el riesgo de perder sus características como una propuesta de cambio y frustrar la inmensa expectativa, el nuevo gobierno deberá conducir sus relaciones con los organismos internacionales teniendo en mente que el país necesita crecer y que el Estado brasileño necesita reforzar su capacidad como agente social y económico -de otra manera, los puntos de la agenda social, considerados de gran importancia, no podrán ser contemplados de forma satisfactoria-.

Todo indica que el primer año será crucial para Lula y el PT. Todo el capital político ad-

quirido en la elección deberá ser invertido teniendo en cuenta las necesidades a) de consolidar una coalición mayoritaria de apoyo al Presidente, b) de mantener la economía bajo control, evitando el regreso de la inflación, c) de atacar cuestiones cruciales como las reformas tributarias y de la seguridad social, d) de avanzar las propuestas referentes al pacto social, comprometiendo a los actores sociales más diversos, de forma que se facilite retomar el desarrollo económico y la generación de empleos, y e) de garantizar que la campaña “Hambre Cero” (*Fome Zero*) y otras iniciativas de emergencia logren resultados visibles. Si logra llevar bien estos puntos, el gobierno habrá superado su prueba.

Lula, Brasil y América Latina

América Latina pasa por una crisis de proporciones continentales. Más allá de las dificultades en el plano económico y social, con la devaluación de las monedas, el aumento del desempleo, de la miseria y de la violencia, algunos países enfrentan serios problemas de orden político. No sorprende que los datos presentados por el Latinobarómetro para el año 2001 muestren un estancamiento en los niveles de adhesión a la democracia y de confianza en líderes, partidos y parlamentos en el continente. Desde hace algún tiempo, los partidos tradicionales -Conservadores y Liberales en la Colombia, Unión Cívica Radical y Partido Justicialista en la Argentina, Acción Democrática y COPEI en Venezuela o el APRA en el Perú- enfrentan enormes dificultades en sus países¹².

Es razonable suponer que la elección de Luís Inácio Lula da Silva en la cuarta democracia más grande del mundo y en la mayor economía de la región podrá tener una repercusión positiva en relación a este escenario de la democracia en América Latina. Y eso tanto en el plano procedimental como en el sustantivo de la democracia. En cuanto al primer aspecto, parece plausible esperar que ocurra aquello que Huntington (1991) denominó como “efecto demostración” -un impacto po-

sitivo de todo el proceso en las democracias vecinas-. Al fin y al cabo, el país pasa por un sensible cambio de rumbos y lo hace de manera absolutamente tranquila: las elecciones fueron libres y competitivas, los resultados irrefutables, la transición ha sido conducida de forma ejemplar por el presidente saliente y los dos partidos que desde la primera mitad de la década de los 90 están protagonizando la disputa política nacional, el PT y el PSDB, tuvieron un destacado rol en todo el proceso.

En el plano sustantivo, el énfasis que será otorgado a la cuestión social y al crecimiento económico -en caso que se concreten de hecho las medidas anunciadas durante la campaña- muy probablemente producirá impactos significativos en los países vecinos. Si es verdad que América Latina no debe retomar nuevamente la experiencia populista de la posguerra, también parece evidente que la aplicación del modelo neoliberal se debilita significativamente en los países situados en la periferia del sistema capitalista. Entre la total subordinación a una globalización financiera nada solidaria y la amenaza de aislamiento y

Es razonable suponer que la elección de Luís Inácio Lula da Silva en la cuarta democracia más grande del mundo y en la mayor economía de la región podrá tener una repercusión positiva en relación a este escenario de la democracia en América Latina, en los planos procedimental y en el sustantivo de la democracia.



12 El 48% de los entrevistados dijeron que la democracia es preferible a cualquier tipo de régimen; en los cuatro años anteriores el índice fue de alrededor del 60%. El 25% se declaró satisfecho con el desempeño de la democracia; el 24% afirma confiar en el Poder Legislativo, mientras apenas un 15% dijo lo mismo respecto de los partidos políticos (www.latinobarometro.org).

marginalidad, los países latinos están obligados a buscar otro camino.

Con la victoria de Lula estará en marcha la primera tentativa de implantación en el continente de una política de corte socialdemócrata, que expresa un compromiso racional entre el capital y trabajo. Al anunciar el pacto social, que apunta a la sustitución del “Consenso de Washington” por el “Consenso de Brasilia”, Lula y su equipo estarán apostando por la capacidad de movilización de recursos humanos y materiales en el plano nacional, como forma de encontrar una vía de integración socialmente más justa y económicamente más segura para el país.

Esta apuesta incluye también una nueva postura frente a las relaciones internacionales. En una entrevista reciente al periódico *Folha de São Paulo*¹³, el historiador británico Perry Anderson afirmó que “durante una década Brasil, en la práctica, no tuvo una política exterior propia”, limitándose a un “alineamiento con Washington en todas las cuestiones importantes”. A partir de 2003, será posible esperar una mayor aproximación con Europa y África y un interés mayor por la Organización Mundial del Comercio.

En lo que se refiere al ALCA, el gobierno norteamericano, aún más conservador después de las elecciones legislativas realizadas a inicios de noviembre, puede esperar una negociación más difícil con Brasil. En lo que se refiere al MERCOSUR, el proyecto regional del gobierno de Lula defiende “una institucionalización más fuerte, con una secretaría técnica reforzada, un Parlamento y un sistema de solución de controversias más consistentes, una moneda única y un Banco Central común, en fin, mayor complementariedad macroeconómica” (*Gazeta Mercantil*, 28 de octubre de 2002). Según Marco Aurélio Garcia, asesor del PT en el área de las relaciones internacionales, “el modelo que atrae a Lula es el de la Unión Europea” (ídem).

En fin, se puede decir que a partir del próximo año habrá mucho en juego en Brasil. Si

el nuevo gobierno encuentra un camino de salida a la crisis, podrá ser seguido por sus vecinos. Y América Latina, quién sabe, podrá ingresar por la puerta delantera en la comunidad internacional.

Bibliografía

- Alves, M. Helena Moreira, 1984, *Estado e Oposição(ões) no Brasil: 1964-1984*, Vozes, Rio de Janeiro.
- Dahl, Robert, 1989, *Um Prefácio à Teoria Democrática*, Jorge Zahar, Rio de Janeiro.
- Diniz, Eli, 1985, “A Transição Política no Brasil. Uma reavaliação da dinâmica da abertura”, en *DADOS, Revista de Ciências Sociais*, vol. 28, No. 3.
- Huntington, Samuel, 1991, *A Terceira Onda*, Ática, São Paulo.
- Keck, Margareth, 1991, *PT: A Lógica da Diferença - O Partido dos Trabalhadores na Construção da Democracia Brasileira*, Ática, São Paulo.
- Melo, Carlos Arnulfo, 2000, “Partidos e Migração Partidária na Câmara dos Deputados”, *Dados*, vol. 43, No. 2.
- , 2002a, “Impressões de Julho”, *Conjuntura Política*, No. 35, Belo Horizonte.
- , 2002b, “Presidencialismo e estabilização relativa do sistema partidário brasileiro”, Trabalho apresentado no 3^o Encontro Nacional da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP), 28 a 31 de julho, Niterói, Brasil.
- , 1999, “2002: o ano que começou em 1999”, *Conjuntura Política*, No. 8, Belo Horizonte.
- Meneguello, Raquel, 1989, *PT: A Formação de um Partido*, Paz e Terra, São Paulo.
- Przeworski, Adam, 1984, “Ama a Incerteza e Serás Democrático” en *Novos Estudos*, No. 9.
- Santos, Wanderley Guilherme, 1988, “O Século de Michels”, en *Paradoxos do Liberalismo*, IUPERJ/Vértice, Rio de Janeiro/São Paulo.

13 Edición de 10/11/2002, páginas 8 y 9.

Uruguay 2002: contagio, crisis bancaria y perspectivas¹

Fernando Antía *

La economía uruguaya atraviesa por una profunda crisis que afecta a la sociedad, principalmente a través de su impacto en el empleo, la emigración y los ingresos reales de los hogares. Este proceso se agudizó ya en los primeros meses del año, cuando los efectos de la acentuación de la crisis argentina golpearon a la economía uruguaya, debilitada desde los puntos de vista productivo, fiscal y financiero como resultado de los tres años de recesión que le había tocado vivir. El estallido de la crisis argentina a fines del año pasado, afectó a la economía uruguaya a través de su efecto sobre las exportaciones de bienes y servicios y las expectativas de los agentes económicos, pero principalmente lo hizo a través de su impacto sobre el sistema bancario.

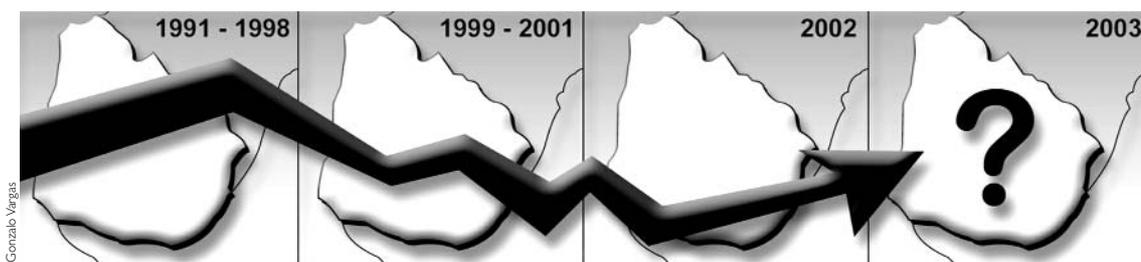
El persistente retiro de depósitos bancarios de los argentinos, verificado desde febrero, erosionó la liquidez de los bancos de plaza y la posición de las reservas internacionales del Banco Central de Uruguay -BCU-. La corrida se extendió luego a los depósitos de residentes y afectó cada vez más a los bancos públicos. El país perdió la calificación *investment grade* y el riesgo-país creció vertiginosamente. Ante la pérdida de las reservas internacionales, el 20 de junio pasado el gobierno abandonó la política de estabilización de “ancla cambiaria” que aplicaba desde diciembre de 1990. La pronunciada devaluación del pe-

so que se verificó en los meses siguientes, impulsó la inflación, agudizó la recesión, golpeó a los deudores en dólares y afectó la situación patrimonial de los bancos acreedores. Todo ello aceleró aún más la corrida bancaria y la pérdida de reservas internacionales.

En estas condiciones, el gobierno dispuso un feriado bancario que se extendió desde el 30 de julio hasta el 2 de agosto. Mientras ello sucedía, se conseguía un nuevo acuerdo *stand-by* con el FMI y se definía una nueva estrategia para enfrentar la crisis bancaria, ésta contó con los apoyos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y del FMI. En el marco de ese nuevo acuerdo, el gobierno obtuvo un cuantioso financiamiento que permitió la reapertura del sistema bancario. En la actualidad, si bien la corrida parece haberse detenido, las perspectivas económicas del país se ven afectadas por las secuelas de la crisis bancaria, por el elevado endeudamiento estatal, por la fuerte dependencia de los organismos financieros internacionales y por la incertidumbre existente respecto al desempeño económico de los países vecinos.

¹ Este artículo se apoya en los Informes periódicos de Coyuntura del Instituto de Economía. Se consideró la información disponible hasta el 15 de noviembre de 2002.

* Economista, coordinador del Área de Coyuntura del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República y profesor agregado de Economía Monetaria en esa Facultad.



A continuación, se presta atención a la evolución de la economía uruguaya en la última década, se repasa en las condiciones que llevaron a la agudización de la crisis en 2002 y se discuten las perspectivas de corto plazo. El artículo se organiza en seis apartados: en el primero, se revisan las principales tendencias de la economía uruguaya en los 90; en el segundo, se analizan los factores que llevaron a la agudización de la crisis económico-financiera en los primeros meses del año en curso; en el tercero, se presta atención a la crisis bancaria de 2002; en el cuarto, se hace referencia al apoyo otorgado al gobierno uruguayo por Estados Unidos y el FMI para superar la crisis, y se reflexiona respecto al alcance de este aparente giro; en el quinto, se presentan las previsiones respecto a la evolución de la economía uruguaya al cabo de 2002. Finalmente, en el último apartado se analizan las perspectivas económicas para el 2003.

Principales tendencias de la economía uruguaya en la última década

En los años 90, pueden distinguirse dos etapas muy diferentes en lo que tiene que ver con el desempeño de la economía uruguaya. Una primera, de crecimiento, que se extendió entre 1991 y 1998 en la que el PIB se expandió casi ininterrumpidamente, y una segunda, a partir de 1999, en la que la economía se contrajo.

La fase de crecimiento (1991-1998)

En ese lapso, la economía uruguaya creció el 4,4% acumulativo anual (a.a.) y la inflación

se redujo marcadamente. El crecimiento de la economía se vio impulsado por la expansión de la demanda interna y por el incremento de las exportaciones de bienes y servicios a los países vecinos. Los puntos débiles de este crecimiento fueron: la pérdida de competitividad extrarregional, resultante del encarecimiento en dólares de los precios de los bienes no transables, y la persistencia de una elevada tasa de desempleo (10% en 1998).

Las causas fuerza que impulsaron esta fase de crecimiento fueron:

- El fuerte ingreso de capitales del exterior (entre 1991 y 1998 se verificó una cuantiosa transferencia de recursos hacia América Latina y Uruguay).
- El crecimiento de las economías de la región, especialmente de Argentina (en ese lapso la economía argentina creció 5,5% a.a. y la brasileña 2,8% a.a.). Ese comportamiento de las economías vecinas fue influido en buena medida, por la aplicación de sendos planes de estabilización del ancla cambiaria.
- La apertura unilateral de las economías vecinas y la constitución del Mercosur, que dieron fuerte impulso al comercio intrarregional.
- La aplicación en Uruguay desde 1991, de un plan de estabilización de ancla cambiaria, que expandió el gasto interno a través de diversos mecanismos, entre los que sobresalen: la reducción de la inflación, el aumento del crédito, la mejora de las expectativas de los agentes económicos, el abaratamiento de los bienes importados y el efecto riqueza, resultante del aumento del valor de los activos.

La fase recesiva (1999-2001)

La economía uruguaya entró en una persistente y poco profunda recesión (el PIB se contrajo 7,1% en el trienio), las finanzas públicas se debilitaron y la *ratio* deuda pública/PIB creció pronunciadamente (véase cuadro final).

Las causas fuerza que determinaron la recesión fueron:

- Contracción del ingreso de capitales del exterior hacia América Latina. Ésta afectó negativamente a Uruguay a través de sus resultados en las economías vecinas, pues la economía uruguaya mantuvo un fluido acceso al financiamiento externo hasta 2001, inclusive.
- La marcada pérdida de competitividad bilateral con Brasil (en 1999 se verificó una maxidevaluación con muy baja inflación en ese país) y la lentitud en su ritmo de crecimiento que tomó la economía brasileña (creció sólo 6,8% en el trienio).
- Recesión y deflación en Argentina (la economía argentina cayó 8,1% en el trienio).
- El fortalecimiento del dólar frente al euro, que afectó negativamente la competitividad en Europa y contribuyó a la caída de los precios de las materias primas medidos en dólares.
- El deterioro de los términos del intercambio (por la caída de los precios internacionales de los productos agropecuarios y el aumento del precio del petróleo).
- La lentitud en el ritmo de crecimiento que tomara la economía mundial (en especial en el 2001).
- La sequía en la primavera / verano 1999/2000 y el exceso de lluvias en el 2001, con el consiguiente efecto negativo sobre el sector agropecuario.
- La epidemia de aftosa en abril de 2001, que afectó negativamente la producción y las exportaciones de carne vacuna.

La agudización de la crisis económico-financiera en el 2002

En los primeros meses del 2002 se agudizó la crisis de la economía uruguaya. Ello se puso en evidencia por la pérdida de la calificación *investment grade* (en febrero); en el pronunciado incremento de la prima de riesgo país (pasó de 217 puntos básicos en diciembre de 2001 a 2.191 puntos básicos en octubre); en la caída vertical de la producción (el PIB del primer semestre cayó 7,8%); en el deterioro de las finanzas públicas (el déficit fiscal en los doce meses terminados en julio ascendió a 4,5% del PIB), y en una crisis de confianza que determinó una formidable corrida contra los depósitos bancarios.

Causas de la agudización de la crisis uruguaya

En Uruguay, la principal causa de la agudización de su proceso crítico radicó en la *profundización de la crisis argentina*, verificada a fines de 2001. La combinación en Argentina de dificultades políticas, *default* de la deuda externa, “corralito”,² pesificación asimétrica de depósitos y créditos bancarios, maxidevaluación y falta de apoyo del FMI, determinaron una pronunciada caída de la actividad



La principal causa de la agudización del proceso crítico de la economía uruguaya radicó en la profundización de la crisis argentina. La combinación en ese país de dificultades de distinta índole determinaron una pronunciada caída de la actividad económica, con el consiguiente deterioro de la situación social.

2 En el Río de la Plata se denominó “corralito” a la inmovilización de los depósitos bancarios que impuso el gobierno de De la Rúa en diciembre de 2001 y que en los primeros meses de 2002, fue renovada y ampliada por el gobierno de Duhalde.

económica, con el consiguiente deterioro de la situación social. En el primer semestre del año, el PIB argentino cayó casi en un 15% y se estimaba que en el 2002 lo hiciera en un 12%.³

Canales de transmisión de la crisis argentina:

- Canal comercial: dado el peso de Argentina en las exportaciones de bienes y servicios de Uruguay (casi 30% del total en 2001) y la significación del comercio de frontera, el impacto que tuvo la crisis argentina en la uruguay fue muy pronunciado. Las exportaciones de bienes a Argentina cayeron casi en un 70% en el primer semestre, las exportaciones turísticas a Argentina se redujeron a la mitad y el saldo del comercio de frontera se volvió fuertemente negativo.
- Canal de expectativas: los agentes económicos intuyeron que si a la economía argentina le iba mal, lo propio le iba a suceder a la economía uruguaya. Ello determinó una pronunciada contracción del gasto doméstico, que agudizó la recesión.
- Canal financiero: fue el canal de transmisión más gravitante y derivó en una crisis bancaria de la entidad.

La crisis bancaria de 2002

En los primeros nueve meses de 2002 se produjo una formidable fuga de capitales. Se retiraron más de 6.000 millones de dólares de los depósitos constituidos en el sistema bancario, casi 46% del total existente a fines de 2001. Los depósitos de no residentes cayeron en un 65% y los de residentes casi en un 30%.

3 Caídas similares de la actividad económica se registraron en Indonesia en 1997 (el PIB se contrajo 13,5%) y en Chile en 1982 (la caída del PIB fue 14,1%).

Causas

Análisis más detenidos de la crisis bancaria uruguaya del 2002⁴ sostienen que las principales causas de la corrida que condujeron a la crisis bancaria estuvieron dadas por:

- El efecto “contagio” de la crisis argentina (temor al “corralito” y caída de bancos argentinos radicados en el país).
- La elevada exposición del sistema bancario al “riesgo argentino” (concentración de pasivos y activos bancarios en Argentina).
- La debilidad y vulnerabilidad del sistema bancario (extendida dolarización de depósitos y créditos e ineficacia de la red de seguridad).
- Las fallas en la supervisión del BCU (supervisión global y supranacional insuficiente, incapacidad de detectar fraudes, errores en el otorgamiento de licencias bancarias).
- Las debilidades y errores de la conducción político-económica (falta de entendimiento nacional, debilidad de la coalición de gobierno y pérdida de credibilidad de las autoridades).
- El debilitamiento de los bancos estatales (por aumento de la morosidad y deterioro de las finanzas públicas).

La gestión de la crisis bancaria

- La estrategia inicial (desde febrero hasta mayo): consistió en mantener las ventanillas abiertas y pagar (salvo Banco Galicia-Uruguay, cuya actividad se suspendió en febrero), con la esperanza de que la corrida se detuviera. Se suponía que las medidas de ajuste fiscal adoptadas en febrero y mayo y el apoyo concedido por el FMI en marzo, cambiarían las expectativas. Pero no ocurrió así.

4 Fernando Antía, 2002, “La crisis bancaria de 2002 y las perspectivas de corto plazo de la economía uruguaya”: *Boletín Técnico N° 14*. Montevideo: Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (setiembre), pp. 71-80

-
- Segunda estrategia (desde el 17 de junio hasta el 30 de julio): se estimó que la concreción de un nuevo acuerdo con el FMI (el segundo del año) y la creación del Fondo de Fortalecimiento del Sistema Bancario (FFSB), que habría de operar como un “hospital de bancos”, permitirían recuperar la confianza de los depositantes. La nueva estrategia tampoco logró torcer las expectativas. Las causas posibles para el desenlace de esta situación son: falta de credibilidad, fallas en la comunicación y la percepción de que los recursos del FFSB eran inciertos y podrían ser insuficientes.
 - Estrategia actual (entre el feriado bancario –30 de julio– y la actualidad): ante el debilitamiento tanto del sistema bancario como de las reservas internacionales del BCU, el gobierno decretó un feriado bancario para detener la corrida. En el transcurso de esta medida se obtuvo el apoyo del FMI como del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ese apoyo se plasmó en un nuevo acuerdo *stand-by* (el tercero del año), en el incremento del financiamiento concedido por los organismos financieros internacionales y en la concesión de un “crédito puente” de 1.500 millones de dólares por parte del Tesoro de Estados Unidos. Esos recursos permitieron poner en marcha un Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario (FESB), creado por ley, que otorgó respaldo a los depósitos transaccionales constituidos en los bancos públicos y en los bancos con problemas.
 - Los bancos en dificultades deberían ser liquidados o recapitalizados. El BCU dispuso la suspensión de actividades de cuatro bancos con problemas de liquidez.
 - El cese del apoyo oficial a los restantes bancos (de capital extranjero y cooperativas), que deberán obtener el respaldo integral de sus accionistas o cesar sus actividades.

En agosto, luego de la reapertura del sistema bancario bajo las nuevas reglas de juego, la salida de depósitos se volvió lenta (494 millones de dólares). En septiembre, la salida de depósitos fue mucho menor (50 millones de dólares) y en octubre se produjo un incremento de depósitos, por primera vez en el año (52 millones de dólares). Ello sugiere que se estaría superando la crisis de confianza que afectó al sistema bancario durante los primeros meses del año.

No obstante, cabe esperar que en un futuro próximo se verifique una profunda reestructura del sistema bancario, tendiente a adaptarlo al menor volumen de negocios postcrisis. En el marco de esa reestructura se verificará un proceso de achicamiento del sistema bancario, al cabo del cual casi seguramente habrán menos instituciones, menos sucursales y menos funcionarios bancarios. A su vez, habrá cierta afectación de la confianza en los bancos públicos (por la reprogramación de los depósitos) y una pronunciada iliquidez del conjunto del sistema bancario, con la consiguiente restricción crediticia.

Cambio de actitud del gobierno de los Estados Unidos y del FMI frente a la crisis regional

En los primeros días de agosto pasado parece haberse verificado un cambio en la actitud del gobierno republicano de Estados Unidos que, en una postura de abandono de su oposición anterior a los “rescates” del FMI, dio luz verde al “salvataje” del sistema financiero uruguayo y, asumió incluso, un papel protagónico al conceder un “crédito puente” para posi-

Los principales componentes de la estrategia actual son los siguientes:

- La reprogramación a tres años de los depósitos a plazo fijo en moneda extranjera en los bancos públicos (BROU y BHU).
- El cese de la asistencia a los bancos privados en dificultades (sólo se proveyó asistencia para cubrir las cuentas corrientes y las cajas de ahorro en los bancos públicos y en los privados con problemas de liquidez).

bilitar la reapertura de los bancos luego del feriado bancario.

Por otra parte, el financiamiento que proporcionaría el FMI a Uruguay en el período abril 2002- marzo 2004 sumaría 2.800 millones de dólares que equivalen a casi siete veces la cuota de Uruguay en ese organismo, en circunstancias en que

El cambio de actitud del gobierno de Estados Unidos y del FMI frente a Uruguay y Brasil es un elemento de importancia en el marco de la crisis de financiamiento que enfrenta la región. La verdadera magnitud y significación de ese (aparente) giro dependerán de que este cambio de actitud se extienda a la Argentina.



de acuerdo a la normativa del FMI, el financiamiento total que se otorga a un país miembro en el marco de un acuerdo plurianual, no debería superar en tres veces la cuota.⁵ Al sumarse al financiamiento del FMI, al que se comprometieron el Banco Mundial y el BID, el paquete global de asistencia financiera concedido a Uruguay asciende a 3.900 millones de dólares. Se ha señalado que el cuantioso financiamiento que otorgarían los organismos financieros multilaterales a Uruguay refleja un trato preferencial en relación con el dispensado a otros países miembros de esos organismos. Es posible que sin desmedro de otras posibles explicaciones, éste signifique un reconocimiento de que Uruguay sufrió intensamente el “efecto contagio” de la crisis argentina, cuya profundidad fue, en parte, consecuencia de la falta de apoyo financiero del FMI a ese país.

Pocos días después de la concreción del

acuerdo *stand-by* con Uruguay, el FMI hizo público un acuerdo con Brasil en cuyo marco otorgaría un cuantioso apoyo financiero a ese país entre setiembre de 2002 y 2003 (30.000 millones de dólares). La particularidad de esta operación radica en el hecho de que fue previamente “consensuada” con los cuatro candidatos que disputaron la presidencia en las elecciones que se realizaron en octubre. Ello tendió a reducir las incertidumbres económico-financieras propias de un proceso de transición política, en circunstancias en que éstas se manifestaban con especial virulencia ante el crecimiento de la candidatura de Luis Inácio Lula da Silva, que era visto con particular aprensión por ciertos agentes financieros que temían que un eventual gobierno izquierdista condujera al país al *default*.

El cambio de actitud del gobierno de Estados Unidos y del FMI en los episodios de Uruguay y Brasil constituye un elemento de importancia en el marco de la crisis de financiamiento que enfrenta la región. No obstante, la verdadera magnitud y significación de ese (aparente) giro dependerán de que este cambio de actitud se extienda a la Argentina. Como se sabe, en los últimos diez meses el FMI, institución en la que el gobierno de Estados Unidos ejerce una influencia decisiva, se ha negado a brindar asistencia financiera a ese país, ha argumentado que el gobierno argentino no ha formulado un “programa económico-financiero sustentable”. Algunos analistas han vinculado ese proceder al propósito del gobierno de Estados Unidos de imponer una especie de “sanción ejemplar” a los gobernantes argentinos que declararon el *default* de la deuda externa con acreedores privados y adoptaron otras decisiones que violaron los contratos financieros y afectaron los derechos de propiedad (corralito y pesificación asimétrica). Una mayor disposición para ayudar a Argentina por parte del gobierno de Estados Unidos y el FMI podría ser un elemento clave para la futura evolución de la economía vecina y, por ende, para la economía uruguaya y la región como un todo.

5 Importa señalar que si bien el financiamiento otorgado a Uruguay ha sido cuantioso, fue muy inferior al que se otorgó a Turquía, país que en febrero pasado firmó un acuerdo *stand-by* de tres años de duración por un monto de 13,5 veces su cuota en ese organismo.

Perspectivas de muy corto plazo (“cierre” de 2002)

No se esperan variantes de importancia en la economía internacional en lo queda de 2002. En el ámbito regional se estima que la economía argentina podría continuar mejorando levemente y que, superada la incertidumbre electoral y el “temor” a Lula, lo propio tenderá a ocurrir con las variables financieras brasileñas. Sin embargo, no se espera una recuperación de las exportaciones de bienes y servicios uruguayos hacia los países vecinos en lo inmediato.

Pese a la previsible dificultad para cumplir las metas fiscales establecidas con el FMI, se estima que el desvío respecto de lo programado no será muy grande y que el acuerdo del gobierno uruguayo con el FMI seguirá en pie. A su vez, se considera que pese a las dificultades, el gobierno no dejará de cumplir con los pagos de la deuda pública.

Evolución previsible de las principales variables al cabo de 2002

- Se registrará una fuerte caída de la actividad económica. La reducción del PIB se ubicaría casi en un 9%.
- La actividad de casi todos los sectores productivos caerá bruscamente. El único sector productivo cuya actividad crecería sería el agropecuario.
- La tasa de desempleo media anual crecerá y se ubicaría en casi 17%. El crecimiento del desempleo sería amortiguado por la reducción de la oferta de trabajo, que deriva del “efecto desaliento” y del aumento de la emigración.
- La cuenta corriente de la balanza de pagos alcanzaría un superávit de aproximadamente 0,8% del PIB.
- La inflación (diciembre a diciembre) podría situarse en aproximadamente 30% y la devaluación en torno al 100%.
- El poder de compra de los salarios y las jubilaciones caería pronunciadamente (11%).

- El déficit fiscal consolidado alcanzaría aproximadamente, al 4% del PIB.
- La *ratio* deuda pública bruta/PIB aumentaría significativamente de 53% a fines de 2001 a casi 90% del PIB a fines de 2002. Ello se debería a la sensible caída del PIB en dólares resultante de la devaluación, pues la deuda pública en dólares crecería moderadamente.

Perspectivas para 2003

El desempeño de la economía internacional sería sólo algo mejor que el del año en curso. Sin embargo, pueden esperarse algunos efectos favorables de la economía internacional sobre la economía uruguaya: las tasas internacionales de interés descenderían, el dólar se depreciaría levemente frente al euro y se incrementarían los precios de las materias primas agropecuarias expresados en la moneda estadounidense. Por otra parte, existen expectativas por los resultados de las negociaciones en curso para la apertura de algunos mercados extrazona (Norteamérica, China y Unión Europea) a los productos uruguayos. Éstas resultan clave para sortear el creciente proteccionismo agrícola de las economías desarrolladas. Finalmente, existe preocupación por la posibilidad de que se desate una guerra en el Golfo Pérsico que empuje al alza el precio del petróleo, aunque no se prevé una recesión a escala mundial.

Se espera un mejor desempeño de las economías vecinas con respecto al muy negativo de 2002. Se supone que el crecimiento de la economía brasileña se acelere y pueda ubicarse entre 2% y 3%. La moneda brasileña se apreciaría moderadamente. Se considera que la economía argentina se recuperaría levemente en el 2003. El PIB argentino crecería entre 2% y 4%, según la evolución de las variables políticas y de la eventual mejora de la relación con el FMI; por su parte, el tipo de cambio real argentino (al menos) se reduciría ligeramente.

Principales indicadores económico-financieros de Uruguay (en %)					
	1999	2000	2001	2002(*)	2003(*)
PBI (variación anual)	-2.8	-1.4	-3.1	-9.0	-2.0
Importaciones (variación anual)	-5.8	0.1	-7.7	-26.0	-5.0
Demanda interna (variación anual)	-2.7	-3.2	-3.2	-14.5	-7.5
Inversión Bruta Interna (variación anual)	-9.8	-13.0	-7.7	-28.0	-10.0
Consumo total (variación anual)	-1.3	-1.4	-2.5	-12.5	-7.0
Exportaciones (variación anual)	-7.4	6.4	-8.8	-13.5	12.0
PBI (millones de U\$S)	20,914	20,085	18,661	13,000	12,000
IPC (variación dic-dic)	4.2	5.1	3.6	29.0	30.0
IPC (variación promedio)	5.7	4.8	4.5	14.4	31.4
Devaluación (variación dic-dic)	7.6	7.3	12.9	100.0	26.0
Devaluación (variación promedio)	8.3	6.8	10.0	60.4	55.3
Salario real (var. promedio anual)	1.5	-1.2	-0.3	-11.0	-17.0
Tasa de desempleo (promedio anual)	11.3	13.6	15.3	16.8	16.8
Balanza cuenta corriente (en % del PBI)	-2.5	-5.7	-2.5	0.8	4.0
Resultado fiscal consolidado (en % del PBI)	-4.0	-7.5	-5.8	-4.0	-2.3
Deuda neta del sector público (en % del PBI)	27.0	59.0	66.0	73.0	80.0
Deuda bruta del sector público (en % del PBI)	40.8	72.0	79.5	87.0	94.5

Supuestos acerca de la política económica

- Se supone que el gobierno conservará el respaldo parlamentario durante el 2003.
- Se considera que el acuerdo con el FMI continuará vigente y que el gobierno obtendrá los recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones financieras.
- Se presume que tenderá a adoptarse un régimen cambiario de “flotación sucia”, para otorgar mayor estabilidad a la cotización cambiaria.
- La política de ajuste fiscal se apoyará en el incremento de la presión tributaria dispuesto en 2002 y en la previsible reducción del gasto público real, fundamentalmente a través de la licuación de salarios públicos y pasividades por la inflación.
- Se considera que lo más probable sea que

el gobierno logre reabrir los bancos suspendidos.

Evolución previsible de las principales variables en 2003

- El PIB medio anual se contraería aproximadamente en un 2% en 2003. No obstante, se prevé que comenzaría a recuperarse en el transcurso de la primera mitad del año próximo, impulsado por la expansión de las exportaciones y, en menor medida, por la sustitución de importaciones.
- La demanda interna caería significativamente en términos reales. El gasto público real se reduciría sensiblemente y el consumo privado volvería a contraerse marcadamente. Los únicos componentes dinámicos podrían ser la expansión de la inver-

-
- sión, estimulada por la concesión de obras públicas y, eventualmente, cierto incremento de la inversión en el sector productor de bienes transables.
- Las exportaciones de bienes aumentarían en términos reales. Los factores que las impulsarían serían el alza del tipo de cambio real, la mejora de los precios internacionales de varios productos de exportación y el incremento de la oferta agropecuaria.
 - Las exportaciones de servicios experimentarían una recuperación moderada en términos reales, luego de la pronunciada caída de 2002.
 - Se prevé un significativo superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que podría ascender a 4% del PIB.
 - Persistiría el elevado desempleo y volvería a reducirse significativamente el ingreso real de los hogares, particularmente el poder de compra de los perceptores de ingresos fijos. Se estima que el salario real se contraerá aproximadamente en un 17%.
 - La devaluación sería muy inferior a la registrada en 2002 y podría ubicarse en un 25% aproximadamente, mientras que la inflación podría ser similar a la del año en curso (30%). Sin embargo, los precios al consumidor expresados en dólares se reducirían apreciablemente, en promedio.
 - Se considera que el déficit fiscal podría superar levemente el establecido en el acuerdo con el FMI y ubicarse entre 2% y 2,5% del PIB.
 - La *ratio* deuda pública/PIB se ubicaría en 95%.

- La gradual recuperación de la confianza de los agentes residentes provocaría cierto aumento de los depósitos bancarios.
- El incremento de la captación bancaria permitiría alcanzar una leve recuperación del crédito bancario. No obstante, persistirían la restricción crediticia y el costo del crédito se mantendría en niveles elevados.

En resumen, de cumplirse la hipótesis de que en el 2003 no tenga lugar una recesión mundial, que continúe vigente el acuerdo con el FMI y que el gobierno mantenga el respaldo político interno, la actividad económica volvería a contraerse en un 2% en promedio aproximadamente, aunque la economía comenzaría a recuperarse lentamente durante la primera mitad del año. Sin embargo, persistiría el elevado desempleo y caería significativamente el ingreso real de los hogares. El desempeño del PIB podría verse afectado positiva o negativamente de acuerdo con la evolución de algunos factores clave; entre ellos destacan: la disposición de los organismos financieros multilaterales para continuar apoyando al país y, eventualmente, para incrementar el financiamiento concedido, la magnitud de la recuperación de las economías vecinas, el alcance de la apertura de los mercados extrarregionales y la disponibilidad de financiamiento para las actividades productivas. A mayor plazo, la mejora de la solvencia fiscal intertemporal y la consiguiente reducción de la elevada *ratio* deuda/PIB, dependerán del mantenimiento de una política de austeridad fiscal, por un lado, y, fundamentalmente, de la reanudación del crecimiento económico, por otro.

Aporte el

25%

de su impuesto a la Renta para la FLACSO

Así, la educación en el Ecuador gana

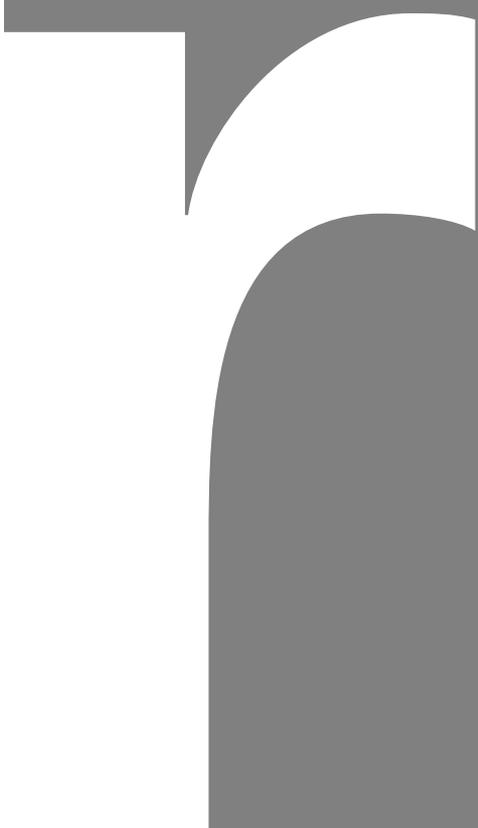


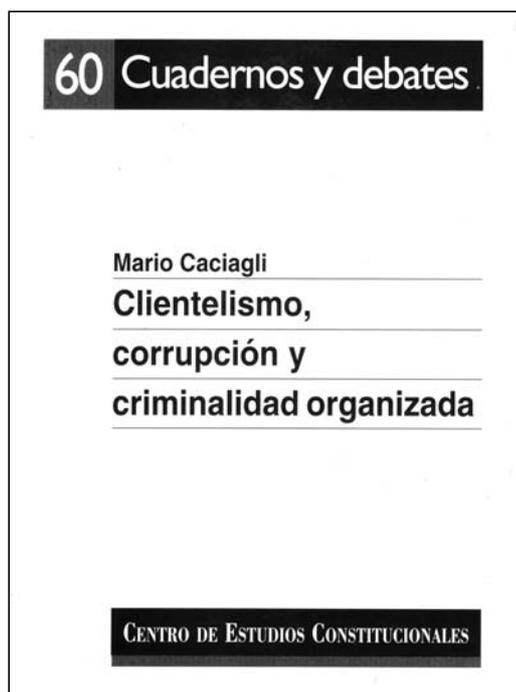
FLACSO

SEDE ACADÉMICA DE ECUADOR

Este aporte no tendrá ningún costo adicional, ya que el impuesto a la renta es obligatorio

RESEÑAS





Mario Caciagli,
**Clientelismo, corrupción
 y criminalidad organizada**
 Centro de Estudios
 Constitucionales, Madrid, 1996

Clientelismo, corrupción y criminalidad organizada son términos que suelen definirse confusamente. La recurrente presencia de estos fenómenos en la política, tornan necesario el análisis que establezca las diferencias, similitudes y modos de operación de estas formas que adoptan las relaciones sociales y políticas.

La intención principal de Caciagli es la de lograr una conceptualización que permita ubicar el papel de estos fenómenos en los sistemas políticos. Es una síntesis de la investigación y discusión ocurrida en Italia acerca de la incidencia de la corrupción, el clientelismo y la criminalidad organizada entre las décadas de 1980 y 1990. Su análisis de estos factores “perversos” en el sistema político, privilegia un enfoque de cultura política.

Almond y Verba (1963) en su conocida contribución definieron el concepto de cultura cívica como el choque entre moderniza-

ción y tradición, que da como resultado una combinación de razón y sentimientos que se orientan hacia la construcción de un orden democrático. De allí que la consecuencia sea que los grupos dirigentes y los ciudadanos comunes compartan metas y valores.

Distanciándose de las posturas clásicas de Almond y Verba que conceptualizaron como cultura política las actitudes y orientaciones de los individuos ante la política, Caciagli propone un acercamiento que considera a la cultura política como una red de relaciones. Por eso, no se trata solo de opiniones. Así, para este autor, la cultura política se sostiene “en ideas y valores, en símbolos y normas, en mitos y ritos compartidos por una comunidad que forjan una mentalidad. Se expresa en comportamientos concretos y reiterados, en redes de estructuras materiales o psicológicas que elaboran y transmiten esa cultura, que no es un abanico de creencias, sino un código simbólico que adquiere sentido en un contexto social y que guía y condiciona el pensar, el actuar y el sentir de los actores políticos” (Caciagli 1996: 14). Pero la cultura política no opera sobre el vacío, sino que interacciona con relaciones sociales y económicas en circunstancias espaciales e históricas. Esta definición se emparenta con aquella de mentalidades de la escuela de los *Annales*. Se pueden también percibir lejanos ecos gramscianos. Se trata pues de una vertiente cualitativa de análisis.

Para Caciagli, el clientelismo en sus formas vertical u horizontal, constituye una cultura política. Son de interés sus consideraciones sobre el clientelismo horizontal expresado en partidos y organizaciones. Aparece así el partido de masas clientelar. El clientelismo es muy importante tanto para garantizar las relaciones centro-periferia en las estructuras estatales, como en los ámbitos locales de poder. La amplia bibliografía producida dentro y fuera de Italia, se ha centrado en el sur italiano, región que ha mantenido rasgos de atraso económico y fuerte intervención estatal.

Aunque el clientelismo, al utilizar recursos públicos derivados hacia fines privados pueda producir corrupción, Caciagli insiste en dife-

renciar el clientelismo de la corrupción. Y si ocasionalmente la corrupción se vincula con actos criminales, se debe también diferenciar la corrupción de la criminalidad. El clientelismo es una cultura política, aunque no tenga estructuras estables y visibles. Como cultura tiene lenguajes, ritos, valores y comportamientos concretos y reiterados. Su anclaje histórico en la sociedad meridional alude además, a códigos culturales profundamente enraizados.

Mientras el clientelismo sí ha sido objeto de reflexión teórica, no ha ocurrido lo mismo con la corrupción política. Ha predominado un tipo de acercamiento periodístico o anecdótico. Los escándalos de corrupción de la década de 1990 que incidieron en una brutal crisis del sistema político italiano, han permitido una mayor preocupación en las Ciencias Sociales.

La síntesis que surge de la discusión, señala la existencia del secreto, la ilicitud, la violación de las normas y el intercambio por dinero que se hallan presentes en la corrupción. Por otra parte, se trata de actos que ocurren en un nivel horizontal. La corrupción tiene una causalidad de largo y corto plazo que entre otros factores, se halla en la intervención estatal, la crisis de los partidos y el nuevo espíritu de los políticos profesionales. La descentralización del Estado, finalmente, multiplica los espacios susceptibles de prácticas corruptas.

Estableciendo una diferenciación, el vínculo clientelar es predominantemente vertical, mientras que el vínculo de la corrupción es horizontal. Aunque las dos son relaciones de intercambio, el vínculo clientelar ocurre entre desiguales, en tanto que el contrato de corrupción es un convenio entre iguales. Además, el intercambio clientelar es político, a diferencia de la corrupción que es un intercambio mediado por el dinero. No resulta lo mismo el intercambio de decisiones administrativas por votos que el intercambio de dinero por contratos y licitaciones públicas.

La presencia histórica de la corrupción en Italia, apuntaría a que ésta se halla anclada en

la cultura italiana, o que forme parte de la cultura política. Señala Caciagli, que la corrupción es un fenómeno que “está fuera de una cultura”. Y no sería una cultura política porque nunca llega a formar un código simbólico ni se convierte en una experiencia colectiva a pesar del número de actores. Pueden existir redes, pero no un sistema cultural, y el involucramiento de los actores es fundamentalmente individual. De modo que la corrupción al ser una manera de actuar, es el medio y no la substancia de una cultura política.

El análisis de la criminalidad organizada, endémica también en el sur italiano, tampoco cuenta con una sólida teorización en las Ciencias Sociales. Tres organizaciones criminales: la camorra napolitana, la mafia siciliana y la 'ndrangheta calabresa, con específicas implantaciones regionales, han estado involucradas en relaciones con la política local y actos de corrupción. Con diferencias resultantes de sus trayectorias, estas organizaciones criminales, terminaron siendo parte de los escenarios políticos locales, y hasta penetraron en las estructuras estatales. Se estima que en sus áreas de influencia, las tres estructuras criminales llegaron a influenciar en alrededor de un 10% del electorado.

La pervivencia de la mafia siciliana muestra cómo una estructura criminal puede sobrevivir en diversos períodos históricos. Muestra así mismo, el hecho de que hubiese sido en su origen una estructura privada resistente a la penetración del Estado que reforzaba actitudes de rechazo a las estructuras estatales en la población y las redes bajo su influencia. Pero el hecho notable en la historia de la mafia siciliana, fue su compenetración con políticos regionales y nacionales. Esto es lo que explicaría su tolerancia hacia los años 80 del siglo XX.

Las organizaciones criminales tienen sus códigos de honor, rituales y valores que les permiten funcionar con coherencia. Sobre todo en el caso de la mafia siciliana, su influencia en los comportamientos políticos y la cotidianeidad, conducirían a ver que la cultura mafiosa es una cultura política. Como afirma

Caciagli: “Estamos frente a una cultura política, porque ideas y valores, símbolos y normas, mitos y ritos, compartidos por una comunidad, influyen sobre su comportamiento político y sobre su actitud frente a las instituciones, regulando en suma su manera de vivir la política” (Ibid.: 125).

Todo el esfuerzo por diferenciar conceptualmente el clientelismo, la corrupción y la criminalidad organizada, se encuentra constantemente con su superposición. Así, la criminalidad organizada puede alimentar prácticas clientelares y estar involucrada en actos de corrupción. Hay sin embargo, una frontera que separa el clientelismo como tal, en tanto éste no es un acto ilícito, mientras que la criminalidad opera justamente en la trasgresión de la Ley.

La argumentación central de Caciagli radica en relacionar las prácticas y estructuras sociales como culturas políticas en tanto interactúan con el sistema político. Tienen además, una localización espacial. En este sentido, no se debe perder de vista otra tradición interpretativa italiana que estuvo centrada en la identificación de las subculturas políticas roja y blanca, con referencia al arraigo de comunistas y demócratacristianos en determinadas regiones y contextos socioeconómicos (Bagnasco 1997). Y como la cultura política es dinámica y procesada por actores políticos, el fenómeno de la Liga Norte en las dos últimas décadas del siglo XX, presenta la aparición de un nuevo comportamiento que atraviesa a las clases medias, trabajadores y pequeña empresa (Aguilera de Prat 1999), y moviliza un sentimiento identitario regional concentrado en el norte italiano. También la publicitada contribución de Putnam (1993), analiza las condiciones de éxito de los gobiernos locales del centro de Italia, introduce el tema del capital y la confianza como los ejes de la cultura política (el compromiso cívico).

En un breve artículo, Joan Botella (1997)

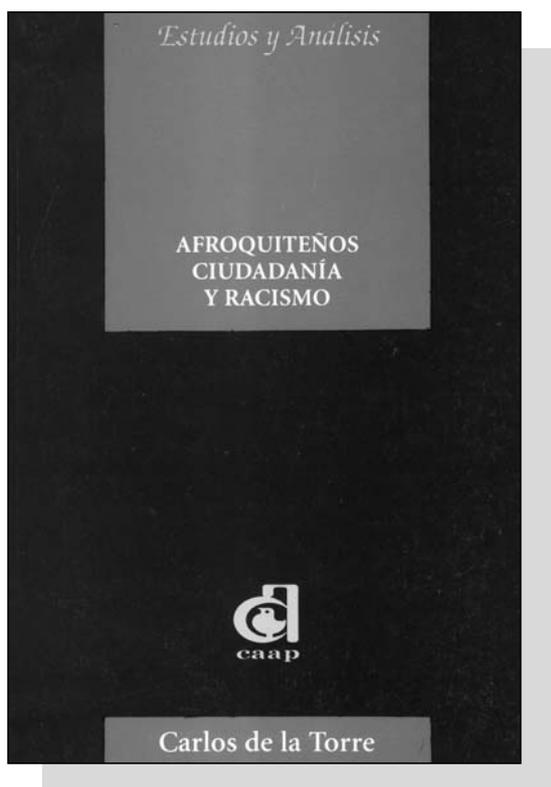
revisa los usos del concepto de cultura política, y sugiere retomar la contribución de Gramsci. En efecto, el concepto gramsciano de hegemonía, al involucrar la complejidad de los actores de la sociedad civil y las formaciones culturales de las clases populares, pone una base para los estudios de cultura política. Mientras Gramsci goza de atención en el ámbito internacional, en Italia es un pensador poco frecuentado.

Este libro, situado en una vertiente cualitativa de los estudios de cultura política, con su agudo recorrido en los debates italianos sobre clientelismo, corrupción y criminalidad, promueve también una manera de comprensión desde un enfoque politológico. Un aporte que no descuida lo interdisciplinar, y entabla un diálogo con la Antropología y la Historia.

Hernán Ibarra

Bibliografía

- Aguilera de Prat, Cesáreo, 1999, *El cambio político en Italia y la Liga Norte*. Madrid: CIS.
- Almond G. y S. Verba, 1963, *The civic culture. Political attitudes and democracy in five nations*, Princeton University Press, Princeton.
- Bagnasco, Arnaldo, 1997, “Italia: cambio social en tiempos de cambio político”, en *Sociología del Trabajo* N° 31, Madrid, pp. 85-120.
- Botella, Joan, 1997, “En torno al concepto de cultura política: dificultades y recursos”, en P. del Castillo e I. Crespo (editores), *La cultura política*, Tirant lo Blanch. Valencia.
- Putnam, Robert, 1992, *Making democracy work. Civic traditions in modern Italy*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.



Carlos de la Torre

Afroquiteños, ciudadanía y racismo

Centro Andino de Acción Popular,
Quito, 2002

A paso lento pero firme, las reflexiones sobre el tema del racismo en el Ecuador van adquiriendo una mayor importancia teórica, paulatinamente presentan consistencia y solidez metodológica, atraen una relativa atención gubernamental y generan el interés político por parte de varias entidades no gubernamentales, organizaciones éticas y de derechos humanos que se esfuerzan por visibilizar este problema en una sociedad como la nuestra, que se ha caracterizado por permanecer adormecida, hipócrita e indiferente frente a una realidad con marcados signos racistas que curiosamente han sido negados por muchos años.

La obra de Carlos de la Torre debe ubicarse en este duro y revelador contexto que nos demuestra la variada existencia de los ocultos

intersticios sociales donde se produce el racismo. Para lograr este propósito utiliza distintas entradas explicativas, muchas de ellas asumidas como lugares comunes en la interpretación de las acciones racistas, se trata básicamente de la serie de prejuicios y el déficit educativo de la población, que sin ser menos importantes, constituyen un componente fundamental para entender la ideología “racialista” como diría Todorov¹. Otras entradas, en cambio, aparecen novedosas y motivadoras cuando se las relaciona con los ámbitos culturales y las prácticas racistas concretas en la interacción cotidiana, situaciones que son parte esencial del sistema de poder que naturaliza, regula y racionaliza las relaciones desiguales de poder.

Desde esa perspectiva, el análisis de la estructura racial de Quito y los espacios e instituciones de la esfera pública, aparecen como la dimensión privilegiada que da cuenta de las interacciones desiguales, estigmatizaciones, impugnaciones y resistencias producidas en el mundo de vida cotidiana de los actores afroecuatorianos. De ahí que la reflexión sobre las características del racismo antinegro que se genera en esas instancias, sea vista también como un campo fundamental donde se multiplican los códigos simbólicos racistas del sistema de dominación y opresión al que están sujetas las identidades negras.

Un primer aspecto clave del texto es la desmitificación de la procedencia rural y geográfica del negro. Romper con el imaginario blanco, mestizo y ciudadano, elaborado durante décadas, de que sólo existen negros en Esmeraldas o en el Chota, representa, en sí mismo, un acto disruptor de las representaciones de la “nación” ecuatoriana que han legitimado en el terreno ideológico y práctico las jerarquías discriminadoras basadas en la naturalización, inferiorización e incivildad de la gente negra. De estos aspectos se da cuenta en los análisis de los espacios institucionales como la Policía, la escuela que reproduce pautas

¹ Todorov Tzvetan. *Nosotros y los otros. Reflexión sobre la diversidad humana*, Siglo XXI, México, 1991.

violentas y en los ámbitos laborales de la ciudad donde proliferan asociaciones perversas de lo negro con la criminalidad, prostitución y marginalidad.

La segunda clave está relacionada con el análisis de las prácticas paternalistas y corporatistas de las instituciones y de la sociedad en su conjunto. Acertadamente se observan las estrategias con las que los grupos discriminados conllevan su situación con base en una lógica de adaptación y resistencia. Precisamente, la puesta en escena de este tipo de comportamientos –que no son exclusivos de los afroecuatorianos–, nos permiten diferenciar el corporatismo –estatal o privado– como práctica que privilegia el acceso de personas o grupos a determinados recursos, y el paternalismo como una condición civilizatoria que trata de redimir al negro en determinados contextos de vinculación personal con los pobladores blancos y mestizos, para en ese acto, reproducir la condición de subordinación en la que están atrapados.

Con este trasfondo de por medio, resulta difícil pensar en la construcción de una ciudadanía multicultural que desfigure ese otro imaginario de ciudadanía diseñado por la democracia liberal. En este sentido, no hay que perder de vista que los procesos de acción colectiva que pretenden impulsar una política de discriminación positiva, también han caído en la trampa del “deber ser” expresada en una serie de normativas y arreglos constitucionales basados en el derecho, que en la práctica cotidiana y en los espacios públicos

no se cumplen. Y ésta es una característica que atraviesa no sólo a las identidades negras o indias, sino que está difuminada en todo el espectro de la cultura política ecuatoriana.

Finalmente, coincido con el autor del trabajo respecto a las limitaciones metodológicas derivadas del tipo de entrevistados y entrevistadas. Seleccionar principalmente a personas con cargos dirigentes o pertenecientes a grupos organizados de acción colectiva, no solamente reduce el espectro interpretativo de esas “otras voces” –los afroecuatorianos más pobres– que sin lugar a duda son la mayoría, sino que vuelve autoreferente el discurso impugnador del racismo que de alguna manera ha sido cooptado “oficialmente” por las prácticas clientelares y corporativas analizadas en la obra. En todo caso, ese tipo de limitaciones que son asumidas como parte del juego discursivo de la “sobrerepresentación” identitaria, no reduce para nada la riqueza investigativa del autor que nos brinda un gran esfuerzo por encontrar la unidad empírica y teórica del racismo. El reconocimiento de su doctrina, los prejuicios, la discriminación, la segregación, la exclusión, el tipo de racionalidad que está implícito en las acciones y la violencia simbólica, entre otros, deben ser vistos como formas específicas que conforman el espacio empírico del racismo y ayudan a delimitar el objeto y la naturaleza de su relación con el poder dominante.

Fredy Rivera Vélez

S

SUGERENCIAS



Javier Auyero,
La Protesta
 Libros del Rojas, Universidad
 de Buenos Aires, Buenos
 Aires, 2002

Las protestas de diciembre de 2001 en Argentina que llevaron a la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, ¿podrían ser entendidas como la explosión momentánea de una ciudadanía cansada y empobrecida que finalmente encontró un canal de expresión? Según Auyero, no. Las protestas de diciembre deben ser enmarcadas en un proceso más largo de ensayo de un conjunto de prácticas beligerantes que inundaron la Argentina durante la década de los años 90: cortes de ruta, ataques a edificios públicos, secuestro de autoridades municipales y provinciales, entre otras.

Otra concepción de sentido común que Auyero intenta develar en el libro en mención, es aquella que implica mecánicamente a la protesta popular como una respuesta a las políticas de ajuste estructural, es decir, la protesta popular como el resultado de desempleo más pobreza. Es cierto que las condiciones objetivas de supervivencia influyen en los niveles de protesta, pero estas

condiciones deben estar filtradas por las condiciones políticas concretas para que activen los mecanismos de acción colectiva.

Para sostener su argumento sobre la historicidad y la condición no mecánica de los actos de beligerancia popular, Auyero utiliza el concepto de “repertorio de acción colectiva” planteado por Charles Tilly. Este concepto, según Auyero, permite examinar las regularidades de la acción colectiva sin que esa regularidad implique cerrar el paso a la innovación, asociada ésta con el éxito; permite no concebir la protesta sólo como una respuesta a los problemas sociales, cuando ella tiene que ver con procesos políticos particulares y responde a ciertos patrones del acto colectivo. En tercer lugar, el modelo de Tilly vincula cambios estructurales con los cambios en la acción colectiva, lo que supone mantener unidos conceptualmente los distintos niveles de análisis. Y, finalmente, este concepto asume la cultura como un elemento nodal pues “se centra en los hábitos de beligerancia adoptados por los distintos actores, en las formas que toma la acción colectiva como resultado de expectativas compartidas e improvisaciones aprendidas”.

Para ilustrar y analizar los cambios de las acciones beligerantes de la Argentina de los años 90, Auyero utiliza tres estudios de caso: el Santiagazo (1993), la pueblada de Cutral-co y Plaza Huincul (1996) y la Plaza del Aguante Correntino (1999). Ahora bien, ¿cuál es el contexto macro o estructural que enmarca estos sucesos y otros? Para Auyero, hay tres procesos que dan cuenta de esa trama estructural. En primer lugar, los altos niveles de desocupación, producto de la desindustrialización del país; en segundo, el desmantelamiento del Estado de bienestar, gracias al cual las áreas de educación y salud, así como la de vivienda popular han sufrido

graves retrocesos, impactando de manera directa en las clases de menores ingresos. Esta “retirada” del Estado junto con el proceso de privatizaciones dejó fuera de sus empleos a cientos de miles de argentinos. Y tercero, la política de descentralización de los servicios de educación y salud que al transferir competencias a los gobiernos provinciales sin las correspondientes asignaciones ni garantías presupuestarias, afecta ya no a los otrora empleados públicos —estatales— sino a los empleados provinciales (bajos salarios, meses impagos, etc.).

En el estudio del caso de la protesta de Cutral-co y Huincul, Auyero pone en evidencia cómo el retiro del Estado —la privatización de YPF que significó un grave empobrecimiento y desempleo para los habitantes de dos ciudades que habían nacido bajo el florecimiento de la industria petrolera— dan el marco estructural que permite contextualizar el conflicto y la protesta. Sin embargo, siguiendo con su línea de argumento, esto no basta para explicar la supuesta “explosión” o estallido de la protesta. En el caso de la “pueblada” de Cutral-co y Huincul se activan otros elementos que permiten la “reacción” popular: la suspensión de un contrato entre la gobernación provincial y una empresa privada para la construcción de una planta de fertilizantes sirve de excusa para que redes políticas y clientelares activen la protesta. Para ello, estas redes debieron, primero, construir este hecho como un problema y, luego, proveer de recursos que permitieran la movilización.

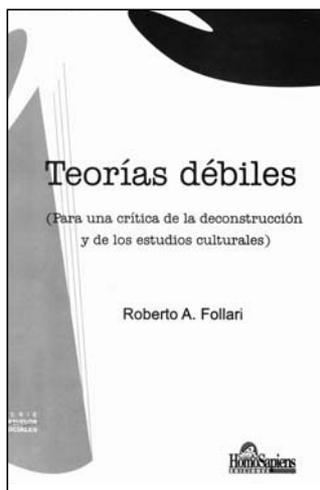
En el caso de las protestas de Santiago del Estero y de Corrientes, donde nuevamente podemos encontrar el contexto de ajuste neoliberal como marco general de las revueltas, se analiza cómo este ajuste, o los efectos de este ajuste son procesados localmente para dar viabilidad a la protesta. Así, el

ajuste, en el ámbito local, se traduce en la corrupción imperante en la administración del gobierno provincial. Ajuste y corrupción van de la mano, pues, por un lado, el gobierno federal imponía la necesidad del ajuste pero, por otro, nunca cesó en la transferencia de fondos a estas provincias, los que servían para mantener en marcha la maquinaria electoral y de clientelismo necesaria para la reelección del presidente Menem.

Según Auyero, estos dos casos, además, ponen en evidencia otros procesos que les son comunes: el ajuste se traduce en incapacidad de los gobiernos provinciales de responder con sus obligaciones y esto genera las primeras manifestaciones; la convocatoria hacia la protesta es creciente y esto incluye a nuevos actores, “gente que nunca antes iba”; se da un proceso de validación por parte de las autoridades y por la Iglesia; se consolidan dos polos del conflicto y solamente dos: los empleados públicos y el gobierno y esta dicotomía lleva a tomar partido, un proceso que desembocaría en una autoidentificación de un “nosotros”, el pueblo, contra un “ellos”, los políticos. En los dos casos, la corrupción gubernamental está en la raíz de esa línea divisoria necesaria de trazarse y, finalmente, la vida cotidiana se ve altamente alterada en los meses que duran las protestas.

Por último, *La Protesta* analiza cómo se construyen las identidades en la protesta, tomando como punto de partida que esa identidad no respondía a una esencia o “a un sustrato siempre presente dispuesto a activarse frente a una situación objetivamente injusta (como si tal cosa existiese)...”, sino que la construcción de identidades es un proceso conflictivo y colectivo.

Alicia Torres.



Roberto Follari

Teorías débiles

Homo Sapiens Ediciones
Rosario, 2002

La epistemología se define como un “saber de saberes”, especialmente de aquel conjunto de saberes que la modernidad identificó como sinónimo de verdad comprobada, la ciencia. Aquel saber especializado tiene una paternidad filosófica y su origen moderno se remonta a Descartes y a Kant. Su objeto es estudiar la génesis y estructura del discurso científico, como los procesos históricos y sociológicos que los constituyen. En este sentido fue Marx quien planteó con fuerza que no hay saber teórico que no sea a la vez social y con potencial subversivo si es consciente de sus condiciones de producción teórica. Desde aquí la epistemología es crítica, y su “vigilancia” es tanto lógica como ética y política.

Roberto Follari es un autor interesante, con formación psicológica y vocación epistemológica, ha hecho de esta disciplina una forma de orientación político – epistémica en el espeso bosque de los saberes contemporáneos, desde la Comunicación hasta las teorías de la posmodernidad.

Este año a publicado *Teoría débiles*. Para una crítica de la de-

construcción y de los estudios culturales. Su título adelanta una provocación y entabla una dura controversia sobre la recepción despolitizada de Derrida en las academias norteamericanas, como de los Estudios Culturales en América Latina. Su reclamo de fondo: la pérdida de filón crítico en el pensamiento actual evidenciado en los ejercicios retóricos o literarios de los autores citados en el libro, especialmente de Néstor García Canclini. Estos autores han terminado identificándose con sus objetos de análisis. Por ejemplo, a través del concepto de consumo cultural, se ha perdido la necesaria distancia crítica con las lógicas del consumo, ya sea de las industrias culturales, los medios masivos de comunicación, o las identidades de lo popular en general. La consecuencia – tal vez no deseada – es el adelgazamiento del espacio de maniobra alternativa o de acción transformadora contra los poderes hegemónicos vengan de donde vengan. Por otro lado, cuestiona el revoltijo paradigmático y metodológico en las investigaciones que, a demás de estar carentes de un respaldo empírico, participan del “todo vale” confundiendo criterios, normativas de valoración y verificación.

Este libro es un antídoto contra cierta pereza epistemológica que caracteriza a la investigación actual en la región, y un verdadero estímulo que renueva el debate de las luces en tiempos de zozobra oscurantista.

Carlos Tutivén Román

Contenido de ICONOS 14, agosto 2002

COYUNTURA

La dinámica regional en el emplazamiento de las tendencias político electorales

Rafael Quintero López

¿Para qué elegir presidente?

Apuntes sobre la apatía electoral

Felipe Burbano de Lara

Democracia, crisis política y elecciones 2002

Virgilio Hernández Enríquez

DOSSIER

Se fue, ¿a volver?

Imaginario, familia y redes sociales en la migración ecuatoriana a España (1997-2000)

Alba Goycochea y Franklin Ramírez Gallegos

El pasado y el presente de los mindalae y emigrantes otavalo

Gina Maldonado

Las representaciones sociales en torno a la inmigración ecuatoriana a España

Claudia Pedone

Migraciones ecuatorianas a España: procesos de inserción y claroscuros

Joan J. Pujadas y Julie Massal

Ni sueño ni pesadilla:

diversidad y paradojas en el proceso migratorio

Martha Cecilia Ruiz

DEBATE

Psicoanálisis, Filosofía y Ciencias Sociales

Rodrigo Tenorio Ambrossi

El auge de la Filosofía Política como síntoma

Roberto A. Follari

DIÁLOGO

Masculinidades en América Latina, más allá de los estereotipos

Diálogo con Mathew C. Guttman

Gioconda Herrera, Ma. del Pilar Troya,

Jacques Ramírez

TEMAS

El fútbol y las identidades.

Balance preliminar sobre el estado de la investigación en América Latina

Sergio Villena

Gamonalismo y dominación en los Andes

Hernán Ibarra

RESEÑAS

Caroline Humphrey

y Stephen Hugh-Jones, comp.

Trueque, intercambio y valor: un acercamiento antropológico

Emila Ferraro

Flavia Freidenberg y Manuel Alcántara,

Los dueños del poder: los partidos políticos en Ecuador 1978-2000

Andrés Mejía

Conenido ICONOS 13
